

15

LEY DE EDUCACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

EDICIÓN ESPECIAL BILINGÜE

eines



Institut d'Estudis Autònoms

eines 15

**LEY DE EDUCACIÓN
DE LAS ILLES BALEARS**

EDICIÓN ESPECIAL BILINGÜE



Institut d'Estudis Autònoms

Aquesta publicació ha comptat amb el suport de:



G CONSELLERIA
O EDUCACIÓ
I I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL
/

1.ª edició: abril de 2022

© De esta edición:



G CONSELLERIA
O PRESIDÈNCIA,
I FUNCIÓ PÚBLICA
B I IGUALTAT
/ INSTITUT ESTUDIS
AUTONÒMICS

C/ de Sant Pere, 7, 4.ª
07012 - Palma
<http://iea.caib.es>

SUMARIO

La primera Ley de educación de las Illes Balears	9
A modo de presentación	11
§1 LEY 1/2022, DE 8 DE MARZO, DE EDUCACIÓN DE LAS ILLES BALEARS.....	13
Exposición de motivos	13
Título preliminar – El objeto y los principios de la Ley	26
Título I – La estructura del sistema educativo de las Illes Balears	29
Capítulo I – Disposiciones generales	29
Capítulo II – La educación infantil	30
Capítulo III – La educación básica	32
Capítulo IV – El bachillerato	36
Capítulo V – La formación profesional	37
Capítulo VI – La educación permanente de personas adultas	43
Capítulo VII – Las enseñanzas de régimen especial	44
Capítulo VIII – Las enseñanzas artísticas superiores	46
Título II – La colaboración con la Universidad de las Illes Balears y las administraciones públicas	47
Capítulo I – La colaboración de la administración educativa autonómica y la Universidad de las Illes Balears y otras instituciones universitarias	47
Capítulo II – La colaboración y la cooperación con otras administraciones	48
Título III – La participación de la comunidad educativa	50
Capítulo I – La comunidad educativa	50
Capítulo II – Las formas de participación de la comunidad educativa	56
Capítulo III – Los órganos de participación	59
Título IV – La función pública docente en la comunidad autónoma de las Illes Balears	64
Capítulo I – Las características de la función pública docente	64
Capítulo II – El ingreso y la provisión	65
Capítulo III – El reconocimiento de la función pública docente	67
Capítulo IV – El Registro General del Personal Docente y el reconocimiento de competencias	69
Título V – Los centros educativos	70
Capítulo I – La red de centros educativos de las Illes Balears	70
Capítulo II – La escolarización equitativa	74
Capítulo III – La autonomía de los centros	76
Capítulo IV – El proyecto educativo	80
Capítulo V – El desarrollo curricular	81
Capítulo VI – La dirección y los órganos de gobierno de los centros públicos	84

Títol VI – Los elementos pedagógicos específicos del modelo educativo propio	87
Capítulo I – El modelo lingüístico	87
Capítulo II – La educación inclusiva	89
Capítulo III – La formación del profesorado	91
Capítulo IV – La educación no formal	93
Títol VII – El seguimiento y la evaluación del sistema educativo	94
Capítulo I – La Inspección Educativa	94
Capítulo II – La evaluación del sistema educativo	97
Títol VIII – La organización territorial de la administración educativa	99
Títol IX – La financiación del sistema educativo	100
Capítulo I – Los recursos económicos y la financiación de las enseñanzas	100
Capítulo II – El régimen de los conciertos educativos	102
Disposiciones adicionales	103
Disposiciones transitorias	109
Disposición derogatori única	110
Disposiciones finales	110
§2 LLEI 1/2022, DE 8 DE MARÇ, D'EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS	113
Exposició de motius	113
Títol preliminar – L'objecte i els principis de la Llei	125
Títol I – L'estructura del sistema educatiu de les Illes Balears	128
Capítol I – Disposicions generals	128
Capítol II – L'educació infantil	129
Capítol III – L'educació bàsica	131
Capítol IV – El batxillerat	135
Capítol V – La formació professional	136
Capítol VI – L'educació permanent de persones adultes	141
Capítol VII – Els ensenyaments de règim especial	143
Capítol VIII – Els ensenyaments artístics superiors	144
Títol II – La col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i les administracions públiques	145
Capítol I – La col·laboració de l'administració educativa autonòmica i la Universitat de les Illes Balears i altres institucions universitàries	145
Capítol II – La col·laboració i la cooperació amb altres administracions	146
Títol III – La participació de la comunitat educativa	148
Capítol I – La comunitat educativa	148
Capítol II – Les formes de participació de la comunitat educativa	154
Capítol III – Els òrgans de participació	157
Títol IV – La funció pública docent a la comunitat autònoma de les Illes Balears	162
Capítol I – Les característiques de la funció pública docent	162
Capítol II – L'ingrés i la provisió	163

Capítol III – El reconeixement de la funció pública docent	165
Capítol IV – El Registre General del Personal Docent i el reconeixement de competències	167
Títol V – Els centres educatius	168
Capítol I – La xarxa de centres educatius de les Illes Balears	168
Capítol II – L’escolarització equitativa	172
Capítol III – L’autonomia dels centres	174
Capítol IV – El projecte educatiu	177
Capítol V – El desenvolupament curricular	179
Capítol VI – La direcció i els òrgans de govern dels centres públics	182
Títol VI – Els elements pedagògics específics del model educatiu propi	184
Capítol I – El model lingüístic	184
Capítol II – L’educació inclusiva	186
Capítol III – La formació del professorat	189
Capítol IV – L’educació no formal	191
Títol VII – El seguiment i l’avaluació del sistema educatiu	192
Capítol I – La Inspecció Educativa	192
Capítol II – L’avaluació del sistema educatiu	194
Títol VIII – L’organització territorial de l’administració educativa	197
Títol IX – El finançament del sistema educatiu	197
Capítol I – Els recursos econòmics i el finançament dels ensenyaments	197
Capítol II – El règim dels concerts educatius	199
Disposicions addicionals	200
Disposicions transitòries	206
Disposició derogatòria única	207
Disposicions finals	207

La primera Ley de educación de las Illes Balears

La educación debe ser siempre una prioridad de la acción de gobierno. Sabemos que solo una sociedad formada tiene futuro. Y para garantizar a la ciudadanía de las Illes Balears una sociedad moderna y justa es necesario asegurar las oportunidades para hacer realidad sus sueños en un mundo cada vez más integrado, más acelerado, más cambiante y más competitivo. Ello exige que avancemos hacia una verdadera sociedad del conocimiento basada en un sistema educativo innovador y de calidad, inclusivo y equitativo, que posibilite una formación continua a lo largo de la vida.

Nuestros jóvenes de hoy han nacido en una sociedad muy condicionada por la actividad turística, una industria clave para la economía de las Islas que ha posibilitado un crecimiento espectacular y una prosperidad económica impensable años atrás. Esta evolución social y económica ha dado oportunidades a miles de familias, que han encontrado en este sector una gran facilidad para acceder a puestos de trabajo y para crearlos desde nuevas empresas y actividades. Esto ha tenido una consecuencia imprevista que limita nuestra capacidad de adaptación a este mundo acelerado y globalizado: subestimar la necesidad de continuar estudiando más allá de la educación básica obligatoria.

Por eso es tan importante invertir esta tendencia y contar con un sistema educativo sólido, avanzado y adaptado; un sistema capaz de estimular la formación postobligatoria y permanente, que dé a nuestra sociedad más capacidades para seguir avanzando hacia la equidad. Si queremos convertirnos en una sociedad que haga del conocimiento y la educación sus pilares de progreso, debemos continuar en el proceso de mejora ya iniciado. En definitiva, debemos proteger la educación de nuestros niños y jóvenes. Para estos objetivos, el Parlamento ha aprobado la primera Ley de educación de las Illes Balears.

Esta Ley ha nacido de un consenso largamente trabajado con numerosos actores. Los planteamientos fundamentales que incorpora parten de la propuesta original de *Islas por un Pacto Educativo*, que se ha ido enriqueciendo con muchas aportaciones. Evidentemente, el texto legislativo no tiene todo lo que todos los sectores educativos, políticos y sociales quisieran. La voluntad siempre fue que fuera una ley de todos y por ello ha habido cesiones y transacciones por parte de todos. Desde el principio ha habido entendimiento, sin embargo, en dos grandes ejes: el alumnado, como centro de toda actuación del sistema educativo, y la autonomía de los centros educativos, que a partir de ahora asumirán más atribuciones y mayor capacidad para adaptarse a su realidad más cercana.

La Ley de educación establece un marco general y, por tanto, necesita un desarrollo normativo claramente definido, actualmente en proceso. Sin embargo, la propia Ley ya establece metas concretas, como la bajada de ratios, el impulso de un plan de infraestructuras, la descentralización de la gestión o el desarrollo de la carrera docente, entre otras. Además, viene acompañada de una memoria económica y establece que, en ocho años, debería alcanzarse, como mínimo, el 5 % del producto interior bruto en el presupuesto destinado a educación.

Se trata, en definitiva, de un instrumento normativo con una fuerte carga de futuro, que debería permitir seguir apostando, ahora con más convicción que nunca, por una enseñanza equitativa, innovadora y de calidad, gracias a más y mejores recursos y a la implicación de los docentes, los alumnos, las familias, los ayuntamientos y la Administración educativa de las Illes Balears.

Francina Armengol i Socias
Presidenta del Gobierno de las Illes Balears

A modo de presentación

Me complace dar la bienvenida a la publicación de la *Ley de educación de las Illes Balears*, en la edición bilingüe que ha sido posible gracias a la colaboración de la Consejería de Educación y Formación Profesional y el Instituto de Estudios Autonómicos. La aparición de esta norma en la colección «Eines» brinda la ocasión para exponer brevemente algunos elementos que ayudan a contextualizar este importante texto legislativo.

Es oportuno recordar, de entrada, que en 1998 la Administración de la Comunidad Autónoma organizó el curso escolar habiendo asumido el pleno ejercicio de las competencias en materia educativa. Desde entonces han pasado veinticuatro años y se han producido numerosos cambios sociales y políticos. La experiencia acumulada ha permitido definir un modelo educativo con características propias, como el que ahora ha quedado recogido en la primera Ley de educación aprobada por el Parlamento de las Illes Balears.

La elaboración del texto normativo ha seguido un largo recorrido, iniciado en 2016, cuando el Gobierno firmó el Pacto Social y Político para la Educación con un claro objetivo: conseguir un pacto educativo con el mayor grado de consenso posible. El documento inicial se debatió en el Consejo Escolar de las Illes Balears y en la Comisión de Educación y, a partir de estos trabajos, en 2019 la Consejería comenzó a redactar el Anteproyecto de ley. Durante la fase de exposición pública de este texto se recogieron más de novecientas enmiendas de entidades de la comunidad educativa y de la sociedad civil. Con estas aportaciones, el Proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo se trasladó al debate parlamentario, fase en la que los diferentes grupos políticos presentaron más de cuatrocientas cincuenta enmiendas, de las cuales más de doscientas fueron llevadas total o parcialmente al articulado definitivo.

Dos son los puntos fuertes de la nueva Ley: la preocupación por el alumnado y el refuerzo de la autonomía de los centros educativos. El texto protege los derechos de los alumnos y establece sus deberes a fin de conseguir que sean más competentes en todas las dimensiones educativas. Por otra parte, la autonomía se ve reflejada en una apuesta por la cercanía y por un empoderamiento de los centros educativos en todos los ámbitos: pedagógico, organizativo, económico y de gestión de personal docente. Esta autonomía implica la participación de toda la comunidad educativa, unos equipos directivos profesionalizados y la implantación de la cultura de la evaluación. No en vano, la Ley refuerza los mecanismos de participación: consejos escolares y diversas mesas de negociación, de diálogo, de consulta y de asesoramiento.

Otro de los puntos destacados de la regulación es el relativo al modelo lingüístico, que la Ley configura sobre la base de la ordenación normativa preexistente. Se trata de un modelo que garantiza que los alumnos conozcan las dos lenguas oficiales al terminar la enseñanza obligatoria, además de una lengua extranjera; un modelo con el catalán como eje vertebrador del sistema educativo y el castellano también como lengua de enseñanza y de aprendizaje, y un modelo que da a los centros la capacidad de decidir y aprobar su proyecto lingüístico con el asesoramiento de la Inspección Educativa y con la exigencia de evaluaciones periódicas.

La nueva norma se alinea con la LOMLOE y, por tanto, apuesta por currículums competenciales. Asimismo, valora el papel estratégico de la formación profesional, que es fundamental para mejorar el modelo económico balear, facilitando que los trabajadores mejoren su cualificación.

Una educación de calidad debe ser inclusiva. Por eso se otorga protagonismo a la educación de 0-3, para que sea el primer eslabón de una política de equidad y de

igualdad de oportunidades, con la creación de plazas y un compromiso claro y progresivo hacia la universalización y la gratuidad.

La Ley concede la necesaria prioridad a la escuela pública, sin olvidar que la escuela concertada es un servicio público que hay que atender en las condiciones adecuadas. La Ley regula la coexistencia de ambos sistemas y garantiza una atención justa tanto al personal como al alumnado de todos los centros.

Finalmente, cabe subrayar que la memoria económica que acompañó al Proyecto de ley puso de relieve la pretensión de garantizar los compromisos concretos que recoge su articulado, como continuar con la reducción de ratios; mejorar la financiación, que debe situarse, al menos, en el 5 % del PIB, y la apuesta por la institucionalización y la estabilización de la función pública docente y la carrera profesional.

Se trata, en definitiva, de un instrumento con gran potencial transformador. La comunidad educativa y la Administración pública tienen ahora el reto de caminar con convicción hacia la excelencia del sistema educativo de las Illes Balears.

Martí X. March i Cerdà
Consejero de Educación y Formación Profesional
Gobierno de las Illes Balears

§1

LEY 1/2022, DE 8 DE MARZO, DE EDUCACIÓN DE LAS ILLES BALEARS¹

(BOIB núm. 38, de 17 de marzo de 2022)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los contextos educativos actuales se ven afectados en gran medida por los fenómenos que acontecen en nuestra sociedad, que experimenta cambios profundos a gran velocidad, porque uno de los aspectos más significativos de la actualidad consiste en la vivencia de una realidad mutable y acelerada. Los cambios en el mundo laboral y en los sistemas de producción, en la comunicación y en la transmisión de información, en la movilidad y en las migraciones, en las formas de relación y en la investigación científica y la generación de conocimiento se producen cada vez más rápidamente y provocan la sensación que la educación no los consigue asimilar ni da una respuesta eficaz a los desafíos que comportan.

Los centros educativos son un reflejo de la diversidad cultural de nuestra sociedad en la que confluyen valores diversos, culturas distintas, diferentes religiones, costumbres o lenguas que pueden ser percibidos como divergentes. Habrá que promover una educación que vaya más allá del multiculturalismo y la integración, una educación fruto del diálogo, la convivencia y el respeto que haga posible un intercambio real entre todas las culturas que compartimos un mismo territorio. Esta tarea tan solo será posible en el marco de una perspectiva inclusiva, de una educación intercultural con el objetivo de una integración y una acogida reales en nuestra sociedad respetando nuestra cultura propia.

Con esta ley se opta de forma clara por evitar las desigualdades y garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado con el fin de construir un sistema educativo sin exclusiones que permita el ejercicio de las libertades individuales, el aprendizaje en el marco de un sistema abierto e inclusivo sin barreras en todos los ámbitos. Este principio de inclusión, junto con la atención a la diversidad, abarca los criterios organizativos, pedagógicos, de atención educativa personalizada, de recursos y de participación necesarios para promover el éxito educativo garantizando la educación más adecuada para el alumnado.

Dentro del principio de inclusión, en las Illes Balears, en cuanto que comunidad con doble oficialidad lingüística, constituye un reto singular la inclusión lingüística del alumnado. Efectivamente, el ejercicio pleno de la ciudadanía en las Illes Balears pide que el sistema educativo garantice que al finalizar la educación obligatoria todos los ciudadanos sean capaces de emplear con corrección las dos lenguas oficiales. Dada la situación sociolingüística, con una gran preponderancia del castellano en múltiples

¹ Esta Ley ha sido modificada por el Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania (BOIB núm. 44, de 31 de marzo de 2022).

esferas de la vida social, pide que el sistema educativo esté especialmente atento a garantizar una exposición suficiente al uso habitual y funcional de la lengua catalana como forma de contribuir a garantizar el derecho al conocimiento de las dos lenguas oficiales que consagra el artículo 4.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Por otra parte, los centros educativos están inmersos en esta era de cambios con un volumen de interrogantes que hace que se plantee el sentido último de la acción educativa: educar para qué y hacia qué modelo de sociedad y de ciudadanía. Habrá que responder a todo esto si se quiere que el alumnado domine competencias diversas y desarrolle destrezas que le permitan afrontar con éxito las situaciones imprevisibles que se le presentarán en la vida cotidiana.

El objetivo de la educación será desarrollar personas abiertas al cambio para que puedan encarar de manera constructiva las perplejidades de un mundo donde los problemas surgen más velozmente que las respuestas. Hace falta una educación que pueda facilitar la formación de personas con la capacidad de afrontar los nuevos retos que la sociedad plantea, con capacidad crítica para contribuir a la mejora de la sociedad y a la construcción de un mundo más justo. El sistema educativo tiene que favorecer la evolución personal del alumno con todas sus capacidades y dimensiones personales e intrapersonales. Se debe promover la innovación y estimular el potencial creativo de los equipos directivos, del profesorado y del alumnado. En este sentido, la docencia se entiende como la mediación entre el conocimiento y el aprendizaje en la línea de aprender a hacer, aprender a ser, aprender a conocer y aprender a convivir.

El desarrollo educativo de la ciudadanía debe permitir la participación social, democrática, responsable y libre para lo que será necesario, cada vez más, garantizar que todas las personas reciban un nivel formativo de calidad para actualizar sus competencias y conocimientos, que les permita adaptarse a la sociedad avanzada en la que están inmersas.

La Recomendación (UE) 2018/C 189/01 del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los estados miembros a desarrollar la oferta de las competencias clave como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, identificándolas como aquellas competencias que todas las personas precisan para su desarrollo personal y su posibilidad de empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, éxito en la vida de las sociedades pacíficas, manera de vivir saludable y ciudadanía activa. Estas competencias se desarrollarán con una perspectiva de aprendizaje permanente, desde la primera infancia hasta la vida adulta, y por medio del aprendizaje formal, el no formal y el informal en todos los contextos, incluidos la familia, el centro educativo, el puesto de trabajo, el entorno y otras comunidades.

La educación, por lo tanto, es un derecho de todas las personas que se garantizará a lo largo de toda la vida y atenderá a todas las facetas de su desarrollo personal, emocional y profesional. Una de las obligaciones esenciales de los poderes públicos es garantizar de una manera efectiva este derecho a la educación y proporcionar los medios necesarios para elevar la calidad del sistema educativo con objeto de permitir la actualización de los conocimientos, la implementación de nuevas herramientas educativas, la mejora de la formación del profesorado, la gestión ágil y eficaz de los centros educativos, más participación y corresponsabilidad del conjunto de la comunidad educativa y el establecimiento de puentes efectivos entre los intereses educativos y sociales y los otros agentes, para que las ventajas de una educación de

calidad lleguen a todos los ciudadanos, sea cual sea su procedencia, independientemente de sus capacidades y características culturales, lingüísticas, de género o religiosas.

El ejercicio de este derecho a la educación implica que la acción educativa se debe entender como servicio público que se ejerce por medio de una red de centros sostenidos con fondos públicos, que incluye a los centros educativos de titularidad pública y a los centros privados concertados. Así, conforme a lo establecido en el artículo 27.3 de la Constitución Española, los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres y las madres a la educación de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, por lo que se constata que, si bien la educación pública constituye la base del sistema educativo, la escuela privada y concertada es un elemento clave de este sistema, que queda reconocido en esta ley por su relevancia y contribución al hecho educativo de las Illes Balears.

Una educación de calidad debe llegar a todos los alumnos, sin exclusión, porque la calidad y la equidad constituyen dos principios indisolubles. Uno de los instrumentos más efectivos para conseguir esta finalidad es una escolarización equilibrada y equitativa del alumnado que tiene que ir acompañada de una dotación de recursos suficiente y que supone situar los derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema educativo, según lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, que reconoce el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación de los poderes públicos de asegurar el cumplimiento efectivo de estos derechos, además de suponer que se cumple con los principios establecidos en la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears.

La educación, asimismo, debe garantizar también el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, jóvenes y del resto de personas con diversidad funcional, de acuerdo con lo que determina la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas, especialmente en lo que se refiere al acceso a una educación inclusiva.

La educación en los primeros años de vida de una persona es fundamental para la construcción de la personalidad y el desarrollo de todas las capacidades individuales; por este motivo la programación y el desarrollo de la educación infantil deben atender prioritariamente a la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico producen en el aprendizaje y la evolución infantiles, así como a la detección precoz y a la atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo, para lograr una educación con carácter preventivo, igualitario y compensador que garantice la equidad y la calidad en la atención y la educación de la primera infancia.

Las políticas públicas educativas resultan imprescindibles a la hora de combatir el machismo y denunciar y paliar las situaciones de desigualdad que se generan. Tal como se pone de manifiesto en la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, «el principio de igualdad de mujeres y hombres y la prohibición expresa de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo están recogidos en diferentes normas jurídicas». Más que nunca es necesario que la educación adopte un enfoque con perspectiva de género con objeto de conseguir un modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y los roles según el género y la orientación y la identidad sexuales. Uno de los pilares del sistema

educativo tiene que ser la coeducación. Las políticas públicas educativas, partiendo de la coeducación como herramienta indispensable, deben dirigir los esfuerzos a trabajar en la prevención de las violencias machistas y en el respeto a la diversidad afectivo-sexual. En el marco de las escuelas coeducativas se promoverá el uso no sexista del lenguaje y la reproducción de una imagen plural, diversa y no estereotipada de las mujeres y los hombres. Asimismo, se tendrá especial consideración al principio de transversalidad y de interseccionalidad en el marco de las políticas públicas educativas.

El reconocimiento de la importancia de atender a un desarrollo sostenible, de acuerdo con lo que establece la Agenda 2030 de la UNESCO, hace necesario impulsar un sistema educativo que apueste por programas educativos que incorporen los conocimientos, los valores y las actitudes adecuadas para vivir de manera activa y crítica, resolver problemas comunes a toda la ciudadanía y potenciar la educación para la paz, los derechos humanos y la memoria democrática, la igualdad entre hombres y mujeres, la interculturalidad, la transición ecológica, el bienestar nutricional, la vida saludable y los hábitos convenientes para el ejercicio físico.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se ha insertado de manera cotidiana en la sociedad, condiciona la manera de comprender la realidad y de participar en la vida social. Así, una educación para el siglo XXI deberá incluir la competencia digital, con acceso para todo el alumnado y en todas las etapas educativas, especialmente desde un enfoque transversal y a partir de una educación comprensiva, porque la sociedad reclama un sistema más inclusivo, más moderno, más abierto y con menos rigidez que desarrolle el potencial y el talento del alumnado, por lo que el sistema educativo debe estar abierto a las posibilidades que ofrecen los nuevos modelos educativos y garantizar las mismas oportunidades a todos los alumnos para lograr un nivel óptimo de aprendizaje.

Habrá que adoptar enfoques más transversales, orientados a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en los procesos educativos, y asegurar una formación integral centrada en el desarrollo de las competencias que incorpore elementos formativos asociados a la comunicación, a la formación artística, a las ciencias y la tecnología, las humanidades y la actividad física, desde una óptica de educación inclusiva, de igualdad entre hombres y mujeres y de no-discriminación, de promoción de la salud, de educación afectivo-sexual, de igualdad de oportunidades, de cuidado del medio ambiente, de respeto mutuo y de cooperación entre iguales.

Así pues, el proceso educativo tiene que estar centrado en la formación integral del alumnado, tanto en el ámbito de su formación en diferentes disciplinas como en el ámbito de su crecimiento personal. En este sentido, se trabajarán los aspectos relacionados con la educación emocional a lo largo de las diferentes etapas educativas para contribuir al autoconocimiento, la autoestima y la capacidad de establecer unas relaciones interpersonales satisfactorias, de tal manera que, indistintamente de las circunstancias sociales y personales que rodeen al alumno, pueda disponer de las herramientas adecuadas para afrontarlas con éxito.

Dando por sentado que el esfuerzo personal es una garantía para la superación constante y la consecución de los objetivos individuales y colectivos, se trabajará desde la perspectiva y la convicción de que el valor del esfuerzo es inherente a la calidad educativa y necesario para el logro de los objetivos académicos y personales. La equidad educativa solo se puede conseguir mediante un sistema educativo abierto, flexible y adaptado a las necesidades individuales de cada alumno y de cada grupo-clase, unido al

interés y al esfuerzo personal, al fomento y la valoración del estudio y el trabajo individual y a la implementación de didácticas de trabajo y cooperación en grupo.

II

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce el derecho de todas las personas a la educación y establece los principios esenciales sobre los cuales se sustenta el ejercicio de este derecho.

El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado por la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, establece en el artículo 36.2 que corresponde a la comunidad autónoma de las Illes Balears la competencia de despliegue legislativo y de ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.

Por medio del Real decreto 2243/1996, de 18 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de universidades, la comunidad autónoma de las Illes Balears se hizo cargo de la gestión educativa universitaria a partir del 1 de noviembre de 1996. Igualmente, desde el 1 de enero de 1998, el Gobierno de las Illes Balears ha gestionado la educación no universitaria, en virtud del Real decreto 1876/1997, de 12 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de enseñanza no universitaria, ampliado por medio del Real decreto 1001/1999, de 11 de junio, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de enseñanza no universitaria.

La experiencia de más de veinte años en la gestión educativa aconseja poder disponer de un marco general de regulación del sistema educativo no universitario de las Illes Balears que permita un ordenamiento legal de la educación que garantice la calidad, la mejora de los resultados educativos y el aumento de las oportunidades educativas y formativas de toda la ciudadanía.

Además, esta regulación tiene que ser suficientemente flexible para garantizar la ejecución de las políticas educativas desde las diversas opciones políticas que tengan responsabilidad de gobierno. Sin embargo, hay que dotar al sistema educativo de una mayor estabilidad, con el fin de permitir que las decisiones que se adopten no sean arbitrarias y se sustenten en fundamentos científicos y pedagógicos; se basen en el consenso, en la transparencia y en el análisis objetivo de la situación del sistema educativo; y garanticen la participación de la comunidad educativa.

Desde que se asumieron las competencias en materia de educación no universitaria, el sistema educativo de las Illes Balears ha conseguido cambios positivos en el transcurso de las dos últimas décadas, pero todavía tiene importantes retos a resolver. Los intensos cambios sociales, económicos y culturales que se producen en las Illes Balears hacen más compleja la realidad educativa.

De hecho, la comunidad autónoma de las Illes Balears es una de las comunidades con más alumnado extranjero en casi todos los niveles educativos. Las tasas de escolarización en las enseñanzas no obligatorias son más bajas que la media estatal. En conjunto, la esperanza de vida escolar en el sistema educativo de las Illes Balears es menos larga que en el resto de comunidades autónomas, lo que significa que hay una tendencia a no continuar con los estudios después de la etapa obligatoria, que hace que también sea inferior la esperanza de vida escolar en las enseñanzas universitarias en relación con el conjunto del Estado.

Aunque se hayan producido mejoras constatables en los últimos años, la tasa de idoneidad de la comunidad autónoma de las Illes Balears es todavía baja y disminuye a medida que se incrementa la edad del alumnado, con uno de los niveles más altos de repetición de curso en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria en comparación con otras comunidades autónomas. Especialmente a los doce años, coincidiendo con el tránsito entre la etapa de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, las tasas de idoneidad en las Baleares son inferiores a las estatales.

El índice de abandono escolar en el Estado español es alto en relación con los de los países del entorno y se encuentra lejos del objetivo de no superar el 10 % establecido por la Unión Europea. Las Illes Balears presentan un índice de abandono todavía superior al de la media estatal. Si bien, igual que en otros indicadores, se detecta una mejora progresiva tanto en el conjunto del Estado como en las Illes Balears, queda mucho camino por recorrer. Los indicadores de fracaso y abandono de los estudios postobligatorios suelen asociarse con indicadores de contexto laboral relacionados con tasas de actividad, ocupación y paro. Así, la apertura del mercado laboral a la contratación de mano de obra juvenil se puede traducir en vulnerabilidad de este colectivo si se comprueba que las tasas de paro más altas corresponden a aquellas personas que tienen un nivel inferior en la segunda etapa de la educación secundaria. Todo ello hace urgente la mejora del nivel educativo de la población activa de las Illes Balears que presenta uno de los valores más reducidos de todo el Estado en titulación en estudios superiores.

A la necesidad de dar respuesta a la influencia del contexto socioeconómico y laboral sobre el rendimiento educativo se añadirá la vinculación existente entre el sistema educativo y el productivo, entre la formación profesional y el mundo laboral, para dar más valor a la formación y adoptar medidas que favorezcan la permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, a la finalidad económica y laboral se suma la necesidad de que el sistema educativo sea realmente equitativo, por lo que habrá que revisar el modelo de repetición, detectar los problemas de aprendizaje, ajustar la atención a las necesidades de los alumnos y fomentar la continuidad en los estudios postobligatorios.

Por otra parte, el constante incremento de la población escolar de las Illes Balears, la necesidad de reducir el abandono escolar y el déficit histórico en infraestructuras educativas que sufren las Illes Balears precisan con urgencia una mayor inversión en infraestructuras educativas y una intensificación en la reforma y nueva construcción de centros educativos, al margen de la posibilidad de establecer nuevos conciertos educativos para entender atendidas necesidades de escolarización. Se trata, además de incrementar los recursos disponibles, de buscar vías más ágiles para implementar los planes de infraestructuras y los servicios complementarios de acuerdo con las nuevas necesidades, con la colaboración del conjunto de las administraciones públicas. Este hecho debe implicar la puesta en funcionamiento de instrumentos de colaboración por medio de convenios o de delegación de competencias, con la financiación adecuada, para hacer posible el abastecimiento de las infraestructuras y los servicios complementarios adecuados para la mejora del sistema educativo.

La situación exige adoptar iniciativas para avanzar hacia una educación de más calidad, atendiendo a las desigualdades y consolidando una oferta formativa atractiva. Las administraciones públicas deben apostar decididamente por un aumento de la

inversión en políticas educativas y por su eficiencia, que todavía queda lejos de situarse en la dotación necesaria para salvar el desnivel que nos separa de los países más avanzados.

Ciertamente, la mejora educativa no es una cuestión solamente de los recursos ni de las políticas de las administraciones públicas. El conjunto de la sociedad tiene responsabilidades que no se pueden obviar, desde el empresariado, que tiene que valorar la formación; las familias, que son clave en la transmisión de valores y el impulso de la motivación para el aprendizaje; el conjunto de la sociedad civil; los medios de comunicación; las organizaciones del tercer sector; y, especialmente, la comunidad educativa, como actor principal de la educación, sin la que no se pueden abordar los desafíos para dar solución a los problemas del sistema educativo y afrontar los nuevos retos.

Esta ley pretende sentar las bases para lograr una sociedad más preparada y mejor formada, más democrática, más justa, más plural, más solidaria y más tolerante en el marco de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, y quiere avanzar en aspectos fundamentales para hacer posible una educación de más calidad para la ciudadanía de las Illes Balears.

Así, se pretende mejorar la capacidad de aprender a lo largo de la vida, fomentar un aprendizaje de calidad para el alumnado de todas las etapas, aumentar el rendimiento escolar en la educación básica, obligatoria y postobligatoria, disminuir la tasa de abandono escolar, adecuar la educación a los requerimientos de la sociedad del conocimiento, reducir las desigualdades, abordar la inclusión escolar de todo el alumnado, mejorar la cualificación profesional y mantener la cohesión social y las señas de identidad y culturales propias de las Illes Balears.

También se intenta dotar de una mayor estabilidad al sistema educativo, facilitando un marco institucional que garantice su mejora sistemática a partir de una evaluación cualitativa que proponga medidas correctoras en todo lo que sea necesario. Se trata de promover que la acción educativa se desarrolle en un contexto que estimule la innovación y la autonomía de los centros y consolide las buenas prácticas.

Esta ley regula los derechos, las libertades y las obligaciones que corresponden a los diversos agentes de la comunidad educativa, porque solo a partir del consenso social será posible la implementación de las actuaciones que requiere para lograr los objetivos que se establecen. A la vez, pretende impulsar la equidad del sistema educativo y las actuaciones que debe llevar a cabo la administración educativa para eliminar las barreras que limitan el acceso, la participación y el aprendizaje del conjunto del alumnado. Se trata de dar el apoyo necesario para fomentar de manera óptima el desarrollo educativo y social y para que todo el mundo pueda acceder a una educación inclusiva en igualdad de condiciones con las otras personas.

De hecho, el Consejo Escolar de las Illes Balears aprobó el día 4 de abril de 2017 el documento que establece las bases para un posible acuerdo educativo y propone algunas de las medidas que se incluyen en esta ley. También se han tenido en cuenta algunas aportaciones del informe de día 2 de octubre de 2018 emitido por la ponencia creada el día 11 de octubre del 2017 en el seno de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes del Parlamento de las Illes Balears para el estudio de este documento entregado al Parlamento por el Consejo Escolar de las Illes Balears.

Dicho documento se elaboró a partir del trabajo hecho por la plataforma Illes per un Pacte, que agrupa a más de cuarenta entidades sociales del conjunto de las Illes

Balears con incidencia en el ámbito educativo. El documento solicita una normativa que pueda ser aceptada por la mayoría social y que permita cubrir las necesidades reales del sistema educativo y favorezca una educación de calidad que se fundamente, entre otros aspectos, en la necesidad de promover una educación de calidad y en equidad, en la recuperación de la educación en valores cívicos, en la participación democrática de la comunidad educativa, en la evaluación formativa orientada a la mejora del proceso de aprendizaje, en la descentralización de los currículums y en el enfoque curricular por competencias, en la dignificación de la tarea docente, en la mejora de las infraestructuras educativas, en el reconocimiento de la lengua catalana como lengua vehicular del sistema educativo y como elemento esencial para el mantenimiento de la cohesión social, en los planes de mejora para el éxito escolar y la convivencia, en la adecuación de la formación y los recursos didácticos y tecnológicos a las nuevas necesidades educativas y en la consideración de la red pública de centros como elemento básico del sistema, en convivencia con la enseñanza concertada, para que todo ello permita la consideración real de la educación como un servicio público de calidad.

El objetivo último de esta ley es la mejora de la calidad de la educación en las Illes Balears. Se trata, cuando menos, de incorporar las nuevas sensibilidades y demandas sociales hacia la educación para ser capaces de reafirmar la confianza en el sistema educativo y promover un nuevo impulso a las vías del éxito educativo. Sin embargo, la mejora de la calidad requiere del diálogo permanente con la comunidad educativa y con todos los agentes implicados, desde un compromiso colectivo para la búsqueda de las respuestas más adecuadas a las necesidades que plantea el sistema.

Este objetivo es coherente con la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que según indica su preámbulo, tiene por finalidad la de establecer un ordenamiento legal renovado que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población para contribuir a la mejora de los resultados educativos del alumnado y satisfacer la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todo el mundo.

III

Esta ley se estructura en un título preliminar, nueve títulos específicos, diecisiete disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y once disposiciones finales.

El título preliminar establece el objeto de la ley, promulga el derecho constitucional a la educación, que se tiene que ejercer en condiciones de igualdad, que tiene que garantizar el Gobierno de las Illes Balears, y establece los principios generales, pedagógicos y organizativos del sistema educativo de las Illes Balears. En este apartado destaca la consideración que se otorga al sistema educativo de principal instrumento para garantizar el derecho que el Estatuto de Autonomía garantiza a los ciudadanos de las Illes Balears de conocer las dos lenguas oficiales, que es el marco en el cual deben entenderse las diversas disposiciones que contiene la ley respecto al uso de las lenguas oficiales en el sistema educativo.

El título I determina la estructura del sistema educativo, la ordenación de las enseñanzas y de las etapas educativas que lo constituyen, la evaluación y la promoción en las diferentes etapas, la formación profesional como un sistema integrado, la oferta

educativa de la formación profesional, que apuesta por la flexibilidad y la conciliación de la formación con la ocupación de un lugar de trabajo; la educación de las personas adultas como sistema de formación permanente a lo largo de la vida; las enseñanzas de régimen especial y las enseñanzas artísticas superiores.

En el marco de este título hay que mencionar la vigencia de la Ley 4/2006, de 30 de marzo, de educación y formación permanentes de personas adultas de las Illes Balears, que determina los principios generales de la educación y la formación permanentes de personas adultas y establece sus características principales.

El título II regula los objetivos de la cooperación con la Universidad de las Illes Balears para la mejora del sistema educativo y la colaboración de las diferentes administraciones públicas para favorecer un modelo educativo propio, y para la mejora de la oferta de la educación formal y no formal, dado que la educación es una responsabilidad compartida entre administraciones de acuerdo con las respectivas competencias.

Asimismo, prevé los mecanismos de cooperación entre la administración educativa, los consejos insulares y los ayuntamientos, así como la delegación de competencias, para hacer más eficaz la gestión educativa. El conjunto de las administraciones públicas —la estatal, la autonómica, las insulares y las locales— tiene que colaborar para facilitar un acercamiento de los centros a las demandas y a los recursos del entorno y debe ayudar a hacer posible la educación a lo largo de toda la vida como reto esencial establecido por la Unión Europea.

El título III se dedica a la comunidad educativa, elemento clave para el buen funcionamiento del sistema educativo, del cual es la protagonista. Define los agentes y las instituciones que la integran, regula los derechos y los deberes de los diferentes agentes y amplía las formas de participación y la toma de decisiones compartidas. Con esta finalidad institucionaliza un conjunto de órganos de participación para garantizar que las decisiones educativas se adopten con el máximo consenso posible como vía para estabilizar el sistema educativo y mejorar su calidad.

Tienen una consideración especial la Mesa Sectorial de Educación como órgano de negociación colectiva de las condiciones sociolaborales del personal docente, y la Mesa de la Enseñanza Concertada como órgano de negociación tripartita de acuerdos de mejora para la financiación de las condiciones sociolaborales del personal docente y no docente de estos centros que, a partir de la aprobación de esta ley, verá procesos de mejora en las condiciones de trabajo y en el reconocimiento de su tarea educativa.

Es responsabilidad del conjunto de la comunidad educativa la mejora del sistema. El horizonte de calidad afecta a las administraciones públicas, que tienen la obligación de disponer de los medios y recursos apropiados y facilitar condiciones adecuadas para avanzar y consolidar los elementos de mejora; y afecta y compromete también el profesorado, que es el responsable del ejercicio de la acción educativa. Las familias tienen también su responsabilidad en la mejora del sistema educativo en función del derecho y el deber de contribuir a la educación de sus hijos e implicarse en la participación en el seno de la comunidad educativa.

El título IV se refiere a las características de la función docente y regula las formas de acceso y provisión, el régimen de comisión de servicios, el apoyo, la protección y la dignificación profesional en el marco de la carrera docente. Asimismo, regula el Registro General del Personal Docente no Universitario de las Illes Balears y el acceso a los datos personales que figuran en el expediente. Sin la participación y la implicación de los docentes no será operativa la implantación del modelo que se establece en esta

ley. Por eso se intenta ampliar sus perspectivas profesionales, potenciar su formación y garantizar el apoyo de la administración a la función docente.

La regulación tiene en cuenta lo que se establece en la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que prevé que determinados colectivos de la administración autonómica, en consideración a sus características especiales, puedan ser objeto de regulación específica mediante normas que adecúen esta ley a sus peculiaridades. Específicamente, el artículo 3.1.b) determina que el personal docente y el personal estatutario al servicio de la sanidad pública autonómica se regulan por los preceptos de esta ley únicamente en aquellas materias que no estén reguladas por la normativa básica específica del Estado ni por la normativa autonómica específica que la desarrolla.

En este título también se introduce la regulación de la figura de los asesores técnicos docentes y se dota de objetividad la selección de este personal con funciones en los servicios educativos, así como la de profesores asociados y visitantes, en los términos establecidos en la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

El título V regula la red de centros educativos y la creación de nuevos centros, establece su tipología y regula los procesos de escolarización desde un marco de escolarización equitativa y de inclusión educativa.

Además, este título apuesta por la autonomía de los centros, tanto pedagógica y organizativa como de gestión ordinaria, y dota a los centros de una mayor capacidad, dentro de los límites de las competencias propias, para el desarrollo curricular y la elaboración y la implementación de un proyecto educativo que responda a las características de su entorno y de su alumnado.

La autonomía de centros permite mejorar su funcionamiento, pero requiere también la adopción de medidas que impulsen los proyectos de dirección y la formación de los equipos directivos para fomentar su capacidad para una gestión eficaz de los recursos. Se establecen las formas de selección de la dirección, así como la evaluación de la tarea directiva, el reconocimiento profesional de la función directiva y el ejercicio del liderazgo pedagógico y, en este marco, habrá que estimular la participación activa de las familias y del alumnado como agentes activos de los centros educativos, y también garantizar el ejercicio de las funciones propias del claustro del profesorado.

Se necesitan, por lo tanto, centros con capacidad de ejercer responsablemente un alto grado de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, tanto en el ámbito curricular como en la gestión de los recursos económicos y en la gestión del personal que tienen asignado, para hacer posible una adecuada comunidad de aprendizaje abierta a las demandas y a las necesidades del alumnado.

El título VI se dedica a los elementos específicos propios del sistema educativo de las Illes Balears. Así, se incluye el modelo lingüístico escolar que, de acuerdo con lo que determinan el Estatuto de Autonomía y la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears, sigue el modelo denominado de conjunción lingüística o bilingüismo integral. Se basa en el aprendizaje de las lenguas oficiales y la adquisición de competencias lingüísticas en lenguas extranjeras, y consolida el uso de la lengua propia de las Illes Balears como lengua vertebradora de la enseñanza. De este modo, se da continuidad a un modelo implementado progresivamente y que se enmarca coherentemente en el marco normativo definido por el Estado y, en concreto, por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

El objetivo del modelo lingüístico es garantizar que los alumnos, sea cual sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, puedan utilizar normalmente y correctamente el catalán y el castellano y asegurar los conocimientos de al menos una lengua extranjera al final del periodo de escolaridad obligatoria y, a la vez, dar cumplimiento a los objetivos propios del proceso de normalización lingüística establecidos por mandato estatutario. Así, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, se garantiza que al finalizar la educación básica todo el alumnado deberá alcanzar el dominio pleno y equivalente de las dos lenguas oficiales y la adquisición de competencias lingüísticas en una lengua extranjera. Se trata de un modelo reiteradamente avalado por la jurisprudencia constitucional ya desde la Sentencia 337/1994, de 23 de diciembre, del Tribunal Constitucional que, sin perjuicio de la utilización de la lengua castellana como lengua de enseñanza y de aprendizaje, permite a la vez compensar situaciones históricas y presentes de desequilibrio que colocan el catalán en una posición de desventaja, y se encuentra justificado por los resultados conseguidos hasta el momento.

Forman parte de las políticas escolares específicas todas las medidas que impulsen la educación inclusiva como principio fundamental y transversal del sistema educativo, orientada a la participación y la plena inclusión de todo el alumnado; y que garanticen los derechos de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y la intervención educativa necesaria para su desarrollo.

Asimismo, el título apuesta por la mejora y la consolidación de la formación del profesorado desde un marco que impulse la formación en los centros educativos y que se base en un modelo de competencias profesionales.

También se incluye el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos en la educación no formal en el marco de una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida y se promueven los proyectos de aprendizaje-servicio orientados a desarrollar la competencia social y ciudadana y el ejercicio activo de la ciudadanía en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible.

El título VII establece las bases del seguimiento y la evaluación del sistema educativo y regula la inspección educativa, que tiene que velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en los centros educativos y garantizar el ejercicio de los derechos de la comunidad educativa y el cumplimiento de los deberes para contribuir a la mejora de la calidad y la equidad en la educación.

La calidad necesita un sistema de evaluación que permita ejercer el control social para detectar, desde un planteamiento riguroso, los avances, y también las deficiencias, del proceso educativo en los diferentes ámbitos en el que inciden —centros, alumnado, profesorado, administración, servicios educativos y otros—, con el fin de adoptar con eficiencia las medidas que hagan falta.

Con esta finalidad se necesita una inspección dotada de capacidad jurídica y técnica que pueda realizar el seguimiento de los procesos educativos, evaluar su implantación y proponer las medidas correctoras que convengan.

En cuanto a la evaluación, la ley da un impulso importante como herramienta para asegurar la mejora continua. En esta línea, se garantiza un sistema de evaluación externa que no haga depender la mejora exclusivamente de las energías internas de los centros, y un ejercicio periódico de la evaluación en todos los centros de las Illes Balears.

El título VIII establece la organización territorial de la consejería competente en materia educativa, determina las funciones de las direcciones territoriales y las dota de

capacidad administrativa para hacer más eficaz la intervención a partir de una mayor descentralización en la toma de decisiones.

El título IX determina los principios y objetivos de la financiación necesaria para el funcionamiento eficaz del sistema educativo. Los recursos económicos puestos a disposición del sistema educativo se deberán gestionar de acuerdo con los principios generales de equidad, eficacia, eficiencia y economía sostenible, a partir de una planificación económica que garantice la suficiencia y la estabilidad, así como el control financiero.

En las disposiciones adicionales se adoptan medidas para asegurar la convivencia en los centros educativos; se prevé la necesidad de avanzar en la implantación del primer ciclo de la educación infantil; los compromisos de la administración para disminuir de manera progresiva las ratios máximas; el pago delegado al profesorado de la enseñanza concertada, que se irá aproximando a la equiparación retributiva con el profesorado de la enseñanza pública; y la revisión del importe de los módulos económicos de la enseñanza concertada para garantizar la gratuidad efectiva de la enseñanza.

Asimismo, se pretende garantizar la prestación de los servicios complementarios de comedor y transporte escolar estableciendo un sistema de ayudas para compensar las desigualdades y hacerlo compatible con otros sistemas por razones de doble y triple insularidad, dotar de autonomía a los órganos de coordinación didáctica para adoptar los materiales didácticos y curriculares, promover la digitalización y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, promover el voluntariado en los centros sostenidos con fondos públicos, hacer sostenible la delegación de competencias, posibilitar la creación de una unidad delegada para el ámbito territorial de Formentera, garantizar la conservación y la difusión del patrimonio histórico educativo, asegurar el compromiso del Gobierno de las Illes Balears para incrementar el gasto público educativo de manera progresiva, el reconocimiento social de los equipos directivos y el plan de impulso de los colegios integrados de primaria y secundaria.

Las disposiciones transitorias primera y segunda establecen el mantenimiento de la estructura retributiva actual del personal funcionario docente y del personal laboral docente, respectivamente, hasta la determinación de una nueva estructura retributiva, y la disposición transitoria tercera establece el régimen de las delegaciones territoriales de educación mientras no se creen las direcciones territoriales previstas en esta ley. La disposición derogatoria deroga las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley.

Las disposiciones finales hacen referencia al mantenimiento de los actuales entes y órganos instrumentales hasta que se modifiquen reglamentariamente, a la integración de los estudios superiores artísticos en el Instituto de Enseñanzas Artísticas Superiores, al compromiso para desarrollar la carrera docente, a regular la figura de otros profesionales que intervienen en el sistema educativo, a adaptar el Reglamento de organización de los centros a las disposiciones de esta ley y a regular el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros públicos. También se prevé la modificación del texto refundido de la Ley de consejos escolares de las Illes Balears, aprobado por el Decreto legislativo 112/2001, de 7 de septiembre; y lo que se entiende por administración educativa en el marco de esta Ley; habilitan al Gobierno a dictar las disposiciones adecuadas para desarrollarla y aplicarla, y determinan cuándo entrará en vigor.

IV

Esta ley cumple con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que son los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, y con los principios de buena regulación de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, que son los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación, establecidos en la normativa estatal básica.

De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa legislativa pretende regular el sistema educativo de las Illes Balears. Resulta imprescindible la presente ley para poder generar el desarrollo normativo que permita una eficaz adaptación y anticipación del sistema educativo a los contextos sociales cambiantes. La mejora del rendimiento escolar, la disminución de la tasa de abandono escolar, la integración y la inclusión de todo el alumnado y la universalización y gratuidad progresiva del primer ciclo de educación infantil, entre otras finalidades, necesitan una mayor estabilidad del sistema educativo y una ley de referencia de ámbito autonómico que permita el despliegue de normativas y medidas adaptadas al contexto.

Respecto al principio de proporcionalidad, esta norma contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad que se tiene que cubrir y a la que responde, después de constatar que no hay otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones al alumnado, a las familias, al profesorado, al personal de atención a las necesidades educativas de los alumnos y al personal no docente de los centros educativos.

La seguridad jurídica también preside esta ley, puesto que se ejerce de manera coherente con el artículo 27 de la Constitución Española, con el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y autonómico, así como con el Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) de la Unión Europea. Genera un marco normativo estable, claro y de certeza, que facilita el desarrollo normativo de aspectos como la participación de la comunidad educativa en los centros educativos, la autonomía de gestión de los centros, la integración e inclusión del alumnado y la aplicación general de criterios y procedimientos de evaluación del sistema educativo en todos los niveles.

En virtud del principio de transparencia, se ha sometido al trámite de consulta pública en los términos que indica el artículo 133 de la Ley 39/2015, ya mencionada. Asimismo, el principio de transparencia también se ha garantizado con la exposición pública en el lugar web de la administración autonómica para la consulta de la iniciativa legislativa y del estado de tramitación, así como las consultas previas a la elaboración del borrador, con objeto de garantizar el acceso permanente de los ciudadanos a la información y la presentación de sugerencias por medios telemáticos, tal como se establece en el artículo 51 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.

Conforme al principio de eficiencia, para racionalizar la gestión de los recursos públicos a la hora de aplicarla, esta ley no prevé cargas administrativas innecesarias o accesorias para la consecución de los objetivos.

Se ha atendido al principio de calidad en el procedimiento de aprobación de la norma, puesto que se ajusta a los procedimientos definidos legalmente. Asimismo

racionaliza la gestión del servicio público y con esta finalidad se ha trabajado en la calidad formal de la norma, además de redactarla en términos claros, precisos y asequibles para la ciudadanía.

Esta ley se ajusta al principio de simplificación, puesto que ayuda a los ciudadanos a conocer y entender mejor el conjunto de la regulación y de las medidas normativas que les afectan. Esta ley permitirá que se desarrolle, simplifique y dote de más coherencia a la normativa reguladora posterior. Se trata de un texto normativo con normas claras y con un lenguaje accesible para facilitar su cumplimiento.

La amplitud de esta ley y su contenido son fundamentales para adecuar el sistema educativo a los cambios que la sociedad de las Illes Balears ha experimentado en estas últimas décadas y para responder de forma adecuada a las nuevas necesidades de formación y aprendizaje que requiere la sociedad del siglo XXI.

La iniciativa legislativa se ha sometido a consulta previa, a información pública y a audiencia de las personas interesadas; también se ha presentado al Consejo Escolar de las Illes Balears, que ha emitido el informe correspondiente, y al Consejo Económico y Social, que ha emitido el preceptivo dictamen.

TÍTULO PRELIMINAR EL OBJETO Y LOS PRINCIPIOS DE LA LEY

Artículo 1. Objeto de la ley

1. Esta ley tiene por objeto regular el sistema educativo en los niveles de la enseñanza no universitaria de las Illes Balears, fomentar la participación de la comunidad educativa, posibilitar el éxito y la equidad educativa, y la igualdad de oportunidades, con el fin de que todo el alumnado llegue a su nivel óptimo de aprendizaje, asegurar el conocimiento de las dos lenguas oficiales a todos los ciudadanos, dotar a los centros de más autonomía e institucionalizar la evaluación, de acuerdo con las competencias propias y en el marco del sistema educativo español.

2. Las disposiciones de esta ley y las normas que la desarrollan definen un modelo educativo propio de las Illes Balears de interés público, participativo, de calidad y de equidad, y la igualdad de oportunidades.

3. El sistema educativo es el principal instrumento del que dispone la comunidad autónoma de las Illes Balears para hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears para tomar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento de las dos lenguas oficiales. Por eso, todas las disposiciones relativas al uso de las lenguas oficiales, a la evaluación de su aprendizaje y a la evaluación del éxito del sistema educativo para cumplir el mandato mencionado se tienen que entender dirigidas a este objetivo.

4. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta ley el sistema universitario de las Illes Balears, que se rige por su normativa específica.

Artículo 2. Derecho a la educación

1. Los alumnos tienen derecho a una educación integral, orientada al pleno desarrollo de la personalidad y con respeto a los principios democráticos de convivencia y equidad y a los derechos y a las libertades fundamentales, así como a la consecución de competencias y al desarrollo de sus capacidades.

2. Todo el mundo tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones al sistema educativo y a la elección de centro en el marco de la oferta educativa, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación regulado en el artículo 27 de la Constitución Española.

3. El Gobierno de las Illes Balears hará efectivo el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza con el objetivo de institucionalizar el servicio público de educación de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

4. Para garantizar el derecho a la educación de todas las personas en condiciones de igualdad de oportunidades, el Gobierno de las Illes Balears regulará un procedimiento de acceso único a los centros públicos y a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

5. Para garantizar el derecho a la educación de todas las personas en condiciones de igualdad de oportunidades, el Gobierno de las Illes Balears, junto con los consejos insulares y los ayuntamientos, promoverá una red integrada de servicios de salud, sociales, comunitarios y de programas de apoyo y refuerzo, con criterios profesionales, para dar respuesta a las necesidades sociales, de salud, culturales y educativas del alumnado. La intervención de la red integrada se realizará en coordinación con los centros educativos y preferentemente en los mismos centros.

Artículo 3. Principios generales, pedagógicos y organizativos

1. El sistema educativo de las Illes Balears, en el marco de los valores definidos por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, se rige por los siguientes principios generales:

- a) El respeto a los derechos humanos y la formación para la paz.
- b) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según se establece en la Convención sobre los derechos del niño, aprobada por las Naciones Unidas, y sus protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, el derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que le afecten y la obligación de las administraciones de asegurar estos derechos.
- c) El cumplimiento de los derechos de los niños, jóvenes y del resto de personas con diversidad funcional según se establece en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas, especialmente el derecho de acceso a una educación inclusiva y a la mejora de su calidad de vida.
- d) La transmisión y la puesta en práctica de los valores propios de la sociedad democrática: la libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la participación, la justicia, la igualdad, la convivencia, la tolerancia y los valores de una economía social.
- e) La accesibilidad universal, la equidad, la igualdad de derechos y de oportunidades y la cohesión social y cultural dentro del marco de la inclusión educativa de todo el alumnado.
- f) La escolarización equilibrada de todo el alumnado entre centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos.
- g) El respeto a la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros.
- h) La libertad académica del profesorado en el marco de las enseñanzas reguladas en esta ley y con respeto a la autonomía de centro y, si procede, de su carácter propio.

- i) El pluralismo educativo dentro de los límites de esta ley y la normativa vigente.
- j) La responsabilidad del sistema educativo de garantizar que al final del proceso de la enseñanza obligatoria todos los alumnos sean competentes para usar con corrección y fluidez las dos lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito.
- k) El ejercicio del derecho a recibir una educación de carácter no confesional, de acuerdo con lo que se establece en los puntos 1 y 3 del artículo 16 de la Constitución Española.
- l) La garantía del derecho que asiste a las familias para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, según lo que determinan el artículo 27.3 de la Constitución Española y los acuerdos suscritos por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas.
- m) La libre elección de centro, que otorgue a las familias la posibilidad de solicitar la escolarización de sus hijos en los centros de su preferencia de acuerdo con lo que determine la normativa vigente, en la medida de lo posible.
- n) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, y la consecución de la excelencia en el marco de la equidad educativa.
- o) El impulso a la innovación pedagógica para mejorar la educación.
- p) El fomento de la convivencia, la no violencia, la paz, la prevención y la resolución pacífica de los conflictos desde la tolerancia y la libertad en el marco de los principios democráticos.
- q) El respeto al medio ambiente, el fomento de su sostenibilidad, la concienciación ante la crisis climática y ambiental y la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos.
- r) La promoción de la salud y el consumo responsable.
- s) El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje y confiar en sus aptitudes y conocimientos, y el fomento de la creatividad, la iniciativa personal y el emprendimiento.
- t) El compromiso con el territorio, el patrimonio, la cultura, la historia, la lengua y las tradiciones de las Illes Balears.
- u) La coeducación, la igualdad real entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género y la prevención de la violencia machista.
- v) La promoción de la educación más allá del centro educativo y el fomento de la educación a lo largo de la vida.
- w) La construcción de un sistema plurilingüe que tenga como eje vertebrador la lengua catalana, propia de las Illes Balears.
- x) La implantación de la cultura de la evaluación constructiva como instrumento de mejora del sistema educativo.
- y) El fomento del talento en todas las etapas educativas.

2. Los principios pedagógicos y organizativos que conforman esta ley son los siguientes:

- a) La formación integral de las capacidades intelectuales, morales, físicas, emocionales y sociales de los alumnos.
- b) La educación basada en competencias fundamentadas científicamente: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir.

- c) La capacitación competencial adecuada para ejercer activamente una ciudadanía responsable y solidaria.
- d) La capacitación competencial necesaria para una plena integración profesional y laboral.
- e) La capacitación para ejercer la competencia digital.
- f) La evaluación competencial.
- g) La autonomía de los centros.
- h) La gestión integrada y descentralizada.
- i) La participación efectiva de la comunidad educativa.
- j) El respeto, la atención a la diversidad y la inclusión educativa.
- k) El fomento del trabajo cooperativo.
- l) El reconocimiento social y profesional de los docentes.
- m) El compromiso y la participación de las familias en el proceso educativo.
- n) La programación de las necesidades educativas de forma equilibrada entre todos los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos.
- o) La cooperación y la colaboración educativa entre las diversas administraciones públicas y los agentes económicos y sociales.
- p) La colaboración educativa con la Universidad de las Illes Balears.

TÍTULO I
LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO
DE LAS ILLES BALEARS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4. Ordenación general del sistema educativo

1. El sistema educativo de las Illes Balears se estructura de acuerdo con el marco normativo existente según las competencias del Estado y las propias de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Son enseñanzas obligatorias las comprendidas en la educación básica, que incluye:

- a) La educación primaria.
- b) La educación secundaria obligatoria.

3. Son enseñanzas gratuitas y universales las enseñanzas siguientes:

- a) El segundo ciclo de educación infantil.
- b) La educación primaria.
- c) La educación secundaria obligatoria.
- d) La formación profesional de grado básico que, en el marco de la normativa básica, conduce al título de graduado en educación secundaria obligatoria.

4. Son enseñanzas no obligatorias del sistema educativo no universitario de las Illes Balears:

- a) El primer ciclo de educación infantil.
- b) El bachillerato.
- c) La formación profesional de grado medio y de grado superior y los cursos de especialización.
- d) Las enseñanzas de régimen especial.
- e) La educación permanente de personas adultas.

CAPÍTULO II LA EDUCACIÓN INFANTIL

Artículo 5. Estructura de la educación infantil

1. La ordenación general de las enseñanzas de la educación infantil se regirá en las Illes Balears por lo dispuesto en la normativa básica del Estado y en esta ley.

2. La educación infantil se estructura como una única etapa educativa, desde el nacimiento hasta los seis años, y comprende dos ciclos de tres años cada uno.

3. El primer ciclo comprende entre los cero y los tres años y el segundo ciclo, entre los tres y los seis años. Se garantizarán la necesaria continuidad curricular y la coherencia educativa entre los dos ciclos.

Artículo 6. Objetivos y principios de la educación infantil

1. La educación infantil tiene como objetivo el desarrollo global de las capacidades de las niñas y los niños durante los primeros años de vida, y compensará las desigualdades de origen social, familiar, económico o cultural o por razón de diversidad funcional para prevenir con equidad sus efectos.

2. La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y los niños las capacidades que les permitan:

- a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias.
- b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social y reflexionar sobre el mismo, manteniendo una actitud de curiosidad.
- c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales y en la organización de las secuencias temporales y espaciales cotidianas.
- d) Desarrollar sus capacidades afectivas y actuar progresivamente con más seguridad y confianza en sí mismos.
- e) Relacionarse positivamente con los otros niños y niñas y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y de relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
- f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes, formas de expresión y en las dos lenguas oficiales.
- g) Iniciarse en una lengua extranjera.
- h) Iniciarse en las habilidades lógicas y matemáticas, en la lectura y la escritura, en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en los lenguajes visuales, plásticos y musicales.
- i) Participar en las manifestaciones culturales presentes en el entorno y disfrutarlas y conocer las más identificativas de las Illes Balears.
- j) Adoptar hábitos básicos de salud corporal y alimentaria.
- k) Desarrollar globalmente las capacidades cognitivas, sensoriales, motrices y de reconocimiento y construcción de las emociones mediante el juego y el movimiento.
- l) Promover, aplicar y desarrollar normas sociales para adquirir pautas dirigidas hacia la igualdad de género.

3. Para impulsar y facilitar la cooperación entre los centros y las familias y garantizar la corresponsabilidad de las familias en la educación de las niñas y los niños, los centros les facilitarán información suficiente sobre la evolución educativa de sus hijos y sobre la evaluación en el logro de los objetivos educativos.

4. Son principios pedagógicos de esta etapa la atención a la diversidad del alumnado, la atención individualizada, la detección precoz y la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades para proporcionar a los alumnos una atención ajustada a sus características personales y posibilitar que se escolaricen de forma equilibrada entre los centros sostenidos con fondos públicos, que deberán contar con los recursos suficientes.

Artículo 7. Regulación del primer ciclo de educación infantil

1. El Gobierno de las Illes Balears regulará, en el marco de sus competencias, el primer ciclo de educación infantil, que va de cero a tres años, desde un enfoque educativo. El carácter educativo del primer ciclo formará parte de la propuesta pedagógica de todos los centros que lo imparten.

2. El objetivo de la regulación del primer ciclo de educación infantil es universalizar este ciclo, hacerlo gratuito progresivamente y garantizar una educación equitativa y de calidad.

3. Para el desarrollo de este ciclo se pueden realizar convenios de cooperación territorial con el Gobierno del Estado.

4. Asimismo, se suscribirán convenios de colaboración con los consejos insulares y los ayuntamientos para la creación de nuevas plazas y para su mantenimiento teniendo en cuenta la oferta existente en el municipio o zona escolar.

5. La red de escuelas infantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears tendrá por objeto, entre otros, la creación de nuevas plazas, el sostenimiento de los centros, la prevención de dificultades y la detección, el diagnóstico y la inclusión de las niñas y los niños con necesidades específicas de apoyo educativo.

6. La administración educativa, con la participación de los agentes que intervienen en la atención al alumnado de primera infancia, regulará las condiciones y los requisitos de los centros privados que quieran incorporarse a la red complementaria de la red de escuelas públicas de educación infantil con el fin de ampliar la oferta educativa del primer ciclo de educación infantil.

7. La administración educativa podrá formalizar convenios con centros privados de primer ciclo de educación infantil para constituir la red educativa complementaria de la red de escuelas públicas de educación infantil. Estos convenios podrán contemplar ayudas para el sostenimiento de los centros.

8. Los centros públicos y los privados de primer ciclo de educación infantil que cumplan las condiciones legales, estén autorizados previamente por la administración educativa y formen parte de la red pública o de la complementaria de educación infantil podrán recibir las ayudas económicas que se convoquen. Los tipos de ayudas que convoque la consejería tendrán por finalidad paliar la falta de plazas, contribuir a reducir las desigualdades y favorecer los sectores socialmente más vulnerables. Los alumnos de estos centros y los de los centros de educación infantil autorizados en situación de vulnerabilidad que reúnan los requisitos que se establezcan podrán recibir las ayudas de escolarización y comedor que sean pertinentes.

9. Las administraciones públicas fomentarán el reconocimiento y la valoración de la tarea educativa de los profesionales que imparten el primer ciclo de educación infantil y adoptarán medidas para promover la mejora de sus condiciones sociolaborales.

Artículo 8. Regulación del segundo ciclo de educación infantil

1. El segundo ciclo de educación infantil será gratuito. La administración educativa garantizará una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y podrá concertar plazas con los centros privados en el marco de la planificación educativa, que tendrá en cuenta las preferencias de las familias.

2. El carácter educativo del segundo ciclo tiene que formar parte de la propuesta pedagógica de todos los centros que imparten educación infantil.

3. El Gobierno de las Illes Balears determinará los contenidos educativos del segundo ciclo de educación infantil de acuerdo con sus competencias y en el marco de la normativa básica, y regulará los requisitos que los centros deben cumplir en relación a las ratios, las instalaciones y el número de puestos escolares.

4. En el segundo ciclo de educación infantil se garantizará la coherencia de la acción educativa con la de los primeros años de la educación primaria, lo cual implicará una colaboración entre el profesorado de ambas etapas. La administración educativa regulará los ámbitos de esta colaboración.

**CAPÍTULO III
LA EDUCACIÓN BÁSICA****Artículo 9. Estructura de la educación básica**

1. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica, que es obligatoria y gratuita para todas las personas.

2. La educación básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla ordinariamente entre los seis y los dieciséis años de edad. Sin embargo, los alumnos tienen derecho a permanecer en los centros en régimen ordinario cursando la educación básica hasta los dieciocho años en las condiciones que se establezcan.

3. La educación básica debe mantener la coherencia necesaria con la educación infantil y con la educación postobligatoria y garantizará la coordinación entre las etapas que la componen para asegurar una transición adecuada de los alumnos y facilitar la continuidad de su proceso educativo.

Artículo 10. Objetivos y principios de la educación básica

1. Los objetivos, la organización y los principios pedagógicos de la educación básica y la evaluación de los alumnos de las etapas que la integran se establecerán reglamentariamente de conformidad con la normativa básica del Estado y esta ley.

2. La educación básica se orientará a la adquisición de las competencias que contribuyan al desarrollo personal de los alumnos y a la práctica de la ciudadanía activa, e incorporará de manera generalizada las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje. En esta etapa se establecerán mecanismos para la detección de necesidades específicas de apoyo educativo y se implementarán, si procede, recursos de intervención y de compensación, y los ajustes metodológicos y de evaluación para su correcta gestión.

3. En la educación básica se evitará la repetición de curso, que tendrá un carácter excepcional, y solo se aplicará después de otras medidas de apoyo ordinario y asociada a un plan personalizado para cada alumno, orientado a la superación de las dificultades detectadas anteriormente y al desarrollo de su potencial máximo.

4. Para posibilitar la promoción de los alumnos con más dificultades curriculares y/o de los alumnos con talento, los equipos docentes determinarán las medidas preventivas, de acompañamiento y de apoyo educativo necesarias y, en ningún caso, se decidirá la no promoción o la aceleración sin un plan específico que mejore sustancialmente sus expectativas de rendimiento escolar en los cursos siguientes.

5. Se establecerán mecanismos de coordinación entre los centros que imparten la educación secundaria obligatoria y los centros educativos de educación primaria adscritos, así como entre las dos etapas en un mismo centro, con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad del proceso educativo.

6. Se establecerán reglamentariamente las obligaciones de los centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación docente respecto a lo regulado en el presente artículo.

Artículo 11. Estructura de la educación primaria

La etapa de la educación primaria comprende seis cursos, que se organizan en ciclos, y se cursa normalmente entre los seis y los doce años de edad, con el currículum organizado de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 12. Objetivos y características de la educación primaria

1. La educación primaria tiene como finalidad proporcionar a todos los alumnos una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y que, de acuerdo con las competencias fijadas en el currículum, les permita:

- a) Identificar, expresar y comprender los aspectos emocionales y afectivos, las habilidades sociales y la resolución de conflictos.
- b) Adquirir y desarrollar las habilidades y las competencias relativas a la expresión y la comprensión orales, la expresión escrita y la comprensión lectora en las lenguas oficiales y en una lengua extranjera en el nivel que corresponda.
- c) Adquirir las competencias establecidas en matemáticas y las competencias digitales necesarias para el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual.
- d) Adquirir nociones básicas de la cultura, la historia y la geografía, con especial referencia a la propia de las Illes Balears.
- e) Fomentar el autoconocimiento, el conocimiento del propio cuerpo, la actividad motriz y de desarrollo físico y los hábitos saludables.
- f) Desarrollar la capacidad de esfuerzo, los hábitos de estudio y de trabajo, la cooperación y la ayuda mutua.
- g) Expresar el sentido artístico y la creatividad.
- h) Adquirir conciencia de pertenencia a la comunidad educativa del centro como colectivo activo y colaborador que participa en los órganos correspondientes.
- i) Adquirir conciencia de pertenencia a la comunidad de las Illes Balears.
- j) Valorar y fomentar las actitudes solidarias y no discriminatorias, para asumir los deberes y ejercer los derechos como ciudadanos.
- k) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

2. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad de los alumnos, en la atención individualizada y la detección precoz, y en la prevención de las dificultades y los ritmos excepcionales de aprendizaje, con mecanismos de refuerzo y metodologías adaptadas tan pronto como se detecten estas dificultades, para conseguir un nivel óptimo de aprendizaje y utilizando, si procede, sistemas de diseño universal para el aprendizaje y los ajustes alternativos que sean adecuados.

3. En la educación primaria, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos será continua y global, tendrá un carácter progresivo y tomará en consideración el proceso de aprendizaje. Asimismo preverá medidas de mejora.

4. La decisión de promoción de curso tendrá un carácter global, de forma que se determinará a partir del progreso conjunto en las diversas áreas que configuran el currículum y del grado de logro de las competencias establecidas y a partir de la valoración del nivel madurativo y socioemocional del alumno.

Artículo 13. Estructura de la educación secundaria obligatoria

La etapa de la educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se cursan ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad, con los contenidos organizados por materias o por ámbitos, que se podrán desarrollar en proyectos interdisciplinarios de aprendizaje e investigación y mediante metodologías centradas en el aprendiz.

Artículo 14. Objetivos y características de la educación secundaria obligatoria

1. La educación secundaria obligatoria se orientará a la adquisición de las competencias establecidas para la etapa y tiene como finalidad proporcionar a todos los alumnos una educación que les permita:

- a) Adquirir los elementos básicos culturales, con especial referencia a la cultura propia de las Illes Balears, principalmente en los aspectos lingüístico, artístico, científico, humanístico y tecnológico.
- b) Asegurar un desarrollo personal y social sólido en relación a la autonomía personal y emocional, la aceptación de la diversidad, la interdependencia personal, la gestión de la afectividad y la sexualidad, y el fomento de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la erradicación de estereotipos y roles sexistas y la violencia machista.
- c) Desarrollar una conciencia de rechazo y lucha contra cualquier otro tipo de violencia.
- d) Consolidar hábitos de disciplina, capacidad crítica, estudio y trabajo individual y en equipo que favorezcan el aprendizaje autónomo, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de sus capacidades, y que posibiliten la formación continua a lo largo de la vida.
- e) Asumir responsablemente sus deberes y conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las personas, en el ejercicio de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad; ejercitarse en el diálogo y la empatía, y promover los derechos humanos y la memoria democrática como valor común de una sociedad plural, así como prepararse para el ejercicio de la ciudadanía activa.
- f) Desarrollar las habilidades y las competencias culturales, personales y sociales relativas a la expresión y la comprensión orales, la expresión escrita y la

comprensión lectora en las lenguas oficiales en el nivel necesario para garantizar, al final del periodo de escolaridad obligatoria, el uso normal y correcto de ambas lenguas y, al menos, de una lengua extranjera en el nivel medio, incorporando, si procede, sistemas de diseño universal de aprendizaje o medidas inclusivas de cualquier tipo que permitan la eliminación de barreras, a la vez que se generen apoyos para todo el alumnado, prestando especial atención al de capacidades diversas.

- g) Adquirir las competencias establecidas en matemáticas y las competencias digitales necesarias para el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual y potenciar el uso seguro de estas tecnologías para evitar su adicción.
- h) Desarrollarse íntegramente como miembro de la sociedad con capacidad para resolver problemas de la vida cotidiana.
- i) Fomentar el conocimiento y la aceptación del propio cuerpo, la adquisición de hábitos y alimentación saludables, la educación afectivo-sexual y la actividad física y deportiva.
- j) Incorporarse a estudios posteriores y al mundo laboral con las pertinentes garantías.
- k) Asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos responsables.
- l) Adquirir conciencia de pertenencia a la comunidad educativa del centro y promover su participación activa a través de los órganos correspondientes.
- m) Adquirir conciencia de pertenencia a la comunidad de las Illes Balears y contribuir al conocimiento y a la valoración de su patrimonio lingüístico, histórico, territorial, artístico, cultural y ambiental.
- n) Conocer, comprender y relacionar los conceptos básicos de las diferentes materias curriculares.

2. Los centros educativos desarrollarán y complementarán el currículum y las medidas de atención a la diversidad establecidos por las administraciones educativas, para adaptarlos a las características del alumnado y a su realidad educativa.

3. En los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria, y en las condiciones que se determinen, los centros educativos podrán adoptar medidas de carácter organizativo y metodológico a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y ámbitos para facilitar la transición del alumnado entre la educación primaria y esta etapa, garantizar su adaptación y asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje.

4. A partir del segundo curso de la educación secundaria obligatoria, y en las condiciones que se determinen, los centros educativos podrán adoptar medidas extraordinarias de carácter organizativo y metodológico a través de la preparación de contenidos, actividades prácticas y ámbitos, diferentes de las establecidas con carácter general, para facilitar el progreso académico y el éxito escolar de los alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje, con el objetivo que puedan obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, siempre que se garanticen los principios de no discriminación y no segregación y favorezcan la inclusión educativa, a sí como la atención específica a los alumnos con el objetivo de proporcionarles una orientación específica y más adecuada a su futuro profesional y académico.

5. En la educación secundaria obligatoria, se garantizará un sistema global de orientación educativa, psicopedagógica, profesional y académica que permita a los

alumnos mejorar en el proceso de aprendizaje y conocer las características del sistema formativo y productivo con objeto de elegir las opciones formativas adecuadas a sus aptitudes y preferencias.

Artículo 15. Evaluación y promoción en la educación secundaria obligatoria

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos de la educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora, en el marco regulado por la normativa básica, con medidas de mejora progresivas, para llegar a una evaluación del proceso de aprendizaje final de carácter global.

2. Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo la evaluación se ajustará a lo establecido en sus adaptaciones curriculares.

3. En la evaluación final, el equipo docente decidirá sobre la promoción de curso o la titulación teniendo en cuenta la valoración del progreso global de cada alumno en función de la adquisición de las competencias, la consecución de los objetivos de la etapa y las expectativas de éxito para afrontar un nivel académico superior o una nueva etapa.

4. La permanencia de los alumnos en el mismo curso se considera una medida de carácter excepcional e irá acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas anteriormente.

5. En el caso de alumnos que pasen al curso siguiente sin haber superado todas las materias o ámbitos, los profesores de estas materias o ámbitos establecerán los programas de refuerzo correspondientes.

CAPÍTULO IV EL BACHILLERATO

Artículo 16. Estructura del bachillerato

1. La etapa del bachillerato comprende dos cursos, que se cursan ordinariamente entre los dieciséis y los dieciocho años de edad, con los contenidos organizados por materias.

2. Hay varias modalidades de bachillerato: bachillerato de Ciencias y Tecnología, bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, bachillerato de Artes y bachillerato General.

Artículo 17. Objetivos y características del bachillerato

1. El bachillerato tiene por finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, además de capacitarlos para acceder a la educación superior o a la vida profesional.

2. Los objetivos, la organización y los principios pedagógicos del bachillerato y la evaluación de los alumnos de esta etapa se establecerán de conformidad con la normativa básica del Estado y de esta ley.

3. El currículum y las actividades educativas del bachillerato favorecerán el desarrollo de la competencia comunicativa; la adquisición de habilidades para el autoaprendizaje, para el trabajo en equipo y para la aplicación de los métodos de

investigación apropiados; el desarrollo del espíritu crítico y la adquisición de las competencias necesarias en relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación; así como el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y el dominio de las habilidades y los conocimientos básicos de la modalidad elegida.

4. En esta etapa, se atenderá a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ajustando, cuando sea necesario, las metodologías de aprendizaje. Los materiales curriculares que se utilicen serán inclusivos.

Artículo 18. Evaluación del bachillerato

1. La evaluación de los alumnos de bachillerato será continua y la calificación será diferenciada según las materias del currículum.

2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso de bachillerato cuando hayan superado todas las materias cursadas o hayan obtenido evaluación negativa en dos materias como máximo.

3. El equipo docente propondrá para la obtención del título de bachiller al alumnado que haya superado todas las materias de la etapa.

4. También, excepcionalmente, se podrán proponer para la obtención del título de bachiller los alumnos que al finalizar la etapa tengan una sola asignatura con evaluación negativa en la convocatoria extraordinaria, siempre que no se haya dado una inasistencia continuada e injustificada del alumno durante el curso o cualquier otra circunstancia que suponga un abandono voluntario de la participación y el seguimiento en las sesiones de clase y de las actividades propuestas, y siempre que se haya presentado a la convocatoria extraordinaria y la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a 5.²

5. Se establecerán medidas adecuadas para adaptar las evaluaciones a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Artículo 19. Oferta formativa del bachillerato

La consejería programará una oferta formativa, tanto en la modalidad de educación no presencial como en la modalidad de educación presencial o semipresencial, que permita al alumnado la conciliación de los estudios con la actividad laboral.

CAPÍTULO V LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo 20. Objeto y ámbito de la formación profesional

1. La formación profesional se constituye como sistema integrado que abarca el conjunto de acciones formativas y de enseñanza y aprendizaje que capacitan para el desarrollo cualificado de las diversas profesiones, el acceso a la ocupación y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluirá las enseñanzas propias de la formación profesional inicial y las de la formación profesional para el empleo. Estas últimas también incluirán las enseñanzas orientadas a la formación permanente en las empresas, que permitan la adquisición y la actualización continua de las competencias profesionales.

² Apartado modificado por el Decreto Ley 4/2022, de 31 de marzo, mencionado en la nota 1.

2. El Gobierno de las Illes Balears promoverá la coordinación de las actuaciones en materia de formación profesional inicial y de formación profesional para el empleo, con objeto de ampliar y mejorar la oferta de acciones formativas y hacer un uso eficiente de los recursos públicos y privados.

3. El Gobierno de las Illes Balears garantizará la flexibilidad y la especialización de su oferta formativa con el objetivo de incentivar la innovación y la empleabilidad.

4. El Gobierno de las Illes Balears, en el marco de la normativa básica, adaptará los currículums de las enseñanzas de la formación profesional a las necesidades del tejido productivo de las Illes Balears.

Artículo 21. Finalidades del sistema integrado de formación profesional

Las finalidades del sistema integrado de formación profesional son las siguientes:

- a) Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de forma que se puedan satisfacer tanto las expectativas personales de promoción profesional como las necesidades de cualificación del sistema productivo.
- b) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
- c) Fomentar el conocimiento de la legislación laboral y los derechos y las obligaciones en el marco de las relaciones laborales, así como las características y la organización del sector productivo y los mecanismos de la inserción profesional.
- d) Evaluar y acreditar oficialmente la competencia profesional, siempre con referencia a los instrumentos de concreción que establece la normativa básica, con independencia de la forma en la cual se ha producido el aprendizaje.
- e) Actuar como un nexo entre las empresas y el sistema educativo y formativo para incorporar en las diferentes enseñanzas los avances tecnológicos y de productos del tejido productivo, así como las nuevas competencias técnicas requeridas por las empresas.
- f) Formar profesionales con capacidad de análisis de las situaciones sociales y económicas, con espíritu crítico y creativo que fomente la competencia de dar respuestas a la complejidad de su ámbito profesional.
- g) Potenciar el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la cooperación y la formación en prevención y resolución de conflictos de forma pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia machista.
- h) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como con las personas con diversidad funcional para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y ejercerlas.
- i) Desarrollar una identidad profesional motivadora para futuros aprendizajes y potenciar las actitudes adecuadas de la iniciativa personal y el emprendimiento ético, social y solidario.
- j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales y favorecer la formación de profesionales con actitudes proactivas para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Artículo 22. Formación profesional inicial

1. La formación profesional inicial forma parte del sistema educativo y tiene por finalidades preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional, facilitar

que se adapten a las modificaciones laborales que se pueden producir a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y permitir que progresen dentro del sistema educativo y dentro del sistema de la formación profesional para el empleo.

2. La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de ciclos formativos y de cursos de especialización con una organización modular integrada por módulos profesionales constituidos como unidades de formación, de una duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.

3. Los ciclos formativos pueden ser de formación profesional de grado básico, de grado medio o de grado superior. Tanto los ciclos formativos como los cursos de especialización se referirán a los instrumentos de concreción que establece la normativa básica.

4. Los ciclos formativos de grado básico contribuirán a la adquisición de las competencias de la educación secundaria obligatoria.

5. Corresponde a la consejería, en colaboración con los agentes educativos, económicos y sociales, adecuar los currículums de los títulos a las peculiaridades del sistema productivo y a las necesidades sociales y económicas de las Illes Balears.

6. Los currículums propios que se establezcan incluirán, además de los módulos asociados a competencias profesionales y un módulo de formación en centros de trabajo, formación relativa a la prevención de riesgos laborales y a las tecnologías de la información y la comunicación; el refuerzo del conocimiento de las dos lenguas oficiales y, al menos, de una lengua extranjera; el fomento de la iniciativa emprendedora y valores hacia una economía sostenible; y el respeto al entorno y a la dignidad de los trabajadores, así como la formación que se prevea en el marco de las directrices marcadas por la Unión Europea.

Artículo 23. Formación profesional para el empleo

1. La formación profesional para el empleo forma parte del sistema nacional de formación profesional y tiene por finalidad preparar a los alumnos para las competencias profesionales, tanto de tipo inicial, como de mejora y actualización de los requerimientos y las competencias demandadas por el tejido productivo. Así, la formación profesional para el empleo se establece como un proceso a lo largo de la vida del trabajador que también puede actuar como un instrumento de segunda oportunidad para el regreso de las personas al sistema educativo.

2. Los certificados de profesionalidad se referirán a los instrumentos de concreción que establece la normativa básica.

Artículo 24. Oferta de formación profesional

1. El Gobierno de las Illes Balears establecerá las medidas oportunas para adecuar la oferta de formación profesional de cada una de las islas a las necesidades del tejido productivo de cada una de las Illes Balears, en colaboración con los agentes educativos, económicos y sociales y los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Con esta finalidad se podrán suscribir los convenios de colaboración necesarios para garantizar una oferta amplia y de calidad. Asimismo se podrá concertar con los centros privados.

2. Las enseñanzas de formación profesional se podrán cursar en régimen presencial, semipresencial y a distancia. En todos los casos se podrán ofrecer en la modalidad dual en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

3. Los poderes públicos promoverán la formación profesional dual como un conjunto de acciones e iniciativas formativas mixtas, de trabajo y formación, que tendrán por objeto la cualificación profesional en un régimen de alternancia entre la actividad laboral en una empresa y una actividad formativa recibida en el marco del sistema integral de formación profesional.

4. La oferta formativa de la formación profesional dual se extenderá a lo largo de la duración del ciclo formativo y de la correspondiente a la formación profesional en el ámbito laboral y se formalizará mediante la suscripción de un contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje de acuerdo con la legislación laboral vigente que sea aplicable.

5. El Gobierno de las Illes Balears promoverá la suscripción de convenios de colaboración con entidades, sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, empresas cooperativas y empresas de economía social para promocionar la formación profesional dual, mejorar la formación en los centros de trabajo y establecer modelos de implantación flexibles y adaptados a las peculiaridades del tejido productivo de las Illes Balears.

6. A los efectos de acceder a los ciclos formativos de formación profesional, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan estas enseñanzas se constituirán en una zona escolar única.

7. Se garantizará una oferta equitativa y suficiente de formación profesional en todas las islas de la comunidad autónoma.

8. Se promoverá progresivamente la implantación de la modalidad dual en las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional.

Artículo 25. Flexibilización de la formación profesional

1. Las enseñanzas de formación profesional se organizarán de forma que permitan la conciliación del aprendizaje de las personas con la actividad laboral y otras responsabilidades, mediante itinerarios formativos y modalidades horarias adaptados a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje.

2. La administración educativa prestará una atención adecuada en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con capacidades diversas. Asimismo, se adoptarán medidas para hacer efectivo el principio de inclusión y garantizar la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con una atención especial a la igualdad entre hombres y mujeres.

3. A los efectos de facilitar la continuidad de la formación y la inclusión laboral del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la consejería establecerá y autorizará otras ofertas formativas de formación profesional en forma de programas de cualificación inicial que incluyan módulos profesionales de un título profesional básico y otros módulos de formación general extraídos del currículum de la enseñanza secundaria para personas adultas.

4. Para favorecer la incorporación de las personas a las diferentes ofertas formativas, la consejería convocará y organizará periódicamente las pruebas de acceso a la formación profesional de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa

básica. También determinará, de acuerdo con los criterios básicos establecidos por el Gobierno del Estado, las exenciones aplicables y los cursos destinados a la preparación de las pruebas.

5. La consejería convocará periódicamente pruebas libres para la obtención de títulos de técnico y de técnico superior siguiendo los criterios que se determinen.

Artículo 26. Instalaciones y equipamientos docentes

1. Las enseñanzas de formación profesional que regula esta ley se pueden impartir en los centros educativos de secundaria, en los centros de educación de personas adultas autorizados, en los centros integrados de formación profesional, en los centros de referencia nacional y en todos los centros autorizados que se ajusten a la normativa aplicable.

2. Los centros integrados de formación profesional son los que cumplen los requisitos establecidos por la normativa básica del Estado e imparten el conjunto de las ofertas formativas del sistema de formación profesional referidas a los instrumentos de concreción que establece la normativa básica y otras especialidades formativas autorizadas.

3. Las consejerías competentes en materia de educación y de empleo, en colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales, planificarán, regularán y coordinarán la red de centros integrados de formación profesional para avanzar hacia un sistema de centros especializados sectorialmente y con cobertura de todo el territorio.

4. El Gobierno de las Illes Balears y la Administración General del Estado, en el ámbito de las respectivas competencias, colaborarán en la implantación de centros de referencia nacional, especializados en diferentes sectores productivos, para el desarrollo de la innovación y la experimentación en materia de formación profesional. Estos centros pueden incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, formadores, trabajadores ocupados y parados, así como a empresas y sindicatos.

5. El Gobierno de las Illes Balears establecerá reglamentariamente el procedimiento de designación de la dirección de los centros integrados de formación profesional y el de los centros de referencia nacional entre los funcionarios públicos, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad.

6. La Consejería dotará a los centros públicos que imparten formación profesional de las infraestructuras y el equipamiento necesarios para el desarrollo adecuado del currículum, sin perjuicio de los convenios que se puedan suscribir con otras administraciones y con entidades públicas o privadas, empresas y personas físicas o jurídicas para el uso compartido de instalaciones y equipamientos.

Artículo 27. Orientación académica y profesional

1. Las consejerías competentes en materia de educación y de empleo garantizarán una información y una orientación académica y profesional sobre el sistema integrado de formación profesional que sea accesible a toda la ciudadanía y, en especial, al alumnado y a sus familias, a los centros educativos, a las otras administraciones, a los sindicatos y a las entidades y empresas.

2. A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se establecerá una red de puntos de orientación académica y profesional con el fin de asesorar sobre las posibilidades que ofrece el sistema integrado de formación profesional y llevar a cabo

proyectos relacionados con la formación, la difusión y la promoción de la formación profesional que complemente la orientación que se ofrece desde los centros educativos y la red del Servicio de Empleo de las Illes Balears.

3. La administración educativa, en colaboración con otras administraciones y con los agentes sociales y empresariales, llevará a cabo programas de promoción y difusión de la formación profesional y adoptará medidas para incentivar la organización de eventos en los centros educativos para informar y orientar al alumnado sobre estas enseñanzas.

Artículo 28. Calidad de la formación profesional

Con el fin de mejorar la calidad de la formación profesional, el Gobierno de las Illes Balears promoverá las actuaciones siguientes:

- a) Facilitar la participación en proyectos y competiciones de competencias profesionales y adoptar medidas para que los departamentos de formación profesional desarrollen proyectos de innovación aplicada que contribuyan a la generación de conocimiento y a la mejora de la economía balear.
- b) Convocar premios extraordinarios para fomentar la excelencia.
- c) Colaborar con la Universidad de las Illes Balears con objeto de establecer convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de formación profesional de grado superior y desarrollar proyectos de innovación conjuntos, así como fomentar la colaboración de los centros de formación profesional con las empresas para desarrollar proyectos estratégicos comunes.
- d) Fomentar el mantenimiento o, si procede, la implantación de sistemas de gestión de calidad y de mejora continua en los centros que imparten formación profesional con la posibilidad de conseguir o mantener una certificación externa encaminada al reconocimiento en el mundo productivo.
- e) Incentivar los cambios metodológicos necesarios vinculados al trabajo por retos.
- f) Velar por la dotación suficiente de infraestructuras, recursos y equipamientos y su actualización para garantizar la calidad de las actividades formativas en todas las islas.
- g) Impulsar la participación de los centros educativos en programas de internacionalización de la formación profesional, en el programa «Erasmus» y en programas similares o en actividades de formación especializada de ámbito internacional, para favorecer tanto la movilidad del alumnado para llevar a cabo las prácticas en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea, como la del profesorado y la cooperación de los centros para conocer prácticas innovadoras dentro del ámbito pedagógico, tecnológico o de gestión.

Artículo 29. Reconocimiento de las competencias profesionales

1. Corresponde al Instituto de Cualificaciones Profesionales de las Illes Balears (IQPIB) regular el procedimiento para evaluar, reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral u otras vías no formales e informales de formación.

2. Este procedimiento tendrá como referente la tipología de las ofertas y los grados de formación que establece la normativa básica y se desarrollará siguiendo criterios que garanticen la fiabilidad, la objetividad y el rigor técnico de la evaluación.

CAPÍTULO VI LA EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS

Artículo 30. Finalidades y ámbitos de la educación de personas adultas

1. La educación de personas adultas tiene por finalidad hacer efectivo, en los términos que determina la ley específica que la regula, el derecho a la educación en cualquier etapa de la vida.

2. La educación permanente de personas adultas se rige por esta ley y por la Ley 4/2006, de 30 de marzo, de educación y formación permanentes de personas adultas de las Illes Balears.

3. Los programas de educación de personas adultas, en el marco de las acciones formativas de segunda oportunidad, pueden incluir el ámbito de la enseñanza formal, que conduce a titulaciones oficiales no universitarias, y el ámbito de la enseñanza no formal, orientado a la preparación de pruebas libres y de acceso a los diferentes itinerarios del sistema; acciones formativas dirigidas a facilitar la inclusión en el entorno social de personas recién llegadas; así como, en las condiciones que se establezcan, a la realización de cursos de lenguas que tengan un reconocimiento oficial u otras actividades formativas y de formación profesional referidas a los instrumentos de concreción que establece la normativa básica.

4. En la educación permanente de personas adultas se atenderá a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a través de adaptaciones curriculares, metodológicas o de evaluación.

5. Se establecerá reglamentariamente la ordenación de la educación secundaria de personas adultas y las condiciones y características de la oferta formativa dirigida a personas adultas.

Artículo 31. Acceso a la educación permanente de personas adultas

1. Podrán acceder a la educación permanente de personas adultas las personas de más de dieciocho años o las que cumplan esta edad dentro del año natural en que inician la formación.

2. Excepcionalmente, podrán cursar estos estudios las personas de más de dieciséis años que estén en uno de los supuestos siguientes:

- a) Disponer de un contrato laboral con un horario de trabajo que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o estar dadas de alta en la seguridad social como trabajadores por cuenta propia.
- b) Ser deportistas de alto rendimiento o de alto nivel.
- c) Cumplir medidas de justicia juvenil impuestas por los juzgados de menores en el marco de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
- d) Encontrarse en una situación personal extraordinaria por enfermedad o diversidad funcional o en cualquier otra situación de carácter excepcional que les impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario.

3. La consejería establecerá las medidas oportunas para prestar una atención adecuada a las personas adultas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.

4. La población reclusa tendrá garantizado, en los centros penitenciarios, el acceso a estas enseñanzas.

Artículo 32. Centros de educación permanente de personas adultas

1. La educación permanente de personas adultas se puede impartir en centros específicos, en centros ordinarios y en unidades educativas de los establecimientos penitenciarios, previamente autorizados, sin perjuicio de crear puntos de apoyo a la formación.

2. La educación permanente de personas adultas se puede ofrecer en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, previa autorización de la consejería de acuerdo con la planificación educativa. En las modalidades semipresencial y a distancia se utilizará una metodología que incluya preferentemente las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 33. Colaboración con los ayuntamientos y los consejos insulares en la educación permanente de personas adultas

1. Los consejos insulares y los ayuntamientos favorecerán la colaboración con los centros de educación de personas adultas.

2. La consejería fomentará la suscripción de convenios con los ayuntamientos y los consejos insulares para la contribución conjunta en la educación permanente de personas adultas y para la optimización de los recursos públicos.

CAPÍTULO VII**LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL****Artículo 34. Características de las enseñanzas de régimen especial**

Las enseñanzas de régimen especial hacen referencia a las enseñanzas de idiomas, a las enseñanzas artísticas y a las enseñanzas deportivas.

Artículo 35. Enseñanzas de idiomas

1. Las enseñanzas de idiomas tienen por finalidad capacitar a los alumnos para el uso adecuado de diferentes idiomas, al margen de las etapas ordinarias del sistema educativo.

2. Las enseñanzas regladas de idiomas conducen a la obtención de certificados homologados, se organizan en los niveles que se determinan en el ordenamiento de acuerdo con el Marco común europeo de referencia para las lenguas y se ofrecen en las modalidades de educación presencial, de educación semipresencial y de educación no presencial.

3. Las enseñanzas regladas de idiomas se imparten, en la modalidad de enseñanzas presenciales, en las escuelas oficiales de idiomas. Se promoverá que los alumnos que cursan educación secundaria puedan recibir la tutorización y la preparación para las pruebas de los diferentes niveles de las enseñanzas regladas de idiomas y puedan realizarlas.

4. Corresponde a la administración educativa determinar los currículos de los diferentes niveles básicos de las enseñanzas regladas de idiomas y los requisitos que deben cumplir las escuelas oficiales de idiomas.

5. Corresponde a la administración educativa fomentar la enseñanza pública de idiomas mediante las escuelas oficiales de idiomas.

Artículo 36. Enseñanzas artísticas

1. Las enseñanzas artísticas tienen por finalidad facilitar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, las artes plásticas, el diseño, el arte dramático y la conservación y la restauración de bienes culturales.

2. Las enseñanzas artísticas comprenden:

- a) La música y la danza.
- b) Las artes plásticas y el diseño.
- c) El arte dramático.
- d) La conservación y la restauración de bienes culturales.

3. Las enseñanzas artísticas se clasifican en:

- a) Enseñanzas elementales de música y danza.
- b) Enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y de danza, así como los grados medio y superior de artes plásticas y diseño.
- c) Enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas.

4. Las enseñanzas artísticas se imparten en escuelas de arte, conservatorios, centros especializados y otros centros públicos o privados autorizados. En las condiciones que se establezcan las enseñanzas artísticas de grado elemental se podrán impartir integradas con las enseñanzas de régimen general en centros públicos, privados y privados concertados, que tendrán la consideración de centros de currículum singular o especialización curricular. La administración educativa podrá adoptar medidas de organización y de ordenación académica para posibilitar la compatibilidad de las enseñanzas artísticas profesionales y la educación secundaria.

5. La administración educativa garantizará las infraestructuras y los equipamientos necesarios para estas enseñanzas, así como las medidas para hacer efectivo el principio de inclusión y accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades en el acceso.

6. La consejería competente en materia de educación garantizará una financiación estable de las escuelas de música o danza reconocidas, de acuerdo con los parámetros que se determinen reglamentariamente.

7. La administración educativa garantizará una información y una orientación académica y profesional sobre el sistema de enseñanzas artísticas que sea accesible a toda la ciudadanía y, en especial, al alumnado y a sus familias y en los centros educativos.

8. Las administraciones públicas, junto con los agentes sociales y empresariales interesados, llevarán a cabo programas de promoción y difusión de las enseñanzas artísticas y adoptarán medidas para incentivar la organización de acontecimientos en los centros educativos para informar y orientar al alumnado sobre estas enseñanzas.

Artículo 37. Enseñanzas deportivas

1. Las enseñanzas deportivas tienen como objetivo capacitar a los alumnos para desarrollar una actividad profesional en el campo de la actividad física y el deporte: iniciación deportiva, tecnificación deportiva y conducción de la actividad o la práctica deportiva en toda su extensión; así como entrenar y dirigir equipos y deportistas de alto rendimiento, y facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y su incorporación a la ciudadanía activa.

2. Las enseñanzas deportivas se organizan a partir de las diferentes modalidades y especialidades deportivas y se estructuran en grado medio y grado superior.

3. Los alumnos que superen las enseñanzas deportivas de grado medio recibirán el título de técnico deportivo. Los alumnos que superen las enseñanzas de grado superior recibirán el título de técnico deportivo superior.

4. La administración educativa desarrollará los currículums de las diferentes modalidades y especialidades de las enseñanzas deportivas, la oferta formativa y las pruebas de acceso correspondientes, en el marco de la normativa básica, con la participación de las administraciones competentes en materia de deportes y la colaboración de las entidades deportivas, garantizando que el currículum contemplará la educación en valores y un proceso formativo de carácter integral de los deportistas.

CAPÍTULO VIII LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Artículo 38. Características y objetivos de las enseñanzas artísticas superiores

1. Las enseñanzas artísticas superiores tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.

2. Dentro de las enseñanzas artísticas superiores se incluyen las enseñanzas superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, las enseñanzas superiores de diseño y las enseñanzas superiores de artes plásticas, en las que se incluyen las enseñanzas superiores de cerámica y de vidrio.

3. Las enseñanzas superiores de música y de danza se cursarán en los conservatorios o escuelas superiores de música y danza y las de arte dramático en las escuelas superiores de arte dramático; las de conservación y restauración de bienes culturales, en las escuelas superiores de conservación y restauración de bienes culturales; las enseñanzas superiores de artes plásticas, en las escuelas superiores de la especialidad correspondiente; y las enseñanzas superiores de diseño, en las escuelas superiores de diseño.

Artículo 39. Estructura de las enseñanzas artísticas superiores

1. La estructura de las enseñanzas artísticas superiores seguirá los aspectos básicos de la ordenación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de grado en enseñanzas artísticas y del título de máster en enseñanzas artísticas, dentro del marco del espacio europeo de educación superior.

2. La administración educativa determinará reglamentariamente, en el marco de la normativa básica, la estructura de las enseñanzas artísticas superiores y la organización de los centros que las imparten.

3. La consejería fomentará el establecimiento de convenios con la Universidad de las Illes Balears para la organización de estudios de doctorado, másteres oficiales y títulos propios de las enseñanzas artísticas.

TÍTULO II
LA COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CAPÍTULO I
LA COLABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
AUTONÓMICA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
Y OTRAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

Artículo 40. Objetivos y características de la colaboración

1. La administración educativa y la Universidad de las Illes Balears colaborarán en aquellos aspectos que contribuyan a la mejora del sistema educativo y, especialmente, en los ámbitos siguientes:

- a) Potenciar la coherencia del sistema educativo de las Illes Balears con la Universidad de las Illes Balears, transfiriendo la información entre los diferentes niveles y la enseñanza universitaria.
- b) Difundir, hacer atractiva y cercana a la sociedad la oferta formativa de la Universidad de las Illes Balears.
- c) Coordinar, diseñar y organizar las pruebas de acceso a la universidad de acuerdo con la normativa vigente.
- d) Mejorar la formación inicial y permanente del profesorado de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, de formación profesional y de bachillerato.
- e) Garantizar la competencia lingüística y comunicativa necesaria para ejercer la tarea docente.
- f) Gestionar las prácticas en el sistema educativo del alumnado universitario.
- g) Establecer una red de centros colaboradores en la formación inicial del profesorado.
- h) Incorporar el profesorado de los cuerpos docentes a los departamentos universitarios de acuerdo con la normativa vigente, para la mejora de la calidad educativa.
- i) Colaborar en la realización de trabajos de investigación en innovación y en evaluación educativa, así como elaborar materiales pedagógicos y de apoyo al currículum.
- j) Potenciar la actividad académica en lenguas extranjeras, además de en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
- k) Ofrecer formación para personas mayores.
- l) Colaborar en la mejora de la formación profesional y de las enseñanzas de régimen especial.
- m) Colaborar en la gestión y la promoción del talento mediante el diseño de programas de detección de altas capacidades, elaboración de materiales didácticos, programas adaptados y desarrollo de metodologías de atención individualizada.

2. Para hacer efectiva la colaboración referida en el apartado anterior, se pueden suscribir los correspondientes convenios, en los que se establecerán las condiciones generales que articulen dicha cooperación.

3. La administración educativa puede acordar medidas de colaboración con otras instituciones universitarias que imparten estudios de formación inicial del profesorado referentes a las materias que se contemplan en las letras d), e), f) y g) del apartado 1 de este artículo.

CAPÍTULO II LA COLABORACIÓN Y LA COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Artículo 41. Colaboración con los consejos insulares

La consejería podrá establecer protocolos y mecanismos de colaboración con los consejos insulares correspondientes, de acuerdo con las competencias respectivas.

Artículo 42. Colaboración con los ayuntamientos

1. La consejería establecerá protocolos y procedimientos de colaboración con los ayuntamientos y con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears.

2. Los protocolos de colaboración a que se refiere el punto anterior podrán hacer referencia a las actuaciones siguientes:

- a) La creación, la conservación y la vigilancia de los centros educativos públicos.
- b) La colaboración relacionada con la escolarización en las enseñanzas gratuitas y universales.
- c) La colaboración relacionada con la escolarización en el primer ciclo de educación infantil.
- d) La colaboración relacionada con las escuelas de música de titularidad municipal.
- e) La colaboración relacionada con la educación permanente de personas adultas.
- f) La colaboración relacionada con la prestación de diversos servicios educativos y la realización de actividades o servicios complementarios.
- g) La colaboración en materia de promoción de la participación infantil.
- h) La colaboración para garantizar la seguridad y un entorno protector de la infancia y la adolescencia en los centros escolares.
- i) La colaboración con los centros educativos sostenidos con fondos públicos para el uso y la optimización de los recursos socio-comunitarios de proximidad.
- j) Cualquier otra actuación que tenga como objetivo el impulso del municipio como entidad educadora.

3. Para hacer efectiva la colaboración pertinente se podrán suscribir los convenios correspondientes.

Artículo 43. Articulación de la cooperación

1. Los consejos insulares y los ayuntamientos podrán establecer con el Gobierno de las Illes Balears el régimen que articule la cooperación para llevar a cabo la construcción, la ampliación, la adecuación, la reforma y el equipamiento, si procede, de centros docentes públicos; así como la prestación de servicios complementarios, la prestación del servicio educativo del primer ciclo de educación infantil, o la complementación de programas en materia de educación permanente de personas adultas, enseñanzas de régimen especial o formación profesional u otras actuaciones incluidas en el artículo anterior.

2. La cooperación se materializará, principalmente, a través de la delegación, por parte del Gobierno de las Illes Balears, del ejercicio de sus competencias en las materias señaladas en el apartado anterior.

Artículo 44. Sujetos receptores de la delegación

1. Las delegaciones se realizarán a favor de los consejos insulares y de los municipios, según corresponda, en cuyo territorio se ejecutará la actuación. Sin embargo, esta delegación también se podrá realizar a favor de cualquier entidad que tenga reconocida la naturaleza de local o de mancomunidad de municipios con capacidad para ejercer las competencias delegadas en el correspondiente ámbito territorial.

2. En todo caso, los sujetos receptores de la delegación se ajustarán a lo previsto por la normativa de contratos del sector público.

Artículo 45. Actuaciones susceptibles de delegación

1. Atendiendo a las circunstancias concurrentes, se podrán delegar todos aquellos trámites previos, actuaciones técnicas y actos administrativos relativos a viabilidad de parcelas, direcciones facultativas y asistencias técnicas, redacción de proyectos y su supervisión y aprobación; construcción de nuevos centros públicos; obras de ampliación, reforma, mejora y sustitución; seguimiento de las inversiones y su recepción; equipamientos de los centros educativos; creación y mantenimiento de plazas de primer ciclo de educación infantil; transporte escolar y otros servicios complementarios; y educación permanente de personas adultas, enseñanzas de régimen especial o formación profesional u otras incluidas en el artículo 43 de esta ley.

2. En cualquier caso, es condición necesaria que las actuaciones en materia de infraestructuras educativas estén previamente incluidas en las sucesivas programaciones de obra, así como en el mapa de infraestructuras escolares de la consejería. Sin embargo, podrán autorizarse actuaciones no previstas en aplicación de criterios objetivos vinculados a necesidades de escolarización, eliminación de instalaciones provisionales o a programas específicos.

Artículo 46. Características de la delegación

1. Con carácter general la delegación se formalizará mediante una resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de educación. Excepcionalmente, se podrá formalizar mediante convenio, en función de la complejidad de la actuación a desarrollar y de la situación económica financiera de la entidad local o supramunicipal que esté implicada en su ejecución.

2. La delegación determinará el alcance, el contenido, las condiciones, la duración y el control de eficiencia que se reserva la consejería e irá acompañada de la correspondiente memoria económica.

3. La consejería podrá solicitar la asistencia de los consejos insulares para la coordinación y el seguimiento de las delegaciones a los ayuntamientos o a las entidades locales supramunicipales.

4. También podrá solicitar, en cualquier momento, información sobre la gestión de la competencia delegada así como enviar al personal comisionado y formular los requerimientos pertinentes para la enmienda de deficiencias observables.

5. La delegación exige, en todo caso, la previa aceptación del consejo insular o de la entidad local interesada, según corresponda, y se ajustará a lo previsto en la normativa básica de la materia objeto de delegación.

Artículo 47. Régimen económico de la delegación

1. Los diferentes proyectos de ley de presupuestos reflejarán la dotación presupuestaria suficiente para atender los compromisos económicos derivados de las delegaciones reguladas en esta ley.

2. La financiación de la delegación se ajustará al ritmo de ejecución de las actuaciones delegadas. Sin embargo, cuando la delegación se refiera a la realización de obras, puede acordarse que el pago del precio se realice de manera total y de una sola vez a su finalización o mediante cualquier otro mecanismo conforme a derecho que, mediante convenio, acuerden las partes.

3. De manera excepcional, puede acordarse que la entidad insular o local anticipe la financiación. En este caso, esta delegación se establecerá por convenio.

4. Con el fin de mejorar y mantener el estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia de los centros públicos, los ayuntamientos y los consejos insulares pueden contribuir a la financiación, la gestión y la ejecución de mejoras en las instalaciones, las edificaciones y los equipamientos de los centros públicos, en cooperación con la administración autonómica.

Artículo 48. Cooperación con otras administraciones autonómicas

1. La consejería podrá establecer convenios de colaboración y de cooperación educativa, de acuerdo con la normativa vigente y sus competencias, con las otras comunidades autónomas.

2. La consejería podrá promover, de acuerdo con sus competencias, la suscripción de convenios de colaboración y cooperación con las comunidades y los territorios que tienen vínculos lingüísticos y culturales con las Illes Balears, en materia de enseñanza de la lengua y sobre otras cuestiones educativas de interés común.

TÍTULO III

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CAPÍTULO I

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 49. Miembros de la comunidad educativa

1. La comunidad educativa está integrada por todas las personas e instituciones que intervienen en el proceso educativo.

2. Forman parte de la comunidad educativa el alumnado, las familias, el profesorado, los diversos profesionales educativos, el personal de administración y servicios, y el voluntariado educativo.

3. También forman parte de la comunidad educativa la administración educativa, las asociaciones de alumnos, los sindicatos, las asociaciones de familias de alumnos, las patronales de educación, las organizaciones de titulares de centros y de las cooperativas de enseñanza, los colegios profesionales, las asociaciones de docentes,

los ayuntamientos y los consejos insulares y todo el personal y las entidades que colaboran en el proceso educativo.

4. Todos los miembros de la comunidad educativa coordinarán sus actuaciones de manera integrada con objeto de garantizar la calidad y la equidad, el respeto a los derechos de todos y la adecuada convivencia en los centros.

5. La administración educativa y los centros adoptarán medidas para que el conjunto de la comunidad educativa disponga de vías de participación activa, acceso a la información y mecanismos que faciliten la representación y fomenten su formación en estos ámbitos.

6. Asimismo, todos los miembros de la comunidad educativa tienen los derechos y deberes reconocidos en las normas básicas del Estado y en la presente ley.

Artículo 50. Garantía del ejercicio de los derechos y deberes del alumnado

1. El alumnado tiene derecho a una educación que favorezca el pleno desarrollo personal, profesional, intelectual, social y emocional para disfrutar de una vida saludable, en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales.

2. El Gobierno de las Illes Balears garantizará el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, adoptando las medidas necesarias para compensar las desventajas económicas, sociales, culturales, lingüísticas o personales de partida que presente el alumnado.

3. Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes. Ejercerlos y cumplirlos se adecuará, cuando sea procedente, a su edad y a las características de las enseñanzas que esté cursando. Los centros educativos dispondrán todo lo necesario para orientar la formación del alumnado en el conocimiento y el correcto ejercicio de sus derechos y deberes.

4. El Gobierno de las Illes Balears garantizará el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, adoptando las medidas necesarias para compensar cualquier discriminación o falta de equidad derivadas de la diversidad del alumnado, ya sea funcional, emocional, de género o de cualquier otro tipo.

Artículo 51. Derechos del alumnado

1. Son derechos y libertades del alumnado en el ámbito educativo los siguientes:

- a) El acceso a la educación en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.
- b) La evaluación objetiva de su rendimiento escolar, esfuerzo y progreso, y el derecho a ser informado de los criterios y procedimientos de evaluación.
- c) La formación integral que respete sus capacidades y necesidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación para el aprendizaje y la responsabilidad individual.
- d) La participación efectiva en el funcionamiento y en la vida del centro.
- e) La accesibilidad universal a los centros, a los materiales de estudio y a sus recursos con independencia de sus características y eventual diversidad funcional.
- f) La utilización de la lengua de signos, así como el código de lectoescritura Braille u otros medios de apoyo para dificultades de aprendizaje en la enseñanza, cuando así lo requiera por sus circunstancias personales.

- g) La orientación escolar y profesional, teniendo en consideración su personalidad y sus objetivos particulares.
- h) El acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y la utilización segura de Internet en los centros docentes.
- i) El respeto a su identidad, integridad y dignidad personales.
- j) La libertad de expresión y de asociación, así como de reunión, el respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales.
- k) La educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
- l) Cualquiera otros previstos en las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

2. La administración educativa y los centros educativos garantizarán los derechos recogidos en la Convención sobre los derechos del niño y en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobadas por las Naciones Unidas, y en los demás instrumentos de legalidad internacional vigentes en España, y la aplicación de los principios de interés superior del menor, de participación y de no discriminación previstos.

Artículo 52. Deberes del alumnado

En el proceso educativo, el alumnado tiene los deberes siguientes:

- a) Comprometerse responsablemente en el aprendizaje y estudiar para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades personales.
- b) Respetar al profesorado y sus derechos, así como cumplir sus directrices y orientaciones.
- c) Respetar el proyecto educativo y, si procede, el carácter propio del centro docente.
- d) Respetar las normas de convivencia y organización del centro docente, colaborando en la mejora de la convivencia y en el ejercicio del derecho de todo el alumnado a la educación.
- e) Asistir puntualmente a clase y al resto de las actividades educativas.
- f) Adoptar una actitud fundamentada en la responsabilidad personal en todos los actos de la vida escolar.
- g) Participar en las actividades educativas prescritas por el centro.
- h) Respetar la dignidad y la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre mujeres y hombres.
- i) Participar responsablemente en la dinámica del centro educativo y trasladar las inquietudes, necesidades y propuestas de mejora a través de los órganos de participación.
- j) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, género, lengua, orientación sexual, religión, opinión, pertenencia a minorías o diversidad funcional, así como por cualquier otra circunstancia personal o social.
- k) Hacer un buen uso de las instalaciones y del material didáctico del centro.
- l) Cualquier otro deber previsto en las leyes y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 53. Tarea de las familias

1. Las familias tienen una tarea esencial en el ámbito escolar, y deben participar en los centros y corresponsabilizarse con el profesorado del proceso educativo de sus hijos.

2. La consejería, junto con las otras administraciones públicas, adoptará medidas que favorezcan la función educativa de las familias, las apoyen y faciliten la conciliación.

Artículo 54. Formación y apoyo a las familias

1. La administración educativa promoverá programas que estimulen la participación y la implicación de las familias y su formación. Asimismo, apoyará económicamente a las confederaciones, federaciones y asociaciones de familias.

2. Los centros educativos favorecerán la asistencia de las familias a las reuniones y tutorías, así como la de sus representantes a las sesiones del consejo escolar y de los otros órganos de representación en que participen.

Artículo 55. Derechos de las familias

1. Las familias y, si procede, los tutores legales, tienen los derechos siguientes:

- a) Que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de calidad y equidad, de acuerdo con los fines y principios establecidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes educativas y los tratados internacionales vigentes en España.
- b) La elección de centro educativo de acuerdo con sus convicciones y preferencias en el marco de la normativa vigente.
- c) Conocer las programaciones didácticas y los criterios de evaluación, así como, si se da el caso, las adaptaciones curriculares que se aplican a sus hijos.
- d) Ser informados del proceso educativo y participar activamente, en colaboración con el profesorado y los centros educativos.
- e) Ser escuchados en las decisiones relativas a la orientación académica y profesional del alumnado.
- f) Recibir información completa relativa al proyecto educativo del centro y su carácter propio y participar en su elaboración a través del consejo escolar, así como referida a los servicios complementarios, a las normas de convivencia y a otros aspectos de carácter general.
- g) Recibir formación que facilite la participación en el proceso educativo de sus hijos.
- h) Participar en la gestión de los centros y en la definición del proyecto educativo y formar parte de los órganos de gobierno y participación de acuerdo con la normativa vigente, así como de las comisiones de trabajo que correspondan.
- i) Cualquier otro previsto en las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

2. La administración educativa establecerá los medios necesarios para que los equipos directivos de los centros y el profesorado se relacionen con las familias y les presten una atención adecuada a través de tutorías, reuniones y otros medios. Asimismo, se potenciará especialmente el intercambio de información por las vías de comunicación electrónica, utilizando como apoyo las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 56. Deberes de las familias

Las familias y, si procede, los tutores legales, tienen los deberes siguientes:

- a) Participar en la educación de sus hijos respetando el proyecto educativo, el carácter propio y las normas del centro.
- b) Colaborar con el profesorado para contribuir al éxito educativo del alumnado.
- c) Contribuir a la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.

- d) Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.
- e) Informar de las dificultades de aprendizaje, de socialización o de integración de sus hijos respecto al entorno educativo.
- f) Cualquier otro previsto en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 57. Promoción de actividades educativas, culturales y deportivas

1. Los centros educativos y las administraciones públicas promoverán la realización de actividades extraescolares de carácter educativo, cultural y deportivo con objeto de facilitar y consolidar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, así como favorecer su enriquecimiento formativo.

2. La administración educativa y los ayuntamientos facilitarán la realización de actividades extraescolares educativas, culturales y deportivas en los centros públicos fuera del horario lectivo.

3. Las administraciones públicas apoyarán económicamente la realización de las mencionadas actividades educativas, culturales y deportivas.

4. En las condiciones que se establezcan, las administraciones públicas facilitarán la apertura de los centros públicos en horario no lectivo para que las entidades culturales, deportivas y del tercer sector del entorno puedan desarrollar actividades en beneficio de la comunidad educativa.

Artículo 58. Personal docente

1. El personal docente es el conjunto de profesionales que ejercen la responsabilidad principal del proceso educativo en los centros y la autoridad que se desprende. Esta responsabilidad incluye la transmisión de conocimientos, habilidades y valores y el acompañamiento educativo del alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, así como la colaboración con la administración educativa en la detección de las dificultades de aprendizaje y la iniciación de los procedimientos para una intervención educativa adecuada.

2. Los miembros de los equipos directivos y el profesorado serán considerados autoridad pública, de acuerdo con la normativa básica. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras en el ámbito educativo, los hechos constatados por el personal docente y los miembros de los equipos directivos de los centros tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo que se pruebe lo contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos.

3. La administración educativa y los titulares de los centros promoverán los instrumentos y las condiciones adecuadas para el perfeccionamiento, la promoción y el desarrollo profesionales del personal docente.

4. El personal docente ocupa la posición preeminente en el ejercicio de sus funciones docentes y disfruta de autonomía, dentro de los límites que determinan la legislación y el proyecto educativo de centro.

Artículo 59. Función docente

1. El profesorado, como elemento clave del sistema para la mejora de la calidad de la educación, ejercerá su función docente con responsabilidad y profesionalidad, y tendrá como objetivo irrenunciable la formación integral y el pleno éxito educativo del alumnado.

2. La consejería apoyará el desarrollo de la función docente a través de medidas de mejora profesional, personal y salarial del profesorado para conseguir un mayor reconocimiento social y prestigiar su tarea. Estas medidas se negociarán con los representantes sindicales de los docentes.

Artículo 60. Funciones del personal docente

Las funciones del personal docente son las siguientes:

- a) Ejercer la docencia y la evaluación de las enseñanzas, facilitar el aprendizaje y promover el desarrollo integral del alumnado.
- b) Aplicar los principios de colaboración, de coordinación y de trabajo en equipo de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
- c) Colaborar en la prevención y la detección temprana de las necesidades educativas de apoyo específico del alumnado y aplicar las adaptaciones curriculares correspondientes, como también colaborar en la prevención del absentismo y el abandono escolar.
- d) Contribuir a la protección de la infancia y a la identificación de situaciones de maltrato o desatención.
- e) Ejercer la tutoría y la orientación del aprendizaje con la colaboración activa de las familias para favorecer la individualización de la enseñanza.
- f) Participar en la orientación académica, psicopedagógica y profesional, en colaboración con los servicios o departamentos competentes.
- g) Atender el desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral de todo el alumnado y contribuir a que las actividades del centro se realicen en un clima de respeto, de tolerancia y de libertad.
- h) Promover el respeto a los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad educativa, así como a la igualdad de oportunidades.
- i) Impulsar la igualdad de género y facilitar un mejor conocimiento de los obstáculos y las discriminaciones que dificultan la plena igualdad entre mujeres y hombres.
- j) Participar en las actividades programadas del centro, dentro y fuera del recinto escolar, y en la coordinación y la dirección de las otras que le sean encomendadas, en el marco de sus funciones y competencias.
- k) Llevar a cabo prácticas de experimentación e innovación educativas, haciendo uso, especialmente, de las tecnologías de la información y la comunicación.
- l) Participar y colaborar en la elaboración de los planes de evaluación que la administración educativa o los mismos centros determinen.
- m) Informar periódicamente a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, y orientarlas para contribuir a mejorarlo.
- n) Contribuir a la mejora de la práctica docente y responsabilizarse de su formación en el ámbito del equipo docente y de su especialidad profesional.
- o) Cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico.

Artículo 61. Otros profesionales educativos

1. Los centros educativos podrán disponer de otros profesionales de diversos ámbitos para el desarrollo de programas, para la atención psicopedagógica y social y para otras actuaciones educativas o la formación complementaria del alumnado.

2. Estos profesionales, de carácter no docente, dispondrán de la debida capacitación en función de la tarea que tengan que desarrollar y trabajarán en coordinación con el profesorado, bajo la supervisión del equipo directivo.

3. Las administraciones públicas, en las condiciones que se determinen, promoverán la incorporación de estos profesionales educativos de carácter no docente en los centros para el desarrollo de las funciones que se establezcan.

4. La administración educativa establecerá, entre otras, las funciones de los auxiliares técnicos educativos y de los educadores sociales que intervienen en los centros públicos, así como los requisitos y los méritos para acceder a estos puestos, previa negociación con los representantes de los trabajadores.

Artículo 62. Personal de administración y servicios de los centros públicos

1. El personal de administración y servicios ejerce sus funciones para la mejor prestación de los servicios educativos y de conformidad con los principios que establece esta ley y de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico que le es de aplicación, bajo las directrices del equipo directivo.

2. El Gobierno de las Illes Balears dotará a los centros educativos de su titularidad del personal de administración y servicios necesario para garantizar el apoyo técnico a la gestión escolar.

3. El personal de administración y servicios de los centros públicos depende orgánicamente de la consejería competente en materia de función pública y funcionalmente de la consejería competente en materia de educación.

4. La administración educativa proporcionará a este personal la protección debida y garantizará el ejercicio de los otros derechos que le atribuye el ordenamiento jurídico. Asimismo, promoverá que se le valore socialmente de manera adecuada.

5. El personal de administración y servicios, como miembro de la comunidad educativa, participará activamente en la vida del centro para la consecución de los objetivos del proyecto educativo. La administración educativa fomentará su participación en los consejos escolares.

6. La administración autonómica establecerá planes de formación encaminados al aprendizaje permanente y a la promoción profesional, que prevean tanto la formación en aspectos educativos como en los relativos al cumplimiento de sus funciones.

Artículo 63. Voluntariado educativo

Se regularán reglamentariamente las diversas figuras del voluntariado educativo, definiendo sus funciones y sus características, en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

CAPÍTULO II

LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 64. Principio y vías de participación

1. La participación de los diversos sectores que configuran la comunidad educativa constituye un principio fundamental del sistema educativo de las Illes Balears, que se basará en la toma de decisiones sectoriales y globales en materia de política escolar, en la realización de negociaciones de las condiciones sociolaborales del personal al servicio educativo y en el diálogo con la comunidad educativa.

2. La participación de la comunidad educativa en el seno de la consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de lo que disponen otras normas reguladoras de la participación, se realizará a través de varias mesas específicas de los diferentes sectores de la comunidad educativa, entre las que se constituirán las siguientes:

- a) La Mesa Sectorial de Educación.
- b) La Mesa de la Enseñanza Privada Concertada.
- c) La Mesa de Diálogo Permanente con los Directores y las Asociaciones de Directores.
- d) La Mesa de Diálogo Permanente con las Familias.
- e) La Mesa de los Docentes.
- f) La Mesa del Alumnado.

3. Reglamentariamente se determinará la composición y las funciones de estas mesas.

4. En cualquier caso, los máximos órganos de participación y consulta de la comunidad educativa son los consejos escolares.

Artículo 65. Participación del alumnado

1. La administración educativa promoverá la participación efectiva del alumnado, directamente o a través de sus representantes y de forma adecuada a su edad, en los consejos escolares de los centros, en las juntas de delegados, en los consejos escolares municipales, en los consejos escolares insulares y en el Consejo Escolar de las Illes Balears.

2. Los centros educativos estimularán la colaboración del alumnado en la mejora de la convivencia y el aprendizaje a través de mecanismos y estructuras adecuadas a su edad y a su desarrollo educativo y personal, y mediante el aprendizaje cooperativo y de ayuda entre iguales.

Artículo 66. La junta de delegados del centro

1. Cada centro constituirá una junta de delegados donde participarán todos los delegados de todas las aulas del centro. La junta de delegados del centro se reunirá al menos una vez cada trimestre durante el curso escolar.

2. La junta de delegados del centro tendrá que ser consultada, al menos, en la programación de actividades complementarias, actividades lúdicas y normas de funcionamiento de los espacios comunes del centro.

3. En el caso de los centros de educación secundaria, además de las atribuciones previstas en el apartado anterior, la junta de delegados será concebida como un espacio de reflexión sobre el modelo de centro, como un espacio de comunicación entre el alumnado y el centro, además de como una herramienta para cohesionar la comunidad educativa.

Artículo 67. Asociaciones de alumnos

1. La administración educativa fomentará la creación y el desarrollo de asociaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones de alumnos.

2. El alumnado de los centros educativos puede asociarse, de acuerdo con su edad y la etapa educativa que curse, en los términos previstos en las normas legales y reglamentarias que regulen estas asociaciones. Asimismo, puede constituir

asociaciones según lo dispuesto por las leyes que regulan el derecho de asociación y la protección jurídica del menor.

3. Las asociaciones de alumnos tienen como finalidad esencial promover la participación de los alumnos en la educación y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4. Los estatutos de las asociaciones de alumnos incluirán, como mínimo, las finalidades siguientes:

- a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en los centros.
- b) Colaborar en la tarea educativa de los centros y en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.
- c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro docente.
- d) Desarrollar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en equipo.

5. La regulación de estas asociaciones se determinará reglamentariamente.

6. Sin perjuicio de su inscripción en el Registro de asociaciones de las Illes Balears, las asociaciones, las federaciones y las confederaciones de alumnos deberán inscribirse en el registro específico que se establezca al efecto.

Artículo 68. Participación de las familias

1. La administración educativa y los centros promoverán el ejercicio real y efectivo del derecho de las familias y, si procede, de los tutores legales, a participar en los centros y en la educación de sus hijos para apoyar su aprendizaje.

2. Las familias tienen el derecho a participar en el proceso educativo a través de sus representantes, en los términos que se determinen, en los consejos escolares de los centros, en los consejos escolares municipales e insulares y en el Consejo Escolar de las Illes Balears.

Artículo 69. Asociaciones de familias de alumnado

1. Las familias y los tutores legales tienen derecho a constituir asociaciones, federaciones y confederaciones y a pertenecer a ellas, de conformidad con la legislación básica del Estado, como instrumentos de participación activa en las actividades de los centros y en la educación de sus hijos.

2. La administración educativa fomentará la creación y el desarrollo de estas asociaciones mediante medidas específicas y establecerá el procedimiento para que participen y estén representadas en las instituciones.

3. En el marco de su autonomía, los centros facilitarán la realización de actuaciones con el alumnado y las familias y sus respectivas asociaciones o federaciones que contribuyan a la mejora de la calidad educativa, del éxito académico y de la convivencia escolar.

4. Las asociaciones de familias de alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que deben incluirse las siguientes:

- a) Asesorar a las familias en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos.
- b) Promover la participación de las familias en la gestión del centro y facilitar que estén representadas y participen en los consejos escolares.

- c) Cooperar en las actividades educativas de los centros, en el marco del proyecto educativo.
 - d) Colaborar en las actividades de formación de las familias.
5. La regulación de estas asociaciones se determinará reglamentariamente.
6. Sin perjuicio de su inscripción en el Registro de asociaciones de las Illes Balears, las asociaciones, las federaciones y las confederaciones de familias del alumnado deberán inscribirse en un registro específico.

CAPÍTULO III LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 70. Mesa Sectorial de Educación

1. La Mesa Sectorial de Educación de las Illes Balears es el órgano constituido en la comunidad autónoma de las Illes Balears para ejercer las funciones y las competencias que se le atribuyen legalmente según la Ley del Estatuto básico del empleado público y sin perjuicio de las especialidades de procedimiento que se le puedan atribuir reglamentariamente.

2. Forman parte de la Mesa Sectorial de Educación representantes de la consejería competente en materia de educación, así como representantes de las organizaciones sindicales que hayan obtenido el 10 % o más de los representantes en las elecciones a las diversas juntas de personal docente no universitario de las diferentes islas.

3. Son competencias de la Mesa Sectorial de Educación la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes y todos los asuntos enumerados en la Ley del Estatuto básico del empleado público, siempre que se refieran o sean aplicables al ámbito de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes. Asimismo, también son competencia de la Mesa todos los asuntos que afecten directa o indirectamente a las condiciones sociolaborales del personal docente y es la única competente en materia de negociación de estas condiciones.

Artículo 71. Órganos de representación del personal docente público

Los órganos de representación del personal docente público no universitario de la comunidad autónoma de las Illes Balears son las juntas de personal docente no universitario de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y Formentera.

Artículo 72. Mesa de la Enseñanza Privada Concertada

1. La Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de las Illes Balears es el órgano autonómico de negociación entre la consejería y las entidades representativas del sector.

2. El ámbito de competencia de la Mesa se circunscribe a la negociación de las cuestiones relacionadas con la ejecución de los conciertos educativos, las mejoras de financiación de los módulos de concierto y la participación en la elaboración de instrumentos de ordenación, reglamentos y normas legales de ámbito autonómico que afecten al sector de la enseñanza privada concertada de las Illes Balears.

3. La Mesa estará formada por los representantes de la consejería competente en materia de educación, de los sindicatos, de las organizaciones patronales y de titulares de centros y de las cooperativas de enseñanza representativas del sector en las Illes Balears. Se elaborará un reglamento de funcionamiento.

4. La consejería apoyará a las organizaciones participantes en la Mesa para el desarrollo de las actividades y funciones de participación y representación institucionales que les son propias.

Artículo 73. Mesa de Diálogo Permanente con los Directores y las Asociaciones de Directores

1. La Mesa de Diálogo Permanente con los Directores y las Asociaciones de Directores se constituirá como un órgano de participación, información y estudio de las cuestiones relacionadas con la mejora de los procesos educativos, el modelo de función directiva y el buen funcionamiento de los centros educativos no universitarios sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Formarán parte de la Mesa, además de representantes de la administración educativa, directores en representación de las asociaciones de directores de la enseñanza pública, así como directores de la enseñanza privada concertada en representación de las entidades patronales más representativas del sector, y de las cooperativas de enseñanza. También podrán formar parte exdirectores de centros educativos no universitarios sostenidos total o parcialmente con fondos públicos como personalidades de reconocido prestigio.

3. Cuando los temas a tratar afecten exclusivamente al sector de la enseñanza pública o al sector de la enseñanza privada concertada, se podrán constituir por separado submesas de diálogo con directores y representantes del sector mencionado.

4. La consejería apoyará a las asociaciones de directores legalmente constituidas para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 74. Mesa de Diálogo Permanente con las Familias del Alumnado

1. La Mesa de Diálogo Permanente con las Familias del Alumnado de las Illes Balears es el órgano colegiado de participación y asesoramiento de las asociaciones de familias de alumnado a través de las federaciones y las confederaciones en las que se encuentren agrupadas.

2. La Mesa de Diálogo Permanente con las Familias del Alumnado es el órgano de participación, de consulta y de asesoramiento de las familias en todas las cuestiones que afecten a la educación de sus hijos.

3. La Mesa de Diálogo Permanente con las Familias del Alumnado estará formada por representantes de la administración educativa, de las federaciones de asociaciones de familias de alumnado y de las confederaciones, y por personalidades de reconocido prestigio en el mundo educativo designadas por consenso de la Mesa.

Artículo 75. Mesa de los Docentes

1. La Mesa de los Docentes es un órgano de participación y asesoramiento del profesorado en lo que afecta a su tarea educativa profesional y a las cuestiones referentes a aspectos pedagógicos, curriculares y didácticos y a los diferentes planes de innovación pedagógica que promueva la consejería para la mejora de la calidad educativa.

2. Podrán participar en esta Mesa de los Docentes, en las condiciones que se establezcan, las asociaciones de docentes y los colegios profesionales que tengan competencias sobre el proceso educativo.

3. La administración educativa, sin perjuicio de la representatividad sindical reconocida por la normativa básica, puede promover acuerdos con los colegios profesionales y las asociaciones de docentes legalmente constituidas y facilitar su participación en relación a actividades de innovación y de formación permanente.

Artículo 76. Mesa del Alumnado

1. La Mesa del Alumnado es el órgano de participación del alumnado de la enseñanza no universitaria en todas las cuestiones que le afecten.

2. Podrán participar en la Mesa del Alumnado, en las condiciones que se establezcan, las asociaciones de alumnos que estén legalmente constituidas y que sean representativas.

Artículo 77. Consejos escolares

1. La participación de la comunidad educativa se articula, también, y de acuerdo con la normativa vigente, a través de los diversos consejos escolares.

2. Los diversos consejos escolares son los siguientes:

- a) Los consejos escolares de centro.
- b) Los consejos escolares municipales.
- c) Los consejos escolares insulares.
- d) El Consejo Escolar de las Illes Balears.

3. La consejería, los consejos insulares respectivos, los ayuntamientos y los mismos centros los regularán en el marco de la normativa vigente y de sus competencias.

4. La composición de los consejos escolares tenderá al equilibrio entre ambos sexos en cumplimiento de la normativa de igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 78. Consejo Escolar de las Illes Balears

1. El Consejo Escolar de las Illes Balears (CEIB) es el organismo superior de participación y de consulta de los diversos sectores de la comunidad educativa en todas las cuestiones que afectan a la política educativa de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. La composición, las funciones y la organización del CEIB se establecerán por ley. En este sentido, el CEIB podrá presentar una propuesta de ley para que se tramite, en su caso, en forma de proyecto o de proposición de ley.

3. El CEIB funcionará en pleno y en comisiones. En todo caso, el CEIB deberá tener una comisión permanente.

4. El presidente del CEIB será propuesto por el mismo CEIB de acuerdo con la normativa aprobada respecto a esta cuestión. En todo caso, el presidente será nombrado por el Gobierno, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de educación.

5. Los miembros del CEIB serán nombrados por el consejero competente en materia de educación a propuesta de las entidades que forman parte del mismo.

6. El CEIB elaborará periódicamente un informe sobre el estado del sistema educativo con carácter descriptivo y explicativo, y con las correspondientes recomendaciones de mejora.

7. El CEIB elaborará una memoria anual de sus actividades, que deberá hacerse pública.

8. El CEIB podrá solicitar, por razón de la cuestión tratada, que comparezcan, con voz y sin voto, representantes de entidades que tengan incidencia en materia educativa.

9. El CEIB podrá solicitar, de acuerdo con sus competencias, la presencia del consejero competente en materia de educación o de miembros de la misma consejería.

Artículo 79. Consejos escolares insulares

1. Los consejos escolares insulares son los órganos de participación y consulta de la comunidad educativa de cada isla en las cuestiones educativas y tienen como objetivo, entre otros, analizar la situación de necesidades educativas de su territorio y hacer las recomendaciones correspondientes para mejorarla.

2. Se constituirán los consejos escolares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera.

3. La composición, la estructura, las competencias y el funcionamiento de los consejos escolares insulares se establecerán reglamentariamente previa consulta a los consejos insulares. Cada consejo insular se hará cargo de la dotación de los recursos necesarios para su funcionamiento.

Artículo 80. Consejos escolares municipales

1. Los consejos escolares municipales son los órganos de participación y consulta de la comunidad educativa de cada municipio en las cuestiones educativas.

2. Cada ayuntamiento podrá constituir un consejo escolar municipal. La administración educativa promoverá la constitución de un consejo escolar municipal en aquellos municipios en los que se deba crear preceptivamente. La comunidad educativa de cada municipio podrá participar e implicarse tanto en su funcionamiento como en sus actividades.

3. Los consejos escolares municipales tendrán la composición, la estructura, las competencias y el funcionamiento que se establezca reglamentariamente.

Artículo 81. Consejos escolares de los centros públicos

1. El consejo escolar del centro es el órgano de participación de la comunidad educativa en el gobierno del centro.

2. El consejo escolar, como máximo órgano de representación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, será el principal órgano decisorio del centro.

3. Corresponde a la consejería, de acuerdo con la normativa vigente, determinar el número y el procedimiento de elección de los miembros del consejo escolar del centro.

4. Corresponden al consejo escolar del centro las funciones siguientes:

- a) Aprobar el proyecto educativo y sus modificaciones por una mayoría de dos tercios de sus miembros.
- b) Aprobar la programación anual del centro y evaluar su desarrollo y los resultados.
- c) Aprobar los acuerdos de colaboración y los convenios con entidades e instituciones, a propuesta de la dirección del centro.
- d) Aprobar las normas de funcionamiento y organización del centro.
- e) Aprobar el presupuesto del centro y la rendición de cuentas.

- f) Participar de acuerdo con la normativa vigente en el cese y en la selección del director.
- g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
- h) Intervenir en el procedimiento de admisión de alumnos.
- i) Ser informado de la resolución de conflictos y de las medidas correctoras educativas a los alumnos y velar para que se ajusten a la normativa vigente.
- j) Aprobar, si procede, la programación de actividades escolares complementarias y de actividades extraescolares, así como evaluar estas actividades.
- k) Participar en las evaluaciones del centro y conocer la evolución del rendimiento escolar.
- l) Proponer medidas que favorezcan la convivencia, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la no discriminación, la prevención de la violencia de género y la resolución pacífica de los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
- m) Establecer medidas que faciliten la participación del conjunto de la comunidad educativa.
- n) Aprobar criterios de colaboración con otros centros educativos.
- o) Evaluar el propio funcionamiento del consejo escolar como órgano de participación y toma de decisiones.
- p) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y de prevención de la violencia de género que se pueda dar en el centro.
- q) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa legal.

5. El consejo escolar actúa normalmente en pleno, pero se podrán constituir comisiones específicas. En los centros públicos es obligatoria la constitución de una comisión económica y una comisión permanente.

6. El órgano de participación de los centros integrados de formación profesional es el consejo social del centro. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente.

Artículo 82. Consejo escolar de los centros privados concertados

1. Todos los centros privados concertados contarán con un consejo escolar con las competencias y la composición que se establecen en la normativa orgánica básica, como órgano en el que se ejerce la participación de docentes, familias y alumnos en la gestión y el control del centro, sin perjuicio que el reglamento de régimen interior prevea otros órganos para la participación de la comunidad educativa.

2. Uno de los representantes de las familias en el consejo escolar será designado por la asociación de familias de alumnado más representativa del centro.

3. En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan aulas especializadas, también formarán parte del consejo escolar un representante del personal de atención educativa complementaria. Asimismo, los centros concertados que imparten formación profesional pueden incorporar a su consejo escolar un representante del mundo de la empresa, designado por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el procedimiento que la administración educativa establezca.

4. El consejo escolar designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y de prevención de la violencia de género, promoviendo los instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de las posibles situaciones de violencia de género que se puedan dar en el centro.

TÍTULO IV
LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

CAPÍTULO I
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

Artículo 83. Ordenación de la función pública docente

1. La función pública docente de la comunidad autónoma de les Illes Balears, que estará informada de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, se ordenará de acuerdo con la normativa básica específica estatal, por lo establecido en la presente ley y por la normativa autonómica específica de desarrollo. En aquellas materias no reguladas por la normativa anterior, será de aplicación la normativa básica estatal de función pública y la normativa de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. El personal docente no universitario al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de les Illes Balears se clasifica en:

- a) Personal funcionario de carrera.
- b) Personal funcionario interino.
- c) Personal laboral.

3. El personal docente funcionario de carrera e interino se registrará por:

- a) Las normas que regulan las bases del régimen estatutario del personal funcionario docente.
- b) Las disposiciones de esta ley y las normas que la desarrollen.
- c) La norma de rango legal reguladora del Estatuto básico del empleado público que le sea aplicable.
- d) La normativa reguladora de la función pública de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en caso de que no haya una normativa específica aplicable.

4. El personal docente de régimen laboral se registrará por la legislación laboral, por lo que establece el convenio colectivo que le sea aplicable y por los preceptos de la normativa mencionada para el personal funcionario que así lo dispongan.

Artículo 84. Puestos de trabajo con funciones específicas

1. La consejería, de forma motivada, podrá establecer requisitos o perfiles específicos para determinados puestos de trabajo docentes.

2. La administración educativa puede adscribir maestros especializados a la educación secundaria obligatoria para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, en los supuestos que se establezcan y en el marco que recoge la

disposición adicional séptima de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, o la norma que la sustituya.

3. Excepcionalmente, la consejería podrá encargar al personal funcionario docente el ejercicio de funciones en una etapa o enseñanzas diferentes de las asignadas a todos los efectos al cuerpo docente a que pertenece, de acuerdo con lo que, a tal efecto, se determine por reglamento y en el marco de la normativa básica del Estado.

4. Excepcionalmente, para determinados módulos de formación profesional, incluidas las enseñanzas artísticas, deportivas y técnicas, la administración educativa podrá incorporar, como profesores especialistas, profesionales no necesariamente titulados que desarrollen su actividad en el ámbito laboral, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo. Esta incorporación se hará de acuerdo con la normativa que sea aplicable.

5. La administración educativa podrá incorporar, de acuerdo con la normativa que se desarrolle, profesorado de otros países, con la misma titulación que la requerida para el personal funcionario, tanto para la enseñanza de idiomas como para impartir otras materias que se desarrollen en una lengua extranjera.

6. También se podrán contratar, excepcionalmente, profesionales de otros países para las enseñanzas artísticas y para las enseñanzas de idiomas como profesorado especialista, en los términos que se prevén en la normativa básica del Estado, sin que necesariamente cumplan el requisito de titulación establecido con carácter general.

7. La administración educativa podrá contratar profesores asociados y visitantes para las enseñanzas artísticas superiores y también incorporar eméritos, en los términos establecidos en la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, o, en su caso, en cuanto a los eméritos, en los términos que se establezcan en el desarrollo del artículo 96.4 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

CAPÍTULO II EL INGRESO Y LA PROVISIÓN

Artículo 85. Ingreso en la función pública docente

1. El ingreso en la función pública docente como funcionario de carrera se llevará a cabo de conformidad con lo que establece la legislación básica del Estado, con lo que establece la presente ley, y con lo que, en su desarrollo, apruebe la administración educativa en el marco de sus competencias.

2. En cualquier caso, se deberá acreditar el conocimiento de la lengua catalana en los términos que se establezcan reglamentariamente.

3. La administración educativa, en el marco de sus competencias, promoverá que la fase de prácticas para el acceso a la función pública docente permita a los nuevos docentes adaptarse al contexto de su trabajo y asegure la adquisición de las competencias docentes exigibles.

4. Asimismo, se garantizará que el personal docente que ostente la tutoría de los candidatos a funcionarios de carrera en la fase de prácticas cumpla los requisitos que se establezcan de formación y experiencia, y disponga de las condiciones adecuadas en la distribución de su carga horaria que le permitan ejercer con eficacia las funciones de asesoramiento y evaluación que le son propias.

Artículo 86. Personal funcionario interino

1. La selección del personal funcionario interino docente se hará por medio de convocatorias públicas bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos y los procedimientos de acceso, la duración del nombramiento, el periodo de prácticas tuteladas y los criterios de ordenación en la bolsa de trabajo. En la oferta de plazas se incluirá, en su caso, la información de las plazas con perfil específico vinculado al proyecto educativo de centro.

Artículo 87. Provisión de puestos de trabajo docente mediante concurso

1. Los puestos de trabajo docentes en los centros públicos, las zonas y los servicios educativos se proveerán por profesorado funcionario de carrera mediante concursos de traslados ordinarios o específicos. En cualquier caso, los concursos de provisión se harán por medio de convocatorias públicas bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y pueden ser generales y específicos.

2. Los concursos generales son el procedimiento ordinario de provisión de plazas o puestos de trabajo docentes vacantes.

Artículo 88. Provisión de puestos de trabajo mediante comisión de servicios

1. La consejería, de manera motivada y por necesidades del servicio o funcionales, puede trasladar, en comisión de servicios, a los funcionarios de carrera docentes a puestos de trabajo a otros centros o servicios educativos diferentes del centro donde obtuvieron plaza por concurso, dando prioridad a la voluntariedad de los traslados si implican cambio de residencia.

2. La consejería podrá hacer convocatorias para ocupar puestos en comisión de servicios entre los funcionarios de carrera. Las convocatorias, que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, determinarán, al menos, los requisitos, las circunstancias, los méritos y las condiciones para solicitarlas y establecerán las prioridades para otorgarlas.

3. La adjudicación de una comisión de servicios o de una atribución temporal de funciones supone la reserva del puesto de trabajo de origen.

4. El personal docente funcionario de carrera podrá acceder a los puestos de trabajo de la administración autonómica que se determinen. En todo caso, tendrá las mismas garantías que las establecidas con carácter general en la normativa de función pública para los casos de remoción y cese.

Artículo 89. Comisiones para la dotación de plazas con perfil educativo

1. La administración educativa, a propuesta del consejo escolar del centro y de acuerdo con el procedimiento y las condiciones que se establezcan, podrá determinar a qué puestos de la plantilla docente se otorga un perfil específico, para garantizar la continuidad del proyecto educativo.

2. La consejería convocará comisiones de servicios específicas para la provisión de plazas vacantes para el profesorado catalogadas con un perfil vinculado al proyecto educativo de centro. En cualquier caso, estas convocatorias se deberán hacer bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3. Estas convocatorias deberán ir destinadas a cubrir puestos de trabajo docentes que requieren técnicas, responsabilidades o condiciones de ocupación específicas de acuerdo con el proyecto educativo del centro, siempre que el centro haya definido sus

perfiles de acuerdo con la regulación hecha por la administración educativa. En estas convocatorias se determinarán los requisitos y los méritos evaluables según el perfil educativo y se podrá exigir la elaboración de memorias.

Artículo 90. Comisiones para el personal docente con funciones de asesor técnico docente

1. La administración educativa, además de los puestos de trabajo catalogados para personal funcionario de los cuerpos y las escalas de los servicios generales de la Administración de la comunidad autónoma de les Illes Balears que forman parte de su relación de puestos de trabajo (RPT), también podrá tener incorporados, con carácter temporal y voluntario, funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios a los que se asignarán funciones que implicarán llevar a cabo tareas de apoyo y asesoramiento en aspectos y asuntos directamente relacionados con los servicios educativos.

2. La consejería establecerá los criterios y las pautas de actuación para adjudicar las comisiones del personal docente con funciones de asesor técnico docente (ATD) en la administración educativa. Estas comisiones se asignarán a personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes no universitarios. Sólo en casos excepcionales y debidamente motivados se podrán asignar a personal docente interino.

3. Los asesores técnicos docentes tendrán el mismo horario que el personal de administración y servicios de la consejería. También disfrutarán de las mismas vacaciones y licencias y se ajustarán al mismo control horario.

CAPÍTULO III EL RECONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

Artículo 91. Jornada de trabajo

1. La consejería regulará la jornada de trabajo del profesorado, la dedicación a las actividades escolares y su distribución horaria, así como la participación en actividades complementarias, de acuerdo con la normativa vigente y las propias competencias.

2. La jornada de trabajo ordinaria podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios docentes que tienen asignada una jornada de trabajo a tiempo parcial serán proporcionales a la jornada realizada, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

3. Al personal docente no universitario le serán de aplicación los permisos regulados en el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

4. El personal docente no universitario tiene derecho a un mes de vacaciones dentro del año natural, que se disfrutará normalmente el mes de agosto. Los días o periodos no lectivos del resto de meses no tendrán la consideración de vacaciones y el personal docente está a disposición de la administración educativa.

Artículo 92. Carrera docente

1. El Gobierno de las Illes Balears, en el marco de la normativa básica, establecerá un sistema de carrera docente para el personal de la función pública vinculada a la evaluación de su cumplimiento profesional según las funciones docentes desarrolladas, el progreso de su alumnado, las actividades de formación y las tareas de innovación e investigación.

2. La consejería favorecerá el acceso y la permanencia del profesorado, sea de carrera o interino, en los centros que deban adoptar medidas singulares derivadas de las necesidades del alumnado y de las características del entorno, y que puedan estar sujetos eventualmente a un elevado índice de movilidad del personal docente. A tal efecto, y sin perjuicio de los incentivos económicos que se puedan arbitrar, la administración educativa hará prevalecer, como mérito específico, el ejercicio continuado en puestos de trabajo de estos centros, tanto en los concursos de traslado que le corresponda organizar, como en los procedimientos de selección de los funcionarios interinos.

3. La administración educativa facilitará y promoverá entre el personal docente el desarrollo de proyectos que fomenten la innovación educativa.

Artículo 93. Sistema retributivo

El sistema retributivo de los funcionarios docentes y del personal laboral docente se establecerá por medio de una disposición de rango legal, en el marco de la normativa básica del Estado, de la normativa aplicable de la función pública de la administración autonómica y de las disposiciones de esta ley.

Artículo 94. Licencias y ayudas

1. La consejería podrá convocar licencias para el profesorado, retribuidas y no retribuidas, con objeto de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación en el ámbito educativo. Estas licencias, en el supuesto del profesorado de formación profesional, podrán consistir, además, en estancias en empresas e instituciones para posibilitar la actualización científica y tecnológica.

2. La consejería podrá otorgar ayudas para la realización de actividades por parte del profesorado que contribuyan a su formación y promoción profesional.

Artículo 95. Premios

La consejería establecerá las bases reguladoras de premios que reconozcan la excelencia del profesorado y su contribución al óptimo funcionamiento de los centros educativos de las Illes Balears.

Artículo 96. Seguridad y salud en el trabajo

La administración educativa adoptará medidas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del personal de los centros educativos y de los servicios de apoyo a la enseñanza y promoverá actividades formativas específicamente orientadas a perfeccionar los niveles de prevención y de protección en los centros.

Artículo 97. Medidas de apoyo y protección de la función pública docente

1. La administración educativa dispensará al profesorado la protección debida, garantizará el ejercicio de sus derechos y promoverá que sea valorado socialmente.

2. El profesorado de los centros públicos tendrá derecho a la asistencia jurídica y a la cobertura de la responsabilidad civil respecto a los hechos relacionados directamente con su ejercicio legítimo de las funciones profesionales.

3. La consejería pondrá inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía y la autoridad judicial competente los hechos que, en detrimento de la integridad o la

dignidad del profesorado, puedan constituir infracción penal, al efecto que se deduzcan las responsabilidades procedentes.

4. La consejería velará por la mejora de las condiciones de trabajo y adoptará acciones para facilitar la conciliación del ejercicio profesional y la vida familiar del profesorado de los centros públicos.

5. Asimismo, se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de las personas en situación vulnerable y de las víctimas de la violencia de género o terrorista. Con esta finalidad, se elaborarán los protocolos correspondientes.

6. Con el fin de favorecer la formación permanente, de conformidad con la legislación básica estatal, el profesorado dispondrá de acceso gratuito a las bibliotecas y a los museos dependientes de los poderes públicos de las Illes Balears.

7. La consejería promoverá convenios con la Universidad de les Illes Balears con objeto de facilitar la incorporación a los departamentos universitarios del profesorado de los cuerpos docentes a que se refiere esta ley.

CAPÍTULO IV EL REGISTRO GENERAL DEL PERSONAL DOCENTE Y EL RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS

Artículo 98. Registro General del Personal Docente no universitario de las Illes Balears

1. El Registro General del Personal Docente no universitario de las Illes Balears, órgano administrativo adscrito a la dirección general competente en materia de personal docente, tiene atribuidas las competencias de inscripción del personal docente no universitario al servicio de la administración autonómica y de anotación de todos los actos que afectan la vida administrativa de este personal, así como las de gestión, mantenimiento y actualización de las relaciones de puestos de trabajo.

2. La organización y el funcionamiento del Registro General del Personal Docente no Universitario de las Illes Balears y los datos que tienen que constar se establecerán por decreto del Consejo de Gobierno.

3. Los miembros del personal docente tienen derecho a acceder libremente a sus expedientes individuales y a los datos relativos a su vida administrativa que figuran inscritas, así como a obtener los certificados correspondientes.

Artículo 99. Reconocimiento de competencias

1. En materia de función pública docente, corresponden al Consejo de Gobierno de las Illes Balears las competencias que le sean atribuidas en la legislación general de la comunidad autónoma.

2. La persona titular de la consejería competente en materia de educación tendrá las atribuciones siguientes:

- a) Ejercer la potestad reglamentaria en la materia, sin perjuicio de la que corresponde al Consejo de Gobierno.
- b) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal docente no universitario.
- c) Proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de la jornada y del horario de trabajo y la adopción de acuerdos en materia de función pública docente.

- d) Establecer, si procede, los perfiles lingüísticos y otros exigibles para el ejercicio de determinados puestos de trabajo en la función pública docente.
- e) Proponer al Consejo de Gobierno la oferta pública de empleo del personal docente no universitario.
- f) Impulsar las políticas de formación permanente del profesorado.
- g) Resolver sobre las situaciones administrativas y la jubilación del personal funcionario docente.
- h) Dictar órdenes de servicio, instrucciones y circulares en materia de personal docente no universitario.
- i) Convocar y resolver los procedimientos de selección del personal docente no universitario y nombrar a los miembros de los órganos de selección.
- j) Nombrar y hacer cesar al personal docente funcionario en prácticas e interino y formalizar los contratos de trabajo del personal laboral.
- k) Convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo del personal docente no universitario, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de valoración.
- l) Convocar y resolver las comisiones de servicios del personal docente no universitario en el ámbito de la administración autonómica.
- m) Autorizar las comisiones de servicios del personal docente no universitario de la administración autonómica en otras administraciones públicas o en entidades de derecho público, a propuesta de los organismos afectados.
- n) Resolver las solicitudes de autorización y reconocimiento de compatibilidad del personal docente no universitario al servicio de la administración autonómica.
- o) Vigilar el cumplimiento de las normas de aplicación general y ejercer la inspección en materia de personal docente no universitario.
- p) Iniciar y resolver los procedimientos disciplinarios del personal funcionario docente no universitario por faltas graves o muy graves, excepto cuando impliquen separación del servicio.
- q) Ejercer la facultad disciplinaria en relación con el personal laboral docente y acordar la extinción de los contratos de trabajo de este personal.
- r) Preparar los proyectos de ley y las disposiciones reglamentarias en materia de función pública docente y proponer su aprobación al Consejo de Gobierno, cuando corresponda.
- s) Otorgar los premios, las recompensas y las distinciones que se determinen reglamentariamente.
- t) Cualquier otra competencia que, en materia de función pública docente no universitaria, le atribuya la normativa vigente y, en general, las que no estén atribuidas expresamente a otros órganos.

TÍTULO V LOS CENTROS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ILLES BALEARS

Artículo 100. Clasificación de los centros educativos

1. Los centros educativos se clasifican en públicos y privados. Son centros públicos los centros cuyo titular es una administración pública. Son centros privados los centros

cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado y son centros privados concertados los centros privados acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido.

2. Todos los centros docentes tendrán una denominación específica y se inscribirán en el Registro de centros, dependiente de la administración educativa, que trasladará los asientos registrales al ministerio competente en materia de educación. Los centros no podrán emplear identificaciones diferentes a las que figuran en la correspondiente inscripción registral.

3. Todos los centros docentes deben reunir unos requisitos mínimos para impartir las enseñanzas con garantía de calidad. El Estado, a través de su normativa básica, y el Gobierno de les Illes Balears, mediante reglamento, establecerán los requisitos mínimos. Estos se tienen que referir, en todo caso, a la titulación académica del profesorado, la relación numérica alumnado/profesorado, las instalaciones docentes y deportivas y el número de plazas escolares. El Gobierno de les Illes Balears, si es necesario y en uso de sus competencias, podrá incorporar requisitos propios para los centros que imparten enseñanzas que prevé esta ley.

Artículo 101. Recursos y apoyo a los centros educativos

1. Los centros educativos estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

2. La administración educativa apoyará y asignará, en caso de que sean necesarias, mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o privados concertados que estén situados en zonas económicas, sociales o culturales desfavorecidas o que escolaricen alumnado con una determinada problemática social, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnado procedente de otros países y alumnado que presenta una elevada movilidad u otras circunstancias sobrevenidas. Estas dotaciones adicionales irán encaminadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados educativos de forma continuada, estarán vinculadas a la acreditación de proyectos educativos innovadores que promuevan la equidad educativa, y estarán condicionadas a la rendición de cuentas y la justificación de la adecuada optimización de estos recursos.

3. Se podrán establecer compromisos con los centros que, en el uso de su autonomía y basándose en el análisis de sus evaluaciones internas y externas, adopten decisiones o proyectos que sean valorados de especial interés por el contexto socioeconómico del centro, para su currículum o para su organización. En cualquier caso, se hará un seguimiento y una valoración de los resultados obtenidos.

4. En las condiciones que se determinen, se favorecerán las iniciativas de desarrollo de proyectos de innovación educativa y curricular que tengan el objetivo de estimular la capacidad de aprendizaje, las habilidades y potencialidades personales, el éxito escolar y el nivel óptimo de aprendizaje de todo el alumnado, la mejora de la actividad educativa y el desarrollo del proyecto educativo de los centros.

Artículo 102. Creación de centros

1. La creación, la supresión y la transformación de centros públicos corresponde al Gobierno de les Illes Balears, que establecerá los tipos de enseñanzas que se desarrollen en dichos centros.

2. La creación, la supresión y la transformación de centros privados se someterá a la autorización administrativa correspondiente.

3. El Gobierno de les Illes Balears promoverá una red de centros públicos suficiente para cubrir la demanda de la población escolar de las Illes Balears.

Artículo 103. Principio de autorización administrativa

1. La administración educativa asegurará que todos los centros docentes reúnen las condiciones y los requisitos mínimos establecidos en la legislación vigente.

2. Los centros privados de las Illes Balears, incluidos los centros extranjeros, que imparten enseñanzas de régimen general o de régimen especial se someterán al principio de autorización administrativa establecido en esta ley y en el artículo 23 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.

3. Los centros privados que imparten enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con validez académica estarán sometidos a las normas del derecho común. Estos centros no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas para los centros docentes, ni cualquier otra que pueda conducir a error o confusión con estas.

Artículo 104. Planificación de las infraestructuras educativas públicas

1. La administración educativa llevará a cabo la planificación de las infraestructuras educativas públicas para garantizar, por un lado, que los centros educativos se encuentran en las mejores condiciones y, por el otro, para dar respuesta a las necesidades sociales de escolarización, a la diversificación de la oferta formativa y a las demandas de las familias, con una dotación de plazas escolares públicas suficientes. La distribución de los centros educativos incluirá el criterio de equilibrio entre demografía y territorio. Esta planificación tendrá en cuenta la valoración de la comunidad educativa a través de los consejos escolares insulares.

2. La planificación de las infraestructuras educativas se llevará a cabo, previos los estudios demográficos y de necesidades de las diversas zonas, por medio de la elaboración de los planes de infraestructuras a medio plazo, revisables cada dos años, que contendrán la memoria económica y la previsión de financiación, después de haber llevado a cabo los estudios demográficos y de necesidades.

3. La arquitectura de los nuevos centros educativos públicos contará con asesoramiento pedagógico y posibilitará la implantación de nuevas propuestas metodológicas y nuevas formas de organización, orientadas a la mejora de los procesos educativos en aplicación de los principios de autonomía pedagógica y organizativa de los centros educativos.

4. Se incluirá en los planes de infraestructuras la previsión de las reformas necesarias en los centros educativos existentes que lo requieren para la adecuación y la mejora de las instalaciones y para posibilitar la implantación de nuevas metodologías y nuevas formas de organización.

5. El diseño de las infraestructuras educativas velará por introducir los criterios de sostenibilidad en relación con el aprovechamiento de la energía solar, la eficiencia energética, el ahorro de agua, la movilidad sostenible y la gestión de residuos.

Artículo 105. Aportación de terrenos para la construcción de centros públicos

Los municipios pondrán a disposición de la administración educativa los terrenos necesarios para construir los centros educativos públicos de educación infantil y primaria, y cederán los terrenos necesarios para la construcción de los centros

educativos públicos de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial.

Artículo 106. Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros educativos públicos

1. Sin perjuicio de otras modalidades de colaboración que se puedan establecer, la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a los centros educativos públicos de segundo ciclo de educación infantil y primaria de titularidad municipal, corresponden al municipio donde se encuentran situados. No obstante, la consejería es competente en las obras y las actuaciones de reforma, ampliación o adecuación y mejora de estos centros educativos.

2. La consejería asumirá la parte de los gastos correspondientes si por necesidades de escolarización se tienen que destinar los edificios a que hace referencia el apartado anterior a impartir educación secundaria obligatoria o formación profesional. En el supuesto de afectaciones parciales, se establecerá el convenio de colaboración correspondiente.

Artículo 107. Tipología de centros públicos

1. La consejería establecerá los criterios para determinar la tipología de los centros docentes públicos no universitarios y la asignación de equipos directivos.

2. Los centros docentes públicos no universitarios de las Illes Balears pueden adoptar alguna de las tipologías siguientes, en función de los estudios que tengan autorizados:

- a) Centros de educación especial (CEE).
- b) Escuelas infantiles (EI).
- c) Colegios de educación primaria (CP).
- d) Colegios de educación infantil y primaria (CEIP).
- e) Colegios de educación infantil y primaria integrados con enseñanzas elementales de música (CEIPIEEM).
- f) Colegios de educación infantil y primaria integrados con educación secundaria obligatoria (CEIPIESO).
- g) Institutos de educación secundaria (IES).
- h) Escuelas de arte (EA).
- i) Centros de educación de personas adultas (CEPA).
- j) Conservatorios profesionales de música y danza (CMD).
- k) Escuelas oficiales de idiomas (EOI).
- l) Institutos de formación profesional (IFP).
- m) Centros integrados de formación profesional (CIFP).
- n) Conservatorios superiores de música y danza.
- o) Escuelas superiores de diseño y artes escénicas.

3. La consejería podrá crear nuevas tipologías de centros docentes públicos no universitarios y establecerá criterios específicos para cada tipología de centro.

4. La consejería podrá resolver, previa consulta a los consejos escolares afectados, la reconversión de centros de una tipología determinada en otra, y autorizar los estudios correspondientes.

5. La administración educativa promoverá la creación o la reconversión de centros ya existentes en colegios integrados de educación infantil y primaria con educación

secundaria obligatoria (CEIPIESO), para favorecer la coordinación entre los docentes de las etapas de enseñanza obligatoria y un mayor acompañamiento a los alumnos en la transición entre etapas educativas.

6. En relación con los estudios artísticos superiores, la consejería podrá promover que estos estudios, atendiendo a sus características, se puedan llevar a cabo mediante entes instrumentales de gestión previstos legalmente y que el personal docente se pueda contratar mediante contratos laborales.

CAPÍTULO II LA ESCOLARIZACIÓN EQUITATIVA

Artículo 108. Igualdad de oportunidades y equidad en la escolarización

1. La consejería garantizará la gratuidad efectiva de las enseñanzas, en los términos establecidos en la normativa básica del Estado.

2. En la admisión de alumnado no se podrán establecer criterios discriminatorios por razones de nacimiento, raza, género, diversidad funcional, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3. El proceso de escolarización en centros educativos sostenidos con fondos públicos se regirá por un principio de equilibrio que conjugue criterios de equidad y de proximidad y haga posible, a la vez, el derecho a elegir un proyecto educativo singular.

4. En el caso de admisión en el primer ciclo de educación infantil en los centros públicos y de la red complementaria, la administración educativa establecerá los mismos principios y criterios de admisión que para el resto de tramos educativos y velará para que los niños en situación vulnerable tengan acceso a las plazas ofrecidas.

Artículo 109. Derecho de escolarización

1. Todo el alumnado tendrá derecho a una plaza escolar en centros sostenidos con fondos públicos, en las etapas y los niveles obligatorios que constituyen la enseñanza básica, así como en el segundo ciclo de educación infantil.

2. El régimen de admisión del alumnado en los centros docentes se fundamenta en el derecho a la libre elección de centro por parte de las familias o los tutores legales, o por parte de los alumnos en caso de que sean mayores de edad.

3. En la programación de la oferta educativa se tendrán en cuenta las necesidades sociales de la escolarización, las demandas de las familias y las consignaciones presupuestarias existentes, y se atenderán los principios de eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos.

4. La regulación del proceso de elección de centro constituye un elemento fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades y garantiza las mismas condiciones para todas las familias en los diferentes momentos o contextos de escolarización. La administración educativa velará para hacer efectivo este derecho mediante la programación general de la enseñanza y la oferta anual de plazas escolares, que garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo entre los centros escolares sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de un mismo municipio, área o zona de escolarización.

5. La matriculación de alumnado en un centro público o privado concertado supone respetar el proyecto educativo del centro y, si procede, su carácter propio, sin perjuicio de los derechos reconocidos al alumnado y a sus familias en las leyes.

6. Una vez matriculado un alumno en un centro sostenido con fondos públicos, quedará garantizada su permanencia siempre que sea el mismo régimen económico hasta el final de la enseñanza obligatoria y, si existe oferta, del bachillerato, salvo que se produzca un cambio de centro voluntario o por la aplicación de algún supuesto previsto en la normativa sobre derechos y deberes del alumnado.

7. La consejería llevará a cabo la escolarización inmediata o, si procede, el cambio inmediato de centro, de los alumnos que se vean afectados por actos de violencia de género o acoso escolar y así lo soliciten.

Artículo 110. Procesos de escolarización

1. En caso de que sea pertinente para un mejor equilibrio en la escolarización, la consejería podrá crear oficinas de escolarización territoriales para la gestión de la información, el acompañamiento y la tramitación de solicitudes.

2. Los centros docentes facilitarán al padre, la madre o al tutor, o al alumno en el supuesto de que sea mayor de edad, información objetiva y completa sobre su proyecto educativo, incluyendo, si es el caso, su carácter propio. Asimismo, informarán sobre el régimen legal de las aportaciones económicas, especialmente de su carácter voluntario y no asociado a la escolarización, así como del número de vacantes de que dispone y de las que se vayan generando hasta el inicio del curso.

3. En las condiciones que se establezcan y sin perjuicio de las competencias que les son propias, las administraciones podrán constituir comisiones de escolarización, que actuarán como órganos de garantías de admisión en los procesos de adscripción y de admisión de alumnos, las cuales estarán integradas por representantes de la administración educativa, de la administración local, de los centros educativos públicos y de los privados concertados, de las familias o tutores y, si procede, de los centros de la red complementaria del primer ciclo de educación infantil.

Artículo 111. Escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

1. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión, y asegurará la no discriminación y la igualdad efectiva de acceso al sistema educativo, así como la permanencia en este.

2. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se escolarizarán preferentemente en los centros ordinarios con los recursos humanos y materiales necesarios y, excepcionalmente, en unidades educativas especiales en centros ordinarios, en centros de educación especial o en la modalidad de escolarización combinada, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas.

3. La escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en centros ordinarios o centros de educación especial requerirá un informe de los servicios de orientación, de la Inspección Educativa y de otros organismos específicos. En cualquier caso la escolarización requerirá la conformidad de las familias o de los representantes legales de los alumnos.

Artículo 112. Escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

1. Se garantizará la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Para garantizar este objetivo, la administración promoverá acuerdos de escolarización equilibrada de ámbito municipal con la participación de las diferentes administraciones y representantes de la comunidad educativa, y podrá llevar a cabo una reserva de plazas escolares para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo hasta el inicio del curso escolar.

2. En el caso de centros con una ratio elevada de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la administración dotará al centro de medidas o recursos humanos y materiales suficientes, equilibrados y revisables a lo largo del curso escolar, y puede limitar la escolarización fuera de plazo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

3. Se considerarán necesidades específicas de apoyo educativo las que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente las asociadas a movilidad reducida, diversidad intelectual o sensorial, trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos graves de conducta, trastornos mentales o enfermedades degenerativas graves y minoritarias; alumnado con dificultades específicas de aprendizaje; alumnado de altas capacidades intelectuales; alumnado con condiciones personales o historia escolar con un desfase curricular significativo; alumnado de incorporación tardía dentro del sistema educativo; alumnado con desconocimiento de las dos lenguas oficiales; alumnado con necesidades educativas derivadas de situaciones socioeconómicas y socioculturales desfavorecidas o con riesgo de abandono escolar; y otras situaciones reconocidas por la normativa.

4. A los efectos de aplicar el criterio de proximidad domiciliaria y velar por la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la consejería, con la consulta previa a los consejos escolares insulares y, si procede, a los consejos escolares municipales, puede definir zonas escolares.

5. La administración educativa podrá colaborar con otras administraciones o entidades públicas o privadas, instituciones o asociaciones, para facilitar la escolarización, una mejor incorporación del alumnado al centro educativo, la promoción del éxito educativo y la prevención del abandono escolar temprano.

**CAPÍTULO III
LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS****Artículo 113. Autonomía de los centros**

1. El desarrollo de la autonomía de los centros educativos por medio de la planificación estratégica, la corresponsabilidad y la cooperación entre la consejería, los centros, la administración local y los agentes de la comunidad educativa constituirá un elemento clave para mejorar el sistema educativo e implicará que los centros educativos puedan establecer el modelo organizativo, pedagógico y de gestión que se adapte a su proyecto educativo y a su entorno con el objetivo de mejorar los aprendizajes de todo el alumnado.

2. En el desarrollo de la autonomía de los centros, la consejería fijará las competencias que el alumnado tiene que lograr en cada etapa educativa, generará los

mecanismos para evaluar los resultados del alumnado y de los centros, y apoyará los procesos de mejora.

3. La consejería adoptará las medidas necesarias para posibilitar el ejercicio efectivo de la autonomía de los centros y garantizará el apoyo necesario.

4. Los centros educativos deberán rendir cuentas a la comunidad educativa y a la administración de su gestión, de los resultados obtenidos y de la aplicación de los acuerdos de su autonomía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Artículo 114. Autonomía de los centros educativos públicos

1. Los centros educativos públicos disponen de autonomía pedagógica, de gestión del personal del centro, de los recursos materiales y económicos y de organización, como instrumento para dar respuesta a las necesidades y a la diversidad del alumnado, y para contribuir a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, y la calidad de la educación en los términos recogidos en la presente ley y en las normas que la desarrollen.

2. En el ejercicio de la autonomía de los centros, los órganos de gobierno de cada centro pueden fijar objetivos adicionales y definir las estrategias para lograrlos, organizar el centro, determinar los recursos que necesita y definir los procedimientos para aplicar el proyecto educativo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Artículo 115. Principios y características de la autonomía de los centros

1. La autonomía de los centros debe suponer una descentralización sujeta a lo establecido en el proyecto educativo del centro y a la evaluación del logro de los objetivos que se planteen, en los términos que se determinen en el desarrollo reglamentario de esta ley, para garantizar los principios de equidad, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, profesionalidad y participación de la comunidad educativa dentro de un sistema inclusivo que no excluya a ningún alumno.

2. La autonomía de los centros debe permitir orientar su funcionamiento dirigido al fomento de comunidades de aprendizaje y del trabajo en equipo basado en la colaboración, con autonomía suficiente para crear las condiciones necesarias para un buen desarrollo personal y un óptimo rendimiento académico del alumnado en un entorno inclusivo.

3. Para el desarrollo de la autonomía de los centros, la administración educativa facilitará que los centros educativos dispongan de un liderazgo compartido y distribuido que fomente procesos de mejora continuados y sostenibles y que favorezca el desarrollo profesional de los docentes.

Artículo 116. Autonomía pedagógica

1. Cada centro educativo, a partir de las características del centro, del alumnado y de su entorno, y del currículo básico fijado por la administración educativa y definido en términos competenciales, adaptará su proyecto educativo de centro teniendo en cuenta criterios de atención a la diversidad, de equidad, de excelencia y de inclusión del alumnado.

2. Los centros completarán y desarrollarán el currículo de las diferentes etapas y ciclos, concretarán los criterios de evaluación, incorporarán objetivos curriculares adicionales, integrarán las materias en ámbitos en la enseñanza básica, distribuirán de forma flexible los horarios, los espacios y los agrupamientos del alumnado y

desarrollarán proyectos y metodologías didácticas propias, para adaptar el currículum a los objetivos establecidos en su proyecto educativo, en las leyes educativas y en los reglamentos que las desarrollan, con la supervisión y el asesoramiento del Departamento de Inspección Educativa y de los otros servicios de la consejería. A este efecto los centros podrán disponer del máximo de autonomía pedagógica posible que permita la normativa aplicable.

3. Las concreciones mencionadas en el apartado anterior se incorporarán al proyecto educativo y se revisarán periódicamente a partir de los resultados y las valoraciones de las evaluaciones internas y externas.

4. La autonomía pedagógica no podrá suponer en ninguno caso discriminación ni en la admisión de alumnos ni en las posibilidades reales de permanencia de aquellos que presenten dificultades de aprendizaje.

5. Corresponde a la dirección del centro impulsar y liderar el ejercicio de la autonomía pedagógica con el apoyo del claustro y del consejo escolar del centro.

Artículo 117. Autonomía organizativa

1. Los centros educativos podrán dotarse de una estructura propia de gobierno, organización, coordinación y participación de los diferentes agentes de la comunidad educativa, orientada al desarrollo de su proyecto educativo, en el marco general que establezca la administración educativa. La estructura organizativa propia determinará las competencias y la composición de los órganos de gobierno y de coordinación.

2. Los centros educativos podrán reorganizar los espacios, el tiempo dedicado a cada materia y la coordinación y la organización del profesorado con el objetivo de garantizar el derecho a una educación inclusiva y conseguir el éxito educativo de todos los alumnos en la aplicación del proyecto educativo y de los objetivos generales de la educación, en el marco general que establezca la administración educativa.

3. En las decisiones sobre la organización y el funcionamiento de los centros se velará por un uso óptimo de los recursos y se aplicará una gestión descentralizada, flexible, con participación de la comunidad educativa y con corresponsabilidad de las familias en el proceso educativo y en la gestión de los centros.

4. En los centros públicos, corresponde a la dirección de cada centro, de acuerdo con las competencias de los órganos de gobierno y participación, impulsar y adoptar medidas para mejorar la estructura organizativa del centro, con el objetivo de mejorar la atención educativa de todo el alumnado, en el marco de las disposiciones reglamentarias aplicables.

5. En los centros privados sostenidos con fondos públicos, corresponde al titular de cada centro adoptar las decisiones sobre la estructura organizativa del centro, y corresponde al consejo escolar, a propuesta del titular del centro, informar del reglamento de régimen interior del centro.

Artículo 118. Autonomía de gestión

1. La autonomía de gestión se orientará a favorecer el desarrollo del proyecto educativo del centro con el apoyo y el acompañamiento de la administración educativa, y contribuirá a lograr los objetivos pedagógicos del centro, aplicando los principios de eficacia, eficiencia, inclusión, descentralización, participación y compromiso de la comunidad educativa.

2. La gestión de los centros públicos es responsabilidad de la dirección de cada centro y la autonomía comprende, con las limitaciones aplicables en cada caso:

- a) La gestión del profesorado, del personal de atención educativa y del personal de administración y servicios.
- b) La adquisición y la contratación de bienes y servicios.
- c) La distribución y el uso de los recursos económicos del centro.
- d) El mantenimiento y la mejora de las instalaciones del centro, en el caso de los centros que imparten educación secundaria y enseñanzas de régimen especial.
- e) La obtención o la aceptación, si procede, de recursos económicos y materiales adicionales con los límites que se establezcan.
- f) El cumplimiento de la normativa vigente.

3. El director dirigirá y gestionará al personal del centro de una manera orientada a garantizar el cumplimiento de sus funciones. El ejercicio de esta función comporta:

- a) Proponer el nombramiento y la destitución de los otros órganos unipersonales de dirección y nombrar y destituir los órganos unipersonales de coordinación y asignarles responsabilidades específicas, con comunicación previa al claustro y al consejo escolar, y siempre de acuerdo con el marco reglamentario y las normas de organización y funcionamiento del centro.
- b) Asignar al profesorado del centro otras responsabilidades de gestión y de coordinación docente, además de las funciones de tutoría y de docencia que sean requeridas para la aplicación del proyecto educativo y que sean adecuadas a su preparación y experiencia.
- c) Promover la participación del profesorado en actividades de formación permanente y de actualización de sus capacidades profesionales y colectivas, en función de las necesidades y orientaciones fijadas en el plan de formación derivado del proyecto educativo de centro.
- d) Participar en las comisiones de observación y de evaluación formativa de la práctica docente establecidas en el proyecto educativo de centro.
- e) Favorecer e impulsar la coordinación del profesorado, de forma que se garantice el logro de los objetivos fijados en el proyecto educativo de centro.

4. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos pueden proponer requisitos de titulación y capacitación profesional respecto a determinados puestos de trabajo del centro de acuerdo con las condiciones que establezca la administración educativa.

5. La gestión de los centros privados sostenidos con fondos públicos corresponde a sus titulares, sin ninguna otra restricción que las establecidas con carácter general por la legislación educativa y laboral y las que derivan de las finalidades y los principios que rigen el sistema educativo.

Artículo 119. Apertura de los centros públicos fuera del horario lectivo

Los centros públicos, en el marco de su autonomía, y de acuerdo con los entes locales correspondientes, podrán aprobar planes de apertura de centros más allá del horario lectivo, tanto para la utilización de sus instalaciones como para la formación permanente de las familias o de la comunidad en general. En este sentido, los centros podrán establecer acuerdos con asociaciones sin ánimo de lucro para autorizarles el uso de las instalaciones del centro más allá del horario escolar.

CAPÍTULO IV EL PROYECTO EDUCATIVO

Artículo 120. Proyecto educativo del centro

1. El proyecto educativo de centro (PEC) es la máxima expresión de la autonomía del centro, y recogerá la identidad del centro y su carácter propio, si procede; especificará y contribuirá a la consecución de los objetivos educativos de las distintas etapas; orientará la actividad del centro y le dará sentido con el fin de que el alumnado logre las competencias básicas, el éxito educativo y su desarrollo integral; y promoverá la equidad, la igualdad de oportunidades y la atención educativa a todo el alumnado.

2. Todos los centros educativos dispondrán de un proyecto educativo actualizado y adaptado a su realidad, que estará a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa y del público en general, de forma que sea un documento público y accesible, preferiblemente en formato digital y en línea.

3. El proyecto educativo se adaptará al contexto del entorno social y económico del centro y contribuirá a impulsar la colaboración entre los diversos sectores de la comunidad educativa y su entorno social. Los centros públicos que se ubiquen en municipios que dispongan de un proyecto educativo de ciudad deberán tenerlo en cuenta para la elaboración del proyecto educativo de centro.

4. El PEC tendrá un enfoque competencial y se puede organizar a través de proyectos interdisciplinarios y también entre etapas.

5. El PEC garantizará un modelo inclusivo que asegure el acceso, la participación, el aprendizaje y el desarrollo de todo el alumnado.

6. Los centros integrados de formación profesional elaborarán un proyecto funcional de centro que constituya el instrumento fundamental para la organización y la planificación del centro y aplicarán un modelo de mejora continuada y de excelencia de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 121. Elaboración, aprobación y difusión del PEC

1. En los centros públicos, el equipo directivo del centro coordinará la redacción y la actualización del PEC, en la que participarán el profesorado y los diferentes agentes de la comunidad educativa, para definir los objetivos y los procedimientos para su consecución, así como los indicadores y sus criterios de evaluación. El Departamento de Inspección Educativa y los otros servicios de la consejería asesorarán a los centros en la elaboración del proyecto educativo y asegurarán la coordinación entre los proyectos educativos de los centros que imparten etapas sucesivas a un mismo grupo de alumnos.

2. En los centros públicos, el claustro aprobará los aspectos pedagógicos y de concreción curricular e intervendrá en la elaboración y la modificación del proyecto educativo y en todas las decisiones de tipo pedagógico. El consejo escolar del centro deberá dar la aprobación definitiva y encargarse de dar difusión, de forma que esté a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa.

3. Corresponde a los titulares de los centros privados sostenidos con fondos públicos aprobar el proyecto educativo del centro, habiendo oído al consejo escolar. El claustro del profesorado participará en la formulación del proyecto educativo de acuerdo con lo que establezca el reglamento de régimen interior del centro.

4. Los titulares de los centros privados no sostenidos con fondos públicos garantizarán que el centro ejerce la autonomía, en el marco legal vinculado al régimen de autorización de centros privados.

5. La consejería competente en materia de educación proporcionará el apoyo técnico necesario a los centros que lo requieran para la elaboración de sus proyectos educativos.

Artículo 122. Aspectos que debe incluir el PEC

1. El proyecto educativo se fundamentará en los principios de equidad, inclusión, y participación democrática y garantizará el respeto a los principios señalados en el artículo 3 de esta ley con criterios de profesionalidad. Se definirá alrededor de las necesidades del alumnado e incluirá medidas de seguimiento como parte de una reflexión crítica y sistemática, con la intención de que todo el alumnado pueda desarrollar al máximo sus capacidades diversas.

2. El PEC incluirá los criterios de organización pedagógica; las prioridades y los planteamientos educativos; los principios y criterios básicos que caracterizan al centro referidos a la intervención educativa, la orientación, la tutoría, la evaluación, la concreción y el desarrollo de los currículums, según los modelos de diseño universal o de planteamiento alternativos que garanticen la accesibilidad universal; los criterios que definen la estructura organizativa propia; el proyecto lingüístico; los procedimientos de inclusión educativa; los valores y los objetivos que rigen el aprendizaje de la convivencia, la igualdad, la coeducación y el respeto a las identidades de género; los criterios para fomentar la sostenibilidad medioambiental en el centro y el entorno personal y social del alumnado; los criterios para el fomento de la participación y la colaboración de la comunidad educativa; las líneas que deben configurar la relación entre el centro y el entorno social, y la formación permanente del profesorado del centro, además de las normas de organización y funcionamiento del centro y otras actuaciones y rasgos que lo caractericen, así como los procedimientos y las medidas de difusión, seguimiento, evaluación y revisión del proyecto educativo. También incluirá un plan de mejora que permita adoptar las medidas necesarias para fomentar la calidad y la equidad educativa y el éxito escolar.

3. El PEC preverá unos objetivos y unos mecanismos de evaluación y control para garantizar la función de servicio público que tiene un centro educativo sostenido total o parcialmente con fondos públicos. Los proyectos deben definir objetivos de mejora mediante unos indicadores evaluables. Periódicamente los centros harán públicos los resultados de estos indicadores evaluables y los remitirán a los miembros de la comunidad educativa que forman parte de ellos.

4. Las normas de organización y funcionamiento del centro, o el reglamento de régimen interior en el caso de los centros privados concertados, recogerán el conjunto de acuerdos y decisiones de organización y de funcionamiento que se adopten para lograr los objetivos propuestos en el proyecto educativo del centro y en la programación general anual.

CAPÍTULO V EL DESARROLLO CURRICULAR

Artículo 123. Currículum educativo

1. El currículum de la educación formal comprende, para cada una de las etapas y cada una de las enseñanzas del sistema educativo, las capacidades y las competencias propias de cada una de las enseñanzas, así como las áreas, las asignaturas, las materias o los módulos, que podrán incluir objetivos, contenidos, los métodos pedagógicos

generales y alternativos y los criterios de evaluación, que serán diversos en función de las necesidades específicas de apoyo educativo.

2. La gestión de los currículos en las diversas etapas y enseñanzas tendrá un enfoque competencial y multidisciplinario, en el que el alumnado deberá tener un papel protagonista, y su finalidad principal es el logro de las competencias básicas y específicas, disciplinarias y transversales.

3. El currículum de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se imparten, así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la educación en el sistema educativo de las Illes Balears, se orientará hacia:

- a) El pleno desarrollo de la personalidad, las aptitudes y las capacidades de todo el alumnado.
- b) La educación inclusiva y la atención a la diversidad, como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza obligatoria.
- c) La adquisición por parte del alumnado de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en que vive, poder actuar para mejorarla y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia.
- d) La educación en la responsabilidad individual y colectiva, y en el mérito y el esfuerzo personal.
- e) El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje y confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
- f) El conocimiento, la valoración y el respeto del medio natural, la historia, la cultura, la lengua, con las respectivas modalidades insulares, la antropología y la identidad de la isla propia y del conjunto de las Illes Balears, como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal.
- g) La formación en el respeto y el reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural del Estado español, así como del carácter enriquecedor de este plurilingüismo como base para el establecimiento de relaciones entre las diferentes culturas.
- h) El aprendizaje y el fomento del uso de la lengua catalana, como elemento imprescindible no tan sólo para la comunicación, sino también para la interpretación y la transmisión de la identidad cultural e histórica de las Illes Balears y para la cohesión social.
- i) El aprendizaje de la lengua castellana, como lengua oficial de todo el Estado para la comunicación y el acceso a la cultura expresada en esta lengua.
- j) El aprendizaje de al menos una lengua extranjera como medio para la formación de ciudadanos todavía más competentes lingüísticamente en un mundo cada vez más interrelacionado.
- k) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo y de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos coherentes con una visión interdisciplinaria de los contenidos, así como el desarrollo de hábitos saludables, del ejercicio físico y del deporte y conocimientos de una alimentación y nutrición correctas y adecuadas.
- l) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
- m) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable, y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del

conocimiento, tomando en consideración como elementos transversales el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la coeducación, la igualdad, el abordaje de las violencias machistas y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.

- n) La promoción de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, con una valoración especial de la aportación de las mujeres al desarrollo de la sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
- o) El trabajo de las competencias personales, intrapersonales e interpersonales de relación con los otros y el entorno; el espíritu crítico, y el aprendizaje emocional y social.
- p) El respeto al medio ambiente y la sensibilización sobre la emergencia climática y la sostenibilidad.
- q) La educación viaria y la educación para el consumo y la salud y de respeto a la interculturalidad y a la diversidad, y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y de las tecnologías de la información y la comunicación.
- r) La sensibilización y el compromiso hacia una ciudadanía global mediante la educación intercultural y la educación para la cooperación y el desarrollo sostenible.
- s) El diseño universal de los métodos y materiales de aprendizaje y de los sistemas de evaluación, o las alternativas para atender la diversidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

4. La administración educativa trabajará por la actualización permanente del currículum en vista a incorporar temas emergentes ligados a los cambios sociales, así como la adaptación de este a la realidad más inmediata. A tal efecto, se podrán crear equipos interdisciplinarios de profesores con experiencia acreditada que hagan propuestas en este sentido.

Artículo 124. Evaluación de los aprendizajes

1. El sistema de evaluación de los aprendizajes, que no podrá consistir en la simple verificación de la memorización de los contenidos, se adecuará al enfoque competencial por medio de la autoevaluación, la coevaluación entre alumnos y las evaluaciones internas y externas, de forma que la evaluación académica, el currículum, la metodología de enseñanza y aprendizaje y la evidencia de aprendizaje sean coherentes entre sí.

2. La evaluación se adaptará a la diversidad del alumnado y tomará como referencia el perfil de salida del alumnado al final de cada etapa, basado en las competencias que deberá haber logrado, y con la finalidad última de favorecer el máximo desarrollo educativo de todo el alumnado y garantizar la incorporación activa a la sociedad.

3. En cualquier caso, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será evaluado a través de sistemas accesibles para cada caso y en función de las propias adaptaciones curriculares.

4. La evaluación del alumnado será individualizada, continua y formativa y deberá tener en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículum en relación con las competencias establecidas, y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Al final de cada

curso escolar, el informe posterior a la última evaluación incluirá el grado de adquisición de las competencias establecidas y la decisión de promoción al curso, ciclo o etapa siguientes.

Artículo 125. Excepcionalidad de la repetición de curso

1. En la educación básica, la repetición de curso tiene carácter excepcional, solo se podrá aplicar después de las otras medidas de apoyo ordinario y deberá ir asociada a un plan personalizado de apoyo y de recuperación para cada alumno. El equipo docente tomará la decisión después de valorar si el alumno está en condiciones de continuar sus estudios.

2. El sistema educativo incorporará medidas de flexibilización creciente que permitan al alumnado desarrollar itinerarios diversos y disponer de pasarelas que se ajusten a sus necesidades e intereses.

CAPÍTULO VI LA DIRECCIÓN Y LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS PÚBLICOS

Artículo 126. Órganos de gobierno unipersonales y colegiados

Los centros educativos públicos dispondrán, al menos, de los órganos de gobierno siguientes:

- a) El director.
- b) El equipo directivo.
- c) El claustro del profesorado.
- d) El consejo escolar.

Artículo 127. Dirección de los centros educativos públicos

1. Corresponde a la dirección de cada centro público el ejercicio de las funciones de representación, de dirección y de liderazgo pedagógico y de la comunidad educativa; de organización, de funcionamiento y de gestión del centro, y de jefatura de su personal.

2. Las direcciones fomentarán en los centros el liderazgo distribuido, para fortalecer la corresponsabilidad y aprovechar el conocimiento y el talento de la comunidad educativa, acompañar a los equipos docentes y apoyarlos, y potenciar el desarrollo profesional del profesorado.

3. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del centro público y las personas que lo integran deberán trabajar coordinadamente en el ejercicio de sus funciones.

4. El equipo directivo, en el ejercicio de sus funciones, tiene la consideración de autoridad pública y disfruta de presunción de veracidad en sus informes y de ajustamiento a la norma en sus actuaciones, salvo que se pruebe lo contrario. Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, el director es también autoridad competente para defender el interés superior del menor.

5. La administración educativa promoverá la simplificación administrativa en la gestión de los centros educativos y fomentará la capacidad de liderazgo educativo y de gestión de las direcciones.

Artículo 128. Proyecto de dirección

1. El proyecto de dirección ordena el desarrollo y la aplicación del proyecto educativo para el periodo del mandato correspondiente, orienta las sucesivas programaciones generales anuales del centro y establece los criterios, los indicadores y los procedimientos para la evaluación del logro de los objetivos previstos.

2. El proyecto de dirección se adecuará al PEC y será aprobado por el claustro y el consejo escolar para convertirse en un proyecto estratégico del centro.

3. La administración educativa procurará que todos los centros educativos dispongan de un proyecto de dirección de una duración de cuatro años.

4. Los proyectos de dirección serán públicos y accesibles, preferiblemente en formato digital y en línea.

Artículo 129. Formación para la función directiva

1. La formación para el ejercicio de la dirección es un elemento fundamental para su adecuado desarrollo y para disponer de direcciones bien formadas y competentes que den respuesta a las necesidades de los centros. La formación estará centrada especialmente en las funciones del equipo directivo.

2. El plan de formación para lograr estos objetivos preverá dos fases: la de acreditación y la de actualización.

3. La administración promoverá el acceso a la formación de acreditación a todas las personas que dispongan de los requisitos de acceso que se establezcan.

4. La administración promoverá la formación continua para los otros miembros de los equipos directivos.

Artículo 130. Acceso a la función directiva

Pueden acceder a la función directiva los funcionarios de carrera con cinco años de experiencia que cumplan los requisitos de acreditación o de actualización, según corresponda, que presenten un proyecto de dirección y que cuenten con un equipo directivo y no hayan sido separados de sus funciones mediante expediente disciplinario. En igualdad de competencia, se valorará como mérito ser profesor del centro. Los miembros de los equipos directivos serán preferentemente funcionarios de carrera.

Artículo 131. Selección de las direcciones

La comunidad educativa, que tendrá participación mayoritaria en el proceso de selección, seleccionará al director junto con la administración educativa, después de valorar su proyecto de dirección, que deberá contar con el visto bueno del claustro y el consejo escolar en cuanto a la coherencia del proyecto de dirección respecto al PEC.

Artículo 132. Evaluación de la función directiva

1. La evaluación de la función directiva debe basarse en la evaluación tanto de la tarea como del proyecto de los equipos directivos y deben participar en ella el claustro, el consejo escolar y la Inspección Educativa.

2. La evaluación se llevará a cabo sobre los principales ámbitos de actuación reflejados en el proyecto de dirección y se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones internas, las autoevaluaciones y las evaluaciones externas del centro. Durante el proceso de evaluación, la persona evaluada puede exponer a la comisión

evaluadora, en su caso, los diferentes factores que han condicionado la ejecución del proyecto de dirección. La evaluación negativa supone la revocación del cargo.

Artículo 133. Reconocimiento profesional de la función directiva

1. El ejercicio de la función directiva con evaluación positiva será reconocido como mérito en los procesos de provisión de puestos de trabajo en la función pública docente y en la administración educativa, en los concursos de traslados y en los procesos selectivos de acceso a la Inspección Educativa.

2. La consejería favorecerá la incorporación de cargos directivos, y especialmente del cargo de director, a los diferentes órganos de carácter consultivo y participativo que dependen de ella.

3. La administración educativa, con la participación de la Mesa de Diálogo Permanente con los Directores y las Asociaciones de Directores promoverá medidas para mejorar el prestigio y el reconocimiento profesional de los equipos directivos, facilitará la competencia profesional del ejercicio de la función directiva y promoverá la incorporación de los docentes a las tareas directivas.

Artículo 134. Claustro del profesorado

1. El claustro del profesorado es el órgano de participación del profesorado en el gobierno de los centros con el fin de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre los aspectos educativos del centro. Está presidido por el director y está integrado por la totalidad de los docentes que prestan servicios en el centro.

2. Son competencias del claustro:

- a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo de centro, el reglamento de organización y funcionamiento, el proyecto lingüístico y otros proyectos de centro que se determinen, como también la programación general anual.
- b) Establecer los criterios para la concreción del currículum, aprobarlos y evaluarlos.
- c) Analizar, aprobar y evaluar, conforme al proyecto educativo, los aspectos educativos de la programación general anual, como también valorar la memoria de final de curso.
- d) Fijar los criterios para la orientación, la tutoría y la evaluación y la recuperación del alumnado.
- e) Promover iniciativas de innovación educativa, investigación y formación del profesorado del centro, en su caso.
- f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección que se presenten.
- g) Analizar el funcionamiento general del centro, valorar la evolución del proceso educativo y los resultados académicos, así como los resultados de las evaluaciones internas y externas.
- h) Elegir a sus representantes en el consejo escolar del centro y participar en la selección del director de acuerdo con la normativa vigente.
- i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de medidas correctoras, en su caso, y velar porque se atengan a la normativa vigente.
- j) Proponer planes y medidas para la mejora de la convivencia, la inclusión, la igualdad, la coeducación y la no discriminación.
- k) Cualquier otra que le sea encomendada por la normativa vigente.

TÍTULO VI
LOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS
DEL MODELO EDUCATIVO PROPIO

CAPÍTULO I
EL MODELO LINGÜÍSTICO

Artículo 135. Principios del modelo lingüístico

1. El modelo lingüístico escolar de las Illes Balears se rige por los principios siguientes:

- a) La adquisición de la competencia comunicativa en lengua catalana, propia de las Illes Balears, y en lengua castellana, de forma que al final del periodo de la enseñanza obligatoria todos los alumnos sean competentes para emplear con fluidez las dos lenguas, tanto oralmente como por escrito.
- b) La adquisición de la competencia lingüística media en, al menos, una lengua extranjera al final de la enseñanza obligatoria.
- c) El derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua si es una de las oficiales de la comunidad autónoma.
- d) La consideración de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, como instrumento de cohesión social en las actividades educativas y complementarias y como vehículo de expresión normal en las comunicaciones y en el ámbito administrativo.
- e) La garantía de no discriminación de los alumnos y de no separación en centros y grupos clase diferentes por razones de lengua.
- f) La acogida lingüística para los alumnos de incorporación tardía en el sistema educativo de las Illes Balears, con especial atención a la lengua catalana, propia de las Illes Balears.
- g) La autonomía pedagógica de los centros educativos para elaborar e implementar su proyecto lingüístico en el marco de la normativa vigente con la finalidad, entre otras, de asegurar el conocimiento de las dos lenguas oficiales a todos los alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria.
- h) La acreditación de la capacitación lingüística necesaria de los profesores que ejercen la función docente en las Illes Balears.
- i) El uso de las modalidades insulares de la lengua catalana de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

2. Corresponde al Gobierno de las Illes Balears, en el marco de sus competencias, determinar el currículum de la enseñanza de las lenguas, que comprende los objetivos, las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación y la metodología didáctica.

3. La lengua catalana será la lengua de enseñanza y aprendizaje empleada como mínimo en la mitad del horario escolar, para garantizar el logro de los objetivos de la normalización lingüística. Para esta misma finalidad, y con el objetivo de garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las enseñanzas obligatorias, esta proporción podrá ser incrementada por decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico. La lengua castellana, como lengua de enseñanza y aprendizaje, también podrá ser utilizada por decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico, especialmente cuando se considere necesario para garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las enseñanzas

obligatorias. Las condiciones de uso de las lenguas en los centros educativos se desarrollarán reglamentariamente de acuerdo con estos criterios y los principios previstos en esta ley.

Artículo 136. Proyecto lingüístico de centro

1. Los centros educativos elaborarán, en el marco de su autonomía y como parte de su proyecto educativo, un proyecto lingüístico que recoja el tratamiento de las lenguas al centro. Este proyecto se diseñará en función de las variables contextuales, con la finalidad última de conseguir que los alumnos logren las competencias lingüísticas previstas en las dos lenguas oficiales y, adicionalmente, en al menos una lengua extranjera.

2. El proyecto lingüístico de centro concretará la aplicación de los principios del modelo lingüístico establecidos en esta ley y contendrá, entre otros aspectos, los planteamientos didácticos y los criterios metodológicos sobre los que se fundamenta la enseñanza de las lenguas, los criterios para la adecuación del proceso de enseñanza de las lenguas a la realidad sociolingüística del centro, y los criterios y los instrumentos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del proyecto lingüístico.

3. Se especificará en el proyecto lingüístico de centro la lengua de enseñanza y aprendizaje de las distintas áreas, ámbitos, materias, módulos o proyectos de carácter no lingüístico de acuerdo con los principios y los criterios que se establecen en el artículo 135 de esta ley.

4. La administración educativa establecerá un sistema de evaluación de los proyectos lingüísticos de centro, con la supervisión de la Inspección Educativa, que permita revisarlos y adecuarlos con el fin de asegurar el logro de los objetivos establecidos en competencia comunicativa de los alumnos y en normalización lingüística.

5. La Inspección Educativa supervisará los procesos de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros y evaluará la implementación y el impacto en los resultados académicos y en los procesos de cohesión e inclusión de los alumnos. Si no garantizan el logro de los objetivos establecidos, instará a modificarlos.

Artículo 137. Programas de acogida lingüística

1. La administración educativa regulará los programas de acogida lingüística dirigidos a los alumnos de incorporación tardía que desconocen las lenguas oficiales de las Illes Balears para proporcionarles las destrezas necesarias para acceder a los contenidos curriculares y garantizarles una inclusión académica y social efectiva.

2. Los centros educativos facilitarán una atención lingüística y pedagógica que permita a los alumnos de incorporación tardía con déficit lingüístico incorporarse con eficacia al aprendizaje en función del proyecto lingüístico de centro. A tal efecto, dispondrán de recursos proporcionados por la administración educativa que complementen los propios.

Artículo 138. Requisitos lingüísticos del personal

1. El Gobierno de las Illes Balears establecerá los requisitos de acreditación de la capacitación lingüística en lengua catalana para ejercer la función docente en las Illes Balears tanto en los centros públicos como en los privados.

2. La consejería establecerá los requisitos para impartir en los centros educativos de las Illes Balears el área de lengua catalana.

3. El Gobierno de las Illes Balears establecerá los requisitos de acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera de los profesores que imparten áreas no lingüísticas en lengua extranjera en las Illes Balears tanto en los centros públicos como en los privados.

4. La administración educativa adoptará las medidas necesarias para actualizar la competencia lingüística de los profesores.

5. El personal no docente de los centros educativos tendrá una competencia lingüística adecuada para ejercer adecuadamente las funciones correspondientes.

CAPÍTULO II LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Artículo 139. Educación inclusiva como principio fundamental

1. La educación inclusiva es un principio fundamental de la política educativa de la administración autonómica al objeto de dar respuesta a la diversidad educativa y social existente.

2. La escuela inclusiva es la que garantiza que todos los niños y jóvenes tienen acceso a la educación en igualdad de oportunidades, de forma justa y equitativa.

3. Todos los centros y servicios educativos de las Illes Balears promoverán la inclusión del alumnado. Se garantizará que todas las actividades programadas, ya sean dentro o fuera del horario escolar, sean inclusivas.

4. El principio de inclusión educativa es transversal en todos los niveles y servicios educativos.

5. La educación inclusiva tiene presentes todas las expresiones de la diversidad en las aulas y de la diversidad existente en la sociedad, así como la valoración que se hace en sus diferentes manifestaciones.

Artículo 140. Características de la educación inclusiva

La educación inclusiva se caracteriza por:

- a) Valorar la diversidad de los alumnos como una riqueza que apoya al aprendizaje de todas las personas, proponiendo en la actividad diaria del aula actividades que posibilitan y aseguran la cooperación entre la diversidad de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la corresponsabilidad tanto del aprendizaje propio como del de los otros, así como de la construcción de las relaciones positivas dentro de los grupos.
- b) Aprovechar sinergias entre los componentes del centro escolar (alumnos, docentes y familias).
- c) Disponer de un proyecto educativo que abarque culturas, políticas y prácticas educativas que atiendan a la diversidad de todos los alumnos.
- d) Potenciar el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, especialmente de aquellos con más barreras y dificultades para el aprendizaje y la inclusión social.
- e) Flexibilizar itinerarios y currículums personales y posibilitar diferentes contextos de aprendizaje, incluidos los no formales, para la consecución de las competencias establecidas, así como desarrollar las capacidades y competencias de todo el alumnado en función de sus posibilidades de adquirir un nivel óptimo de aprendizaje.

- f) Comprometerse en la superación de las barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los alumnos y poner todos los esfuerzos en superar las limitaciones del centro a la hora de atender la diversidad a través de modelos de diseño universal para el aprendizaje cuando sea necesario.
- g) Organizar y recibir los apoyos en espacios compartidos para responder a las necesidades individuales de cada cual atendiendo específicamente a las capacidades de cada alumno.
- h) Revisar y replantear la utilización de los espacios, los tiempos y los recursos y la tarea de los docentes, de acuerdo con la metodología de aprendizaje por competencias, tanto flexibilizando el proceso de enseñanza y aprendizaje como haciendo más funcionales los aprendizajes de la vida para lograr las competencias según las capacidades de cada cual.
- i) Organizar el trabajo por proyectos que impliquen la colaboración del grupo clase, del equipo docente y de otras personas adultas cualificadas para garantizar una atención educativa inclusiva y adecuada.
- j) Organizar el aula de forma que se favorezca la autonomía y el trabajo de colaboración entre los alumnos.
- k) Proponer actividades complementarias y extraescolares inclusivas, variadas y accesibles para todos los alumnos.
- l) Hacer un uso eficiente de las herramientas tecnológicas, que comporten una transformación en las metodologías de aprendizaje, ofreciendo así formatos alternativos para las capacidades diversas.
- m) Coordinar y visualizar los apoyos en contextos compartidos y dentro del grupo, que deben incidir en la coordinación del profesorado y la colaboración entre los profesionales para que se pueda dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos.

Artículo 141. Atención educativa inclusiva

1. Todos los alumnos son sujetos de la atención educativa inclusiva y de las medidas de atención a la diversidad que precisen por razones pedagógicas con independencia de si están escolarizados en centros ordinarios o en centros de educación especial, teniendo en cuenta la voluntad de las familias.

2. Todos los alumnos se beneficiarán de las medidas y los apoyos universales.

3. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que lo requieran recibirán los apoyos adicionales adecuados.

4. La atención educativa inclusiva comprende todo el conjunto de medidas, de acciones, de personal y de apoyos destinados a todos los alumnos con el fin de favorecer su desarrollo personal y social para que avancen en el logro de las competencias de cada etapa educativa y la transición a la vida adulta, en el marco de un sistema educativo y social inclusivo.

5. La consejería programará la oferta educativa dirigida al alumnado que finaliza la etapa de educación secundaria obligatoria sin haber obtenido el título de graduado en educación secundaria, mediante una orientación individualizada.

6. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo recibirán la atención educativa adecuada en las enseñanzas postobligatorias y de transición a la vida adulta.

Artículo 142. Recursos para la educación inclusiva

1. La consejería proporcionará las medidas y los apoyos que sean necesarios para favorecer la inclusión educativa.

2. Para hacer efectiva la finalidad señalada en el apartado anterior, la consejería, además de los recursos propios de los centros educativos, podrá crear los equipos específicos o especializados necesarios que garanticen la atención inclusiva al alumnado y la que resulte adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo. Progresivamente los centros se dotarán de personal especialista en intervención socio-comunitaria atendiendo a sus necesidades.

3. Asimismo, la consejería podrá financiar, para los centros sostenidos con fondos públicos, los servicios que resulten adecuados para llevar a cabo procesos de inclusión educativa.

4. La administración educativa dará el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar al alumnado que requiere una atención muy especializada, desarrollen también una función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

CAPÍTULO III LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Artículo 143. Formación inicial del profesorado

1. La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y cualificación que requiere la ordenación general del sistema educativo.

2. La formación inicial debe incluir tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de capacidades y actitudes profesionales para preparar al profesorado para ejercer la facilitación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo del alumnado.

3. Los planes de estudios de formación inicial garantizarán, además de la formación científica, la adquisición de las competencias necesarias en los aspectos psicopedagógicos y didácticos, el dominio de las dos lenguas oficiales, el conocimiento de una lengua extranjera, el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, el trabajo docente en equipo y las habilidades sociales y tutoriales adecuadas para ejercer la función docente.

4. La fase de prácticas de la formación inicial del profesorado se realizará en centros docentes previamente acreditados por la administración educativa.

5. La consejería podrá suscribir los convenios correspondientes con las universidades para mejorar la formación inicial del profesorado y para garantizar la calidad de esta formación, en el marco del espacio europeo de educación superior.

Artículo 144. Formación permanente del profesorado

1. La formación permanente del profesorado tiene por finalidad la actualización y el desarrollo de las competencias profesionales del profesorado para la función docente y el liderazgo pedagógico y para la colaboración con la comunidad educativa, y deberá ir encaminada a mejorar la práctica educativa e impulsar la innovación, especialmente en relación con el proyecto educativo de cada centro.

2. La formación permanente del profesorado constituye un derecho y un deber de los docentes y es, a la vez, una responsabilidad de la administración y de los otros titulares de los centros educativos. El derecho a la formación permanente se ejerce preferentemente dentro del horario laboral.

3. La formación permanente del profesorado será organizada por la administración educativa, por los centros educativos, por los centros de formación del profesorado, por los titulares de los centros privados concertados y sus organizaciones representativas o los sindicatos de trabajadores de la enseñanza, que realizarán una oferta ligada a las necesidades de los centros y vinculada a sus proyectos educativos. La formación se llevará a cabo prioritariamente por medio de actividades de formación en los centros educativos. Esta formación podrá ser reconocida u homologada por la administración educativa, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Otras entidades colaboradoras podrán organizar, en las condiciones que se establezcan, actividades de formación permanente del profesorado que, si cumplen los requisitos que se determinen reglamentariamente, serán reconocidas a efectos de promoción profesional de los docentes.

5. La formación permanente contendrá los criterios y los instrumentos de evaluación adecuados para garantizar el aprovechamiento de los programas formativos en la mejora de los procesos educativos de los centros.

Artículo 145. Principios de la formación permanente del profesorado

La formación permanente del profesorado se regirá por los principios siguientes:

- a) El reconocimiento de la formación como una estrategia en el proceso de dignificación de la función docente, de su prestigio y de su consideración social, de forma que se facilite la actualización permanente de las competencias profesionales y el reconocimiento de la complejidad y el mérito de la tarea educativa.
- b) La formación vinculada al desarrollo de las funciones docentes y basada en un modelo de competencias profesionales que debe lograr el profesorado para implementar un auténtico sistema inclusivo para todos los alumnos.
- c) La actualización de los contenidos formativos según las necesidades del sistema educativo, los proyectos educativos de los centros y la cualificación profesional y personal del profesorado.
- d) La transferencia de la formación permanente a la práctica educativa, a la educación del alumnado y al funcionamiento de los centros para contribuir a la mejora de la calidad educativa, a la equidad y al éxito escolar.
- e) El fomento de la investigación y la innovación educativa, así como la evaluación de la formación basada en los principios de la mejora constante y la gestión de calidad.
- f) El fomento de las metodologías formativas de carácter activo y experiencial que faciliten la implicación, el intercambio de experiencias y la reflexión pedagógica.
- g) La consideración de los equipos educativos de los centros como verdaderos protagonistas de la formación.
- h) La incidencia de la formación en las actitudes docentes y en el desarrollo personal y profesional para mejorar el carácter educativo en las relaciones que se establecen en el centro.

- i) La colaboración con entidades e instituciones de prestigio en materia de innovación, investigación y formación del profesorado que potencie la transferencia del conocimiento y la especialización en materia de formación profesional.

Artículo 146. Sistema de formación permanente de las Illes Balears

1. El sistema de formación permanente del profesorado de las Illes Balears se organiza por medio de los centros de profesorado y de los centros educativos, con autonomía pedagógica y de gestión, en el marco de los planes plurianuales de formación del profesorado. La organización y el funcionamiento de los centros de profesorado y de las actividades de formación de los centros educativos se determinarán reglamentariamente. En todo caso, las actividades que se ajusten a los planes plurianuales tendrán los mismos efectos respecto al desarrollo profesional de los docentes, con independencia de que sean organizadas por los centros de profesorado o por los centros educativos.

2. Las modalidades formativas del sistema de formación del profesorado fomentarán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, la transferencia de los conocimientos, el intercambio profesional, la difusión del conocimiento y las experiencias formativas, por lo que las estrategias metodológicas deben estimular el trabajo cooperativo, la autoformación y la investigación educativa.

3. La formación permanente del profesorado se llevará a cabo mediante un proceso sistemático a partir de un diagnóstico de necesidades formativas y con planes plurianuales de formación, elaborados con la participación del profesorado, que contengan una planificación flexible y adaptable y definan las líneas estratégicas de formación, las modalidades formativas y los criterios de evaluación.

CAPÍTULO IV LA EDUCACIÓN NO FORMAL

Artículo 147. Reconocimiento de la educación no formal

1. En el marco de una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida, las administraciones públicas de las Illes Balears promoverán la articulación y la complementariedad de la educación no formal y la educación formal, con el propósito de contribuir conjuntamente al pleno desarrollo de la personalidad.

2. La administración educativa reconocerá e incorporará el carácter educativo de las actividades educativas no formales del campo del ocio educativo, del deporte, de los programas de aprendizaje-servicio y de participación asociativa entre otros, en la medida en que estas actividades contribuyen a la adquisición de las competencias curriculares establecidas de carácter transversal. Los aprendizajes adquiridos en la educación no formal serán reconocidos por el sistema educativo de las Illes Balears de la forma en que se establezca reglamentariamente.

3. Los aprendizajes adquiridos en la educación no formal relacionados con el currículum educativo podrán formar parte de la evaluación de los procesos de aprendizaje en el marco de una evaluación continua de las competencias establecidas.

Artículo 148. Aprendizaje-servicio

1. El aprendizaje-servicio es una acción educativa orientada a desarrollar la competencia social y ciudadana, en la que el alumnado, con el fin de mejorar su entorno, realiza un servicio a la comunidad, aplicando sus conocimientos, capacidades y habilidades, a la vez que aprende el ejercicio activo de la ciudadanía. El aprendizaje-servicio tendrá como objetivo garantizar que los alumnos, a lo largo de su trayectoria escolar, experimenten y protagonicen acciones de compromiso cívico.

2. Para la realización de proyectos de aprendizaje-servicio, la administración educativa y los centros educativos, en el marco de su autonomía, impulsarán marcos de cooperación con consejos insulares, ayuntamientos y entidades interesadas en promover actividades complementarias y extraescolares que vinculen los contenidos curriculares con la respuesta a las necesidades sociales enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que contribuyan a la capacitación personal en los ámbitos artísticos, tecnológicos, lúdicos, culturales y deportivos; la promoción de valores comunitarios; la animación sociocultural; y la participación social.

3. Los proyectos de aprendizaje-servicio podrán formar parte de la programación curricular, de acuerdo con lo que establezca el proyecto educativo de centro, y como parte de la concreción curricular que corresponde a los centros.

4. Los centros podrán disponer de uno o más proyectos de servicio comunitario. Estos proyectos, en todo caso, tendrán una asignación horaria lectiva y práctica y estarán fundamentados en los elementos curriculares correspondientes. Los aprendizajes adquiridos en el ámbito de estos proyectos comunitarios, que tendrán la consideración de transversales, formarán parte de la evaluación educativa.

**TÍTULO VII
EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO**

**CAPÍTULO I
LA INSPECCIÓN EDUCATIVA**

Artículo 149. Inspección del sistema educativo

1. La administración educativa ejerce la inspección del sistema educativo respecto a todos los centros, de cualquier titularidad y régimen jurídico; de los programas, y del resto de elementos que integran el sistema educativo, con el fin de asegurar la aplicación del ordenamiento jurídico y garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se derivan, para contribuir así a la mejora de la calidad y de la equidad en la educación.

2. Esta competencia se hará efectiva a través del Departamento de Inspección Educativa, compuesto por funcionarios y funcionarias del cuerpo de inspectores de educación, que se nutrirá de personas seleccionadas con criterios técnicos, y cuyo número debe ser suficiente para garantizar el cumplimiento de sus funciones en todos los centros educativos de las Illes Balears. En el ejercicio de sus atribuciones y funciones, actuarán de conformidad con los principios de autonomía profesional e independencia de criterio técnico, imparcialidad y transparencia en sus actuaciones, instrumentos y técnicas utilizadas, además de los principios éticos previstos en la

normativa de función pública. En el ejercicio de sus funciones tendrán la condición de autoridad pública.

3. Corresponde al Gobierno de las Illes Balears regular la estructura, las atribuciones y el funcionamiento del Departamento de Inspección Educativa, bajo la dependencia orgánica y funcional del consejero competente en materia de educación.

Artículo 150. Funciones de la Inspección Educativa

1. Son funciones de la Inspección Educativa de las Illes Balears las siguientes:

- a) Supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento y la organización de los centros y de los servicios educativos, así como la práctica docente y la función directiva.
- b) Velar por el cumplimiento de las normas que regulan el sistema educativo, por el respeto a estas normas y por la aplicación de los principios y valores que se recogen, incluidos los referidos a la igualdad de género y a la atención a las personas con capacidades diversas, con especial atención a la normativa de accesibilidad universal.
- c) Garantizar la autonomía de los centros en la implementación de los respectivos proyectos educativos proporcionándoles el apoyo necesario para hacerla efectiva.
- d) Favorecer la mejora del aprendizaje de los alumnos, promoviendo la innovación educativa, que debe permitir la mejora de los procesos y del éxito educativo.
- e) Promover el desarrollo competencial del currículum en los centros educativos y la implementación de metodologías centradas en los alumnos.
- f) Asesorar y orientar al profesorado y a los órganos de gobierno y de coordinación docente en el desarrollo de las funciones que tengan encomendadas.
- g) Desarrollar procesos evaluadores y participar en la aplicación de evaluaciones promovidas por la administración educativa.
- h) Colaborar y coordinarse con los diversos servicios y unidades técnicas de la administración educativa en el desarrollo de sus actuaciones.
- i) Orientar a los órganos directivos y de coordinación de centros en la adopción de medidas de mejora de la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando procesos de mediación y arbitraje.
- j) Participar en la evaluación del sistema educativo y sus resultados generales y en la presentación de informes ante las administraciones y los poderes públicos.
- k) Cualquier otra que le sea atribuida por la consejería en el ámbito de sus competencias.

2. Los inspectores de educación, sin perjuicio de las facultades para hacer cumplir derechos y deberes, pueden intervenir en la mediación ejerciendo funciones de arbitraje en los conflictos que se generen entre los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 151. Atribuciones de la Inspección Educativa

1. Los inspectores de educación, en el ejercicio de sus funciones, tienen las atribuciones siguientes:

- a) Acceder a todas las actividades que tienen lugar en los centros y en los servicios educativos y conocerlas y observarlas directamente. Además, les corresponde la denuncia de cualquier instalación no autorizada como centro docente donde se

lleven a cabo actividades docentes; a tal efecto, podrán acceder y visitar dichas instalaciones.

- b) Examinar y comprobar la adecuación de los proyectos institucionales y el resto de documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros y de los servicios educativos.
- c) Solicitar a los diferentes sectores de la comunidad educativa y a los otros órganos y servicios de la administración la información necesaria para el ejercicio de sus actividades.
- d) Requerir a los directores, a los titulares de los centros y a los otros agentes educativos para que adecúen sus actuaciones a la normativa vigente.
- e) Controlar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y laborales del profesorado y del personal no docente de los centros, servicios y programas educativos.
- f) Convocar reuniones con los diferentes integrantes de la comunidad educativa para la mejora de los procesos y resultados educativos.
- g) Cualquier otra que les atribuya la administración educativa en el ámbito de sus competencias.

2. Como autoridad pública, las actas, los informes y los requerimientos elaborados por los inspectores observando los requisitos legales pertinentes tendrán presunción de veracidad y de valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que se puedan presentar en sentido contrario.

Artículo 152. Organización y funcionamiento de la Inspección Educativa

1. El funcionamiento de la Inspección Educativa se organiza a partir de criterios jerárquicos, territoriales y funcionales alrededor de tres ámbitos:

- a) La estructura interna del Departamento de Inspección Educativa se organiza en torno a los órganos de gobierno y de coordinación. La dirección y la coordinación del Departamento de Inspección Educativa corresponden a la jefatura del departamento. Los órganos de coordinación tienen carácter consultivo y de participación.
- b) La organización territorial de la Inspección se articula por islas y demarcaciones. En las islas de Menorca, Ibiza y Formentera se tendrá en cuenta la especial configuración de las demarcaciones y la relación funcional con las direcciones territoriales insulares.
- c) La planificación de las actuaciones del Departamento de Inspección Educativa se realizará a partir de los planes y programas periódicos.

2. El funcionamiento de la Inspección Educativa debe favorecer, entre otros aspectos:

- a) El trabajo en equipo y la actuación coordinada de todos los inspectores de educación.
- b) La coordinación entre los inspectores de educación y los responsables de la consejería competente en materia de educación.
- c) La presencia habitual de los inspectores en los centros educativos.
- d) Las reuniones periódicas de los inspectores con el profesorado, los diferentes órganos de gobierno de los centros y con las familias.

Artículo 153. Formación de la Inspección

1. La formación permanente, el perfeccionamiento y la actualización profesional son un derecho y un deber de todos los inspectores.

2. La consejería organizará actividades de formación específicas y facilitará la asistencia de los inspectores a las sesiones de formación, experimentación y perfeccionamiento en iguales condiciones que el resto del personal al servicio de las administraciones públicas, incluidos los programas internacionales o de intercambio de experiencias y buenas prácticas con otras administraciones y comunidades autónomas.

Artículo 154. Acceso al cuerpo de inspectores de educación

1. El acceso al cuerpo de inspectores de educación se hará mediante concurso oposición, al cual podrán acceder los aspirantes que cuenten con una antigüedad mínima de ocho años en uno de los cuerpos que integran la función pública docente y con una experiencia docente de la misma duración.

2. La función inspectora educativa también podrá ser ejercida por funcionarios docentes en comisión de servicios, para ocupar transitoriamente puestos de trabajo vacantes, a los cuales se podrá acceder mediante un concurso que cumpla los requerimientos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

CAPÍTULO II LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Artículo 155. Finalidades de la evaluación

1. La evaluación del sistema educativo es un proceso interno de la administración educativa de alcance general, que tiene como finalidad recoger información referida a las políticas educativas, a las instituciones, a las prácticas educativas y a sus resultados; para después analizar la información obtenida, valorarla e interpretarla con el objeto de mantener las prácticas y las políticas educativas, mejorarlas o modificarlas, para convertirla en un instrumento que contribuya a la mejora de los resultados educativos.

2. Las finalidades de la evaluación del sistema educativo son las siguientes:

- a) Contribuir a la mejora de la funcionalidad, la eficacia, la eficiencia, la equidad y el nivel de inclusividad del sistema educativo.
- b) Rendir cuentas y dotar al sistema educativo de transparencia ante la sociedad.
- c) Aportar información sobre el grado de consecución de los resultados y de los objetivos educativos fijados para las etapas del sistema educativo no universitario.
- d) Aportar información que oriente y mejore la política y las prácticas educativas.
- e) Constituir un instrumento formativo para los centros educativos, orientado a la innovación y la mejora educativas.
- f) Elaborar un catálogo de indicadores homologados, así como criterios y métodos de evaluación e investigación del sistema educativo de las Illes Balears, para que sea comparable con los utilizados por otros organismos similares autonómicos, estatales e internacionales.
- g) Hacer análisis y prospectiva del sistema educativo.
- h) Hacer públicos estos datos con el fin de conseguir su máxima transparencia.

3. Son de aplicación a la evaluación del sistema educativo las disposiciones que se establecen en la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, o norma de rango legal que las sustituya.

Artículo 156. Ámbitos de la evaluación

La actividad evaluadora se proyectará sobre los ámbitos siguientes:

- a) Los métodos, los procesos y las estrategias de aprendizaje.
- b) Los resultados del aprendizaje.
- c) La función directiva.
- d) La función docente.
- e) Los servicios y la inspección educativa.
- f) La participación efectiva de la comunidad educativa.
- g) La colaboración con el entorno socioeducativo.
- h) La misma administración educativa.
- i) La atención a la diversidad, el diseño universal y el nivel de inclusividad del centro.
- j) Todos los otros ámbitos que pueda fijar la administración educativa.

Artículo 157. Modalidades de la evaluación

La evaluación, que se adecuará a las especificidades de cada uno de los diferentes ámbitos objeto de evaluación, se aplicará como mínimo en las modalidades siguientes:

- a) Evaluación del rendimiento educativo, que incluirá los resultados de la evaluación interna de los alumnos realizada en los centros y de la evaluación externa de diagnóstico de las competencias logradas por los alumnos.
- b) Evaluación interna y externa de los centros.
- c) Evaluación de la práctica docente.
- d) Evaluación del ejercicio de la función directiva.
- e) Evaluación de programas y servicios.

Artículo 158. Órganos responsables de la evaluación

Los órganos responsables de la evaluación son el Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de las Illes Balears y el Departamento de Inspección Educativa.

Artículo 159. Transparencia y participación en el proceso de evaluación

1. Constituye un derecho de la ciudadanía estar informada del estado general del sistema educativo, así como de cada uno de sus componentes.

2. La administración educativa garantizará, mediante los procedimientos oportunos, la participación de la comunidad educativa tanto en la fase de diseño, preparación y aplicación de las evaluaciones internas y externas de los centros, como en el proceso de análisis de los resultados obtenidos y, sobre todo, en la definición y la adopción de los compromisos de mejora oportunos.

Artículo 160. Evaluación de los centros educativos

1. La evaluación de los centros será integral y orientada a la mejora continua, y relacionará los resultados educativos con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con los recursos y la gestión realizada, con la organización y los procesos de participación, con los objetivos del centro y con los indicadores de progreso del proyecto educativo.

2. Las evaluaciones internas, la autoevaluación y las evaluaciones externas orientarán la toma de decisiones, que tienen como finalidad la mejora de la calidad en

el ámbito de la organización y la gestión de los centros, de las competencias profesionales docentes y de los procesos de aprendizaje de los alumnos.

3. La actividad evaluadora será multinivel y se concretará en modalidades de evaluación interna, coevaluación o autoevaluación, y en evaluación externa. Además, afectará a los ámbitos pedagógicos, de gestión y de organización, de acuerdo con las especificidades de cada centro.

4. Los agentes evaluadores son el profesorado, el alumnado, las familias, el equipo directivo y la administración educativa, mediante el Departamento de Inspección Educativa y el Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de las Illes Balears.

5. La evaluación de los centros tendrá en cuenta, necesariamente, los indicadores de progreso establecidos en el proyecto educativo del centro para el periodo considerado, que harán referencia a resultados, procesos, recursos y condiciones de equidad y se establecerán de manera contextualizada en cada centro.

6. La evaluación del centro será un referente a tener en cuenta en la evaluación del ejercicio de la función directiva y en la del ejercicio de la función docente en el centro.

7. La evaluación del centro también contemplará el cumplimiento del proyecto lingüístico contenido en el proyecto educativo del centro y el grado de ajuste de aquel a las disposiciones de esta ley referidas al modelo lingüístico.

8. La consejería promoverá los procesos de autoevaluación de los centros, que se establecerán reglamentariamente y que alcanzarán los ámbitos siguientes: visión estratégica, gestión de personas y de recursos, interacción con la comunidad educativa y con los agentes externos, procesos de enseñanza y aprendizaje, y seguimiento y evaluación del servicio educativo. El objetivo es mejorar la coordinación pedagógica y curricular, identificar buenas prácticas docentes y de liderazgo y establecer mecanismos ágiles que permitan compartir experiencias mediante el aprendizaje entre iguales para extenderlas al resto de centros educativos.

9. El Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de las Illes Balears deberá realizar una evaluación, en los términos que establece este artículo, de todos los centros educativos de las Illes Balears de forma periódica. Esta evaluación periódica se realizará en cada centro al menos una vez cada cinco años.

10. Los resultados de las evaluaciones internas o externas no podrán ser utilizados para establecer rankings de centros.

TÍTULO VIII

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Artículo 161. Direcciones territoriales de Educación

1. Las direcciones territoriales de Educación son órganos desconcentrados de la administración educativa constituidos en el marco de la normativa autonómica sobre la estructura y la composición del Gobierno de las Illes Balears.

2. Se constituirán la Dirección Territorial de Educación de Menorca y la Dirección Territorial de Educación de Ibiza y Formentera.

3. Las direcciones territoriales de Educación de cada isla dependerán orgánicamente del consejero competente en materia de educación.

4. La administración autonómica dotará a las direcciones territoriales de la estructura, del personal y del presupuesto necesarios para su funcionamiento y para el desarrollo de sus competencias y funciones.

5. El director territorial de Educación ejercerá la representación institucional de la consejería en su respectivo ámbito territorial.

Artículo 162. Funciones de las direcciones territoriales

Entre las funciones de las direcciones territoriales de Educación se encuentran las siguientes:

- a) La representación institucional de la consejería en cada una de las islas.
- b) El desarrollo de las políticas educativas de la consejería.
- c) El apoyo a la gestión de los centros y de los servicios educativos radicados en su territorio.
- d) La coordinación del proceso de matriculación en las islas respectivas.
- e) La coordinación con el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos en todo lo que se refiere a las infraestructuras educativas.
- f) La cooperación con cada consejo insular y los ayuntamientos.
- g) La coordinación en cada territorio con la Inspección Educativa.
- h) La interlocución con la comunidad educativa.
- i) La coordinación en la realización del mapa escolar de cada isla.
- j) La interlocución y la coordinación con las sedes universitarias.
- k) La supervisión de las rutas del transporte escolar en su territorio para optimizarlas.
- l) La supervisión y la coordinación de la prestación del servicio educativo de comedor escolar en los centros educativos.
- m) Cualquiera que se les pueda atribuir mediante disposiciones reglamentarias.

TÍTULO IX

LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

CAPÍTULO I

LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y LA FINANCIACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo 163. Recursos económicos

1. Los recursos económicos puestos a disposición del sistema educativo, de la administración educativa y de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, se gestionan de acuerdo con los principios generales de equidad, eficacia, eficiencia y economía sostenible.

2. La gestión de los recursos económicos del sistema educativo se rige por el principio de planificación económica, por el principio de suficiencia y estabilidad presupuestaria, por el principio de liquidez y por el principio de control financiero.

3. Para la gestión de los recursos económicos de acuerdo con los principios mencionados la consejería desarrollará todas las acciones que sean necesarias.

Artículo 164. Financiación de las enseñanzas

El Gobierno de las Illes Balears financiará las diversas enseñanzas de su competencia en los términos previstos en esta ley, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos que en ella se establecen.

Artículo 165. Financiación de las escuelas infantiles

1. El Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con la normativa vigente y junto con otras administraciones, financiará la creación, la consolidación y el sostenimiento de plazas para niños y niñas del primer ciclo de educación infantil de las escuelas infantiles públicas. La financiación autonómica será estable y progresiva, de acuerdo con los objetivos de esta ley y las disponibilidades presupuestarias.

2. Asimismo, la consejería podrá subvencionar la creación y el sostenimiento de plazas para niños y niñas de primer ciclo de educación infantil de centros privados autorizados y que forman parte de la red complementaria, de acuerdo con las condiciones que se regulen a tal efecto.

Artículo 166. Financiación de las enseñanzas obligatorias

1. La administración educativa garantizará la gratuidad de la escolarización de las enseñanzas obligatorias y transferirá a los centros educativos los recursos económicos necesarios.

2. Progresivamente, la gratuidad se extenderá a las necesidades esenciales de la escolarización, que comprende el material didáctico y las actividades complementarias, para las familias con las rentas más bajas, para lo que se adoptarán medidas para garantizar la igualdad de oportunidades.

Artículo 167. Financiación de las enseñanzas postobligatorias y las de régimen especial

1. La consejería definirá periódicamente la oferta de plazas en las enseñanzas de bachillerato y de formación profesional, y garantizará un número suficiente de plazas gratuitas.

2. La consejería subvencionará, en el marco de su programación educativa, las enseñanzas de régimen especial.

Artículo 168. Financiación para lograr la equidad y la calidad del sistema escolar

1. La consejería realizará convocatorias para ayudas de comedor, de libros de texto, de material tecnológico y de otro tipo, dirigidas a familias con necesidad de apoyo socioeconómico.

2. La consejería podrá establecer una financiación adicional para los centros públicos que desarrollen acciones dirigidas a la equidad o que realicen programas de innovación educativa para la mejora del éxito educativo.

3. La consejería podrá firmar contratos programa con centros concertados que realicen programas y acciones que tiendan a la calidad y la equidad del sistema escolar.

4. La consejería podrá establecer ayudas en relación con actividades complementarias y extraescolares.

Artículo 169. Financiación de los centros públicos

1. En el marco de la autonomía de gestión económica de los centros públicos, la consejería consignará en su presupuesto las cantidades necesarias para el funcionamiento de los centros.

2. En cualquier caso, los centros educativos públicos podrán recibir transferencias adicionales para el desarrollo de determinados programas.

3. Los centros educativos públicos podrán recibir financiación específica de las administraciones locales, insulares, autonómica y estatal, y de entes públicos que estén vinculados, para el desarrollo de actividades y proyectos que fomenten la educación en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres, del derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género, así como la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, y también para participar en ellos.

4. Los centros públicos pueden obtener recursos complementarios, con la aprobación previa del consejo escolar del centro, en los términos que se establezcan de acuerdo con la normativa vigente. En cualquier caso, estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de familias en cumplimiento de sus fines y serán aplicados a los gastos del centro de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

5. Se dispondrá reglamentariamente el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros públicos no universitarios dependientes de la consejería, en el marco de esta ley y de la normativa que les sea aplicable.

CAPÍTULO II EL RÉGIMEN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

Artículo 170. Financiación de los centros concertados

1. El modelo ordinario de financiación con recursos públicos de los centros privados que prestan un servicio público de educación es el concierto educativo, sin perjuicio de que la financiación de determinados niveles o estudios no obligatorios pueda instrumentalizarse mediante convenios, subvenciones u otras figuras prevista en el ordenamiento jurídico.

2. La consejería, de acuerdo con la programación de la oferta educativa y de la disponibilidad presupuestaria, podrá establecer conciertos con centros de titularidad privada que imparten etapas de educación obligatoria y gratuita, así como conciertos de carácter singular para otras enseñanzas no obligatorias, para satisfacer necesidades de escolarización, cumpliendo las condiciones básicas de las leyes orgánicas y de esta ley.

Artículo 171. Condiciones para la concertación

1. Para la concertación de un centro privado se satisfarán, en todo caso, las necesidades de escolarización y se cumplirán las condiciones siguientes:

- a) Tener una relación media de alumnos por unidad escolar no inferior a la de los centros públicos del municipio o la zona de escolarización en que esté ubicado.
- b) Aplicar el principio de coeducación en la admisión del alumnado y la no discriminación por motivos de género, de orientación sexual o de capacidades diversas.

2. Los centros privados concertados deberán escolarizar a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de acuerdo con las disposiciones de esta ley y las normas que la desarrollan, con el objetivo de tener una escolarización equilibrada. De acuerdo con estas condiciones, los centros concertados recibirán los recursos de apoyo educativo necesarios, en iguales condiciones que los centros públicos.

3. En todo caso, para la concertación tendrán preferencia los centros que están constituidos y funcionan en régimen de cooperativa y cumplen con las condiciones establecidas para este tipo de sociedades.

4. En el momento de suscribir el concierto educativo, el centro privado se incorpora al servicio público de educación de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con sus preceptivas obligaciones y derechos.

Artículo 172. Procedimiento y establecimiento de cuantías de concertación

1. El Gobierno de las Illes Balears aprobará la regulación y el procedimiento de la concertación educativa, que se regirá por los principios de transparencia y publicidad.

2. Tanto la aprobación de nuevos conciertos educativos como la prórroga, deberán satisfacer necesidades de escolarización y atender las previsiones de programación educativa realizadas de acuerdo con esta ley y la normativa existente.

3. Las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes Balears determinarán la cuantía de los módulos económicos de los conciertos, incluidos los de los centros de educación especial.

4. La consejería establecerá los criterios para autorizar las cuantías que pueden percibir los centros para actividades complementarias.

5. Los conciertos educativos, previa solicitud del titular del centro, se renovarán siempre que se mantengan los requisitos y las condiciones, y no se den causas de no renovación.

6. En el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del concierto educativo, es aplicable el procedimiento sancionador, que podrá dar lugar a la rescisión del concierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Convivencia en los centros educativos

1. El Gobierno regulará el ejercicio de la convivencia en los centros educativos en el marco de la Convención sobre los derechos de los niños y las niñas con una orientación educativa y de mediación para la resolución pacífica de los conflictos que se puedan producir.

2. La consejería adoptará las medidas necesarias para la prevención de situaciones de acoso escolar y establecerá los protocolos adecuados para asegurar a los afectados la asistencia adecuada y la protección del derecho a la intimidad. Asimismo pondrá a disposición de los centros los medios necesarios para atender las situaciones de riesgo de acoso escolar. En caso de que resulte imprescindible, se pueden adoptar medidas extraordinarias de escolarización y, en el ámbito del personal docente, medidas extraordinarias de movilidad si fuera necesario.

3. Las normas de organización y funcionamiento de los centros o el reglamento de régimen interior en el caso de los centros privados concertados, incluirán medidas para

el fomento de la convivencia y determinarán las medidas correctoras aplicables en caso de que sean necesarias.

Disposición adicional segunda. Plan para la creación y el mantenimiento de escuelas infantiles

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, la consejería elaborará y aprobará un plan de creación y mantenimiento de escuelas infantiles con el fin de extender progresivamente el primer ciclo de educación infantil. Este plan, que se redactará en coordinación con los consejos insulares y los ayuntamientos, así como con la administración educativa del Estado, contendrá la previsión de nuevas plazas escolares y tendrá un carácter plurianual.

2. La administración educativa establecerá un marco estable de financiación de la red de escuelas infantiles públicas que garantice, en el plazo de tres años, la cobertura de al menos una tercera parte del coste para el sostenimiento de las plazas efectivas.

3. Asimismo, se establecerán los criterios para el sostenimiento de plazas efectivas de la red complementaria a la red pública de escuelas infantiles.

Disposición adicional tercera. Reducción progresiva de las ratios

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, la administración educativa elaborará un plan que tenga como objetivo la reducción progresiva de las ratios máximas establecidas en la normativa básica para permitir una minoración de, al menos, un 10 %.

Disposición adicional cuarta. Pago delegado al profesorado de los centros concertados

La administración educativa abonará los salarios del personal docente de los centros concertados como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro y realizará el pago directo a las cooperativas acogidas al módulo íntegro, de acuerdo con la normativa básica estatal. Estos salarios tenderán a la equiparación gradual con las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, en las condiciones que se establezcan y en función de los acuerdos que se puedan lograr en la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada.

Disposición adicional quinta. Importe de los módulos económicos de la enseñanza concertada

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, se constituirá una comisión técnica en el seno de Mesa de la Enseñanza Privada Concertada, con la participación de las organizaciones empresariales, las cooperativas de enseñanza y los sindicatos más representativos del sector, para estudiar la cuantía de los módulos de otros gastos de los conciertos que evalúe el coste total de la impartición de las enseñanzas establecidas en el artículo 4.3 de esta ley en condiciones de gratuidad, y se establecerá un plan temporalizado para hacer efectiva esta gratuidad.

Disposición adicional sexta. Servicios complementarios

1. En las condiciones que se establezcan reglamentariamente, los centros docentes favorecerán la prestación del servicio de comedor escolar y el de escuela matinal, para el alumnado de la educación infantil y la educación primaria.

2. El servicio de comedor escolar se podrá prestar para el alumnado de la educación secundaria en los casos en que así se determine. La administración educativa autorizará la implantación de este servicio en los centros públicos de acuerdo con la planificación educativa.

3. La administración educativa establecerá un sistema de ayudas para el uso del servicio de comedor que garantice la compensación de las desigualdades sociales y económicas y facilite el acceso y la permanencia en el sistema educativo en condiciones de equidad.

4. La administración educativa regulará el servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de la enseñanza básica que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia porque no existe la etapa educativa correspondiente, determinará las condiciones para extender progresivamente este servicio al alumnado del segundo ciclo de educación infantil y promoverá medidas, junto con las otras administraciones públicas, para facilitar el transporte al alumnado de bachillerato y al de formación profesional.

Disposición adicional séptima. Ayudas por razones de doble y triple insularidad

Teniendo en cuenta la doble insularidad que soporta el alumnado de Menorca e Ibiza y la triple insularidad que afecta al alumnado de Formentera, los consejos insulares respectivos podrán convocar ayudas complementarias y suplementarias para los gastos de transporte y desplazamientos. Estas ayudas serán compatibles con las ayudas autonómicas con el fin de hacer frente a los costes derivados de estas situaciones.

Disposición adicional octava. Materiales didácticos curriculares

1. Los órganos de coordinación didáctica de los centros educativos seleccionarán los libros de texto y otros materiales didácticos curriculares que se utilizarán en las enseñanzas que correspondan, de acuerdo con su proyecto educativo. La edición y la adopción de estos materiales no requieren autorización previa de la administración educativa. En cualquier caso, se adaptarán al rigor científico y al currículum que corresponda a la edad del alumnado aprobado por la administración educativa y fomentarán los principios, los valores, las libertades, los derechos y los deberes establecidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y en esta ley. Asimismo, fomentarán la igualdad entre hombres y mujeres, garantizarán un uso no sexista del lenguaje y el respeto a la orientación y a la identidad sexual, no contendrán estereotipos sexistas o discriminatorios y se adaptarán a los principios y valores que se establecen en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

2. Los materiales didácticos, cuando sea necesario, se adaptarán al alumnado con capacidades diversas por medio de un formato de diseño universal para el aprendizaje o bien por medio de diseños alternativos que sean accesibles.

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales didácticos curriculares corresponde a la Inspección Educativa en el marco del ejercicio de sus funciones de seguimiento y supervisión sobre los elementos que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje.

4. Se garantizará que en la estrategia de ayudas de la consejería, el acceso al material escolar sea gratuito para las familias con rentas más bajas.

Disposición adicional novena. Digitalización educativa

1. La administración educativa y los equipos directivos de los centros promoverán la digitalización educativa, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas didácticas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y adoptarán medidas para prevenir, en el ámbito escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de estas tecnologías, atendiendo especialmente a las situaciones de violencia en la red.

2. Los entornos virtuales de aprendizaje que se utilicen en los centros educativos sostenidos con fondos públicos respetarán los estándares de interoperabilidad para permitir el acceso del alumnado desde cualquier lugar y en cualquier momento a los entornos de aprendizaje disponibles en su centro educativo.

3. Los centros educativos dispondrán de un plan de digitalización que contenga las medidas para impulsar las competencias digitales del profesorado y del alumnado y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas didácticas para el proceso de aprendizaje.

4. La administración educativa dotará a los centros educativos de la infraestructura informática necesaria para garantizar la digitalización de los centros y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos.

5. La administración educativa fomentará las medidas que sean necesarias para que el alumnado de familias vulnerables tenga acceso a los aparatos de apoyo informático y a la conectividad en el entorno habitual de residencia para garantizar la equidad en la realización de las tareas educativas que se puedan encomendar fuera del centro educativo.

6. La administración educativa promoverá la puesta en funcionamiento y la constante actualización de un banco de recursos digitales de aprendizaje a disposición de los centros educativos para potenciar el uso de materiales didácticos en formato digital, así como las actividades formativas destinadas a mejorar la capacitación digital del profesorado.

Disposición adicional décima. Voluntariado en los centros educativos

1. Los centros educativos sostenidos con fondos públicos podrán promover programas de voluntariado educativo, de acuerdo con el proyecto educativo de centro, para la mejora de las posibilidades de realización de actividades complementarias y extraescolares que puedan compensar las desigualdades y ofrecer un apoyo complementario a los aprendizajes. En ningún caso las actividades que realice este personal voluntario podrá suplir aquellos trabajos o tareas que tengan un carácter ordinario o regular.

2. La administración educativa establecerá las condiciones de estos programas para garantizar la vinculación con los objetivos y las competencias de los currículos, la educación en valores y la autonomía pedagógica de los centros en función del proyecto educativo de cada centro.

Disposición adicional undécima. Sostenibilidad de las actuaciones por delegación de competencias

1. El desarrollo de las actuaciones derivadas de la delegación de competencias que se establecen en los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de esta ley se ajustará a los compromisos que en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera asuma el Gobierno para cada uno de los ejercicios.

2. A partir del segundo año de implantación del régimen de cooperación previsto en el artículo 43 de esta ley, la consejería competente en materia de educación elevará a la consejería competente en materia de hacienda una memoria en que se detallen tanto las delegaciones autorizadas, con indicación de su coste y estado de ejecución, como una previsión, debidamente cuantificada, de las que tiene previsto autorizar durante el ejercicio siguiente. Esta memoria se someterá al informe preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de hacienda, que hará constar la incidencia que tiene la puesta en marcha de las actuaciones susceptibles de delegación en la estabilidad y la sostenibilidad del correspondiente ejercicio.

3. El Consejo de Gobierno podrá acordar, a propuesta conjunta de las consejerías competentes en materia de hacienda y de educación, la ampliación tanto de la dotación económica como del periodo de ejecución de las actuaciones delegadas.

4. Las personas titulares de las consejerías competentes en materia de hacienda y de educación interpretarán y adoptarán las medidas necesarias, y dictarán las instrucciones de gestión adecuadas encaminadas a la consecución de la eficacia del procedimiento de delegación de competencias que se establece en esta ley.

Disposición adicional duodécima. Unidad Delegada de Formentera

1. Atendiendo a las características específicas de la isla de Formentera en las condiciones que se establezcan en el marco de la estructura de la Dirección Territorial de Ibiza y Formentera, podrá crearse una unidad delegada para el ámbito territorial de Formentera.

2. Se garantizará que la prestación de los servicios educativos no universitarios en la isla de Formentera se haga en coordinación y colaboración con el Consejo Insular de Formentera, con la finalidad de que se presten en la isla los servicios públicos educativos de manera equitativa al conjunto del territorio de la comunidad autónoma, garantizando, en cualquier caso, los apoyos y las ayudas necesarias para que el alumnado esté en igualdad de oportunidades con el alumnado del resto de islas.

3. La administración educativa, a través de la Unidad Delegada de Formentera, y el Consejo Insular de Formentera constituirán una comisión de formación profesional para asegurar una oferta suficiente de plazas y la adaptación al tejido productivo de Formentera.

Disposición adicional decimotercera. Conservación del patrimonio histórico educativo

1. La administración educativa asegurará, en el marco de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de patrimonio histórico de las Illes Balears, o norma que la sustituya, la conservación y la difusión del patrimonio histórico educativo a través del Archivo y Museo de la Educación de las Illes Balears.

2. El Archivo y Museo de la Educación de las Illes Balears tendrá autonomía de gestión y contará con los recursos suficientes para ejercer, entre otras, las funciones siguientes:

- a) Recoger, catalogar, restaurar y conservar los documentos de cualquier naturaleza relacionados con la educación y los materiales educativos.
- b) Fomentar el conocimiento de la historia de la educación de las Illes Balears y hacer difusión de ella.
- c) Impulsar la investigación y las publicaciones sobre la historia de la educación de las Illes Balears.

- d) Poner al alcance del personal investigador los materiales que forman el fondo documental del archivo.
- e) Colaborar con las instituciones y los agentes sociales de las Illes Balears relacionados con el mundo de la educación, en especial con la Universidad de las Illes Balears.
- f) Proyectar la historia de la educación de las Illes Balears hacia el resto del Estado y de la Unión Europea.

3. El Archivo y Museo de la Educación de las Illes Balears podrá contar de manera puntual o continuada con personal colaborador entre aquellas personas de reconocido prestigio del mundo educativo que puedan aportar su conocimiento para el logro de los objetivos de la entidad.

4. La organización y el funcionamiento del Archivo y Museo de la Educación se establecerán reglamentariamente.

Disposición adicional decimocuarta. Gasto público educativo

El Gobierno de las Illes Balears, para lograr los objetivos de esta ley y en la medida que mejore el sistema de financiación, incrementará progresivamente los recursos destinados al sistema educativo tomando como referencia los países más desarrollados de la Unión Europea en el ámbito educativo, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 155.2 y en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en la redacción dada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la cual se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, contribuyendo así al objetivo de elevar gradualmente el gasto público educativo total, que se situará en el plazo de ocho años en, al menos, el 5 % del producto interior bruto.

Disposición adicional decimoquinta. Colaboración con otros servicios públicos relacionados con los servicios educativos

Los diferentes departamentos y consejerías del Gobierno de las Illes Balears colaborarán para el desarrollo de servicios públicos relacionados con los servicios educativos, como son la prevención y la protección de la salud de la comunidad educativa, la atención sanitaria escolar, el desarrollo del plan autonómico de conciliación laboral y familiar y la respuesta asistencial a las necesidades específicas de los escolares vulnerables, entre otros.

Disposición adicional decimosexta. Reconocimiento social de los equipos directivos

En el plazo de dos años y en el marco de la normativa básica, el Gobierno elaborará, con la participación de la Mesa de Diálogo Permanente con los Directores y las Asociaciones de Directores regulada en esta ley, un plan para mejorar el reconocimiento social de los equipos directivos que incluya las medidas necesarias para mejorar los incentivos de los profesionales docentes para formar parte de los equipos directivos. Entre las medidas del plan se tendrá que incluir la regulación de los complementos retributivos asociados al desarrollo de cargos directivos.

Disposición adicional decimoséptima. Plan de impulso de los colegios integrados de primaria y secundaria

En el plazo de un año contador desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de las Illes Balears impulsará un plan para la implantación progresiva de los colegios de

educación infantil y primaria integrados con los de educación secundaria obligatoria (CEIPIESO) previstos en el artículo 107 de esta ley en todo el territorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Estructura de las retribuciones del personal funcionario docente

1. Mientras no se determinen las retribuciones del personal funcionario docente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de esta ley, se mantiene la estructura retributiva que actualmente se aplica a este personal, que es la que se indica en los apartados siguientes.

2. Las retribuciones del personal funcionario docente no universitario de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se clasifican en básicas y complementarias.

3. Son retribuciones básicas, de acuerdo con lo que establece la normativa básica estatal:

- a) El sueldo base.
- b) Los trienios.

4. Son retribuciones complementarias:

- a) El complemento de destino, que retribuye la pertenencia a un grupo o subgrupo de clasificación y nivel o la ocupación de puestos de trabajo de nivel superior.
- b) El complemento específico anual, que está formado por tres componentes:
 - 1º. El componente general, que retribuye el ejercicio en puestos de trabajo de la función pública docente.
 - 2º. El componente singular, que retribuye el ejercicio en los órganos de gobierno unipersonal de los centros y en otros puestos de carácter singular.
 - 3º. El componente por formación permanente, o sexenio, que se percibe por cada seis años de servicio como funcionario en la función pública docente, siempre que se hayan acreditado durante este periodo, como mínimo, cien horas de actividades de formación, distribuidas en créditos de al menos ocho horas cada uno, homologadas o reconocidas por la consejería competente en materia de educación.
- c) El complemento específico de tutor, que retribuye el ejercicio de la función tutorial.
- d) El complemento específico de asesor técnico docente, que retribuye el ejercicio de funciones en los centros directivos de la consejería competente en materia de educación, que implican desarrollar tareas administrativas y de asesoramiento relacionadas directamente con aspectos docentes.
- e) El anticipo a cuenta del primer ciclo de educación secundaria obligatoria, que retribuye al personal docente del cuerpo de maestros que ejerce la docencia en el primer ciclo de la ESO.
- f) Las gratificaciones, que retribuyen los servicios extraordinarios prestados fuera del horario o la jornada habitual de trabajo.
- g) El complemento de comunidad autónoma, que retribuye la equiparación de las retribuciones del personal docente con la de los funcionarios de la Administración General de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

5. Las pagas extraordinarias son dos al año y se merecen por el importe que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con las previsiones establecidas en la legislación básica estatal.

6. El personal funcionario docente tiene derecho a percibir las indemnizaciones que se establezcan reglamentariamente, entre las cuales habrá, en todo caso, la indemnización por residencia.

Disposición transitoria segunda. Estructura de las retribuciones del personal laboral docente

1. Mientras no se determinen las retribuciones del personal laboral docente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 93 de esta ley, se mantiene la estructura retributiva que actualmente se aplica a este personal, que es la siguiente:

- a) Las retribuciones básicas: sueldos y trienios.
- b) El complemento de profesor de religión y complemento de profesor especialista, en el que pasan a integrarse el complemento denominado a cuenta del complemento específico, establecido en el Decreto 72/2000, de 14 de abril, de aplicación, para el año 2000, del Acuerdo logrado en la Mesa General de Negociación de la comunidad autónoma de las Illes Balears relativo al fondo para la mejora de los servicios públicos, y el complemento llamado Acuerdo 28-07-2007, previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2006, por el que se aprueba la propuesta de acuerdo para la mejora de la enseñanza pública, relativo a las plantillas de personal de los centros docentes públicos, aprobada por la Mesa Sectorial de Educación.
- c) El complemento por formación permanente o sexenio.
- d) El complemento de comunidad autónoma.
- e) Las pagas extraordinarias, que son dos al año.
- f) La indemnización por residencia.

2. En todo caso, las cuantías que en el cómputo global percibirán por estos conceptos serán las mismas que perciban los funcionarios del mismo nivel educativo.

Disposición transitoria tercera. Delegaciones de Educación

Mientras no se regulen reglamentariamente las direcciones territoriales previstas en el artículo 161 de esta ley, las actuales delegaciones de Educación de Menorca y de Ibiza y Formentera mantendrán, respectivamente, las funciones que actualmente tienen asignadas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Normas que se derogan

Quedan derogadas todas las disposiciones legales del mismo rango o inferior que se opongan a lo establecido en esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Órganos y entidades instrumentales

En un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de las Illes Balears regulará la estructura, la composición, la organización y el funcionamiento

de los órganos y de las entidades que actualmente forman parte de la organización institucional del sistema educativo para adecuarlos a esta ley. Estos órganos y entidades son los que se enumeran a continuación:

- a) El Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de las Illes Balears.
- b) El Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar de las Illes Balears.
- c) El Instituto para la Educación de la Primera Infancia.
- d) El Instituto de Cualificaciones Profesionales de las Illes Balears.
- e) El Instituto de Enseñanzas a Distancia de las Illes Balears.
- f) El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos.
- g) La Fundación para los Estudios Superiores de Música y Artes Escénicas de las Illes Balears.

Disposición final segunda. Instituto de Enseñanzas Artísticas Superiores de las Illes Balears

El Gobierno de las Illes Balears, en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, formulará las propuestas legislativas necesarias para la creación del Instituto de Enseñanzas Artísticas Superiores de las Illes Balears como el instrumento adecuado para conseguir la máxima eficiencia en la gestión del conjunto de centros públicos de estudios artísticos superiores de los que es titular la comunidad autónoma y para favorecer la calidad de estos centros.

Disposición final tercera. Desarrollo de la carrera docente

Con el fin de impulsar el desarrollo de la profesión docente y mejorar su reconocimiento, la administración educativa presentará, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, la propuesta que regule la carrera docente.

Disposición final cuarta. Regulación de otros profesionales educativos

El Gobierno de las Illes Balears determinará lo establecido en el artículo 61.4 de esta ley en un plazo de seis años desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final quinta. Reglamento de organización de centros

En un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de las Illes Balears adaptará el Reglamento de organización de los centros a las disposiciones de esta ley.

Disposición final sexta. Autonomía de gestión económica de los centros

En un plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, se regulará el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros públicos no universitarios que se prevé en el artículo 169.5 de esta ley.

Disposición final séptima. Modificación del texto refundido de la Ley de consejos escolares de las Illes Balears, aprobado por el Decreto legislativo 112/2001, de 7 de septiembre

El texto refundido de la Ley de consejos escolares de las Illes Balears, aprobado por el Decreto legislativo 112/2001, de 7 de septiembre, se modifica en los términos siguientes:

Uno. El artículo 3 bis queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 3 bis

1. Las reuniones de todos los órganos de los consejos escolares regulados en esta ley se harán en un horario que posibilite la participación de todos sus miembros.

2. Los representantes del Consejo Escolar de las Illes Balears tienen derecho a participar telemáticamente y con plenos efectos en las reuniones de sus órganos.

3. Los representantes de los alumnos en los consejos escolares regulados en esta ley recibirán de sus centros y de su profesorado el apoyo adecuado para hacer posible su participación y, a tal efecto, se adoptarán medidas como adaptarles la carga lectiva y los calendarios de entrega de trabajos o de realización de exámenes o pruebas. La dedicación a tareas de representación se valorará a efectos académicos de acuerdo con la normativa aplicable.”

Dos. La letra c) del artículo 9.1 queda redactada de la manera siguiente:

“c) Cuatro personas en representación del alumnado de la enseñanza no universitaria, propuestas por las confederaciones o federaciones de asociaciones de alumnado o, en su defecto, asociaciones de alumnado, de acuerdo con su representatividad. Tres de éstas lo serán en representación del alumnado de centros públicos y una, en representación del alumnado de centros concertados.”

Tres. El apartado 6 del artículo 9 queda redactado de la manera siguiente:

“6. El presidente del Consejo Escolar de las Illes Balears recibirá las dietas o las retribuciones adecuadas al eficaz cumplimiento de sus funciones, que permitirán la dedicación plena a las mismas.”

Cuatro. El artículo 16.3 queda redactado de la manera siguiente:

“3. El presidente y el vicepresidente de los consejos escolares insulares serán nombrados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejo insular respectivo. El mismo consejo escolar insular elegirá a las personas propuestas por mayoría de dos tercios en primera votación o por mayoría simple en segunda votación.”

Disposición final octava. Actualización de la regulación de las escuelas de música y danza reconocidas

El Gobierno de las Illes Balears, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, actualizará la regulación de las enseñanzas impartidas por las escuelas de música y danza reconocidas, contenida en el Decreto 37/1999, de 9 de abril, por el que se regulan las escuelas de música y danza de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Disposición final novena. Consejería competente en materia de educación

A los efectos de esta ley, se entiende por administración educativa la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de las competencias educativas que le son propias y actúa por medio de la consejería competente en materia de educación. Asimismo, se entiende por consejería la consejería competente en materia de educación.

Disposición final décima. Desarrollo normativo

Se habilita al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar y aplicar esta ley.

Disposición final undécima. Entrada en vigor

Esta ley entra en vigor al día siguiente de haberse publicado en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

§2

LLEI 1/2022, DE 8 DE MARÇ, D'EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS¹

(BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els contextos educatius actuals es veuen afectats en gran mesura pels fenòmens que s'esdevenen en la nostra societat, que experimenta canvis profunds a gran velocitat, perquè un dels aspectes més significatius de l'actualitat consisteix en la vivència d'una realitat mutable i accelerada. Els canvis en el món laboral i els sistemes de producció, en la comunicació i la transmissió d'informació, en la mobilitat i les migracions, en les formes de relació i en la recerca científica i la generació de coneixement es produeixen cada cop més ràpidament i provoquen la sensació que l'educació no els arriba a assimilar ni dona una resposta eficaç als desafiaments que comporten.

Els centres educatius són un reflex de la diversitat cultural de la nostra societat en la qual conflueixen valors diversos, cultures distintes, diferents religions, costums o llengües que poden ser percebuts com a divergents. Cal promoure una educació que vagi més enllà del multiculturalisme i la integració, una educació fruit del diàleg, la convivència i el respecte que faci possible un intercanvi real entre totes les cultures que compartim un mateix territori. Aquesta tasca tan sols serà possible en el marc d'una perspectiva inclusiva, d'una educació intercultural amb l'objectiu d'una integració i un acolliment reals dins la nostra societat respectant la nostra cultura pròpia.

Amb aquesta llei s'opta de forma clara per evitar les desigualtats i garantir la inclusió i la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat amb la finalitat de bastir un sistema educatiu sense exclusions que permeti l'exercici de les llibertats individuals, l'aprenentatge en el marc d'un sistema obert i inclusiu sense barreres en tots els àmbits. Aquest principi d'inclusió, juntament amb l'atenció a la diversitat, abraça els criteris organitzatius, pedagògics, d'atenció educativa personalitzada, de recursos i de participació necessaris per promoure l'èxit educatiu garantint l'educació més adequada per a l'alumnat.

Dins del principi d'inclusió, a les Illes Balears, en tant que comunitat amb doble oficialitat lingüística, constitueix un repte singular la inclusió lingüística de l'alumnat. Efectivament, l'exercici ple de la ciutadania a les Illes Balears demana que el sistema educatiu garanteixi que en finalitzar l'educació obligatòria tots els ciutadans siguin capaços d'emprar amb correcció les dues llengües oficials. Atesa la situació sociolingüística, amb una gran preponderància del castellà en múltiples esferes de la vida social, demana que el sistema educatiu estigui especialment atent a garantir una exposició suficient a l'ús habitual i funcional de la llengua catalana com a forma de

¹ Aquesta llei ha estat modificada pel Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022).

contribuir a garantir el dret al coneixement de les dues llengües oficials que consagra l'article 4.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

D'altra part, els centres educatius estan immersos en aquesta era de canvis amb un volum d'interrogants que fan que es plantegi el sentit últim de l'acció educativa: educar per què i vers quin model de societat i de ciutadania. Caldrà respondre a tot això si es vol que l'alumnat domini competències diverses i desenvolupi destreses que li permetran fer front amb èxit a les situacions imprevisibles que se li presentaran en la vida quotidiana.

L'objectiu de l'educació ha de ser desenvolupar persones obertes al canvi perquè puguin encarar de manera constructiva les perplexitats d'un món on els problemes sorgeixen més veloçment que les respostes. Cal una educació que pugui facilitar la formació de persones amb la capacitat de fer front als nous reptes que la societat planteja, amb capacitat crítica per contribuir a la millora de la societat i a la construcció d'un món més just. El sistema educatiu ha d'afavorir l'evolució personal de l'alumne amb totes les seves capacitats i dimensions personals i intrapersonals. La innovació s'hi ha de promoure i el potencial creatiu dels equips directius, del professorat i de l'alumnat s'hi ha de poder estimular. En aquest sentit, la docència s'ha d'entendre com la mediació entre el coneixement i l'aprenentatge en la línia d'aprendre a fer, aprendre a ser, aprendre a conèixer i aprendre a conviure.

El desenvolupament educatiu de la ciutadania ha de permetre la participació social, democràtica, responsable i lliure, per la qual cosa és necessari, cada cop més, garantir que totes les persones rebin un nivell formatiu de qualitat per actualitzar les seves competències i coneixements, que els han de permetre adaptar-se a la societat avançada en la qual estan immerses.

La Recomanació (UE) 2018/C 189/01 del Consell, de 22 de maig de 2018, relativa a les competències clau per a l'aprenentatge permanent, insta els estats membres a desenvolupar l'oferta de les competències clau com una combinació de coneixements, capacitats i actituds, i les identifica com aquelles competències que totes les persones precisen per al seu desenvolupament personal i la seva possibilitat d'ocupació, integració social, estil de vida sostenible, èxit en la vida de les societats pacífiques, manera de viure saludable i ciutadania activa. Aquestes competències s'han de desenvolupar amb una perspectiva d'aprenentatge permanent, des de la primera infància fins a la vida adulta, i per mitjà de l'aprenentatge formal, el no formal i l'informal en tots els contextos, inclosos la família, el centre educatiu, el lloc de treball, l'entorn i altres comunitats.

L'educació, per tant, és un dret de totes les persones que s'ha de garantir al llarg de tota la vida i ha d'atendre totes les facetes del seu desenvolupament personal, emocional i professional. Una de les obligacions essencials dels poders públics és garantir d'una manera efectiva aquest dret a l'educació i proporcionar els mitjans necessaris per elevar la qualitat del sistema educatiu a fi de permetre l'actualització dels coneixements, la implementació de noves eines educatives, la millora de la formació del professorat, la gestió àgil i eficaç dels centres educatius, més participació i corresponsabilitat del conjunt de la comunitat educativa i l'establiment de ponts efectius entre els interessos educatius i socials i els altres agents, perquè els avantatges d'una educació de qualitat arribin a tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva procedència, independentment de les seves capacitats i característiques culturals, lingüístiques, de gènere o religioses.

L'exercici d'aquest dret a l'educació implica que l'acció educativa s'ha d'entendre com a servei públic que s'exerceix per mitjà d'una xarxa de centres sostinguts amb fons públics que inclou els centres educatius de titularitat pública i els centres privats concertats. Així, conforme al que s'estableix en l'article 27.3 de la Constitució Espanyola, els poders públics han de garantir el dret que assisteix als pares i les mares a l'educació dels seus fills d'acord amb les pròpies conviccions, per la qual cosa es constata que, si bé l'educació pública constitueix la base del sistema educatiu, l'escola privada i concertada és un element clau d'aquest sistema, que queda reconegut en aquesta llei per la seva rellevància i contribució al fet educatiu a les Illes Balears.

Una educació de qualitat ha d'arribar a tots els alumnes, sense exclusió, perquè la qualitat i l'equitat constitueixen dos principis indissociables. Un dels instruments més efectius per aconseguir aquesta finalitat és una escolarització equilibrada i equitativa de l'alumnat que ha d'anar acompanyada d'una dotació de recursos suficient i que suposa situar els drets de la infància entre els principis rectors del sistema educatiu, segons el que estableix la Convenció sobre els drets de l'infant, aprovada per les Nacions Unides, que reconeix l'interès superior del menor, el seu dret a l'educació i l'obligació dels poders públics d'assegurar el compliment efectiu d'aquests drets, a més de suposar que es compleix amb els principis establerts en la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

L'educació, així mateix, ha de garantir també el compliment efectiu dels drets dels infants, joves i de la resta de persones amb diversitat funcional, d'acord amb el que determina la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides, especialment pel que es refereix a l'accés a una educació inclusiva.

L'educació en els primers anys de vida d'una persona és fonamental per a la construcció de la personalitat i el desenvolupament de totes les capacitats individuals; és per aquest motiu que la programació i el desenvolupament de l'educació infantil han d'atendre, prioritàriament, la compensació dels efectes que les desigualtats d'origen cultural, social i econòmic tenen en l'aprenentatge i l'evolució infantils, així com la detecció precoç i l'atenció primerenca de necessitats específiques de suport educatiu, per assolir una educació amb caràcter preventiu, igualitari i compensador que garanteixi l'equitat i la qualitat en l'atenció i educació a la primera infància.

Les polítiques públiques educatives esdevenen imprescindibles a l'hora de combatre el masclisme i denunciar i pal·liar les situacions de desigualtat que es generen. Tal i com es posa de manifest en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, «el principi d'igualtat de dones i homes i la prohibició expressa de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe estan recollits en diferents normes jurídiques». És més necessari que mai que l'educació adopti un enfocament amb perspectiva de gènere a fi d'aconseguir un model educatiu basat en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el gènere i l'orientació i la identitat sexuals. Un dels pilars del sistema educatiu ha de ser la coeducació. Les polítiques públiques educatives, partint de la coeducació com a eina indispensable, han de dirigir els esforços a treballar en la prevenció de les violències masclistes i en el respecte a la diversitat afectivosexual. En el marc de les escoles coeducatives s'ha de promoure l'ús no sexista del llenguatge i la reproducció d'una imatge plural, diversa i no estereotipada de les dones i els homes. Així mateix, s'ha de tenir en especial consideració el principi de transversalitat i d'interseccionalitat en el marc de les polítiques públiques educatives.

El reconeixement de la importància d'atendre un desenvolupament sostenible, d'acord amb el que estableix l'Agenda 2030 de la UNESCO, fa necessari impulsar un sistema educatiu que aposti per programes educatius que incorporin els coneixements, els valors i les actituds adients per viure de manera activa i crítica, resoldre problemes comuns a tota la ciutadania i potenciar l'educació per a la pau, els drets humans i la memòria democràtica, la igualtat entre homes i dones, la interculturalitat, la transició ecològica, el benestar nutricional, la vida saludable, i els hàbits convenients per a l'exercici físic.

L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, que s'ha inserit de manera quotidiana en la societat, condiona la manera de comprendre la realitat i de participar en la vida social. Així, una educació per al segle XXI també ha d'incloure la competència digital, amb accés per a tot l'alumnat i en totes les etapes educatives, especialment des d'un enfocament transversal i a partir d'una educació comprensiva, perquè la societat reclama un sistema més inclusiu, més modern, més obert i amb menys rigidesa que desenvolupi el potencial i el talent de l'alumnat, per la qual cosa el sistema educatiu ha d'estar obert a les possibilitats que ofereixen els nous models educatius i garantir les mateixes oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir un nivell òptim d'aprenentatge.

Caldrà adoptar enfocaments més transversals, orientats a fer que tot l'alumnat tenguí garanties d'èxit en els processos educatius, i assegurar una formació integral centrada en el desenvolupament de les competències que incorpori elements formatius associats a la comunicació, la formació artística, les ciències i la tecnologia, les humanitats i l'activitat física, des d'una òptica d'educació inclusiva, d'igualtat entre homes i dones i de no-discriminació, de promoció de la salut, d'educació afectivosexual, d'igualtat d'oportunitats, de cura del medi ambient, de respecte mutu i de cooperació entre iguals.

Així doncs, el procés educatiu ha d'estar centrat en la formació integral de l'alumnat, tant en l'àmbit de la seva formació en diferents disciplines com en l'àmbit del seu creixement personal. En aquest sentit, es treballaran els aspectes relacionats amb l'educació emocional al llarg de les diferents etapes educatives per contribuir a l'autoconeixement, l'autoestima i la capacitat d'establir unes relacions interpersonals satisfactòries, de tal manera que, indistintament de les circumstàncies socials i personals que envoltin l'alumne, pugui disposar de les eines adients per enfrontar-les amb èxit.

En el benentès que l'esforç personal és una garantia per a la superació constant i la consecució dels objectius individuals i col·lectius, es treballarà des de la perspectiva i la convicció que el valor de l'esforç és inherent a la qualitat educativa i necessari per a l'assoliment dels objectius acadèmics i personals. L'equitat educativa només es pot aconseguir mitjançant un sistema educatiu obert, flexible i adaptat a les necessitats individuals de cada alumne i de cada grup-classe, unit a l'interès i a l'esforç personal, al foment i la valoració de l'estudi i el treball individual i a la implementació de didàctiques de treball i cooperació en grup.

II

L'article 27 de la Constitució Espanyola reconeix el dret de totes les persones a l'educació i estableix els principis essencials sobre els quals se sustenta l'exercici d'aquest dret.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix en l'article 36.2 que correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per mitjà del Reial decret 2243/1996, de 18 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d'universitats, la comunitat autònoma de les Illes Balears es va fer càrrec de la gestió educativa universitària a partir de l'1 de novembre de 1996. Igualment, des de l'1 de gener de 1998, el Govern de les Illes Balears ha gestionat l'educació no universitària, en virtut del Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari, ampliat per mitjà del Reial decret 1001/1999, d'11 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari.

L'experiència en la gestió educativa de més de vint anys aconsella poder disposar d'un marc general de regulació del sistema educatiu no universitari de les Illes Balears que permeti un ordenament legal de l'educació que garanteixi la qualitat, la millora dels resultats educatius i l'augment de les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania.

A més, aquesta regulació ha de ser prou flexible per garantir l'execució de les polítiques educatives des de les diverses opcions polítiques que tinguin responsabilitat de govern. No obstant això, cal dotar el sistema educatiu d'una major estabilitat, amb la finalitat de permetre que les decisions que s'adoptin no siguin arbitràries i se sustentin en fonaments científics i pedagògics; es basin en el consens, en la transparència i en l'anàlisi objectiva de la situació del sistema educatiu; i garanteixin la participació de la comunitat educativa.

Des que es van assumir les competències en matèria d'educació no universitària, el sistema educatiu a les Illes Balears ha aconseguit canvis positius en el decurs de les dues darreres dècades, però encara té importants reptes per resoldre. Els intensos canvis socials, econòmics i culturals que es produeixen a les Illes Balears fan més complexa la realitat educativa.

De fet, la comunitat autònoma de les Illes Balears és una de les comunitats amb més alumnat estranger a gairebé tots els nivells educatius. Les taxes d'escolarització en els ensenyaments no obligatoris són més baixes que la mitjana estatal. En conjunt, l'esperança de vida escolar en el sistema educatiu de les Illes Balears és menys llarga que a la resta de comunitats autònomes, la qual cosa significa que hi ha una tendència a no continuar amb els estudis després de l'etapa obligatòria, que fa que també sigui inferior l'esperança de vida escolar en els ensenyaments universitaris en relació amb el conjunt de l'Estat.

Encara que s'hagin produït millores constatables els últims anys, la taxa d'idoneïtat de la comunitat autònoma de les Illes Balears és encara baixa i minva a mesura que s'incrementa l'edat de l'alumnat, amb un dels nivells més alts de repetició de curs en l'educació primària i l'educació secundària obligatòria en comparació amb altres comunitats autònomes. Especialment als dotze anys, coincidint amb el trànsit entre l'etapa de l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, les taxes d'idoneïtat a les Balears són inferiors a les estatals.

L'índex d'abandonament escolar a l'Estat espanyol és alt en relació amb els dels països de l'entorn i es troba lluny de l'objectiu de no superar el 10 % establert per la Unió Europea. Les Illes Balears presenten un índex d'abandonament encara superior al de la mitjana estatal. Si bé, igual que en altres indicadors, es detecta una millora progressiva tant al conjunt de l'Estat com a les Illes Balears, queda molt de camí a recórrer. Els indicadors de fracàs i abandonament dels estudis postobligatoris solen associar-se amb indicadors de context laboral relacionats amb taxes d'activitat, ocupació i atur. Així, l'obertura del mercat laboral a la contractació de mà d'obra juvenil es pot traduir en vulnerabilitat d'aquest col·lectiu si es comprova que les taxes d'atur més altes corresponen a aquelles persones que tenen un nivell inferior en la segona etapa de l'educació secundària. Tot plegat, fa urgent la millora del nivell educatiu de la població activa de les Illes Balears que presenta un dels valors més reduïts de tot l'Estat en titulació en estudis superiors.

A la necessitat de donar resposta a la influència del context socioeconòmic i laboral sobre el rendiment educatiu s'ha d'afegir la vinculació existent entre el sistema educatiu i el productiu, entre la formació professional i el món laboral, per tal de donar més valor a la formació i adoptar mesures que afavoreixin la permanència en el sistema educatiu. No obstant això, a la finalitat econòmica i laboral s'hi suma la necessitat que el sistema educatiu sigui realment equitatiu, per la qual cosa cal revisar el model de repetició, detectar els problemes d'aprenentatge, ajustar l'atenció a les necessitats dels alumnes i fomentar la continuïtat dels estudis postobligatoris.

D'altra part, el constant increment de la població escolar de les Illes Balears, la necessitat de reduir l'abandonament escolar i el dèficit històric en infraestructures educatives que pateix les Illes Balears fan urgent una major inversió en infraestructures educatives i una intensificació en la reforma i nova construcció de centres educatius, al marge de la possibilitat d'establir nous concerts educatius per entendre ateses necessitats d'escolarització. Es tracta, a més d'incrementar els recursos disponibles, de cercar vies més àgils per implementar els plans d'infraestructures i els serveis complementaris d'acord amb les noves necessitats, amb la col·laboració del conjunt de les administracions públiques. Aquest fet ha d'implicar la posada en funcionament d'instruments de col·laboració per mitjà de convenis o de delegació de competències, amb el finançament adequat per fer possible l'abastiment de les infraestructures i els serveis complementaris adients per a la millora del sistema educatiu.

La situació exigeix adoptar iniciatives per avançar vers una educació de més qualitat, atenent les desigualtats i consolidant una oferta formativa atractiva. Les administracions públiques han d'apostar decididament per un augment de la inversió en polítiques educatives i per la seva eficiència, que encara és lluny de situar-se en la dotació necessària per salvar el desnivell que ens separa dels països més avançats.

Certament, la millora educativa no és una qüestió només dels recursos ni de les polítiques de les administracions públiques. El conjunt de la societat té responsabilitats que no es poden obviar, des de l'empresariat, que ha de valorar la formació; les famílies, que són clau en la transmissió de valors i l'impuls de la motivació per a l'aprenentatge; el conjunt de la societat civil; els mitjans de comunicació; les organitzacions del tercer sector; i, especialment, la comunitat educativa, com a actor principal de l'educació, sense la qual no es poden abordar els desafiaments per donar solució als problemes del sistema educatiu i fer front als nous reptes.

Aquesta llei pretén posar les bases per assolir una societat més preparada i millor formada, més democràtica, més justa, més plural, més solidària i més tolerant en el marc de la Constitució Espanyola i de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i vol avançar en aspectes fonamentals que han de fer possible una educació de més qualitat per a la ciutadania de les Illes Balears.

Així, es pretén millorar la capacitat d'aprendre al llarg de la vida, fomentar un aprenentatge de qualitat per a l'alumnat de totes les etapes, augmentar el rendiment escolar en l'educació bàsica, obligatòria i postobligatòria, disminuir la taxa d'abandonament escolar, adequar l'educació als requeriments de la societat del coneixement, reduir les desigualtats, abordar la inclusió escolar de tot l'alumnat, millorar la qualificació professional i mantenir la cohesió social i les senyes d'identitat i culturals pròpies de les Illes Balears.

També s'intenta dotar d'una major estabilitat el sistema educatiu, facilitant un marc institucional que en garanteixi la millora sistemàtica a partir d'una avaluació qualitativa que proposi mesures correctores en tot allò que sigui necessari. Es tracta de promoure que l'acció educativa es desenvolupi en un context que estimuli la innovació i l'autonomia dels centres i consolidi les bones pràctiques.

Aquesta llei regula els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen als diversos agents de la comunitat educativa, perquè només a partir del consens social serà possible la implementació de les actuacions que requereix per assolir els objectius que s'hi estableixen. Alhora, pretén impulsar l'equitat del sistema educatiu i les actuacions que ha de dur a terme l'administració educativa per eliminar les barreres que limiten l'accés, la participació i l'aprenentatge del conjunt de l'alumnat. Es tracta de donar el suport necessari per fomentar de manera òptima el desenvolupament educatiu i social i que així tothom pugui accedir a una educació inclusiva en igualtat de condicions amb les altres persones.

De fet, el Consell Escolar de les Illes Balears va aprovar el dia 4 d'abril de 2017 el document que estableix les bases per a un possible acord educatiu i proposa algunes de les mesures que s'inclouen en aquesta llei. També s'han tingut en compte algunes aportacions de l'informe de 2 d'octubre de 2018 emès per la ponència creada el dia 11 d'octubre de 2017 en el si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears per a l'estudi d'aquest document lliurat al Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears.

Dit document es va elaborar a partir de la feina feta per la plataforma Illes per un Pacte, que agrupa més de quaranta entitats socials del conjunt de les Illes Balears amb incidència en l'àmbit educatiu. El document sol·licita una normativa que pugui ser acceptada per la majoria social i que permeti cobrir les necessitats reals del sistema educatiu i afavoreixi una educació de qualitat que es fonamenti, entre altres aspectes, en la necessitat de promoure una educació de qualitat i en equitat, en la recuperació de l'educació en valors cívics, en la participació democràtica de la comunitat educativa, en l'avaluació formativa orientada a la millora del procés d'aprenentatge, en la descentralització dels currículums i l'enfocament curricular per competències, en la dignificació de la tasca docent, en la millora de les infraestructures educatives, en el reconeixement de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i com a element essencial per al manteniment de la cohesió social, en els plans de millora per a l'èxit escolar i la convivència, en l'adequació de la formació i els recursos didàctics i tecnològics a les noves necessitats educatives i en la consideració de la xarxa

pública de centres com a element bàsic del sistema, en convivència amb l'ensenyament concertat, i que tot això permeti la consideració real de l'educació com un servei públic de qualitat.

L'objectiu últim d'aquesta llei és la millora de la qualitat de l'educació a les Illes Balears. Es tracta, si més no, d'incorporar les noves sensibilitats i demandes socials vers l'educació per ser capaços de reafirmar la confiança en el sistema educatiu i promoure un nou impuls a les vies de l'èxit educatiu. No obstant això, la millora de la qualitat requereix el diàleg permanent amb la comunitat educativa i tots els agents implicats, des d'un compromís col·lectiu per a la recerca de les respostes més adients a les necessitats que planteja el sistema.

Aquest objectiu és coherent amb la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que, segons indica el seu preàmbul, té per finalitat la d'establir un ordenament legal renovat que augmenti les oportunitats educatives i formatives de tota la població per contribuir a la millora dels resultats educatius de l'alumnat i satisfer la demanda generalitzada en la societat espanyola d'una educació de qualitat per a tothom.

III

Aquesta llei s'estructura en un títol preliminar, nou títols específics, disset disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i onze disposicions finals.

El títol preliminar estableix l'objecte de la llei, promulga el dret constitucional a l'educació, que s'ha d'exercir en condicions d'igualtat, les quals ha de garantir el Govern de les Illes Balears, i estableix els principis generals, pedagògics i organitzatius del sistema educatiu de les Illes Balears. En aquest apartat destaca la consideració que s'atorga al sistema educatiu de principal instrument per garantir el dret que l'Estatut d'Autonomia garanteix als ciutadans de les Illes Balears de conèixer les dues llengües oficials, que és el marc en el qual cal entendre les diverses disposicions que conté la llei respecte de l'ús de les llengües oficials en el sistema educatiu.

El títol I determina l'estructura del sistema educatiu, l'ordenació dels ensenyaments i les etapes educatives que el constitueixen, l'avaluació i la promoció en les diferents etapes, la formació professional com un sistema integrat, l'oferta educativa de la formació professional, que aposta per la flexibilitat i la conciliació de la formació amb l'ocupació d'un lloc de feina; l'educació de les persones adultes com a sistema de formació permanent al llarg de la vida; els ensenyaments de règim especial i els ensenyaments artístics superiors.

En el marc d'aquest títol cal esmentar la vigència de la Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears, que determina els principis generals de l'educació i la formació permanents de persones adultes i n'estableix les característiques principals.

El títol II regula els objectius de la cooperació amb la Universitat de les Illes Balears per a la millora del sistema educatiu i la col·laboració de les diferents administracions públiques per afavorir un model educatiu propi, i per a la millora de l'oferta de l'educació formal i no formal, atès que l'educació és una responsabilitat compartida entre administracions d'acord amb les respectives competències.

Així mateix, preveu els mecanismes de cooperació entre l'administració educativa, els consells insulars i els ajuntaments, així com la delegació de competències, per fer

més eficaç la gestió educativa. El conjunt de les administracions públiques —l'estatal, l'autonòmica, les insulars i les locals— ha de col·laborar per facilitar un acostament dels centres a les demandes i als recursos de l'entorn i ha d'ajudar a fer possible l'educació al llarg de tota la vida com a repte essencial establert per la Unió Europea.

El títol III es dedica a la comunitat educativa, element clau per al bon funcionament del sistema educatiu, del qual n'és la protagonista. Defineix els agents i les institucions que la integren, regula els drets i els deures dels diferents agents i amplia les formes de participació i la presa de decisions compartides. Amb aquesta finalitat institucionalitza un conjunt d'òrgans de participació per tal de garantir que les decisions educatives s'adoptin amb el màxim consens possible com a via per establir el sistema educatiu i millorar-ne la qualitat.

Tenen una consideració especial la Mesa Sectorial d'Educació com a òrgan de negociació col·lectiva de les condicions sociolaborals del personal docent, i la Mesa de l'Ensenyament Concertat com a òrgan de negociació tripartita d'acords de millora per al finançament de les condicions sociolaborals del personal docent i no docent d'aquests centres que, a partir de l'aprovació d'aquesta Llei, ha de veure processos de millores en les condicions de treball i en el reconeixement de la seva tasca educativa.

És responsabilitat del conjunt de la comunitat educativa la millora del sistema. L'horitzó de qualitat afecta les administracions públiques, que tenen l'obligació de disposar els mitjans i recursos adients i facilitar condicions adequades per avançar i consolidar els elements de millora, i afecta i compromet també el professorat, que és el responsable de l'exercici de l'acció educativa. Les famílies tenen també la seva responsabilitat en la millora del sistema educatiu en funció del dret i el deure de contribuir a l'educació dels seus fills i implicar-se en la participació en el si de la comunitat educativa.

El títol IV es refereix a les característiques de la funció docent i en regula les formes d'accés i provisió, el règim de comissió de serveis, el suport, la protecció i la dignificació professional en el marc de la carrera docent. Així mateix, regula el Registre General del Personal Docent no Universitari de les Illes Balears i l'accés a les dades personals que figuren en l'expedient. Sense la participació i la implicació dels docents no serà operativa la implantació del model que s'estableix en aquesta Llei. Per això s'intenta ampliar les seves perspectives professionals, potenciar la seva formació i garantir el suport de l'administració a la funció docent.

La regulació té en compte el que s'estableix en la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que preveu que determinats col·lectius de l'administració autonòmica, en consideració a les seves característiques especials, puguin ser objecte de regulació específica mitjançant normes que adequin aquesta Llei a les seves peculiaritats. Específicament, l'article 3.1.b) determina que el personal docent i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica es regulen pels preceptes d'aquesta Llei únicament en aquelles matèries que no estiguin regulades per la normativa bàsica específica de l'Estat ni per la normativa autonòmica específica de desplegament.

En aquest títol també s'insereix la regulació de la figura dels assessors tècnics docents i es dota d'objectivitat la selecció d'aquest personal amb funcions en els serveis educatius, així com la de professors associats i visitants, en els termes establerts en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

El títol V regula la xarxa de centres educatius i la creació de nous centres, n'estableix la tipologia i regula els processos d'escolarització des d'un marc d'escolarització equitativa i d'inclusió educativa.

A més, aquest títol aposta per l'autonomia dels centres, tant pedagògica i organitzativa com de gestió ordinària, i dota els centres d'una major capacitat, dins els límits de les competències pròpies, per al desenvolupament curricular i l'elaboració i la implementació d'un projecte educatiu que respongui a les característiques del seu entorn i del seu alumnat.

L'autonomia de centres permet millorar-ne el funcionament, però requereix també l'adopció de mesures que impulsin els projectes de direcció i la formació dels equips directius per fomentar la seva capacitat per a una gestió eficaç dels recursos. S'estableixen les formes de selecció de la direcció, així com l'avaluació de la tasca directiva, el reconeixement professional de la funció directiva i l'exercici del lideratge pedagògic, i, en aquest marc, caldrà estimular la participació activa de les famílies i de l'alumnat com a agents actius dels centres educatius, i també garantir l'exercici de les funcions pròpies del claustre del professorat.

Es necessiten, per tant, centres amb capacitat d'exercir responsablement un alt grau d'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió, tant en l'àmbit curricular com en la gestió dels recursos econòmics i la gestió del personal que tenen assignat, per fer possible una adequada comunitat d'aprenentatge oberta a les demandes i a les necessitats de l'alumnat.

El títol VI es dedica als elements específics propis del sistema educatiu de les Illes Balears. Així, s'hi inclou el model lingüístic escolar, que, d'acord amb el que determinen l'Estatut d'Autonomia i la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, segueix el model denominat de conjunció lingüística o bilingüisme integral. Es basa en l'aprenentatge de les llengües oficials i l'adquisició de competències lingüístiques en llengües estrangeres, i consolida l'ús de la llengua pròpia de les Illes Balears com a llengua vertebradora de l'ensenyament. D'aquesta manera, es dona continuïtat a un model implementat progressivament i que s'emmarca coherentment en el marc normatiu definit per l'Estat i, en concret, per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L'objectiu del model lingüístic és garantir que els alumnes, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà i assegurar els coneixements d'almenys una llengua estrangera al final del període d'escolaritat obligatòria i, alhora, donar compliment als objectius propis del procés de normalització lingüística establerts per mandat estatutari. Així, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, es garanteix que en finalitzar l'educació bàsica tot l'alumnat haurà d'assolir el domini ple i equivalent de les dues llengües oficials i l'adquisició de competències lingüístiques en una llengua estrangera. Es tracta d'un model reiteradament avalat per la jurisprudència constitucional ja des de la Sentència 337/1994, de 23 de desembre, del Tribunal Constitucional, que, sense perjudici de la utilització de la llengua castellana com a llengua d'ensenyament i d'aprenentatge, permet alhora compensar situacions històriques i presents de desequilibri que col·loquen el català en una posició de desavantatge, i es troba justificat pels resultats aconseguits fins al moment.

Formen part de les polítiques escolars específiques totes les mesures que impulsin l'educació inclusiva com a principi fonamental i transversal del sistema educatiu,

orientada a la participació i la inclusió plena de tot l'alumnat, i que garanteixin els drets dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i la intervenció educativa necessària per al seu desenvolupament.

Així mateix, el títol aposta per la millora i la consolidació de la formació del professorat des d'un marc que impulsi la formació als centres educatius i que es basi en un model de competències professionals.

També s'inclou el reconeixement dels aprenentatges adquirits en l'educació no formal en el marc d'una cultura d'aprenentatge al llarg de la vida i es promouen els projectes d'aprenentatge-servei orientats a desenvolupar la competència social i ciutadana i l'exercici actiu de la ciutadania en consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible.

El títol VII estableix les bases del seguiment i l'avaluació del sistema educatiu i regula la inspecció educativa, que ha de vetlar pel compliment de l'ordenament jurídic als centres educatius i ha de garantir l'exercici dels drets de la comunitat educativa i el compliment dels deures per contribuir a la millora de la qualitat i l'equitat en l'educació.

La qualitat necessita un sistema d'avaluació que permeti exercir el control social per detectar, des d'un plantejament rigorós, els avançaments, i també les deficiències, en el procés educatiu i en els diferents àmbits que hi incideixen —centres, alumnat, professorat, administració, serveis educatius i d'altres—, amb la finalitat d'adoptar amb eficiència les mesures que calguin.

Amb aquesta finalitat es necessita una inspecció dotada de capacitat jurídica i tècnica que pugui fer el seguiment dels processos educatius, avaluar-ne la implantació i proposar les mesures correctores que convenguin.

Pel que fa a l'avaluació, la llei hi dona un impuls important com a eina per assegurar la millora continua. En aquesta línia, es garanteix un sistema d'avaluació externa que no faci dependre la millora exclusivament de les energies internes dels centres, i un exercici periòdic de l'avaluació en tots els centres de les Illes Balears.

El títol VIII estableix l'organització territorial de la conselleria competent en matèria educativa, determina les funcions de les direccions territorials i les dota de capacitat administrativa per fer més eficaç la intervenció a partir d'una major descentralització en la presa de decisions.

El títol IX determina els principis i objectius del finançament necessari per al funcionament eficaç del sistema educatiu. Els recursos econòmics posats a disposició del sistema educatiu s'han de gestionar d'acord amb els principis generals d'equitat, eficàcia, eficiència i economia sostenible, a partir d'una planificació econòmica que garanteixi la suficiència i l'estabilitat, així com el control financer.

En les disposicions addicionals s'adopten mesures per assegurar la convivència als centres educatius; es preveu la necessitat d'avançar en la implantació del primer cicle de l'educació infantil; els compromisos de l'administració per disminuir de manera progressiva les ràtios màximes; el pagament delegat al professorat de l'ensenyament concertat, que s'ha d'anar aproximant a l'equiparació retributiva amb el professorat de l'ensenyament públic; i la revisió de l'import dels mòduls econòmics de l'ensenyament concertat per garantir la gratuïtat efectiva de l'ensenyament.

Així mateix, es pretén garantir la prestació dels serveis complementaris de menjador i transport escolar establint un sistema d'ajuts per compensar les desigualtats i fer-lo compatible amb altres sistemes per raons de doble i triple insularitat, dotar d'autonomia els òrgans de coordinació didàctica per adoptar els materials didàctics i curriculars,

promoure la digitalització i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, promoure el voluntariat als centres sostinguts amb fons públics, fer sostenible la delegació de competències, possibilitar la creació d'una unitat delegada per a l'àmbit territorial de Formentera, garantir la conservació i la difusió del patrimoni històric educatiu, assegurar el compromís del Govern de les Illes Balears per incrementar la despesa pública educativa de manera progressiva, el reconeixement social dels equips directius i el pla d'impuls dels col·legis integrats de primària i secundària.

Les disposicions transitòries primera i segona estableixen el manteniment de l'estructura retributiva actual del personal funcionari docent i del personal laboral docent, respectivament, fins a la determinació d'una nova estructura retributiva, i la disposició transitòria tercera estableix el règim de les delegacions territorials d'Educació mentre no es creïn les direccions territorials previstes en aquesta llei. La disposició derogatòria deroga les disposicions que s'oposin al que estableix aquesta llei.

Les disposicions finals fan referència al manteniment dels actuals ens i òrgans instrumentals fins que es modifiquin reglamentàriament, a la integració dels estudis superiors artístics en l'Institut d'Ensenyaments Artístics Superiors, al compromís per desenvolupar la carrera docent, a regular la figura d'altres professionals que intervenen en el sistema educatiu, a adaptar el Reglament d'organització dels centres a les disposicions d'aquesta llei i a regular el règim jurídic de l'autonomia de gestió econòmica dels centres públics. També es preveu la modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, i al que s'entén per administració educativa en el marc d'aquesta llei; habiliten el Govern a dictar les disposicions adients per desplegar-la i aplicar-la, i determinen quan entrarà en vigor.

IV

Aquesta llei compleix amb els principis de bona regulació establerts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, i amb els principis de bona regulació de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, que són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació, establerts en la normativa estatal bàsica.

D'acord amb els principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa legislativa pretén regular el sistema educatiu de les Illes Balears. Resulta imprescindible la present llei per poder generar el desplegament normatiu que permeti una eficaç adaptació i anticipació del sistema educatiu als contextos socials canviants. La millora del rendiment escolar, la disminució de la taxa d'abandonament escolar, la integració i la inclusió de tot l'alumnat i la universalització i la gratuïtat progressiva del primer cicle d'educació infantil, entre d'altres finalitats, necessiten una major estabilitat del sistema educatiu i una llei de referència d'àmbit autonòmic que permeti el desplegament de normatives i mesures adaptades al context.

Respecte del principi de proporcionalitat, aquesta norma conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s'hi ha de cobrir i a la qual respon, després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions a l'alumnat, a les famílies, al professorat, al personal d'atenció a les necessitats educatives dels alumnes i al personal no docent dels centres educatius.

La seguretat jurídica també presideix aquesta llei, ja que s'exerceix de manera coherent amb l'article 27 de la Constitució Espanyola, amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i autonòmic, així com amb el Marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació (ET 2020) de la Unió Europea. Genera un marc normatiu estable, clar i de certesa, que facilita el desplegament normatiu d'aspectes com la participació de la comunitat educativa als centres educatius, l'autonomia de gestió dels centres, la integració i la inclusió de l'alumnat i l'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació del sistema educatiu en tots els nivells.

En virtut del principi de transparència, s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública en els termes que indica l'article 133 de la Llei 39/2015, ja esmentada. Així mateix, el principi de transparència també s'ha garantit amb l'exposició pública en el lloc web de l'administració autonòmica per a la consulta de la iniciativa legislativa i l'estat de la tramitació, així com les consultes prèvies a l'elaboració de l'esborrany, a fi de garantir l'accés permanent dels ciutadans a la informació i la presentació de suggeriments per mitjans telemàtics, tal i com s'estipula en l'article 51 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Conforme al principi d'eficiència, per tal de racionalitzar la gestió dels recursos públics a l'hora d'aplicar-la, aquesta llei no preveu càrregues administratives innecessàries o accessòries per a la consecució dels objectius.

S'ha vetlat pel principi de qualitat en el procediment d'aprovació de la norma, ja que s'ajusta als procediments definits legalment. Així mateix, racionalitza la gestió del servei públic i, amb aquesta finalitat, s'ha treballat en la qualitat formal de la norma, a més de redactar-la en termes clars, precisos i assequibles per a la ciutadania.

Aquesta llei s'ajusta al principi de simplificació, ja que ajuda els ciutadans a conèixer i entendre millor el conjunt de la regulació i de les mesures normatives que els afecten. Aquesta llei permetrà que es desplegui, simplifiqui i doti de més coherència la normativa reguladora posterior. Es tracta d'un text normatiu amb normes clares i amb un llenguatge accessible per facilitar-ne el compliment.

L'amplitud d'aquesta llei i el seu contingut són fonamentals per adequar el sistema educatiu als canvis que la societat de les Illes Balears ha experimentat aquestes darreres dècades i per respondre de forma adient a les noves necessitats de formació i aprenentatge que requereix la societat del segle XXI.

La iniciativa legislativa s'ha sotmès a consulta prèvia, a informació pública i a audiència de les persones interessades; també s'ha presentat al Consell Escolar de les Illes Balears, que ha emès l'informe corresponent, i al Consell Econòmic i Social, que ha emès el preceptiu dictamen.

TÍTOL PRELIMINAR

L'OBJECTE I ELS PRINCIPIS DE LA LLEI

Article 1. Objecte de la llei

1. Aquesta llei té per objecte regular el sistema educatiu en els nivells de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears, fomentar la participació de la comunitat educativa, possibilitar l'èxit i l'equitat educativa, i la igualtat d'oportunitats,

amb la finalitat que tot l'alumnat arribi al seu nivell òptim d'aprenentatge, assegurar el coneixement de les dues llengües oficials a tots els ciutadans, dotar els centres de més autonomia i institucionalitzar l'avaluació, d'acord amb les competències pròpies i en el marc del sistema educatiu espanyol.

2. Les disposicions d'aquesta llei i les normes que la desenvolupen defineixen un model educatiu propi de les Illes Balears d'interès públic, participatiu, de qualitat i d'equitat, i la igualtat d'oportunitats.

3. El sistema educatiu és el principal instrument de què disposa la comunitat autònoma de les Illes Balears per fer efectiu el mandat contingut a l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per prendre les mesures necessàries per assegurar el coneixement de les dues llengües oficials. Per això, totes les disposicions relatives a l'ús de les llengües oficials, a l'avaluació del seu aprenentatge i a l'avaluació de l'èxit del sistema educatiu per complir el mandat esmentat s'han d'entendre adreçades a aquest objectiu.

4. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei el sistema universitari de les Illes Balears, que es regeix per la seva normativa específica.

Article 2. Dret a l'educació

1. Els alumnes tenen dret a una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat i amb respecte als principis democràtics de convivència i equitat i als drets i a les llibertats fonamentals així com a l'assoliment de competències i al desplegament de les seves capacitats.

2. Tothom té dret a accedir en igualtat de condicions al sistema educatiu i a l'elecció de centre en el marc de l'oferta educativa, d'acord amb el dret fonamental a l'educació regulat en l'article 27 de la Constitució Espanyola.

3. El Govern de les Illes Balears ha de fer efectiu el dret a l'educació mitjançant una programació general de l'ensenyament amb l'objectiu d'institucionalitzar el servei públic d'educació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Per garantir el dret a l'educació de totes les persones en condicions d'igualtat d'oportunitats, el Govern de les Illes Balears ha de regular un procediment d'accés únic als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics.

5. Per garantir el dret a l'educació de totes les persones en condicions d'igualtat d'oportunitats, el Govern de les Illes Balears, juntament amb els consells insulars i els ajuntaments, ha de promoure una xarxa integrada de serveis de salut, socials, comunitaris i de programes de suport i reforç, amb criteris professionals, per donar resposta a les necessitats socials, de salut, culturals i educatives de l'alumnat. La intervenció de la xarxa integrada s'ha de fer en coordinació amb els centres educatius i preferentment en els mateixos centres.

Article 3. Principis generals, pedagògics i organitzatius

1. El sistema educatiu de les Illes Balears, en el marc dels valors definits per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, es regeix pels principis generals següents:

- a) El respecte als drets humans i la formació per a la pau.
- b) El compliment efectiu dels drets de la infància segons s'estableix en la Convenció sobre els drets de l'infant, aprovada per les Nacions Unides, i els seus protocols facultatius, reconeixent l'interès superior del menor, el dret a l'educació, a no

- ser discriminat i a participar en les decisions que l'afectin i l'obligació de les administracions d'assegurar aquests drets.
- c) El compliment dels drets dels infants, joves i de la resta de persones amb diversitat funcional segons s'estableix en la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides, especialment el dret d'accés a una educació inclusiva i la millora de la seva qualitat de vida.
 - d) La transmissió i la posada en pràctica dels valors propis de la societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte, la participació, la justícia, la igualtat, la convivència, la tolerància i els valors d'una economia social.
 - e) L'accessibilitat universal, l'equitat, la igualtat de drets i d'oportunitats i la cohesió social i cultural dins el marc de la inclusió educativa de tot l'alumnat.
 - f) L'escolarització equilibrada de tot l'alumnat entre centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.
 - g) El respecte a la llibertat d'ensenyament i la llibertat de creació de centres.
 - h) La llibertat acadèmica del professorat en el marc dels ensenyaments regulats en aquesta llei i amb respecte a l'autonomia de centre i, si escau, del seu caràcter propi.
 - i) El pluralisme educatiu dins els límits d'aquesta llei i la normativa vigent.
 - j) La responsabilitat del sistema educatiu de garantir que al final del procés de l'ensenyament obligatori tots els alumnes siguin competents per emprar amb correcció i fluïdesa les dues llengües oficials, tant oralment com per escrit.
 - k) L'exercici del dret a rebre una educació de caràcter no confessional, d'acord amb el que s'estableix en els punts 1 i 3 de l'article 16 de la Constitució Espanyola.
 - l) La garantia del dret que assisteix a les famílies perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions, segons el que determinen l'article 27.3 de la Constitució Espanyola i els acords subscrits per l'Estat espanyol amb les diferents confessions religioses.
 - m) La lliure elecció de centre, que atorgui a les famílies la possibilitat de sol·licitar l'escolarització dels seus fills als centres de la seva preferència d'acord amb el que determini la normativa vigent, en la mesura que sigui possible.
 - n) La qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, i la consecució de l'excel·lència en el marc de l'equitat educativa.
 - o) L'impuls a la innovació pedagògica per millorar l'educació.
 - p) El foment de la convivència, la no-violència, la pau, la prevenció i la resolució pacífica dels conflictes des de la tolerància i la llibertat en el marc dels principis democràtics.
 - q) El respecte al medi ambient, el foment de la seva sostenibilitat, la conscienciació davant la crisi climàtica i ambiental i l'adquisició de valors que propiciïn el respecte vers els éssers vius.
 - r) La promoció de la salut i el consum responsable.
 - s) El desenvolupament de la capacitat de l'alumnat per regular el seu propi aprenentatge i confiar en les seves aptituds i coneixements, i el foment de la creativitat, la iniciativa personal i l'emprenedoria.

- t) El compromís amb el territori, el patrimoni, la cultura, la història, la llengua i les tradicions de les Illes Balears.
- u) La coeducació, la igualtat real entre homes i dones, el respecte a la diversitat sexual, la identitat i l'expressió de gènere i la prevenció de la violència masclista.
- v) La promoció de l'educació més enllà del centre educatiu i el foment de l'educació al llarg de la vida.
- w) La construcció d'un sistema plurilingüe que tengui com a eix vertebrador la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
- x) La implantació de la cultura de l'avaluació constructiva com a instrument de millora del sistema educatiu.
- y) El foment del talent a totes les etapes educatives.

2. Els principis pedagògics i organitzatius que conformen aquesta llei són els següents:

- a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, morals, físiques, emocionals i socials dels alumnes.
- b) L'educació basada en competències fonamentades científicament: aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a conviure.
- c) La capacitació competencial adequada per exercir activament la ciutadania responsable i solidària.
- d) La capacitació competencial necessària per a una plena integració professional i laboral.
- e) La capacitació per exercir la competència digital.
- f) L'avaluació competencial.
- g) L'autonomia dels centres.
- h) La gestió integrada i descentralitzada.
- i) La participació efectiva de la comunitat educativa.
- j) El respecte, l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa.
- k) El foment del treball cooperatiu.
- l) El reconeixement social i professional dels docents.
- m) El compromís i la participació de les famílies en el procés educatiu.
- n) La programació de les necessitats educatives de forma equilibrada entre tots els centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.
- o) La cooperació i la col·laboració educativa entre les diverses administracions públiques i els agents econòmics i socials.
- p) La col·laboració educativa amb la Universitat de les Illes Balears.

TÍTOL I L'ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 4. Ordenació general del sistema educatiu

1. El sistema educatiu de les Illes Balears s'estructura d'acord amb el marc normatiu existent segons les competències de l'Estat i les pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Són ensenyaments obligatoris els compresos en l'educació bàsica, que inclou:
 - a) L'educació primària.
 - b) L'educació secundària obligatòria.
3. Són ensenyaments gratuïts i universals els ensenyaments següents:
 - a) El segon cicle d'educació infantil.
 - b) L'educació primària.
 - c) L'educació secundària obligatòria.
 - d) La formació professional de grau bàsic que, en el marc de la normativa bàsica, condueix al títol de graduat en educació secundària obligatòria.
4. Són ensenyaments no obligatoris del sistema educatiu no universitari de les Illes Balears:
 - a) El primer cicle d'educació infantil.
 - b) El batxillerat.
 - c) La formació professional de grau mitjà i de grau superior i els cursos d'especialització.
 - d) Els ensenyaments de règim especial.
 - e) L'educació permanent de persones adultes.

CAPÍTOL II L'EDUCACIÓ INFANTIL

Article 5. Estructura de l'educació infantil

1. L'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil s'ha de regir a les Illes Balears pel que disposen la normativa bàsica de l'Estat i aquesta llei.
2. L'educació infantil s'estructura com a una única etapa educativa, des del naixement fins als sis anys, i comprèn dos cicles de tres anys cada un.
3. El primer cicle comprèn entre els zero i els tres anys i el segon cicle, entre els tres i els sis anys. S'han de garantir la necessària continuïtat curricular i la coherència educativa entre els dos cicles.

Article 6. Objectius i principis de l'educació infantil

1. L'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, i ha de compensar les desigualtats d'origen social, familiar, econòmic o cultural o per raó de diversitat funcional per prevenir-ne amb equitat els efectes.
2. L'educació infantil ha de contribuir a desenvolupar en els infants les capacitats que els permetin:
 - a) Descobrir i conèixer el seu propi cos i el dels altres i les seves possibilitats d'acció, i aprendre a respectar les diferències.
 - b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social i reflexionar-hi, mantenint una actitud de curiositat.
 - c) Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals i en l'organització de les seqüències temporals i espacials quotidianes.
 - d) Desenvolupar les seves capacitats afectives i actuar progressivament amb més seguretat i confiança en si mateixos.

- e) Relacionar-se positivament amb els altres infants i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i de relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
- f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges, formes d'expressió i les dues llengües oficials.
- g) Iniciar-se en una llengua estrangera.
- h) Iniciar-se en les habilitats lògiques i matemàtiques, en la lectura i l'escriptura, en el moviment, el gest i el ritme, així com en els llenguatges visuals, plàstics i musicals.
- i) Participar en les manifestacions culturals presents a l'entorn i gaudir-ne i conèixer les més identificatives de les Illes Balears.
- j) Adoptar hàbits bàsics de salut corporal i alimentària.
- k) Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials, motrius i de reconeixement i construcció de les emocions mitjançant el joc i el moviment.
- l) Promoure, aplicar i desenvolupar normes socials per adquirir pautes dirigides cap a la igualtat de gènere.

3. Per impulsar i facilitar la cooperació entre els centres i les famílies i garantir la corresponsabilitat de les famílies en l'educació dels infants, els centres els han de facilitar informació suficient sobre l'evolució educativa dels seus fills i sobre l'avaluació en l'assoliment dels objectius educatius.

4. Són principis pedagògics d'aquesta etapa l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'atenció individualitzada, la detecció precoç i la prevenció de les dificultats d'aprenentatge, així com la posada en pràctica de mecanismes de reforç tan aviat com es detectin aquestes dificultats per proporcionar als alumnes una atenció ajustada a les seves característiques personals i possibilitar que s'escolaritzin de forma equilibrada entre els centres sostinguts amb fons públics, que hauran de comptar amb els recursos suficients.

Article 7. Regulació del primer cicle d'educació infantil

1. El Govern de les Illes Balears ha de regular, en el marc de les seves competències, el primer cicle d'educació infantil que va de zero a tres anys des d'un enfocament educatiu. El caràcter educatiu del primer cicle ha de formar part de la proposta pedagògica de tots els centres que l'imparteixen.

2. L'objectiu de la regulació del primer cicle d'educació infantil és universalitzar aquest cicle, fer-lo gratuït progressivament i garantir una educació equitativa i de qualitat.

3. Per al desenvolupament d'aquest cicle es poden realitzar convenis de cooperació territorial amb el Govern de l'Estat.

4. Així mateix, s'han de subscriure convenis de col·laboració amb els consells insulars i els ajuntaments per a la creació de noves places i per al seu manteniment tenint en compte l'oferta existent en el municipi o zona escolar.

5. La xarxa d'escoles infantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de tenir per objecte, entre d'altres, la creació de noves places, el sosteniment dels centres, la prevenció de dificultats i la detecció, el diagnòstic i la inclusió dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu.

6. L'administració educativa, amb la participació dels agents que intervenen en l'atenció de l'alumnat de primera infància, ha de regular les condicions i els requisits

dels centres privats que vulguin incorporar-se a la xarxa complementària a la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil amb la finalitat d'ampliar l'oferta educativa del primer cicle d'educació infantil.

7. L'administració educativa pot formalitzar convenis amb centres privats de primer cicle d'educació infantil per constituir la xarxa educativa complementària de la xarxa d'escoles públiques d'educació infantil. Aquests convenis poden contemplar ajuts per al sosteniment dels centres.

8. Els centres públics i els privats de primer cicle d'educació infantil que compleixin les condicions legals, estiguin autoritzats prèviament per l'administració educativa i formin part de la xarxa pública o de la complementària d'educació infantil podran rebre els ajuts econòmics que es convoquin. Els tipus d'ajuts que convoqui la conselleria han de tenir per finalitat pal·liar la manca de places, contribuir a reduir les desigualtats i afavorir els sectors més vulnerables socialment. Els alumnes d'aquests centres i els dels centres d'educació infantil autoritzats en situació de vulnerabilitat que reuneixin els requisits que s'estableixin, podran rebre els ajuts d'escolarització i menjador que siguin pertinents.

9. Les administracions públiques han de fomentar el reconeixement i la posada en valor de la tasca educativa dels professionals que imparteixen el primer cicle d'educació infantil i adoptar mesures per promoure la millora de les seves condicions sociolaborals.

Article 8. Regulació del segon cicle d'educació infantil

1. El segon cicle d'educació infantil ha de ser gratuït. L'administració educativa ha de garantir una oferta suficient de places als centres públics i en pot concertar amb els centres privats en el marc de la planificació educativa, que ha de tenir en compte les preferències de les famílies.

2. El caràcter educatiu del segon cicle ha de formar part de la proposta pedagògica de tots els centres que imparteixen educació infantil.

3. El Govern de les Illes Balears ha de determinar els continguts educatius del segon cicle d'educació infantil d'acord amb les seves competències i en el marc de la normativa bàsica, i ha de regular els requisits que els centres han de complir en relació amb les ràtios, les instal·lacions i el nombre de llocs escolars.

4. En el segon cicle d'educació infantil s'ha de garantir la coherència de l'acció educativa amb la dels primers anys de l'educació primària, la qual cosa ha d'implicar una col·laboració entre el professorat d'ambdues etapes. L'administració educativa ha de regular els àmbits d'aquesta col·laboració.

CAPÍTOL III L'EDUCACIÓ BÀSICA

Article 9. Estructura de l'educació bàsica

1. L'educació primària i l'educació secundària obligatòria constitueixen l'educació bàsica, que és obligatòria i gratuïta per a totes les persones.

2. L'educació bàsica comprèn deu anys d'escolaritat i es desenvolupa ordinàriament entre els sis i els setze anys d'edat. No obstant això, els alumnes tenen dret de romandre als centres en règim ordinari cursant l'educació bàsica fins als divuit anys en les condicions que s'estableixin.

3. L'educació bàsica ha de mantenir la coherència necessària amb l'educació infantil i amb l'educació postobligatòria i ha de garantir la coordinació entre les etapes que la componen per assegurar una transició adequada dels alumnes i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu.

Article 10. Objectius i principis de l'educació bàsica

1. Els objectius, l'organització i els principis pedagògics de l'educació bàsica i l'avaluació dels alumnes de les etapes que en formen part s'han d'establir reglamentàriament de conformitat amb la normativa bàsica de l'Estat i aquesta llei.

2. L'educació bàsica s'ha d'orientar a l'adquisició de les competències que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i a la pràctica de la ciutadania activa, i ha d'incorporar de manera generalitzada les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'aprenentatge. En aquesta etapa s'han d'establir mecanismes per a la detecció de necessitats específiques de suport educatiu i s'han d'implementar, si escau, recursos d'intervenció i de compensació, i ajustos metodològics i en l'avaluació per a la seva correcta gestió.

3. En l'educació bàsica s'ha d'evitar la repetició de curs, que ha de tenir un caràcter excepcional, i només es pot aplicar després de les altres mesures de suport ordinari i associada a un pla personalitzat per a cada alumne, orientat a la superació de les dificultats detectades anteriorment i al desenvolupament del seu potencial màxim.

4. Per possibilitar la promoció dels alumnes amb més dificultats curriculars i/o dels alumnes amb talent, els equips docents han de determinar les mesures preventives, d'acompanyament i de suport educatiu necessàries i, en cap cas no s'ha de decidir la no-promoció o l'acceleració sense un pla específic que millori substancialment les seves expectatives de rendiment escolar els cursos següents.

5. S'han d'establir mecanismes de coordinació entre els centres que imparteixen l'educació secundària obligatòria i els centres educatius d'educació primària adscrits, així com entre les dues etapes en un mateix centre, a fi de garantir una adequada transició de l'alumnat entre les dues etapes educatives que conformen l'ensenyament bàsic i facilitar la continuïtat del procés educatiu.

6. S'han d'establir reglamentàriament les obligacions dels centres i dels seus òrgans de govern i de coordinació docent respecte del que regula el present article.

Article 11. Estructura de l'educació primària

L'etapa de l'educació primària comprèn sis cursos, que s'organitzen en cicles, i es cursa normalment entre els sis i els dotze anys d'edat, amb el currículum organitzat d'acord amb la normativa vigent.

Article 12. Objectius i característiques de l'educació primària

1. L'educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la seva personalitat i que, d'acord amb les competències fixades en el currículum, els permeti:

- a) Identificar, expressar i comprendre els aspectes emocionals i afectius, les habilitats socials i la resolució de conflictes.
- b) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l'expressió i la comprensió orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora en les llengües oficials i en una llengua estrangera en el nivell que correspongui.

- c) Adquirir les competències establertes en matemàtiques i les competències digitals necessàries per a l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació audiovisual.
- d) Adquirir nocions bàsiques de la cultura, la història i la geografia, amb especial referència a la pròpia de les Illes Balears.
- e) Fomentar l'autoconeixement, el coneixement del propi cos, l'activitat motriu i de desenvolupament físic i els hàbits saludables.
- f) Desenvolupar la capacitat d'esforç, els hàbits d'estudi i de feina, la cooperació i l'ajuda mútua.
- g) Expressar el sentit artístic i la creativitat.
- h) Adquirir consciència de pertànyer a la comunitat educativa del centre com a col·lectiu actiu i col·laborador que ha de participar en els òrgans corresponents.
- i) Adquirir la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears.
- j) Valorar i fomentar les actituds solidàries i no discriminatòries, per assumir els deures i exercir els drets com a ciutadans.
- k) Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb les relacions amb les altres persones, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.

2. En aquesta etapa s'ha de posar especial èmfasi en l'atenció a la diversitat dels alumnes, en l'atenció individualitzada i la detecció precoç, i en la prevenció de les dificultats i els ritmes excepcionals d'aprenentatge, amb mecanismes de reforç i metodologies adaptades tan aviat com es detectin aquestes dificultats, per aconseguir un nivell òptim d'aprenentatge, i utilitzant, si escau, sistemes de disseny universal per a l'aprenentatge i els ajusts alternatius que siguin adients.

3. En l'educació primària, l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha de ser contínua i global, ha de tenir un caràcter progressiu i ha de tenir en compte el procés d'aprenentatge. Així mateix, ha de preveure mesures de millora.

4. La decisió de promoció de curs ha de tenir un caràcter global, de manera que s'ha de determinar a partir del progrés conjunt en les diverses àrees que configuren el currículum i del grau d'assoliment de les competències establertes i a partir de la valoració del nivell maduratiu i socioemocional de l'alumne.

Article 13. Estructura de l'educació secundària obligatòria

L'etapa de l'educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos, que se segueixen ordinàriament entre els dotze i els setze anys d'edat, amb els continguts organitzats per matèries o per àmbits, que es poden desenvolupar en projectes interdisciplinaris d'aprenentatge i recerca i mitjançant metodologies centrades en l'aprenent.

Article 14. Objectius i característiques de l'educació secundària obligatòria

1. L'educació secundària obligatòria s'ha d'orientar a l'adquisició de les competències establertes per a l'etapa i té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:

- a) Adquirir els elements bàsics culturals, amb especial referència a la cultura pròpia de les Illes Balears, principalment en els aspectes lingüístic, artístic, científic, humanístic i tecnològic.

- b) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid en relació amb l'autonomia personal i emocional, l'acceptació de la diversitat, la interdependència personal, la gestió de l'afectivitat i la sexualitat, i el foment de la igualtat real d'oportunitats entre homes i dones, així com l'erradicació d'estereotips i rols sexistes i la violència masclista.
- c) Desenvolupar una consciència de rebuig i lluita contra qualsevol altre tipus de violència.
- d) Consolidar hàbits de disciplina, capacitat crítica, estudi i feina individual i en equip que afavoreixin l'aprenentatge autònom, l'aprenentatge cooperatiu i el desenvolupament de les seves capacitats, i que possibilitin la formació contínua al llarg de la vida.
- e) Assumir responsablement els seus deures i conèixer i exercir els seus drets en el respecte a les persones, en l'exercici de la tolerància, la cooperació i la solidaritat; exercitar-se en el diàleg i l'empatia, i promoure els drets humans i la memòria democràtica com a valor comú d'una societat plural, així com preparar-se per a l'exercici de la ciutadania activa.
- f) Desenvolupar les habilitats i les competències culturals, personals i socials relatives a l'expressió i la comprensió orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora en les llengües oficials en el nivell necessari per garantir al final del període d'escolaritat obligatòria l'ús normal i correcte d'ambdues llengües i, almenys, d'una llengua estrangera en el nivell mitjà, incorporant, si escau, sistemes de disseny universal d'aprenentatge o mesures inclusives de qualsevol tipus que permetin l'eliminació de barreres a la vegada que es generin suports per a tot l'alumnat, fent especial atenció al de capacitats diverses.
- g) Adquirir les competències establertes en matemàtiques i les competències digitals necessàries per a l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació audiovisual i potenciar l'ús segur d'aquestes tecnologies per evitar-hi l'addicció.
- h) Desenvolupar-se íntegrament com a membre de la societat amb capacitat de resoldre problemes de la vida quotidiana.
- i) Fomentar el coneixement i l'acceptació del propi cos, l'adquisició d'hàbits i alimentació saludables, l'educació afectivosexual i l'activitat física i esportiva.
- j) Incorporar-se a estudis posteriors i al món laboral amb les garanties pertinents.
- k) Assumir els seus deures i exercir els seus drets com a ciutadans responsables.
- l) Adquirir consciència de pertànyer a la comunitat educativa del centre i promoure-hi la participació activa a través dels òrgans corresponents.
- m) Adquirir consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir al coneixement i a la valoració del seu patrimoni lingüístic, històric, territorial, artístic, cultural i ambiental.
- n) Conèixer, comprendre i relacionar els conceptes bàsics de les diferents matèries curriculars.

2. Els centres educatius han de desenvolupar i han de complementar el currículum i les mesures d'atenció a la diversitat establerts per les administracions educatives, per adaptar-los a les característiques de l'alumnat i a la seva realitat educativa.

3. En els cursos primer i segon de l'educació secundària obligatòria, i en les condicions que es determinin, els centres educatius poden adoptar mesures de caràcter organitzatiu i metodològic a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i

àmbits per facilitar la transició de l'alumnat entre l'educació primària i aquesta etapa, garantir-hi l'adaptació i assegurar la continuïtat del procés d'aprenentatge.

4. A partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria, i en les condicions que es determinin, els centres educatius poden adoptar mesures extraordinàries de caràcter organitzatiu i metodològic a través de la preparació de continguts, activitats pràctiques i àmbits, diferents de les establertes amb caràcter general, per facilitar el progrés acadèmic i l'èxit escolar dels alumnes que presentin dificultats rellevants d'aprenentatge, amb l'objectiu que puguin obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que es garanteixin els principis de no-discriminació i no-segregació i afavoreixin la inclusió educativa, així com l'atenció específica als alumnes amb l'objectiu de proporcionar-los una orientació específica i més adequada al seu futur professional i acadèmic.

5. En l'educació secundària obligatòria, s'ha de garantir un sistema global d'orientació educativa, psicopedagògica, professional i acadèmica que permeti als alumnes millorar en el procés d'aprenentatge i conèixer les característiques del sistema formatiu i productiu a fi de triar les opcions formatives adequades a les seves aptituds i preferències.

Article 15. Avaluació i promoció en l'educació secundària obligatòria

1. L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes de l'educació secundària obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora, en el marc regulat per la normativa bàsica, amb mesures de millora progressives, per arribar a una avaluació del procés d'aprenentatge final de caràcter global.

2. Per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu l'avaluació s'ha d'ajustar al que s'hagi establert a les seves adaptacions curriculars.

3. En l'avaluació final, l'equip docent ha de decidir sobre la promoció de curs o la titulació tenint en compte la valoració del progrés global de cada alumne en funció de l'adquisició de les competències, l'assoliment dels objectius de l'etapa i les expectatives d'èxit per enfrontar un nivell acadèmic superior o una nova etapa.

4. La permanència dels alumnes en el mateix curs es considera una mesura de caràcter excepcional i ha d'anar acompanyada d'un pla específic personalitzat orientat a la superació de les dificultats detectades anteriorment.

5. En el cas d'alumnes que passin al curs següent sense haver superat totes les matèries o àmbits, els professors d'aquestes matèries o àmbits han d'establir els programes de reforç corresponents.

CAPÍTOL IV EL BATXILLERAT

Article 16. Estructura del batxillerat

1. L'etapa del batxillerat comprèn dos cursos, que se segueixen ordinàriament entre els setze i els divuit anys d'edat, amb els continguts organitzats per matèries.

2. Hi ha diverses modalitats de batxillerat: batxillerat de Ciències i Tecnologia, batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, batxillerat d'Arts i batxillerat General.

Article 17. Objectius i característiques del batxillerat

1. El batxillerat té per finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar

funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència, a més de capacitar-los per accedir a l'educació superior o a la vida professional.

2. Els objectius, l'organització i els principis pedagògics del batxillerat, i l'avaluació dels alumnes d'aquesta etapa s'han d'establir de conformitat amb la normativa bàsica de l'Estat i d'aquesta llei.

3. El currículum i les activitats educatives del batxillerat han d'afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa; l'adquisició d'habilitats per a l'autoaprenentatge, per a la feina en equip i per a l'aplicació dels mètodes de recerca apropiats; el desenvolupament de l'esperit crític i l'adquisició de les competències necessàries en relació amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació; així com l'accés als coneixements científics i tecnològics fonamentals i el domini de les habilitats i els coneixements bàsics de la modalitat triada.

4. En aquesta etapa, s'ha d'atendre la diversitat de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu ajustant, quan calgui, les metodologies d'aprenentatge. Els materials curriculars que s'utilitzin han de ser inclusius.

Article 18. Avaluació del batxillerat

1. L'avaluació dels alumnes de batxillerat ha de ser contínua i la qualificació ha de ser diferenciada segons les matèries del currículum.

2. Els alumnes promocionaran de primer a segon curs de batxillerat quan hagin superat totes les matèries cursades o hagin obtingut avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

3. L'equip docent proposarà per a l'obtenció del títol de batxiller l'alumnat que hagi superat totes les matèries de l'etapa.

4. També, excepcionalment, es podran proposar per a l'obtenció del títol de batxiller els alumnes que en finalitzar l'etapa tinguin una sola assignatura amb avaluació negativa en la convocatòria extraordinària, sempre que no s'hagi donat una inassistència continuada i injustificada de l'alumne durant el curs o qualsevol altra circumstància que suposi un abandonament voluntari de la participació i el seguiment en les sessions de classe i de les activitats proposades, i sempre que s'hagi presentat a la convocatòria extraordinària i la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l'etapa sigui igual o superior a 5.²

5. S'han d'establir mesures adequades per adaptar les avaluacions a les necessitats de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Article 19. Oferta formativa del batxillerat

La conselleria ha de programar una oferta formativa, tant en la modalitat d'educació no presencial com en la modalitat d'educació presencial o semipresencial, que permeti a l'alumnat la conciliació dels estudis amb l'activitat laboral.

CAPÍTOL V LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Article 20. Objecte i àmbit de la formació professional

1. La formació professional es constitueix com a sistema integrat que abraça el conjunt d'accions formatives i d'ensenyament i aprenentatge que capaciten per al

² Apartat modificat pel Decret llei 4/2022, de 30 de març, esmentat en la nota 1.

desenvolupament qualificat de les diverses professions, l'accés a l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Ha d'incloure els ensenyaments propis de la formació professional inicial i els de la formació professional per a l'ocupació. Aquests darrers també han d'incloure els ensenyaments orientats a la formació permanent a les empreses, que permetin l'adquisició i l'actualització contínua de les competències professionals.

2. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la coordinació de les actuacions en matèria de formació professional inicial i de formació professional per a l'ocupació, a fi d'ampliar i millorar l'oferta d'accions formatives i fer un ús eficient dels recursos públics i privats.

3. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la flexibilitat i l'especialització de la seva oferta formativa amb l'objectiu d'incentivar la innovació i l'ocupació.

4. El Govern de les Illes Balears, en el marc de la normativa bàsica, ha d'adaptar els currículums dels ensenyaments de la formació professional a les necessitats del teixit productiu de les Illes Balears.

Article 21. Finalitats del sistema integrat de formació professional

Les finalitats del sistema integrat de formació professional són les següents:

- a) Capacitar per a l'exercici d'activitats professionals, de manera que es puguin satisfer tant les expectatives personals de promoció professional com les necessitats de qualificació del sistema productiu.
- b) Desenvolupar les competències pròpies de cada títol de formació professional.
- c) Fomentar el coneixement de la legislació laboral i els drets i les obligacions en el marc de les relacions laborals, així com les característiques i l'organització del sector productiu i els mecanismes de la inserció professional.
- d) Avaluar i acreditar oficialment la competència professional, sempre amb referència als instruments de concreció que estableix la normativa bàsica, amb independència de la forma en la qual s'ha produït l'aprenentatge.
- e) Actuar com un nexa entre les empreses i el sistema educatiu i formatiu per incorporar en els diferents ensenyaments els avenços tecnològics i de productes del teixit productiu, així com les noves competències tècniques requerides per les empreses.
- f) Formar professionals amb capacitat d'anàlisi de les situacions socials i econòmiques, amb esperit crític i creatiu que fomenti la competència de donar respostes a la complexitat del seu àmbit professional.
- g) Potenciar l'autoaprenentatge, el treball en equip, la cooperació i la formació en prevenció i resolució de conflictes de forma pacífica en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, amb especial atenció a la prevenció de la violència masclista.
- h) Fomentar la igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones, així com amb les persones amb diversitat funcional per accedir a una formació que permeti tot tipus d'opcions professionals i exercir-les.
- i) Desenvolupar una identitat professional motivadora per a futurs aprenentatges i potenciar les actituds adients de la iniciativa personal i l'emprenedoria ètica, social i solidària.
- j) Conèixer i prevenir els riscos mediambientals i afavorir la formació de professionals amb actituds proactives per a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Article 22. Formació professional inicial

1. La formació professional inicial forma part del sistema educatiu i té per finalitats preparar els alumnes per a l'activitat en un camp professional, facilitar que s'adaptin a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, contribuir al seu desenvolupament personal i permetre que progressin dins el sistema educatiu i dins el sistema de la formació professional per a l'ocupació.

2. La formació professional en el sistema educatiu comprèn un conjunt de cicles formatius i de cursos d'especialització amb una organització modular integrada per mòduls professionals constituïts com a unitats de formació, d'una durada variable i continguts teoricopràctics adequats als diversos camps professionals.

3. Els cicles formatius poden ser de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior. Tant els cicles formatius com els cursos d'especialització s'han de referir als instruments de concreció que estableix la normativa bàsica.

4. Els cicles formatius de grau bàsic han de contribuir a l'adquisició de les competències de l'educació secundària obligatòria.

5. Correspon a la conselleria, en col·laboració amb els agents educatius, econòmics i socials, adequar els currículums dels títols a les peculiaritats del sistema productiu i a les necessitats socials i econòmiques de les Illes Balears.

6. Els currículums propis que s'estableixin han d'incloure, a més dels mòduls associats a competències professionals i un mòdul de formació en centres de treball, formació relativa a la prevenció de riscos laborals i a les tecnologies de la informació i la comunicació; el reforç del coneixement de les dues llengües oficials i, almenys, d'una llengua estrangera; el foment de la iniciativa emprenedora i valors vers una economia sostenible; i el respecte a l'entorn i a la dignitat dels treballadors, així com la formació que es prevegi en el marc de les directrius marcades per la Unió Europea.

Article 23. Formació professional per a l'ocupació

1. La formació professional per a l'ocupació forma part del sistema nacional de formació professional i té per finalitat preparar els alumnes per a les competències professionals, bé de tipus inicial, bé de millora i actualització dels requeriments i les competències demanades pel teixit productiu. Així, la formació professional per a l'ocupació s'estableix com un procés al llarg de la vida del treballador, el qual també pot actuar com un instrument de segona oportunitat per al retorn de les persones al sistema educatiu.

2. Els certificats de professionalitat s'han de referir als instruments de concreció que estableix la normativa bàsica.

Article 24. Oferta de formació professional

1. El Govern de les Illes Balears ha d'establir les mesures oportunes per adequar l'oferta de formació professional de cadascuna de les illes a les necessitats del teixit productiu de cadascuna de les Illes Balears, en col·laboració amb els agents educatius, econòmics i socials i els centres educatius sostinguts amb fons públics. Amb aquesta finalitat es poden subscriure els convenis de col·laboració necessaris per garantir una oferta àmplia i de qualitat. Així mateix, es pot concertar amb els centres privats.

2. Els ensenyaments de formació professional es podran cursar en règim presencial, semipresencial i a distància. En tots els casos es podran oferir en la modalitat dual a tots els centres sostinguts amb fons públics.

3. Els poders públics han de promoure la formació professional dual com un conjunt d'accions i iniciatives formatives mixtes, de feina i formació, que tenen per

objecte la qualificació professional en un règim d'alternança entre l'activitat laboral en una empresa i una activitat formativa rebuda en el marc del sistema integral de formació professional.

4. L'oferta formativa de la formació professional dual s'ha d'estendre al llarg de la durada del cicle formatiu i de la corresponent a la formació professional en l'àmbit laboral i s'ha de formalitzar mitjançant la subscripció d'un contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge d'acord amb la legislació laboral vigent que sigui aplicable.

5. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la subscripció de convenis de col·laboració amb entitats, sindicats, cambres de comerç, associacions empresarials, empreses cooperatives i empreses d'economia social per promocionar la formació professional dual, millorar la formació als centres de treball i establir models d'implantació flexibles i adaptats a les peculiaritats del teixit productiu de les Illes Balears.

6. A l'efecte d'accedir als cicles formatius de formació professional, tots els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixin aquests ensenyaments s'han de constituir en una zona escolar única.

7. S'ha de garantir una oferta equitativa i suficient de formació professional a totes les illes de la comunitat autònoma.

8. S'ha de promoure progressivament la implantació de la modalitat dual en els ensenyaments de cicles formatius de formació professional.

Article 25. Flexibilització de la formació professional

1. Els ensenyaments de formació professional s'han d'organitzar de manera que permetin la conciliació de l'aprenentatge de les persones amb l'activitat laboral i altres responsabilitats, mitjançant itineraris formatius i modalitats horàries adaptats als diferents ritmes i possibilitats d'aprenentatge.

2. L'administració educativa ha de prestar una atenció adequada amb condicions d'accessibilitat universal i amb els recursos de suport necessaris, en cada cas, a les persones amb capacitats diverses. Així mateix, s'han d'adoptar mesures per fer efectiu el principi d'inclusió i garantir la igualtat efectiva d'oportunitats per a tothom, amb una atenció especial a la igualtat entre homes i dones.

3. A l'efecte de facilitar la continuïtat de la formació i la inclusió laboral a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, la conselleria ha d'establir i ha d'autoritzar altres ofertes formatives de formació professional en forma de programes de qualificació inicial que incloguin mòduls professionals d'un títol professional bàsic i altres mòduls de formació general extrets del currículum de l'ensenyament secundari per a persones adultes.

4. Per afavorir la incorporació de les persones a les diferents ofertes formatives, la conselleria ha de convocar i organitzar periòdicament les proves d'accés a la formació professional d'acord amb els criteris establerts per la normativa bàsica. També ha de determinar, d'acord amb els criteris bàsics establerts pel Govern de l'Estat, les exempcions aplicables i els cursos destinats a la preparació de les proves.

5. La conselleria ha de convocar periòdicament proves lliures per a l'obtenció de títols de tècnic i de tècnic superior seguint els criteris que es determinin.

Article 26. Instal·lacions i equipaments docents

1. Els ensenyaments de formació professional que regula aquesta llei es poden impartir als centres educatius de secundària, als centres d'educació de persones adultes

autoritzats, als centres integrats de formació professional, als centres de referència nacional i a tots els centres autoritzats que s'ajustin a la normativa aplicable.

2. Els centres integrats de formació professional són els que compleixen els requisits establerts per la normativa bàsica de l'Estat i imparteixen el conjunt de les ofertes formatives del sistema de formació professional referides als instruments de concreció que estableix la normativa bàsica i altres especialitats formatives autoritzades.

3. Les conselleries competents en matèria d'educació i d'ocupació, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals, han de planificar, regular i coordinar la xarxa de centres integrats de formació professional per avançar cap a un sistema de centres especialitzats sectorialment i amb cobertura de tot el territori.

4. El Govern de les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat, en l'àmbit de les respectives competències, han de col·laborar en la implantació de centres de referència nacional, especialitzats en diferents sectors productius, per al desenvolupament de la innovació i l'experimentació en matèria de formació professional. Aquests centres poden incloure accions formatives adreçades a estudiants, formadors, treballadors ocupats i aturats, així com a empreses i sindicats.

5. El Govern de les Illes Balears ha d'establir reglamentàriament el procediment de designació de la direcció dels centres integrats de formació professional i el dels centres de referència nacional entre els funcionaris públics, d'acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat.

6. La conselleria ha de dotar els centres públics que imparteixen formació professional de les infraestructures i l'equipament necessaris per al desenvolupament adequat del currículum, sense perjudici dels convenis que es puguin subscriure amb altres administracions i amb entitats públiques o privades, empreses i persones físiques o jurídiques per a l'ús compartit d'instal·lacions i equipaments.

Article 27. Orientació acadèmica i professional

1. Les conselleries competents en matèria d'educació i d'ocupació han de garantir una informació i una orientació acadèmica i professional sobre el sistema integrat de formació professional que sigui accessible a tota la ciutadania i, en especial, a l'alumnat i a les seves famílies, als centres educatius, a les altres administracions, als sindicats i a les entitats i empreses.

2. A l'efecte del que disposa el punt anterior, s'ha d'establir una xarxa de punts d'orientació acadèmica i professional amb la finalitat d'assessorar sobre les possibilitats que ofereix el sistema integrat de formació professional i dur a terme projectes relacionats amb la formació, la difusió i la promoció de la formació professional que complementi l'orientació que s'ofereix des dels centres educatius i la xarxa del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

3. L'administració educativa, en col·laboració amb altres administracions i amb els agents socials i empresarials, ha de dur a terme programes de promoció i difusió de la formació professional i ha d'adoptar mesures per incentivar l'organització d'esdeveniments als centres educatius per informar i orientar l'alumnat sobre aquests ensenyaments.

Article 28. Qualitat de la formació professional

Amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional, el Govern de les Illes Balears ha de promoure les actuacions següents:

- a) Facilitar la participació en projectes i competicions de competències professionals i adoptar mesures perquè els departaments de formació

- professional desenvolupin projectes d'innovació aplicada que contribueixin a la generació de coneixement i la millora de l'economia balear.
- b) Convocar premis extraordinaris per fomentar l'excel·lència.
 - c) Col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears a fi d'establir convalidacions entre estudis universitaris i estudis de formació professional de grau superior i desenvolupar projectes d'innovació conjunts, així com fomentar la col·laboració dels centres de formació professional amb les empreses per desenvolupar projectes estratègics comuns.
 - d) Fomentar el manteniment o, si escau, la implantació de sistemes de gestió de qualitat i de millora contínua als centres que imparteixen formació professional amb la possibilitat d'aconseguir o mantenir una certificació externa encaminada al reconeixement en el món productiu.
 - e) Incentivar els canvis metodològics necessaris vinculats al treball per reptes.
 - f) Vetlar per la dotació suficient d'infraestructures, recursos i equipaments i la seva actualització per garantir la qualitat de les activitats formatives a totes les Illes.
 - g) Impulsar la participació dels centres educatius en programes d'internacionalització de la formació professional, en el programa «Erasmus» i en programes similars o en activitats de formació especialitzada d'àmbit internacional per afavorir tant la mobilitat de l'alumnat perquè dugui a terme les pràctiques a centres de treball ubicats a països de la Unió Europea com la del professorat i la cooperació de centres per conèixer pràctiques innovadores dins l'àmbit pedagògic, tecnològic o de gestió.

Article 29. Reconeixement de les competències professionals

1. Correspon a l'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) regular el procediment per avaluar, reconèixer i acreditar les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o altres vies no formals i informals de formació.

2. Aquest procediment ha de tenir per referent la tipologia de les ofertes i els graus de formació que estableix la normativa bàsica i s'ha de desenvolupar seguint criteris que garanteixin la fiabilitat, l'objectivitat i el rigor tècnic de l'avaluació.

CAPÍTOL VI

L'EDUCACIÓ PERMANENT DE PERSONES ADULTES

Article 30. Finalitats i àmbits de l'educació de persones adultes

1. L'educació de persones adultes té per finalitat fer efectiu, en els termes que determina la llei específica que la regula, el dret a l'educació en qualsevol etapa de la vida.

2. L'educació permanent de persones adultes es regeix per aquesta llei i per la Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears.

3. Els programes d'educació de persones adultes, en el marc de les accions formatives de segona oportunitat, poden incloure l'àmbit de l'ensenyament formal, que condueix a titulacions oficials no universitàries, i l'àmbit de l'ensenyament no formal, orientat a la preparació de proves lliures i d'accés als diferents itineraris del sistema; accions formatives adreçades a facilitar la inclusió en l'entorn social de persones novingudes; així com, en les condicions que s'estableixin, la realització de cursos de llengües que tinguin reconeixement oficial o altres activitats formatives i de

formació professional referides als instruments de concreció que estableix la normativa bàsica.

4. En l'educació permanent de persones adultes s'ha d'atendre la diversitat de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a través d'adaptacions curriculars, metodològiques o d'avaluació.

5. S'ha d'establir reglamentàriament l'ordenació de l'educació secundària de persones adultes i les condicions i les característiques de l'oferta formativa adreçada a persones adultes.

Article 31. Accés a l'educació permanent de persones adultes

1. Poden accedir a l'educació permanent de persones adultes les persones de més de divuit anys o les que compleixin aquesta edat dins l'any natural en què inicien la formació.

2. Excepcionalment, poden cursar aquests estudis les persones de més de setze anys que estiguin en un dels supòsits següents:

- a) Disposar d'un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari, o estar donades d'alta a la seguretat social com a treballadors per compte propi.
- b) Ser esportistes d'alt rendiment o d'alt nivell.
- c) Complir mesures de justícia juvenil imposades pels jutjats de menors en el marc de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
- d) Trobar-se en una situació personal extraordinària per malaltia o diversitat funcional o en qualsevol altra situació de caràcter excepcional que els impedeixi cursar els ensenyaments en règim ordinari.

3. La conselleria ha d'establir les mesures oportunes per donar una atenció adequada a les persones adultes que presentin necessitats específiques de suport educatiu.

4. La població reclusa ha de tenir garantit, als centres penitenciaris, l'accés a aquests ensenyaments.

Article 32. Centres d'educació permanent de persones adultes

1. L'educació permanent de persones adultes es pot impartir en centres específics, en centres ordinaris i en unitats educatives dels establiments penitenciaris, prèviament autoritzats, sense perjudici de crear punts de suport a la formació.

2. L'educació permanent de persones adultes es pot oferir en les modalitats presencial, semipresencial i a distància, prèvia autorització de la conselleria d'acord amb la planificació educativa. En les modalitats semipresencial i a distància s'ha d'utilitzar una metodologia que inclogui preferentment les tecnologies de la informació i la comunicació.

Article 33. Col·laboració amb els ajuntaments i els consells insulars en l'educació permanent de persones adultes

1. Els consells insulars i els ajuntaments han d'afavorir la col·laboració amb els centres d'educació de persones adultes.

2. La conselleria ha de fomentar la subscripció de convenis amb els ajuntaments i els consells insulars per a la contribució conjunta en l'educació permanent de persones adultes i per a l'optimització dels recursos públics.

CAPÍTOL VII ELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

Article 34. Característiques dels ensenyaments de règim especial

Els ensenyaments de règim especial fan referència als ensenyaments d'idiomes, als ensenyaments artístics i als ensenyaments esportius.

Article 35. Ensenyaments d'idiomes

1. Els ensenyaments d'idiomes tenen per finalitat capacitar els alumnes per a l'ús adequat de diferents idiomes, al marge de les etapes ordinàries del sistema educatiu.

2. Els ensenyaments reglats d'idiomes condueixen a l'obtenció de certificats homologats, s'organitzen en els nivells que es determinen en l'ordenament d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i s'ofereixen en les modalitats d'educació presencial, d'educació semipresencial i d'educació no presencial.

3. Els ensenyaments reglats d'idiomes s'imparteixen en la modalitat d'ensenyaments presencials a les escoles oficials d'idiomes. S'ha de promoure que els alumnes que cursen educació secundària puguin rebre la tutorització i la preparació per a les proves dels diferents nivells dels ensenyaments reglats d'idiomes i puguin fer aquestes proves.

4. Correspon a l'administració educativa determinar els currículums dels diferents nivells bàsics dels ensenyaments reglats d'idiomes i els requisits que han de complir les escoles oficials d'idiomes.

5. Correspon a l'administració educativa fomentar l'ensenyament públic d'idiomes mitjançant les escoles oficials d'idiomes.

Article 36. Ensenyaments artístics

1. Els ensenyaments artístics tenen per finalitat facilitar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa, les arts plàstiques, el disseny, l'art dramàtic i la conservació i la restauració de béns culturals.

2. Els ensenyaments artístics comprenen:

- a) La música i la dansa.
- b) Les arts plàstiques i el disseny.
- c) L'art dramàtic.
- d) La conservació i la restauració de béns culturals.

3. Els ensenyaments artístics es classifiquen en:

- a) Ensenyaments elementals de música i dansa.
- b) Ensenyaments artístics professionals. Tenen aquesta condició els ensenyaments professionals de música i de dansa, així com els graus mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny.
- c) Ensenyaments artístics superiors. Tenen aquesta condició els estudis superiors de música i de dansa, els ensenyaments d'art dramàtic, els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals, els estudis superiors de disseny i els estudis superiors d'arts plàstiques.

4. Els ensenyaments artístics s'imparteixen en escoles d'art, conservatoris, centres especialitzats i altres centres públics o privats autoritzats. En les condicions que s'estableixin els ensenyaments artístics de grau elemental es podran impartir integrats amb els ensenyaments de règim general en centres públics, privats i privats concertats, que tendran la consideració de centres de currículum singular o especialització

curricular. L'administració educativa podrà adoptar mesures d'organització i d'ordenació acadèmica per possibilitar la compatibilitat dels ensenyaments artístics professionals i l'educació secundària.

5. L'administració educativa ha de garantir les infraestructures i equipaments necessaris per a aquests ensenyaments, així com les mesures per fer efectiu el principi d'inclusió i accessibilitat universal i la igualtat d'oportunitats en l'accés.

6. La conselleria competent en matèria d'educació ha de garantir un finançament estable de les escoles de música o dansa reconegudes, d'acord amb els paràmetres que es determinin reglamentàriament.

7. L'administració educativa ha de garantir una informació i una orientació acadèmica i professional sobre el sistema d'ensenyaments artístics que sigui accessible a tota la ciutadania i, en especial, a l'alumnat i a les seves famílies i als centres educatius.

8. Les administracions públiques, juntament amb els agents socials i empresarials interessats, han de dur a terme programes de promoció i difusió dels ensenyaments artístics i han d'adoptar mesures per incentivar l'organització d'esdeveniments als centres educatius per informar i orientar l'alumnat sobre aquests ensenyaments.

Article 37. Ensenyaments esportius

1. Els ensenyaments esportius tenen com a objectiu capacitar els alumnes per desenvolupar una activitat professional en el camp de l'activitat física i l'esport: iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de l'activitat o la pràctica esportiva en tota la seva extensió; així com entrenar i dirigir equips i esportistes d'alt rendiment, i facilitar la seva adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i la incorporació a la ciutadania activa.

2. Els ensenyaments esportius s'organitzen a partir de les diferents modalitats i especialitats esportives i s'estructuren en grau mitjà i grau superior.

3. Els alumnes que superen els ensenyaments esportius de grau mitjà reben el títol de tècnic esportiu. Els alumnes que superen els ensenyaments de grau superior reben el títol de tècnic esportiu superior.

4. L'administració educativa ha de desenvolupar els currículums de les diferents modalitats i especialitats dels ensenyaments esportius, l'oferta formativa i les proves d'accés corresponents, en el marc de la normativa bàsica, amb la participació de les administracions competents en matèria d'esports i la col·laboració de les entitats esportives, garantint que el currículum contemplarà l'educació en valors i un procés formatiu de caràcter integral dels esportistes.

CAPÍTOL VIII

ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

Article 38. Característiques i objectius dels ensenyaments artístics superiors

1. Els ensenyaments artístics superiors tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa, l'art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny.

2. Dins els ensenyaments artístics superiors s'hi inclouen els ensenyaments superiors de música i de dansa, els ensenyaments d'art dramàtic, els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals, els ensenyaments superiors de disseny i els

ensenyaments superiors d'arts plàstiques, en els quals s'insereixen els ensenyaments superiors de ceràmica i de vidre.

3. Els ensenyaments superiors de música i de dansa s'han de cursar als conservatoris o escoles superiors de música i dansa i els d'art dramàtic a les escoles superiors d'art dramàtic; els de conservació i restauració de béns culturals, a les escoles superiors de conservació i restauració de béns culturals; els ensenyaments superiors d'arts plàstiques, a les escoles superiors de l'especialitat corresponent; i els ensenyaments superiors de disseny, a les escoles superiors de disseny.

Article 39. Estructura dels ensenyaments artístics superiors

1. L'estructura dels ensenyaments artístics superiors ha de seguir els aspectes bàsics de l'ordenació dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de grau en ensenyaments artístics i del títol de màster en ensenyaments artístics, dins el marc de l'espai europeu d'educació superior.

2. L'administració educativa ha de determinar reglamentàriament, en el marc de la normativa bàsica, l'estructura dels ensenyaments artístics superiors i l'organització dels centres que els imparteixen.

3. La conselleria ha de fomentar l'establiment de convenis amb la Universitat de les Illes Balears per a l'organització d'estudis de doctorat, màsters oficials i títols propis dels ensenyaments artístics.

TÍTOL II

LA COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

CAPÍTOL I

LA COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA AUTONÒMICA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I ALTRES INSTITUCIONS UNIVERSITÀRIES

Article 40. Objectius i característiques de la col·laboració

1. L'administració educativa i la Universitat de les Illes Balears han de col·laborar en aquells aspectes que contribueixin a la millora del sistema educatiu i, especialment, en els àmbits següents:

- a) Potenciar la coherència del sistema educatiu de les Illes Balears amb la Universitat de les Illes Balears, transferint la informació entre els diferents nivells i l'ensenyament universitari.
- b) Difondre, fer atractiva i propera a la societat l'oferta formativa de la Universitat de les Illes Balears.
- c) Coordinar, dissenyar i organitzar les proves d'accés a la universitat d'acord amb la normativa vigent.
- d) Millorar la formació inicial i permanent del professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària, de formació professional i de batxillerat.
- e) Garantir la competència lingüística i comunicativa necessària per exercir la tasca docent.
- f) Gestionar les pràctiques en el sistema educatiu de l'alumnat universitari.

- g) Establir una xarxa de centres col·laboradors en la formació inicial del professorat.
- h) Incorporar el professorat dels cossos docents als departaments universitaris d'acord amb la normativa vigent, per a la millora de la qualitat educativa.
- i) Col·laborar en la realització de treballs de recerca en innovació i en avaluació educativa, així com elaborar materials pedagògics i de suport al currículum.
- j) Potenciar l'activitat acadèmica en llengües estrangeres, a més de fer-ho en les llengües oficials de la comunitat autònoma.
- k) Oferir formació per a persones majors.
- l) Col·laborar en la millora de la formació professional i dels ensenyaments de règim especial.
- m) Col·laborar en la gestió i la promoció del talent mitjançant el disseny de programes de detecció d'altres capacitats, elaboració de materials didàctics, programes adaptats i desenvolupament de metodologies d'atenció individualitzada.

2. Per fer efectiva la col·laboració referida en l'apartat anterior, es poden subscriure els corresponents convenis, en els quals s'han d'establir les condicions generals que articulin dita cooperació.

3. L'administració educativa pot acordar mesures de col·laboració amb altres institucions universitàries que imparteixen estudis de formació inicial del professorat referents a les matèries que es contemplan en les lletres d), e), f) i g) de l'apartat 1 d'aquest article.

CAPÍTOL II LA COL·LABORACIÓ I LA COOPERACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS

Article 41. Col·laboració amb els consells insulars

La conselleria pot establir protocols i mecanismes de col·laboració amb els consells insulars corresponents, d'acord amb les competències respectives.

Article 42. Col·laboració amb els ajuntaments

1. La conselleria ha d'establir protocols i procediments de col·laboració amb els ajuntaments i amb la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

2. Els protocols de col·laboració a què es refereix el punt anterior poden fer referència a les actuacions següents:

- a) La creació, la conservació i la vigilància dels centres educatius públics.
- b) La col·laboració en relació amb l'escolarització en els ensenyaments gratuïts i universals.
- c) La col·laboració en relació amb l'escolarització en el primer cicle d'educació infantil.
- d) La col·laboració en relació amb les escoles de música de titularitat municipal.
- e) La col·laboració en relació amb l'educació permanent de persones adultes.
- f) La col·laboració en relació amb la prestació de diversos serveis educatius i la realització d'activitats o serveis complementaris.
- g) La col·laboració en matèria de promoció de la participació infantil.
- h) La col·laboració per garantir la seguretat i un entorn protector de la infància i l'adolescència als centres escolars.

- i) La col·laboració amb els centres educatius sostinguts amb fons públics per a l'ús i l'optimització dels recursos sociocomunitaris de proximitat.
- j) Qualsevol altra actuació que tengui com a objectiu l'impuls del municipi com a entitat educadora.

3. Per fer efectiva la col·laboració pertinent es poden subscriure els convenis corresponents.

Article 43. Articulació de la cooperació

1. Els consells insulars i els ajuntaments poden establir amb el Govern de les Illes Balears el règim que articuli la cooperació per dur a terme la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament, si escau, de centres docents públics; així com la prestació de serveis complementaris, la prestació del servei educatiu del primer cicle d'educació infantil, o la complementació de programes en matèria d'educació permanent de persones adultes, ensenyaments de règim especial o formació professional o d'altres actuacions incloses en l'article anterior.

2. La cooperació s'ha de materialitzar, principalment, a través de la delegació, per part del Govern de les Illes Balears, de l'exercici de les seves competències en les matèries assenyalades en l'apartat anterior.

Article 44. Subjectes receptors de la delegació

1. Les delegacions s'han de realitzar a favor dels consells insulars i dels municipis, segons correspongui, en el territori dels quals s'ha d'executar l'actuació. No obstant això, aquesta delegació també es pot realitzar a favor de qualsevol entitat que tengui reconeguda la naturalesa de local o de mancomunitat de municipis amb capacitat per exercir les competències delegades al corresponent àmbit territorial.

2. En tot cas, els subjectes receptors de la delegació s'han de subjectar al que preveu la normativa de contractes del sector públic.

Article 45. Actuacions susceptibles de delegació

1. Atenent les circumstàncies concurrents, es poden delegar tots aquells tràmits previs, actuacions tècniques i actes administratius relatius a viabilitat de parcel·les, direccions facultatives i assistències tècniques, redacció de projectes, supervisió i aprovació d'aquests; construcció de nous centres públics; obres d'ampliació, reforma, millora i substitució; seguiment de les inversions i recepció d'aquestes; equipaments dels centres educatius; creació i manteniment de places de primer cicle d'educació infantil; transport escolar i altres serveis complementaris; i educació permanent de persones adultes, ensenyaments de règim especial o formació professional o d'altres inclosos en l'article 43 d'aquesta llei.

2. En qualsevol cas, és condició necessària que les actuacions en matèria d'infraestructures educatives estiguin prèviament contingudes en les successives programacions d'obres, així com en el mapa d'infraestructures escolars de la conselleria. No obstant això, podran autoritzar-se actuacions no previstes en aplicació de criteris objectius vinculats a necessitats d'escolarització, eliminació d'instal·lacions provisionals o a programes específics.

Article 46. Característiques de la delegació

1. Amb caràcter general, la delegació s'ha de formalitzar mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'educació. Excepcionalment, es podrà formalitzar mitjançant conveni, en funció de la complexitat de l'actuació que

s'ha de desenvolupar i de la situació econòmica financera de l'entitat local o supramunicipal que estigui implicada en la seva execució.

2. La delegació ha de determinar l'abast, el contingut, les condicions, la durada i el control d'eficiència que es reserva la conselleria i ha d'anar acompanyada de la corresponent memòria econòmica.

3. La conselleria pot sol·licitar l'assistència dels consells insulars per a la coordinació i el seguiment de les delegacions als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals.

4. També pot demanar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió de la competència delegada així com enviar el personal comissionat i formular els requeriments pertinents per a l'esmena de deficiències observables.

5. La delegació exigeix, en tot cas, la prèvia acceptació del consell insular o entitat local interessada, segons correspongui, i ha d'ajustar-se al que preveu la normativa bàsica en la matèria objecte de delegació.

Article 47. Règim econòmic de la delegació

1. Els diferents projectes de llei de pressupostos han de reflectir la dotació pressupostària suficient per atendre els compromisos econòmics derivats de les delegacions regulades en aquesta llei.

2. El finançament de la delegació s'ha d'ajustar al ritme d'execució de les actuacions delegades. No obstant això, quan la delegació es refereix a la realització d'obres, pot acordar-se que el pagament del preu es faci de manera total i d'una sola vegada després que es finalitzin o mitjançant qualsevol altre mecanisme d'acord a dret que per mitjà de conveni acordin les parts.

3. De manera excepcional, es pot acordar que l'entitat insular o local anticipi el finançament. En aquest cas, aquesta delegació s'ha d'establir per conveni.

4. Amb la finalitat de millorar i mantenir l'estat de conservació, l'accessibilitat i l'eficiència dels centres públics, els ajuntaments i els consells insulars poden contribuir al finançament, a la gestió i a l'execució de millores en les instal·lacions, les edificacions i els equipaments dels centres públics, en cooperació amb l'administració autonòmica.

Article 48. Cooperació amb altres administracions autonòmiques

1. La conselleria pot establir convenis de col·laboració i de cooperació educativa d'acord amb la normativa vigent i les seves competències, amb les altres comunitats autònomes.

2. La conselleria pot promoure d'acord amb les seves competències, la subscripció de convenis de col·laboració i cooperació amb les comunitats i els territoris que tenen vincles lingüístics i culturals amb les Illes Balears, en matèria d'ensenyament de la llengua i sobre altres qüestions educatives d'interès comú.

TÍTOL III

LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

CAPÍTOL I

LA COMUNITAT EDUCATIVA

Article 49. Membres de la comunitat educativa

1. La comunitat educativa està integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.

2. En formen part l'alumnat, les famílies, el professorat, els diversos professionals educatius, el personal d'administració i serveis, i el voluntariat educatiu.

3. També en formen part l'administració educativa, les associacions d'alumnes, els sindicats, les associacions de famílies d'alumnes, les patronals d'educació, les organitzacions de titulars de centres i de les cooperatives d'ensenyament, els col·legis professionals, les associacions de docents, els ajuntaments i els consells insulars i tot el personal i les entitats que col·laboren en el procés educatiu.

4. Tots els membres de la comunitat educativa han de coordinar les seves actuacions de manera integrada a fi de garantir la qualitat i l'equitat, el respecte dels drets de tothom i l'adequada convivència als centres.

5. L'administració educativa i els centres han d'adoptar mesures perquè el conjunt de la comunitat educativa disposi de vies de participació activa, accés a la informació i mecanismes que facilitin la representació i fomentin la seva formació en aquests àmbits.

6. Així mateix, tots els membres de la comunitat educativa tenen els drets i deures reconeguts en les normes bàsiques de l'Estat i en la present llei.

Article 50. Garantia de l'exercici dels drets i deures de l'alumnat

1. L'alumnat té dret a una educació que afavoreixi el ple desenvolupament personal, professional, intel·lectual, social i emocional per gaudir d'una vida saludable, en el respecte als principis democràtics de la convivència i als drets i les llibertats fonamentals.

2. El Govern de les Illes Balears ha de garantir l'exercici del dret a l'educació en igualtat d'oportunitats, adoptant les mesures necessàries per compensar els desavantatges econòmics, socials, culturals, lingüístics o personals de partida que presenti l'alumnat.

3. Tot l'alumnat té els mateixos drets i deures. Exercir-los i complir-los, s'adequarà, quan sigui procedent, a la seva edat i a les característiques dels ensenyaments que estigui cursant. Els centres educatius han de disposar el que sigui necessari per orientar la formació de l'alumnat en el coneixement i el correcte exercici dels drets i deures.

4. El Govern de les Illes Balears ha de garantir l'exercici del dret a l'educació en igualtat d'oportunitats, adoptant les mesures necessàries per compensar qualsevol discriminació o falta d'equitat derivades de la diversitat de l'alumnat, ja sigui funcional, emocional, de gènere o de qualsevol altre tipus.

Article 51. Drets de l'alumnat

1. Són drets i llibertats de l'alumnat en l'àmbit educatiu els següents:

- a) L'accés a l'educació en condicions d'equitat i igualtat d'oportunitats.
- b) L'avaluació objectiva del seu rendiment escolar, esforç i progrés, i el dret a ser informat dels criteris i procediments d'avaluació.
- c) La formació integral que respecti les seves capacitats i necessitats, el seu ritme d'aprenentatge i que estimuli l'esforç personal, la motivació per a l'aprenentatge i la responsabilitat individual.
- d) La participació efectiva en el funcionament i en la vida del centre.
- e) L'accessibilitat universal als centres, als materials d'estudi i als seus recursos amb independència de les seves característiques i eventual diversitat funcional.

- f) La utilització de la llengua de signes, així com el codi de lectoescriptura Braille o altres mitjans de suport per a dificultats d'aprenentatge en l'ensenyament, quan així ho requereixi per les seves circumstàncies personals.
- g) L'orientació escolar i professional, tenint en consideració la seva personalitat i els seus objectius particulars.
- h) L'accés i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la pràctica educativa i la utilització segura d'Internet als centres docents.
- i) El respecte a la seva identitat, integritat i dignitat personals.
- j) La llibertat d'expressió i d'associació, així com de reunió, el respecte a la seva llibertat de consciència i a les seves conviccions religioses i morals.
- k) L'educació que afavoreixi l'assumpció d'una vida responsable per a l'assoliment d'una societat lliure i igualitària, l'adquisició d'hàbits de vida saludable, la conservació del medi ambient i la sostenibilitat.
- l) Qualsevol altres prevists en les lleis i la resta de l'ordenament jurídic.

2. L'administració educativa i els centres educatius han de garantir els drets recollits en la Convenció sobre els drets de l'infant i en la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovades per les Nacions Unides, i en la resta d'instruments de legalitat internacional vigents a Espanya, i l'aplicació dels principis d'interès superior del menor, de participació i de no-discriminació que s'hi preveuen.

Article 52. Deures de l'alumnat

En el procés educatiu, l'alumnat té els deures següents:

- a) Comprometre's responsablement en l'aprenentatge i estudiar per assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats personals.
- b) Respectar el professorat i els seus drets, així com complir les seves directrius i orientacions.
- c) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre docent.
- d) Respectar les normes de convivència i organització del centre docent, col·laborant en la millora de la convivència i en l'exercici del dret de tot l'alumnat a l'educació.
- e) Assistir puntualment a classe i a la resta de les activitats educatives.
- f) Adoptar una actitud fonamentada en la responsabilitat personal en tots els actes de la vida escolar.
- g) Participar en les activitats educatives prescrites pel centre.
- h) Respectar la dignitat i la integritat de tots els membres de la comunitat educativa, així com la igualtat entre dones i homes.
- i) Participar responsablement en la dinàmica del centre educatiu i traslladar les inquietuds, necessitats i propostes de millora a través dels òrgans de participació.
- j) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, gènere, llengua, orientació sexual, religió, opinió, pertinença a minories o diversitat funcional, així com per qualsevol altra circumstància personal o social.
- k) Fer un bon ús de les instal·lacions i del material didàctic del centre.
- l) Qualsevol altre deure previst en les lleis i la resta de l'ordenament jurídic.

Article 53. Tasca de les famílies

1. Les famílies tenen una tasca essencial en l'àmbit escolar, i han de participar en els centres i corresponsabilitzar-se amb el professorat del procés educatiu dels seus fills.

2. La conselleria, juntament amb les altres administracions públiques, ha d'adoptar mesures que afavoreixin la funció educativa de les famílies, els donin suport i facilitin la conciliació.

Article 54. Formació i suport a les famílies

1. L'administració educativa ha de promoure programes que estimulin la participació i la implicació de les famílies i la seva formació. Així mateix, ha de donar suport econòmic a les confederacions, federacions i associacions de famílies.

2. Els centres educatius han d'afavorir l'assistència de les famílies a les reunions i tutories, així com la dels seus representants a les sessions del consell escolar i als altres òrgans de representació en què participin.

Article 55. Drets de les famílies

1. Les famílies i, si escau, els tutors legals, tenen els drets següents:

- a) Que els seus fills rebin una educació amb les màximes garanties de qualitat i equitat, d'acord amb els fins i principis establerts en la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, les lleis educatives i els tractats internacionals vigents a Espanya.
- b) L'elecció de centre educatiu d'acord amb les seves conviccions i preferències dins el marc de la normativa vigent.
- c) Conèixer les programacions didàctiques i els criteris d'avaluació, així com, si es dona el cas, les adaptacions curriculars que s'apliquen als seus fills.
- d) Ser informats del procés educatiu i participar-hi activament, en col·laboració amb el professorat i els centres educatius.
- e) Ser escoltats en les decisions relatives a l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat.
- f) Rebre informació completa relativa al projecte educatiu del centre i el seu caràcter propi i participar en l'elaboració d'aquest a través del consell escolar, així com referida als serveis complementaris, a les normes de convivència i a altres aspectes de caràcter general.
- g) Rebre formació que faciliti la participació en el procés educatiu dels seus fills.
- h) Participar en la gestió dels centres i en la definició del projecte educatiu i formar part dels òrgans de govern i participació d'acord amb la normativa vigent, així com de les comissions de treball que corresponguin.
- i) Qualsevol altre de previst en les lleis i la resta de l'ordenament jurídic.

2. L'administració educativa ha d'establir els mitjans necessaris perquè els equips directius dels centres i el professorat es relacionin amb les famílies i els prestin una atenció adequada a través de tutories, reunions i altres mitjans. Així mateix, s'ha de potenciar, especialment, l'intercanvi d'informació per les vies de comunicació electrònica, utilitzant com a suport les tecnologies de la informació i la comunicació.

Article 56. Deures de les famílies

Les famílies i, si escau, els tutors legals, tenen els deures següents:

- a) Participar en l'educació dels seus fills respectant el projecte educatiu, el caràcter propi i les normes del centre.

- b) Col·laborar amb el professorat per contribuir a l'èxit educatiu de l'alumnat.
- c) Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.
- d) Adoptar les mesures necessàries perquè els seus fills cursin els nivells obligatoris de l'educació i assisteixin regularment a classe.
- e) Informar de les dificultats d'aprenentatge, de socialització o d'integració dels seus fills respecte a l'entorn educatiu.
- f) Qualsevol altre de previst en la resta de l'ordenament jurídic.

Article 57. Promoció d'activitats educatives, culturals i esportives

1. Els centres educatius i les administracions públiques han de promoure la realització d'activitats extraescolars de caràcter educatiu, cultural i esportiu a fi de facilitar i consolidar les relacions entre els membres de la comunitat educativa, així com afavorir el seu enriquiment formatiu.

2. L'administració educativa i els ajuntaments han de facilitar la realització d'activitats extraescolars educatives, culturals i esportives als centres públics fora de l'horari lectiu.

3. Les administracions públiques han de donar suport econòmic per a la realització de les esmentades activitats educatives, culturals i esportives.

4. En les condicions que s'estableixin, les administracions públiques han de facilitar l'obertura dels centres públics en horari no lectiu perquè les entitats culturals, esportives i del tercer sector de l'entorn hi puguin desenvolupar activitats en benefici de la comunitat educativa.

Article 58. Personal docent

1. El personal docent és el conjunt de professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés educatiu als centres i l'autoritat que se'n desprèn. Aquesta responsabilitat inclou la transmissió de coneixements, habilitats i valors i l'acompanyament educatiu de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge i desenvolupament personal, així com la col·laboració amb l'administració educativa en la detecció de les dificultats d'aprenentatge i la iniciació dels procediments per a una intervenció educativa adient.

2. Els membres dels equips directius i el professorat seran considerats autoritat pública, d'acord amb la normativa bàsica. En els procediments d'adopció de mesures correctores en l'àmbit educatiu, els fets constatats pel personal docent i els membres dels equips directius dels centres tindran valor probatori i gaudiran de presumpció de veracitat llevat que es provi el contrari, sense perjudici de les proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguin assenyalar o aportar els propis alumnes.

3. L'administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i les condicions adequades per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del personal docent.

4. El personal docent ocupa la posició preeminent en l'exercici de les seves funcions docents i gaudeix d'autonomia, dins els límits que determinen la legislació i el projecte educatiu de centre.

Article 59. Funció docent

1. El professorat, com a element clau del sistema per a la millora de la qualitat de l'educació, ha d'exercir la seva funció docent amb responsabilitat i professionalitat, i

tenir com a objectiu irrenunciable la formació integral i el ple èxit educatiu de l'alumnat.

2. La conselleria ha de donar suport al desenvolupament de la funció docent a través de mesures de millora professional, personal i salarial del professorat per aconseguir un major reconeixement social i prestigiar la seva tasca. Aquestes mesures han de ser negociades amb els representants sindicals dels docents.

Article 60. Funcions del personal docent

Les funcions del personal docent són les següents:

- a) Exercir la docència i l'avaluació dels ensenyaments, facilitar l'aprenentatge i promoure el desenvolupament integral de l'alumnat.
- b) Aplicar els principis de col·laboració, de coordinació i de treball en equip d'acord amb el projecte educatiu del centre.
- c) Col·laborar en la prevenció i la detecció primerenca de les necessitats educatives de suport específic de l'alumnat i aplicar les adaptacions curriculars corresponents, com també col·laborar en la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar.
- d) Contribuir a la protecció de la infància i a la identificació de situacions de maltractament o desatenció.
- e) Exercir la tutoria i l'orientació de l'aprenentatge amb la col·laboració activa de les famílies per tal d'afavorir la individualització de l'ensenyament.
- f) Participar en l'orientació acadèmica, psicopedagògica i professional, en col·laboració amb els serveis o departaments competents.
- g) Atendre el desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de tot l'alumnat i contribuir a fer que les activitats del centre es realitzin en un clima de respecte, de tolerància i de llibertat.
- h) Promoure el respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa, així com a la igualtat d'oportunitats.
- i) Impulsar la igualtat de gènere i facilitar un coneixement millor dels obstacles i les discriminacions que dificulten la plena igualtat entre dones i homes.
- j) Participar en les activitats programades del centre, dins i fora del recinte escolar, i en la coordinació i la direcció de les altres que li siguin encomanades, en el marc de les seves funcions i competències.
- k) Dur a terme pràctiques d'experimentació i innovació educatives, fent ús, especialment, de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- l) Participar i col·laborar en l'elaboració dels plans d'avaluació que l'administració educativa o els mateixos centres determinin.
- m) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills, i orientar-les per contribuir a millorar-lo.
- n) Contribuir a la millora de la pràctica docent i responsabilitzar-se de la seva formació en l'àmbit de l'equip docent i de la seva especialitat professional.
- o) Qualsevol altra de prevista per l'ordenament jurídic.

Article 61. Altres professionals educatius

1. Els centres educatius poden disposar d'altres professionals de diversos àmbits per al desenvolupament de programes, per a l'atenció psicopedagògica i social i per a altres actuacions educatives o la formació complementària de l'alumnat.

2. Aquests professionals, de caràcter no docent, han de tenir la deguda qualificació en funció de la tasca que han de desenvolupar i han de treballar en coordinació amb el professorat, sota la supervisió de l'equip directiu.

3. Les administracions públiques, en les condicions que es determinin, han de promoure la incorporació d'aquests professionals educatius de caràcter no docent als centres per al desenvolupament de les funcions que s'estableixin.

4. L'administració educativa ha d'establir, entre d'altres, les funcions dels auxiliars tècnics educatius i dels educadors socials que intervenen en els centres públics, així com els requisits i els mèrits per accedir a aquests llocs, prèvia negociació amb els representants dels treballadors.

Article 62. Personal d'administració i serveis dels centres públics

1. El personal d'administració i serveis exerceix les seves funcions per a la millor prestació dels serveis educatius i de conformitat amb els principis que estableix aquesta llei i d'acord amb la resta de l'ordenament jurídic que li és d'aplicació, sota les directrius de l'equip directiu.

2. El Govern de les Illes Balears ha de dotar els centres educatius de la seva titularitat del personal d'administració i serveis necessari per garantir el suport tècnic a la gestió escolar.

3. El personal d'administració i serveis dels centres públics depèn orgànicament de la conselleria competent en matèria de funció pública i funcionalment de la conselleria competent en matèria d'educació.

4. L'administració educativa ha de proporcionar a aquest personal la protecció deguda i ha de garantir l'exercici dels altres drets que li atribueix l'ordenament jurídic. Així mateix, ha de promoure que se'l valori socialment de manera adequada.

5. El personal d'administració i serveis, com a membre de la comunitat educativa, ha de participar activament en la vida del centre amb vista a la consecució dels objectius del projecte educatiu. L'administració educativa ha de fomentar la seva participació en els consells escolars.

6. L'administració autonòmica ha d'establir plans de formació encaminats a l'aprenentatge permanent i la promoció professional, que han de preveure tant la formació en aspectes educatius com en els relatius al compliment de les seves funcions.

Article 63. Voluntariat educatiu

S'han de regular reglamentàriament les diverses figures del voluntariat educatiu, definint les seves funcions i les seves característiques, en el marc de l'ordenament jurídic vigent.

CAPÍTOL II LES FORMES DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Article 64. Principi i vies de participació

1. La participació dels diversos sectors que configuren la comunitat educativa constitueix un principi fonamental del sistema educatiu de les Illes Balears, que ha de

basar-se en la presa de decisions sectorials i globals en matèria de política escolar, en la realització de negociacions de les condicions sociolaborals del personal al servei educatiu i en el diàleg amb la comunitat educativa.

2. La participació de la comunitat educativa en el si de la conselleria competent en matèria d'educació, sense perjudici del que disposen altres normes reguladores de la participació, s'ha de realitzar a través de diverses meses específiques dels diferents sectors de la comunitat educativa, entre les quals s'han de constituir les següents:

- a) La Mesa Sectorial d'Educació.
- b) La Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat.
- c) La Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors i les Associacions de Directors.
- d) La Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies.
- e) La Mesa dels Docents.
- f) La Mesa de l'Alumnat.

3. Reglamentàriament s'han de determinar la composició i les funcions d'aquestes meses.

4. En qualsevol cas, els màxims òrgans de participació i consulta de la comunitat educativa són els consells escolars.

Article 65. Participació de l'alumnat

1. L'administració educativa ha de promoure la participació efectiva de l'alumnat, directament o a través dels seus representants i de forma adequada a la seva edat, en els consells escolars dels centres, en les juntes de delegats, en els consells escolars municipals, en els consells escolars insulars i en el Consell Escolar de les Illes Balears.

2. Els centres educatius han d'estimular la col·laboració de l'alumnat en la millora de la convivència i l'aprenentatge a través de mecanismes i estructures adequades a la seva edat i al seu desenvolupament educatiu i personal, i mitjançant l'aprenentatge cooperatiu i d'ajuda entre iguals.

Article 66. La junta de delegats del centre

1. Cada centre haurà de constituir una junta de delegats on hi participaran tots els delegats de totes les aules del centre. La junta de delegats del centre s'ha de reunir almenys un cop cada trimestre durant el curs escolar.

2. La junta de delegats del centre haurà de ser consultada, almenys, en la programació d'activitats complementàries, activitats lúdiques i normes de funcionament dels espais comuns del centre.

3. En el cas dels centres d'educació secundària, a més de les atribucions previstes en l'apartat anterior, la junta de delegats serà concebuda com un espai de reflexió sobre el model de centre, com un espai de comunicació entre l'alumnat i el centre, a més de com una eina per cohesionar la comunitat educativa.

Article 67. Associacions d'alumnes

1. L'administració educativa ha de fomentar la creació i el desenvolupament d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes.

2. L'alumnat dels centres educatius pot associar-se, d'acord amb la seva edat i l'etapa educativa que cursi, en els termes prevists en les normes legals i reglamentàries que regulin aquestes associacions. Així mateix, pot constituir

associacions segons el que disposen les lleis que regulen el dret d'associació i la protecció jurídica del menor.

3. Les associacions d'alumnes tenen com a finalitat essencial promoure la participació dels alumnes en l'educació i facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment dels seus deures.

4. Els estatuts de les associacions d'alumnes han d'incloure almenys les finalitats següents:

- a) Expressar l'opinió de l'alumnat en tot allò que afecti la seva situació als centres.
- b) Col·laborar en la tasca educativa dels centres i en el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars.
- c) Promoure la participació de l'alumnat en els òrgans col·legiats del centre docent.
- d) Desenvolupar activitats culturals, esportives i de foment de l'acció cooperativa i del treball en equip.

5. La regulació d'aquestes associacions s'ha de determinar reglamentàriament.

6. Sense perjudici de la seva inscripció en el Registre d'associacions de les Illes Balears, les associacions, les federacions i les confederacions d'alumnes s'han d'inscriure en el registre específic que s'estableixi a l'efecte.

Article 68. Participació de les famílies

1. L'administració educativa i els centres han de promoure l'exercici real i efectiu del dret de les famílies i, si escau, dels tutors legals, a participar en els centres i en l'educació dels seus fills per donar suport al seu aprenentatge.

2. Les famílies tenen el dret a participar en el procés educatiu a través dels seus representants, segons els termes que es determinin, en els consells escolars dels centres, en els consells escolars municipals i insulars i en el Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 69. Associacions de famílies d'alumnat

1. Les famílies i els tutors legals tenen dret a constituir associacions, federacions i confederacions i a pertànyer-hi, de conformitat amb la legislació bàsica de l'Estat, com a instruments de participació activa en les activitats dels centres i en l'educació dels seus fills.

2. L'administració educativa ha de fomentar la creació i el desenvolupament d'aquestes associacions mitjançant mesures específiques i ha d'establir el procediment perquè participin en les institucions i hi estiguin representades.

3. En el marc de la seva autonomia, els centres han de facilitar la realització d'actuacions amb l'alumnat i les famílies i les seves respectives associacions o federacions que contribueixin a la millora de la qualitat educativa, de l'èxit acadèmic i de la convivència escolar.

4. Les associacions de famílies d'alumnat tindran les finalitats que s'estableixin en els seus propis estatuts, entre les quals s'han d'incloure les següents:

- a) Assessorar les famílies en tot allò que concerneix l'educació dels seus fills.
- b) Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre i facilitar que estiguin representades en els consells escolars i hi participin.
- c) Cooperar en les activitats educatives dels centres, en el marc del projecte educatiu.
- d) Col·laborar en les activitats de formació de les famílies.

5. La regulació d'aquestes associacions s'ha de determinar reglamentàriament.
6. Sense perjudici de la seva inscripció en el Registre d'associacions de les Illes Balears, les associacions, les federacions i les confederacions de famílies de l'alumnat s'han d'inscriure en un registre específic.

CAPÍTOL III ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Article 70. Mesa Sectorial d'Educació

1. La Mesa Sectorial d'Educació de les Illes Balears és l'òrgan constituït a la comunitat autònoma de les Illes Balears per exercir les funcions i les competències que se li atribueixen legalment segons la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i sense perjudici de les especialitats de procediment que se li puguin atribuir reglamentàriament.

2. Formen part de la Mesa Sectorial d'Educació representants de la conselleria competent en matèria d'educació, així com representants de les organitzacions sindicals que hagin obtingut el 10 % o més dels representants en les eleccions a les diverses juntes de personal docent no universitari de les diverses illes.

3. Són competències de la Mesa Sectorial d'Educació la negociació col·lectiva de les condicions de treball dels funcionaris docents i tots els assumptes enumerats en la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, sempre que es refereixin o siguin aplicables a l'àmbit de les condicions de treball dels funcionaris docents. Així mateix, també són competència de la Mesa tots els assumptes que afectin directament o indirectament les condicions sociolaborals del personal docent i és l'única competent en matèria de negociació d'aquestes condicions.

Article 71. Òrgans de representació del personal docent públic

Els òrgans de representació del personal docent públic no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Article 72. Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat

1. La Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears és l'òrgan autonòmic de negociació entre la conselleria i les entitats representatives del sector.

2. L'àmbit de competència de la Mesa se circumscriu a la negociació de les qüestions relacionades amb l'execució dels concerts educatius, les millores de finançament dels mòduls de concert i la participació en l'elaboració d'instruments d'ordenació, reglaments i normes legals d'àmbit autonòmic que afectin el sector de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

3. La Mesa ha d'estar formada pels representants de la conselleria competent en matèria d'educació, dels sindicats, de les organitzacions patronals i de titulars de centres i de les cooperatives d'ensenyament representatives del sector a les Illes Balears. S'elaborarà un reglament de funcionament.

4. La conselleria donarà suport a les organitzacions participants en la Mesa per al desenvolupament de les activitats i funcions de participació i representació institucionals que els són pròpies.

Article 73. Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors i les Associacions de Directors

1. La Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors i les Associacions de Directors s'ha de constituir com un òrgan de participació, informació i estudi de les qüestions relacionades amb la millora dels processos educatius, el model de funció directiva i el bon funcionament dels centres educatius no universitaris sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Han de formar part de la Mesa, a més de representants de l'administració educativa, directors en representació de les associacions de directors de l'ensenyament públic, així com directors de l'ensenyament privat concertat en representació de les entitats patronals més representatives del sector, i de les cooperatives d'ensenyament. També en podran formar part exdirectors de centres educatius no universitaris sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com a personalitats de reconegut prestigi.

3. Quan els temes que s'hagin de tractar afectin exclusivament el sector de l'ensenyament públic o el sector de l'ensenyament privat concertat, es podran constituir per separat submeses de diàleg amb directors i representants del sector esmentat.

4. La conselleria donarà suport a les associacions de directors legalment constituïdes per al desenvolupament de les seves activitats.

Article 74. Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies de l'Alumnat

1. La Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies de l'Alumnat de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat de participació i assessorament de les associacions de famílies d'alumnat per mitjà de les federacions i de les confederacions en les quals es trobin agrupades.

2. La Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies de l'Alumnat és l'òrgan de participació, de consulta i d'assessorament de les famílies en totes les qüestions que afectin l'educació dels seus fills.

3. La Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies de l'Alumnat ha d'estar formada per representants de l'administració educativa, de les federacions d'associacions de famílies d'alumnat i de les confederacions, i per personalitats de reconegut prestigi en el món educatiu designades per consens de la Mesa.

Article 75. Mesa dels Docents

1. La Mesa dels Docents és un òrgan de participació i assessorament del professorat en allò que afecta la seva tasca educativa professional i en les qüestions que facin referència als aspectes pedagògics, curriculars i didàctics i als diferents plans d'innovació pedagògica que promogui la conselleria per a la millora de la qualitat educativa.

2. Poden participar en aquesta Mesa dels Docents, en les condicions que s'estableixin, les associacions de docents i els col·legis professionals que tinguin competències sobre el procés educatiu.

3. L'administració educativa, sense perjudici de la representativitat sindical reconeguda per la normativa bàsica, pot promoure acords amb els col·legis professionals i les associacions de docents legalment constituïdes i facilitar la seva participació pel que fa a activitats d'innovació i de formació permanent.

Article 76. Mesa de l'Alumnat

1. La Mesa de l'Alumnat és l'òrgan de participació de l'alumnat de l'ensenyament no universitari en totes les qüestions que l'afectin.

2. Poden participar en la Mesa de l'Alumnat, en les condicions que s'estableixin, les associacions d'alumnes que estiguin legalment constituïdes i que en siguin representatives.

Article 77. Consells escolars

1. La participació de la comunitat educativa s'articula, també, i d'acord amb la normativa vigent, a través dels diversos consells escolars.

2. Els diversos consells escolars són els següents:

- a) Els consells escolars de centre.
- b) Els consells escolars municipals.
- c) Els consells escolars insulars.
- d) El Consell Escolar de les Illes Balears.

3. La conselleria, els consells insulars respectius, els ajuntaments i els mateixos centres els han de regular en el marc de la normativa vigent i de les seves competències.

4. La composició dels consells escolars ha de tendir a l'equilibri entre ambdós sexes en compliment de la normativa d'igualtat de dones i homes.

Article 78. Consell Escolar de les Illes Balears

1. El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l'organisme superior de participació i de consulta dels diversos sectors de la comunitat educativa en totes les qüestions que afecten la política educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. La composició, les funcions i l'organització del CEIB s'han d'establir per llei. En aquest sentit, el CEIB podrà fer una proposta de llei perquè es tramiti, si escau, en forma de projecte o de proposició de llei.

3. El CEIB ha de funcionar en ple i en comissions. En tot cas, el CEIB ha de tenir una comissió permanent.

4. El president del CEIB ha de ser proposat pel mateix CEIB d'acord amb la normativa aprovada respecte d'aquesta qüestió. En tot cas, el president ha de ser nomenat pel Govern, a proposta del titular de la conselleria competent en matèria d'educació.

5. Els membres del CEIB han de ser nomenats pel conseller competent en matèria d'educació a proposta de les entitats que en formen part.

6. El CEIB ha d'elaborar periòdicament un informe sobre l'estat del sistema educatiu amb caràcter descriptiu i explicatiu i amb les corresponents recomanacions de millora.

7. El CEIB ha d'elaborar una memòria anual de les seves activitats, que s'ha de fer pública.

8. El CEIB pot sol·licitar, per raó de la qüestió tractada, que hi compareguin, amb veu i sense vot, representants d'entitats que tinguin incidència en matèria educativa.

9. El CEIB pot sol·licitar, d'acord amb les seves competències, la presència del conseller competent en matèria d'educació o de membres de la mateixa conselleria.

Article 79. Consells escolars insulars

1. Els consells escolars insulars són els òrgans de participació i consulta de la comunitat educativa de cada illa en les qüestions educatives i tenen com a objectiu, entre d'altres, analitzar la situació de necessitats educatives del seu territori i fer les recomanacions corresponents per millorar-la.

2. S'han de constituir els consells escolars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.

3. La composició, l'estructura, les competències i el funcionament dels consells escolars insulars s'han d'establir reglamentàriament prèvia consulta amb els consells insulars. Cada consell insular s'ha de fer càrrec de la dotació dels recursos necessaris per al seu funcionament.

Article 80. Consells escolars municipals

1. Els consells escolars municipals són els òrgans de participació i consulta de la comunitat educativa de cada municipi en les qüestions educatives.

2. Cada ajuntament pot constituir un consell escolar municipal. L'administració educativa ha de promoure la constitució d'un consell escolar municipal en aquells municipis en els quals s'hagi de crear preceptivament. La comunitat educativa de cada municipi podrà participar i implicar-se tant en el seu funcionament com en les seves activitats.

3. Els consells escolars municipals han de tenir la composició, l'estructura, les competències i el funcionament que s'estableixi reglamentàriament.

Article 81. Consells escolars dels centres públics

1. El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

2. El consell escolar, com a màxim òrgan de representació dels diferents membres de la comunitat educativa, ha de ser el principal òrgan decisor del centre.

3. Correspon a la conselleria, d'acord amb la normativa vigent, determinar el nombre i el procediment d'elecció dels membres del consell escolar del centre.

4. Corresponen al consell escolar del centre les funcions següents:

- a) Aprovar el projecte educatiu i les seves modificacions per una majoria de dos terços dels seus membres.
- b) Aprovar la programació anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
- c) Aprovar els acords de col·laboració i els convenis amb entitats i institucions, a proposta de la direcció del centre.
- d) Aprovar les normes de funcionament i organització del centre.
- e) Aprovar el pressupost del centre i la rendició de comptes.
- f) Participar d'acord amb la normativa vigent en el cessament i en la selecció del director.
- g) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

- h) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
- i) Ser informat de la resolució de conflictes i de les mesures correctores educatives als alumnes i vetlar perquè s'ajustin a la normativa vigent.
- j) Aprovar, si escau, la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, així com avaluar aquestes activitats.
- k) Participar en les avaluacions del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
- l) Proposar mesures que afavoreixin la convivència, la igualtat efectiva entre homes i dones, la no-discriminació, la prevenció de la violència de gènere i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
- m) Establir mesures que facilitin la participació del conjunt de la comunitat educativa.
- n) Aprovar criteris de col·laboració amb altres centres educatius.
- o) Avaluar el propi funcionament del consell escolar com a òrgan de participació i presa de decisions.
- p) Designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones i de prevenció de la violència de gènere que es pugui donar al centre.
- q) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per la normativa legal.

5. El consell escolar actua normalment en ple, però s'hi poden constituir comissions específiques. Als centres públics és obligatòria la constitució d'una comissió econòmica i una comissió permanent.

6. L'òrgan de participació dels centres integrats de formació professional és el consell social del centre. La seva composició i funcionament s'han de regular reglamentàriament.

Article 82. Consell escolar dels centres privats concertats

1. Tots els centres privats concertats han de comptar amb un consell escolar amb les competències i la composició que s'estableixen en la normativa orgànica bàsica, com a òrgan en el qual s'exerceix la participació de docents, famílies i alumnes en la gestió i el control del centre, sense perjudici que el reglament de règim interior prevegi altres òrgans per a la participació de la comunitat educativa.

2. Un dels representants de les famílies en el consell escolar ha de ser designat per l'associació de famílies d'alumnat més representativa en el centre.

3. Als centres específics d'educació especial i en aquells que tinguin aules especialitzades, també ha de formar part del consell escolar un representant del personal d'atenció educativa complementària. Així mateix, els centres concertats que imparteixen formació professional poden incorporar al seu consell escolar un representant del món de l'empresa, designat per les organitzacions empresarials, d'acord amb el procediment que l'administració educativa estableixi.

4. El consell escolar ha de designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones i de prevenció de la violència de gènere, promovent els instruments necessaris per fer un seguiment de les possibles situacions de violència de gènere que es puguin donar al centre.

TÍTOL IV
LA FUNCIO PÚBLICA DOCENT
A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CAPÍTOL I
LES CARACTERÍSTIQUES DE LA FUNCIO PÚBLICA DOCENT

Article 83. Ordenació de la funció pública docent

1. La funció pública docent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ha d'estar informada pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s'ordena d'acord amb la normativa bàsica específica estatal, per l'establert en la present llei i per la normativa autonòmica específica de desplegament. En aquelles matèries no regulades per la normativa anterior, serà d'aplicació la normativa bàsica estatal de funció pública i la normativa de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El personal docent no universitari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears es classifica en:

- a) Personal funcionari de carrera.
- b) Personal funcionari interí.
- c) Personal laboral.

3. El personal docent funcionari de carrera i interí s'ha de regir per:

- a) Les normes que regulen les bases del règim estatutari del personal funcionari docent.
- b) Les disposicions d'aquesta llei i les normes que la desenvolupin.
- c) La norma de rang legal reguladora de l'Estatut bàsic de l'empleat públic que li sigui aplicable.
- d) La normativa reguladora de la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en cas que no hi hagi una normativa específica aplicable.

4. El personal docent de règim laboral s'ha de regir per la legislació laboral, pel que estableix el conveni col·lectiu que li sigui aplicable i pels preceptes de la normativa esmentada per al personal funcionari que així ho disposin.

Article 84. Llocs de treball amb funcions específiques

1. La conselleria, de forma motivada, podrà establir requisits o perfils específics per a determinats llocs de feina docents.

2. L'administració educativa pot adscriure mestres especialitzats a l'educació secundària obligatòria per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials, en els supòsits que s'estableixin i en el marc del que recull la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, o la norma que la substitueixi.

3. Excepcionalment, la conselleria pot encomanar al personal funcionari docent l'exercici de funcions en una etapa o ensenyaments diferents dels assignats amb caràcter general al cos docent a què pertany, d'acord amb el que, a aquest efecte, es determini per reglament i en el marc de la normativa bàsica de l'Estat.

4. Excepcionalment, per a determinats mòduls de formació professional, inclosos els ensenyaments artístics, esportius i tècnics, l'administració educativa pot incorporar,

com a professors especialistes, professionals no necessàriament titulats que desenvolupin la seva activitat en l'àmbit laboral, atenent la seva qualificació i les necessitats del sistema educatiu. Aquesta incorporació s'ha de fer d'acord amb la normativa que sigui aplicable.

5. L'administració educativa pot incorporar, d'acord amb la normativa que es desenvolupi, professorat d'altres països, amb la mateixa titulació que la requerida per al personal funcionari, tant per a l'ensenyament d'idiomes com per impartir altres matèries que es desenvolupin en una llengua estrangera.

6. També es podran contractar, excepcionalment, professionals d'altres països per als ensenyaments artístics i per als ensenyaments d'idiomes com a professorat especialista, en els termes que es preveuen en la normativa bàsica de l'Estat, sense que necessàriament compleixin el requisit de titulació establert amb caràcter general.

7. L'administració educativa podrà contractar professors associats i visitants per als ensenyaments artístics superiors i també incorporar-hi emèrits, en els termes establerts en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, o, si n'és el cas, pel que fa als emèrits, en els termes que s'estableixin en el desplegament de l'article 96.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

CAPÍTOL II L'INGRÉS I LA PROVISIÓ

Article 85. Ingrés a la funció pública docent

1. L'ingrés a la funció pública docent com a funcionari de carrera s'ha de dur a terme de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica de l'Estat, amb el que estableix la present llei, i amb el que, en el seu desenvolupament, aprovi l'administració educativa en el marc de les seves competències.

2. En qualsevol cas, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

3. L'administració educativa, en el marc de les seves competències, ha de promoure que la fase de pràctiques per a l'accés a la funció pública docent permeti als nous docents adaptar-se al context del seu treball i asseguri l'adquisició de les competències docents exigibles.

4. Així mateix, s'ha de garantir que el personal docent que ostenti la tutoria dels candidats a funcionaris de carrera en la fase de pràctiques compleixi els requisits que s'estableixin de formació i experiència, i disposi de les condicions adients en la distribució de la seva càrrega horària que li permetin exercir amb eficàcia les funcions d'assessorament i avaluació que li són pròpies.

Article 86. Personal funcionari interí

1. La selecció del personal funcionari interí docent s'ha de fer per mitjà de convocatòries públiques sota els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

2. S'han de determinar reglamentàriament els requisits i els procediments d'accés, la durada del nomenament, el període de pràctiques tutelades i els criteris d'ordenació en la borsa de feina. A l'oferta de places s'ha d'incloure, si escau, la informació de les places amb perfil específic vinculat al projecte educatiu de centre.

Article 87. Provisió de llocs de feina docent mitjançant concurs

1. Els llocs de feina docents als centres públics, les zones i els serveis educatius s'han de proveir per professorat funcionari de carrera mitjançant concursos de trasllats ordinaris o específics. En qualsevol cas, els concursos de provisió s'han de fer per mitjà de convocatòries públiques sota els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i poden ser generals i específics.

2. Els concursos generals són el procediment ordinari de provisió de places o llocs de feina docents vacants.

Article 88. Provisió de llocs de feina mitjançant comissió de serveis

1. La conselleria, de manera motivada i per necessitats del servei o funcionals, pot traslladar, en comissió de serveis, els funcionaris de carrera docents a llocs de feina a altres centres o serveis educatius diferents del centre on van obtenir plaça per concurs, donant prioritat a la voluntarietat dels trasllats si impliquen canvi de residència.

2. La conselleria pot fer convocatòries per ocupar llocs en comissió de serveis entre els funcionaris de carrera. Les convocatòries, que han de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, han de determinar, almenys, els requisits, les circumstàncies, els mèrits i les condicions per sol·licitar-les i han d'establir les prioritats per atorgar-les.

3. L'adjudicació d'una comissió de serveis o d'una atribució temporal de funcions comporta la reserva del lloc de feina d'origen.

4. El personal docent funcionari de carrera podrà accedir als llocs de feina de l'administració autonòmica que es determinin. En tot cas, tindrà les mateixes garanties que les establertes amb caràcter general en la normativa de funció pública per als casos de remoció i cessament.

Article 89. Comissions per a la dotació de places amb perfil educatiu

1. L'administració educativa, a proposta del consell escolar del centre i d'acord amb el procediment i les condicions que s'estableixin, pot determinar a quins llocs de la plantilla docent s'atorga un perfil específic, per garantir la continuïtat del projecte educatiu.

2. La conselleria ha de fer convocatòries de comissió de serveis específiques per a la provisió de places vacants per al professorat catalogades amb un perfil vinculat al projecte educatiu de centre. En qualsevol cas, aquestes convocatòries s'han de fer sota els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

3. Aquestes convocatòries han d'anar destinades a cobrir llocs de feina docents que requereixen tècniques, responsabilitats o condicions d'ocupació específiques d'acord amb el projecte educatiu del centre, sempre que el centre hagi definit els seus perfils d'acord amb la regulació feta per l'administració educativa. En aquestes convocatòries, s'han de determinar els requisits i els mèrits avaluable segons el perfil educatiu i es pot exigir l'elaboració de memòries.

Article 90. Comissions per al personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent

1. L'administració educativa, a més dels llocs de feina catalogats per a personal funcionari dels cossos i les escales dels serveis generals de l'Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears que formen part de la seva relació de llocs de treball (RLT), també pot tenir incorporats, amb caràcter temporal i voluntari, funcionaris dels cossos docents no universitaris als quals s'assignen funcions que impliquen dur a terme tasques de suport i assessorament en aspectes i assumptes directament relacionats amb els serveis educatius.

2. La conselleria ha d'establir els criteris i les pautes d'actuació per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD) en l'administració educativa. Aquestes comissions s'han d'assignar a personal funcionari de carrera dels cossos docents no universitaris. Només en casos excepcionals i degudament motivats es poden assignar a personal docent interí.

3. Els assessors tècnics docents han de fer el mateix horari que el personal d'administració i serveis de la conselleria. També han de gaudir de les mateixes vacances i llicències i s'han d'ajustar al mateix control horari.

CAPÍTOL III EL RECONeixEMENT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

Article 91. Jornada de treball

1. La conselleria ha de regular la jornada de treball del professorat, la dedicació a les activitats escolars i la seva distribució horària, així com la participació en activitats complementàries, d'acord amb la normativa vigent i les pròpies competències.

2. La jornada de treball ordinària pot ser a temps complet o a temps parcial. Les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris docents que tenen assignada una jornada de treball a temps parcial han de ser proporcionals a la jornada realitzada, en les condicions que es determinin reglamentàriament.

3. Al personal docent no universitari li són d'aplicació els permisos regulats en el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

4. El personal docent no universitari té dret a un mes de vacances dins l'any natural, que s'ha de gaudir normalment el mes d'agost. Els dies o períodes no lectius de la resta de mesos no tenen la consideració de vacances i el personal docent està a disposició de l'administració educativa.

Article 92. Carrera docent

1. El Govern de les Illes Balears, en el marc de la normativa bàsica, ha d'establir un sistema de carrera docent per al personal de la funció pública vinculada a l'avaluació del seu acompliment professional segons les funcions docents desenvolupades, el progrés del seu alumnat, les activitats de formació i les tasques d'innovació i recerca.

2. La conselleria ha d'afavorir l'accés i la permanència del professorat, sigui de carrera o interí, als centres que hagin d'adoptar mesures singulars derivades de les necessitats de l'alumnat i de les característiques de l'entorn, i que puguin estar subjectes eventualment a un elevat índex de mobilitat del personal docent. A aquest efecte, i sense perjudici dels incentius econòmics que es puguin arbitrar, l'administració educativa ha de fer prevaler, com a mèrit específic, l'exercici continuat de llocs de treball en aquests centres tant en els concursos de trasllat que li correspongui organitzar com en els procediments de selecció dels funcionaris interins.

3. L'administració educativa ha de facilitar i promoure entre el personal docent el desenvolupament de projectes que fomentin la innovació educativa.

Article 93. Sistema retributiu

El sistema retributiu dels funcionaris docents i del personal laboral docent s'ha d'establir per mitjà d'una disposició de rang legal, en el marc de la normativa bàsica de l'Estat, de la normativa aplicable de la funció pública de l'administració autonòmica i de les disposicions d'aquesta llei.

Article 94. Llicències i ajudes

1. La conselleria pot convocar llicències per al professorat, retribuïdes i no retribuïdes, a fi d'estimular la realització d'activitats de formació i de recerca i innovació en l'àmbit educatiu. Aquestes llicències, en el supòsit del professorat de formació professional, poden consistir, a més, en estades en empreses i institucions per tal de possibilitar l'actualització científica i tecnològica.

2. La conselleria pot atorgar ajudes per a la realització d'activitats per part del professorat que contribueixin a la seva formació i promoció professional.

Article 95. Premis

La conselleria ha d'establir les bases reguladores de premis que reconeixin l'excel·lència del professorat i la seva contribució a l'òptim funcionament dels centres educatius de les Illes Balears.

Article 96. Seguretat i salut en el treball

L'administració educativa ha d'adoptar mesures destinades a promoure el benestar i la millora de la salut laboral del personal dels centres educatius i dels serveis de suport a l'ensenyament i promoure activitats formatives específicament orientades a perfeccionar els nivells de prevenció i de protecció als centres.

Article 97. Mesures de suport i protecció de la funció pública docent

1. L'administració educativa ha de dispensar al professorat la protecció deguda, ha de garantir l'exercici dels seus drets i ha de promoure que sigui valorat socialment.

2. El professorat dels centres públics té dret a l'assistència jurídica i a la cobertura de la responsabilitat civil respecte dels fets relacionats directament amb el seu exercici legítim de les funcions professionals.

3. La conselleria ha de posar immediatament en coneixement de la Fiscalia i l'autoritat judicial competent els fets que, en detriment de la integritat o la dignitat del professorat, puguin constituir infracció penal, a l'efecte que se'n dedueixin les responsabilitats procedents.

4. La conselleria ha de vetllar per la millora de les condicions de treball i adoptar accions per facilitar la conciliació de l'exercici professional i la vida familiar del professorat dels centres públics.

5. Així mateix, s'han d'adoptar les mesures que siguin necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats i la protecció de les persones en situació vulnerable i de les víctimes de la violència de gènere o terrorista. Amb aquesta finalitat, s'han d'elaborar els protocols corresponents.

6. Amb la finalitat d'afavorir la formació permanent, de conformitat amb la legislació bàsica estatal, el professorat ha de disposar d'accés gratuït a les biblioteques i als museus dependents dels poders públics de les Illes Balears.

7. La conselleria ha de promoure convenis amb la Universitat de les Illes Balears a fi de facilitar la incorporació als departaments universitaris del professorat dels cossos docents a què es refereix aquesta llei.

CAPÍTOL IV

EL REGISTRE GENERAL DEL PERSONAL DOCENT I EL RECONeixEMENT DE COMPETÈNCIES

Article 98. Registre General del Personal Docent no Universitari de les Illes Balears

1. El Registre General del Personal Docent no Universitari de les Illes Balears, òrgan administratiu adscrit a la direcció general competent en matèria de personal docent, té atribuïdes les competències d'inscripció del personal docent no universitari al servei de l'administració autonòmica i d'anotació de tots els actes que afecten la vida administrativa d'aquest personal, així com les de gestió, manteniment i actualització de les relacions de llocs de feina.

2. L'organització i el funcionament del Registre General del Personal Docent no Universitari de les Illes Balears i les dades que hi han de constar s'han d'establir per decret del Consell de Govern.

3. Els membres del personal docent tenen dret a accedir lliurement als seus expedients individuals i a les dades relatives a la seva vida administrativa que hi figuren inscrites, així com a obtenir-ne els certificats corresponents.

Article 99. Reconeixement de competències

1. En matèria de funció pública docent, corresponen al Consell de Govern de les Illes Balears les competències que li siguin atribuïdes en la legislació general de la comunitat autònoma.

2. La persona titular de la conselleria competent en matèria d'educació, té les atribucions següents:

- a) Exercir la potestat reglamentària en la matèria, sense perjudici de la que correspon al Consell de Govern.
- b) Proposar al Consell de Govern l'aprovació de la relació de llocs de feina del personal docent no universitari.
- c) Proposar al Consell de Govern l'establiment de la jornada i de l'horari de treball i l'adopció d'acords en matèria de funció pública docent.
- d) Establir, si escau, els perfils lingüístics i d'altres exigibles per a l'exercici de determinats llocs de feina en la funció pública docent.
- e) Proposar al Consell de Govern l'oferta pública d'ocupació del personal docent no universitari.
- f) Impulsar les polítiques de formació permanent del professorat.
- g) Resoldre sobre les situacions administratives i la jubilació del personal funcionari docent.
- h) Dictar ordres de servei, instruccions i circulars en matèria de personal docent no universitari.

- i) Convocar i resoldre els procediments de selecció del personal docent no universitari i nomenar els membres dels òrgans de selecció.
- j) Nomenar i fer cessar el personal docent funcionari en pràctiques i interí i formalitzar els contractes de treball del personal laboral.
- k) Convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina del personal docent no universitari, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.
- l) Convocar i resoldre les comissions de serveis del personal docent no universitari en l'àmbit de l'administració autonòmica.
- m) Autoritzar les comissions de serveis del personal docent no universitari de l'administració autonòmica a altres administracions públiques o a entitats de dret públic, a proposta dels organismes afectats.
- n) Resoldre les sol·licituds d'autorització i reconeixement de compatibilitat del personal docent no universitari al servei de l'administració autonòmica.
- o) Vigilar el compliment de les normes d'aplicació general i exercir la inspecció en matèria de personal docent no universitari.
- p) Iniciar i resoldre els procediments disciplinaris del personal funcionari docent no universitari per faltes greus o molt greus, excepte quan impliquin separació del servei.
- q) Exercir la facultat disciplinària en relació amb el personal laboral docent i acordar l'extinció dels contractes de treball d'aquest personal.
- r) Preparar els projectes de llei i de disposicions reglamentàries en matèria de funció pública docent i proposar-ne l'aprovació al Consell de Govern, quan correspongui.
- s) Atorgar els premis, les recompenses i les distincions que es determinin reglamentàriament.
- t) Qualsevol altra competència que, en matèria de funció pública docent no universitària, li atribueixi la normativa vigent i, en general, les que no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans.

TÍTOL V ELS CENTRES EDUCATIUS

CAPÍTOL I LA XARXA DE CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS

Article 100. Classificació dels centres educatius

1. Els centres educatius es classifiquen en públics i privats. Són centres públics els centres el titular dels quals és una administració pública. Són centres privats els centres el titular dels quals és una persona física o jurídica de caràcter privat i són centres privats concertats els centres privats acollits al règim de concerts legalment establert.

2. Tots els centres docents han de tenir una denominació específica i s'han d'inscriure en el Registre de centres dependent de l'administració educativa, que ha de traslladar els assentaments registrals al ministeri competent en matèria d'educació. Els

centres no podran emprar identificacions diferents a les que figuren en la corresponent inscripció registral.

3. Tots els centres docents han de reunir uns requisits mínims per impartir els ensenyaments amb garantia de qualitat. L'Estat, a través de la seva normativa bàsica, i el Govern de les Illes Balears, mitjançant reglament, han d'establir els requisits mínims. Els requisits mínims s'han de referir, en tot cas, a la titulació acadèmica del professorat, la relació numèrica alumnat/professorat, les instal·lacions docents i esportives i el nombre de places escolars. El Govern de les Illes Balears, si és necessari i en ús de les seves competències, pot incorporar requisits propis per als centres que imparteixen ensenyaments que preveu aquesta llei.

Article 101. Recursos i suport als centres educatius

1. Els centres educatius han d'estar dotats dels recursos educatius, humans i materials necessaris per oferir un ensenyament de qualitat i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació.

2. L'administració educativa ha de donar suport i ha d'assignar, en cas que siguin necessàries, majors dotacions de recursos a determinats centres públics o privats concertats que estiguin situats en zones econòmiques, socials o culturals desfavorides o que escolaritzin alumnat amb una determinada problemàtica social, alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, alumnat procedent d'altres països i alumnat que presenta una elevada mobilitat o d'altres circumstàncies sobrevingudes. Aquestes dotacions addicionals han d'anar encaminades a millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i els resultats educatius de forma continuada, han d'estar vinculades a l'acreditació de projectes educatius innovadors que promoguin l'equitat educativa, i han d'estar condicionades a la rendició de comptes i la justificació de l'adequada optimització d'aquests recursos.

3. Es poden establir compromisos amb els centres que, en l'ús de la seva autonomia i basant-se en l'anàlisi de les seves avaluacions internes i externes, adoptin decisions o projectes que siguin valorats d'especial interès pel context socioeconòmic del centre, per al seu currículum o per a la seva organització. En qualsevol cas, s'ha de fer un seguiment i una valoració dels resultats obtinguts.

4. En les condicions que es determinin, s'han d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació educativa i curricular que tenguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar i el nivell òptim d'aprenentatge de tot l'alumnat, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres.

Article 102. Creació de centres

1. La creació, la supressió i la transformació de centres públics correspon al Govern de les Illes Balears, que ha d'establir els tipus d'ensenyaments que s'hi desenvoluparan.

2. La creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent.

3. El Govern de les Illes Balears ha de promoure una xarxa de centres públics suficient per cobrir la demanda de la població escolar de les Illes Balears.

Article 103. Principi d'autorització administrativa

1. L'administració educativa ha d'assegurar que tots els centres docents reuneixen les condicions i els requisits mínims establerts en la legislació vigent.

2. Els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

3. Els centres privats que imparteixen ensenyaments que no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica queden sotmesos a les normes del dret comú. Aquests centres no poden utilitzar cap de les denominacions establertes per als centres docents, ni qualsevol altra que pugui conduir a error o confusió amb aquestes.

Article 104. Planificació de les infraestructures educatives públiques

1. L'administració educativa ha de dur a terme la planificació de les infraestructures educatives públiques per garantir, d'una banda, que els centres educatius es troben en les millors condicions i, de l'altra, per donar resposta a les necessitats socials d'escolarització, a la diversificació de l'oferta formativa i a les demandes de les famílies amb una dotació de places escolars públiques suficients. La distribució dels centres educatius ha d'incloure el criteri d'equilibri entre demografia i territori. Aquesta planificació ha de tenir en compte la valoració de la comunitat educativa a través dels consells escolars insulars.

2. La planificació de les infraestructures educatives s'ha de dur a terme, previs els estudis demogràfics i de necessitats de les diverses zones, per mitjà de l'elaboració dels plans d'infraestructures a mig termini, revisables cada dos anys, que han de contenir la memòria econòmica i la previsió de finançament, després d'haver dut a terme els estudis demogràfics i de necessitats.

3. L'arquitectura dels nous centres educatius públics ha de comptar amb assessorament pedagògic i possibilitar la implantació de noves propostes metodològiques i noves formes d'organització, orientades a la millora dels processos educatius en aplicació dels principis d'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres educatius.

4. S'ha d'incloure en els plans d'infraestructures la previsió de les reformes necessàries als centres educatius existents que ho requereixen per a l'adequació i la millora de les instal·lacions i per possibilitar la implantació de noves metodologies i noves formes d'organització.

5. El disseny de les infraestructures educatives ha de vetlar per introduir els criteris de sostenibilitat en relació amb l'aprofitament de l'energia solar, l'eficiència energètica, l'estalvi d'aigua, la mobilitat sostenible i la gestió de residus.

Article 105. Aportació de terrenys per a la construcció de centres públics

Els municipis han de posar a disposició de l'administració educativa els terrenys necessaris per construir-hi els centres educatius públics d'educació infantil i primària, i han de cedir els terrenys necessaris per a la construcció dels centres educatius públics d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial.

Article 106. Conservació, manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres educatius públics

1. Sens perjudici d'altres modalitats de col·laboració que es puguin establir, la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats als centres educatius públics de segon cicle d'educació infantil i primària de titularitat municipal corresponen al municipi on es troben situats. Això no obstant, la conselleria és competent en les obres i les actuacions de reforma, ampliació o adequació i millora d'aquests centres educatius.

2. La conselleria ha d'assumir la part de les despeses corresponents si per necessitats d'escolarització s'han de destinar els edificis a què fa referència l'apartat anterior a impartir educació secundària obligatòria o formació professional. En el supòsit d'afectacions parcials, s'ha d'establir el conveni de col·laboració corresponent.

Article 107. Tipologia de centres públics

1. La conselleria ha d'establir els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l'assignació d'equips directius.

2. Els centres docents públics no universitaris de les Illes Balears poden adoptar alguna de les tipologies següents, en funció dels estudis que tinguin autoritzats:

- a) Centres d'educació especial (CEE).
- b) Escoles infantils (EI).
- c) Col·legis d'educació primària (CP).
- d) Col·legis d'educació infantil i primària (CEIP).
- e) Col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM).
- f) Col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO).
- g) Instituts d'educació secundària (IES).
- h) Escoles d'art (EA).
- i) Centres d'educació de persones adultes (CEPA).
- j) Conservatoris professionals de música i dansa (CMD).
- k) Escoles oficials d'idiomes (EOI).
- l) Instituts de formació professional (IFP).
- m) Centres integrats de formació professional (CIFP).
- n) Conservatoris superiors de música i dansa.
- o) Escoles superiors de disseny i arts escèniques.

3. La conselleria pot crear noves tipologies de centres docents públics no universitaris i pot establir criteris específics per a cada tipologia de centre.

4. La conselleria pot resoldre, prèvia consulta als consells escolars afectats, la reconversió de centres d'una tipologia determinada en una altra, i autoritzar els estudis corresponents.

5. L'administració educativa ha de promoure la creació o la reconversió de centres ja existents en col·legis integrats d'educació infantil i primària amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO), per tal d'afavorir la coordinació entre els docents de les etapes d'ensenyament obligatori i un major acompanyament als alumnes en la transició entre etapes educatives.

6. En relació amb els estudis artístics superiors, la conselleria pot promoure que aquests estudis, ateses les seves característiques, es puguin dur a terme mitjançant

ens instrumentals de gestió previstos legalment i que el personal docent es pugui contractar mitjançant contractes laborals.

CAPÍTOL II L'ESCOLARITZACIÓ EQUITATIVA

Article 108. Igualtat d'oportunitats i equitat en l'escolarització

1. La conselleria ha de garantir la gratuïtat efectiva dels ensenyaments, en els termes establerts en la normativa bàsica de l'Estat.

2. En l'admissió d'alumnat no es poden establir criteris discriminatoris per raons de naixement, raça, gènere, diversitat funcional, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

3. El procés d'escolarització en centres educatius sostinguts amb fons públics s'ha de regir per un principi d'equilibri que conjugui criteris d'equitat i de proximitat i faci possible, alhora, el dret a triar un projecte educatiu singular.

4. En el cas d'admissió en el primer cicle d'educació infantil als centres públics i de la xarxa complementària, l'administració educativa ha d'establir el mateixos principis i criteris d'admissió que per a la resta de trams educatius i vetlar perquè els infants en situació vulnerable tinguin accés a les places ofertes.

Article 109. Dret d'escolarització

1. Tot l'alumnat té dret a una plaça escolar en centres sostinguts amb fons públics en les etapes i els nivells obligatoris que constitueixen l'ensenyament bàsic, així com en el segon cicle d'educació infantil.

2. El règim d'admissió de l'alumnat als centres docents es fonamenta en el dret a la lliure elecció de centre per part de les famílies o els tutors legals, o per part dels alumnes en cas que siguin majors d'edat.

3. En la programació de l'oferta educativa s'han de tenir en compte les necessitats socials de l'escolarització, les demandes de les famílies i les consignacions pressupostàries existents, i s'han d'atendre els principis d'eficiència i economia en l'ús dels recursos públics.

4. La regulació del procés d'elecció de centre constitueix un element fonamental per assegurar la igualtat d'oportunitats i garanteix les mateixes condicions per a totes les famílies en els diferents moments o contextos d'escolarització. L'administració educativa ha de vetlar per fer efectiu aquest dret mitjançant la programació general de l'ensenyament i l'oferta anual de places escolars, les quals han de garantir una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu entre els centres escolars sostinguts totalment o parcialment amb fons públics d'un mateix municipi, àrea o zona d'escolarització.

5. La matriculació d'alumnat en un centre públic o privat concertat suposa respectar el projecte educatiu del centre i, si escau, el seu caràcter propi, sens perjudici dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seves famílies en les lleis.

6. Una vegada matriculat un alumne en un centre sostingut amb fons públics, hi quedarà garantida la seva permanència sempre que sigui el mateix règim econòmic fins al final de l'ensenyament obligatori i el batxillerat, si en disposa, llevat que es produeixi un canvi de centre voluntari o per l'aplicació d'algun supòsit previst en la normativa sobre drets i deures de l'alumnat.

7. La conselleria ha de dur a terme l'escolarització immediata o, si escau, el canvi immediat de centre, dels alumnes que es vegin afectats per actes de violència de gènere o assetjament escolar i així ho sol·licitin.

Article 110. Processos d'escolarització

1. En cas que sigui pertinent per a un millor equilibri en l'escolarització, la conselleria pot crear oficines d'escolarització territorials per a la gestió de la informació, l'acompanyament i la tramitació de sol·licituds.

2. Els centres docents han de facilitar al pare, la mare o el tutor, o a l'alumne en el cas que sigui major d'edat, informació objectiva i completa sobre el seu projecte educatiu, incloent-hi, si n'és el cas, el seu caràcter propi. Així mateix, han d'informar sobre el règim legal de les aportacions econòmiques, especialment del seu caràcter voluntari i no associat a l'escolarització, així com del nombre de vacants de què disposa i de les que es vagin generant fins a l'inici del curs.

3. En les condicions que s'estableixin i sens perjudici de les competències que els són pròpies, les administracions podran constituir comissions d'escolarització, que han d'actuar com a òrgans de garanties d'admissió en els processos d'adscripció i d'admissió d'alumnes, les quals han d'estar integrades per representants de l'administració educativa, de l'administració local, dels centres educatius públics i dels privats concertats, de les famílies o tutors i, si escau, dels centres de la xarxa complementària del primer cicle d'educació infantil.

Article 111. Escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

1. L'escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu s'ha de regir pel principi d'inclusió i ha d'assegurar la no-discriminació i la igualtat efectiva d'accés al sistema educatiu, així com la permanència en aquest.

2. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s'han d'escolaritzar preferentment als centres ordinaris amb els recursos humans i materials necessaris i, excepcionalment, en unitats educatives especials en centres ordinaris, en centres d'educació especial o en la modalitat d'escolarització combinada, amb la finalitat de garantir la seva escolarització en les condicions més apropiades.

3. L'escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en centres ordinaris o centres d'educació especial requerirà un informe dels serveis d'orientació, de la Inspecció Educativa i d'altres organismes específics. En qualsevol cas l'escolarització requerirà la conformitat de les famílies o dels representants legals dels alumnes.

Article 112. Escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

1. S'ha de garantir l'escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Per garantir aquest objectiu, l'administració ha de promoure acords d'escolarització equilibrada d'àmbit municipal amb la participació de les diferents administracions i representants de la comunitat educativa, i pot dur a terme una reserva de places escolars per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu fins a l'inici del curs escolar.

2. En el cas de centres amb una ràtio elevada d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l'administració ha de dotar el centre de mesures o recursos humans i materials suficients, equilibrats i revisables al llarg del curs escolar, i pot limitar l'escolarització fora de termini de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

3. S'han de considerar necessitats específiques de suport educatiu les que afecten alumnat amb necessitats educatives especials, especialment les associades a mobilitat reduïda, diversitat intel·lectual o sensorial, trastorns de l'espectre autista, trastorns del desenvolupament del llenguatge i la comunicació, trastorns greus de conducta, trastorns mentals o malalties degeneratives greus i minoritàries; alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge; alumnat d'altres capacitats intel·lectuals; alumnat amb condicions personals o història escolar amb un desfasament curricular significatiu; alumnat d'incorporació tardana dins el sistema educatiu; alumnat amb desconeixement de les dues llengües oficials; alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorides o amb risc d'abandonament escolar; i altres situacions reconegudes per la normativa.

4. A l'efecte d'aplicar el criteri de proximitat domiciliària i vetlar per l'escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, la conselleria, amb la consulta prèvia als consells escolars insulars i, si escau, als consells escolars municipals, pot definir zones escolars.

5. L'administració educativa podrà col·laborar amb altres administracions o entitats públiques o privades, institucions o associacions, per tal de facilitar l'escolarització, una millor incorporació de l'alumnat al centre educatiu, la promoció de l'èxit educatiu i la prevenció de l'abandonament escolar primerenc.

CAPÍTOL III L'AUTONOMIA DELS CENTRES

Article 113. Autonomia dels centres

1. El desenvolupament de l'autonomia dels centres educatius per mitjà de la planificació estratègica, la corresponsabilitat i la cooperació entre la conselleria, els centres, l'administració local i els agents de la comunitat educativa ha de constituir un element clau per millorar el sistema educatiu i ha d'implicar que els centres educatius puguin establir el model organitzatiu, pedagògic i de gestió que s'adapti al seu projecte educatiu i al seu entorn amb l'objectiu de millorar els aprenentatges de tot l'alumnat.

2. En el desenvolupament de l'autonomia dels centres, la conselleria ha de fixar les competències que l'alumnat ha d'assolir en cada etapa educativa, generar els mecanismes per avaluar els resultats de l'alumnat i dels centres, i donar suport als processos de millora.

3. La conselleria ha d'adoptar les mesures necessàries per possibilitar l'exercici efectiu de l'autonomia dels centres i hi ha de garantir el suport necessari.

4. Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat educativa i a l'administració de la seva gestió, dels resultats obtinguts i de l'aplicació dels acords de la seva autonomia, d'acord amb l'ordenament jurídic.

Article 114. Autonomia dels centres educatius públics

1. Els centres educatius públics disposen d'autonomia pedagògica, de gestió del personal del centre, dels recursos materials i econòmics i d'organització, com a instrument per donar resposta a les necessitats i a la diversitat de l'alumnat, i per contribuir a garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats i la qualitat de l'educació en els termes recollits en la present llei i en les normes que la desenvolupin.

2. En l'exercici de l'autonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar objectius addicionals i definir les estratègies per assolir-los, organitzar el centre, determinar els recursos que necessita i definir els procediments per aplicar el projecte educatiu, d'acord amb l'ordenament jurídic.

Article 115. Principis i característiques de l'autonomia dels centres

1. L'autonomia dels centres ha de suposar una descentralització subjecta a l'establert en el projecte educatiu del centre i a l'avaluació de l'assoliment dels objectius que s'hi plantegin, en els termes que es determinin en el desenvolupament reglamentari d'aquesta llei, per garantir els principis d'equitat, igualtat d'oportunitats, accessibilitat universal, professionalitat i participació de la comunitat educativa dins un sistema inclusiu que no exclou cap alumne.

2. L'autonomia dels centres ha de permetre orientar el seu funcionament vers el foment de comunitats d'aprenentatge i del treball en equip basat en la col·laboració, amb autonomia suficient per crear les condicions necessàries per a un bon desenvolupament personal i un òptim rendiment acadèmic de l'alumnat en un entorn inclusiu.

3. Per al desenvolupament de l'autonomia dels centres, l'administració educativa ha de facilitar que els centres educatius disposin d'un lideratge compartit i distribuït que fomenti processos de millora continuats i sostenibles i que afavoreixi el desenvolupament professional dels docents.

Article 116. Autonomia pedagògica

1. Cada centre educatiu, a partir de les característiques del centre, de l'alumnat i del seu entorn, i del currículum bàsic fixat per l'administració educativa i definit en termes competencials, ha d'adaptar el seu projecte educatiu de centre tenint en compte criteris d'atenció a la diversitat, d'equitat, d'excel·lència i d'inclusió de l'alumnat.

2. Els centres han de completar i desenvolupar el currículum de les diferents etapes i cicles, concretar els criteris d'avaluació, incorporar objectius curriculars addicionals, integrar les matèries en àmbits en l'ensenyament bàsic, distribuir de forma flexible els horaris, els espais i els agrupaments de l'alumnat i desenvolupar projectes i metodologies didàctiques pròpies, per adaptar el currículum als objectius establerts en el seu projecte educatiu, en les lleis educatives i en els reglaments que les desenvolupen, amb la supervisió i l'assessorament del Departament d'Inspecció Educativa i dels altres serveis de la conselleria. A aquest efecte els centres poden disposar del màxim d'autonomia pedagògica possible que permeti la normativa aplicable.

3. Les concrecions esmentades en l'apartat anterior s'han d'incorporar al projecte educatiu i s'han de revisar periòdicament a partir dels resultats i les valoracions de les avaluacions internes i externes.

4. L'autonomia pedagògica no pot comportar en cap cas discriminació ni en l'admissió d'alumnes ni en les possibilitats reals de permanència d'aquells que presentin dificultats d'aprenentatge.

5. Correspon a la direcció del centre impulsar i liderar l'exercici de l'autonomia pedagògica amb el suport del claustre i del consell escolar del centre.

Article 117. Autonomia organitzativa

1. Els centres educatius poden dotar-se d'una estructura pròpia de govern, organització, coordinació i participació dels diferents agents de la comunitat educativa, orientada al desenvolupament del seu projecte educatiu, dins el marc general que estableixi l'administració educativa. L'estructura organitzativa pròpia ha de determinar les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació.

2. Els centres educatius poden reorganitzar els espais, el temps dedicat a cada matèria i la coordinació i l'organització del professorat, amb l'objectiu de garantir el dret a una educació inclusiva i aconseguir l'èxit educatiu de tots els alumnes en l'aplicació del projecte educatiu i dels objectius generals de l'educació, dins el marc general que estableixi l'administració educativa.

3. En les decisions sobre l'organització i el funcionament dels centres s'ha de vetllar per un ús òptim dels recursos i aplicar una gestió descentralitzada, flexible, amb participació de la comunitat educativa i amb corresponsabilitat de les famílies en el procés educatiu i en la gestió dels centres.

4. Als centres públics, correspon a la direcció de cada centre, d'acord amb les competències dels òrgans de govern i participació, impulsar i adoptar mesures per millorar l'estructura organitzativa del centre, amb l'objectiu de millorar l'atenció educativa de tot l'alumnat, en el marc de les disposicions reglamentàries aplicables.

5. Als centres privats sostinguts amb fons públics, correspon al titular de cada centre, adoptar les decisions sobre l'estructura organitzativa del centre, i correspon al consell escolar, a proposta del titular del centre, informar del reglament de règim interior del centre.

Article 118. Autonomia de gestió

1. L'autonomia de gestió s'ha d'orientar a afavorir el desenvolupament del projecte educatiu del centre amb el suport i l'acompanyament de l'administració educativa, i ha de contribuir a assolir els objectius pedagògics del centre, aplicant els principis d'eficàcia, eficiència, inclusió, descentralització, participació i compromís de la comunitat educativa.

2. La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre i l'autonomia comprèn, amb les limitacions aplicables en cada cas:

- a) La gestió del professorat, del personal d'atenció educativa i del personal d'administració i serveis.
- b) L'adquisició i la contractació de béns i serveis.
- c) La distribució i l'ús dels recursos econòmics del centre.
- d) El manteniment i la millora de les instal·lacions del centre, en el cas dels centres que imparteixen educació secundària i ensenyaments de règim especial.
- e) L'obtenció o l'acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals amb els límits que s'estableixin.
- f) El compliment de la normativa vigent.

3. El director ha de dirigir i gestionar el personal del centre d'una manera orientada a garantir el compliment de les seves funcions. L'exercici d'aquesta funció comporta:

- a) Proposar el nomenament i la destitució dels altres òrgans unipersonals de direcció i nomenar i destituir els òrgans unipersonals de coordinació i assignar-los responsabilitats específiques, amb comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, i sempre d'acord amb el marc reglamentari i les normes d'organització i funcionament del centre.
- b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent, a més de les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l'aplicació del projecte educatiu i que siguin adequades a la seva preparació i experiència.
- c) Promoure la participació del professorat en activitats de formació permanent i d'actualització de les seves capacitats professionals i col·lectives, en funció de les necessitats i orientacions fixades en el pla de formació derivat del projecte educatiu de centre.
- d) Participar en les comissions d'observació i d'avaluació formativa de la pràctica docent establertes en el projecte educatiu de centre.
- e) Afavorir i impulsar la coordinació del professorat, de forma que es garanteixi l'assoliment dels objectius fixats en el projecte educatiu de centre.

4. Per al compliment dels seus projectes educatius, els centres públics poden proposar requisits de titulació i capacitació professional respecte de determinats llocs de feina del centre d'acord amb les condicions que estableixi l'administració educativa.

5. La gestió dels centres privats sostinguts amb fons públics correspon als seus titulars, sense cap altra restricció que les establertes amb caràcter general per la legislació educativa i laboral i les que deriven de les finalitats i els principis que regeixen el sistema educatiu.

Article 119. Obertura dels centres públics fora de l'horari lectiu

Els centres públics, en el marc de la seva autonomia, i d'acord amb els ens locals corresponents, poden aprovar plans d'obertura de centres més enllà de l'horari lectiu, tant per a la utilització de les seves instal·lacions com per a la formació permanent de les famílies o de la comunitat en general. En aquest sentit, els centres podran establir acords amb associacions sense ànim de lucre per autoritzar-los l'ús de les instal·lacions del centre més enllà de l'horari escolar.

CAPÍTOL IV EL PROJECTE EDUCATIU

Article 120. Projecte educatiu del centre

1. El projecte educatiu de centre (PEC) és la màxima expressió de l'autonomia del centre, i ha de recollir la identitat del centre i el seu caràcter propi, si escau; ha d'especificar i contribuir a la consecució dels objectius educatius de les distintes etapes; ha d'orientar l'activitat del centre i donar-li sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques, l'èxit educatiu i el seu desenvolupament integral; i ha de promoure l'equitat, la igualtat d'oportunitats i l'atenció educativa a tot l'alumnat.

2. Tots els centres educatius han de disposar d'un projecte educatiu actualitzat i adaptat a la seva realitat, que ha d'estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa i del públic en general, de forma que sigui un document públic i accessible, preferiblement en format digital i en línia.

3. El projecte educatiu s'ha d'adaptar al context de l'entorn social i econòmic del centre i ha de contribuir a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social. Els centres públics que s'ubiquin en municipis que disposin d'un projecte educatiu de ciutat l'hauran de tenir en compte per a l'elaboració del projecte educatiu de centre.

4. El PEC ha de tenir un enfocament competencial i es pot organitzar a través de projectes interdisciplinaris i també interetapes.

5. El PEC ha de garantir un model inclusiu que asseguri l'accés, la participació, l'aprenentatge i el desenvolupament de tot l'alumnat.

6. Els centres integrats de formació professional han d'elaborar un projecte funcional de centre que constitueixi l'instrument fonamental per a l'organització i la planificació del centre i aplicar un model de millora continuada i d'excel·lència d'acord amb el que es determini reglamentàriament.

Article 121. Elaboració, aprovació i difusió del PEC

1. Als centres públics, l'equip directiu del centre ha de coordinar la redacció i l'actualització del PEC, en la qual han de participar el professorat i els diferents agents de la comunitat educativa, per definir els objectius i els procediments per assolir-los, així com els indicadors i els seus criteris d'avaluació. El Departament d'Inspecció Educativa i els altres serveis de la conselleria han d'assessorar els centres en l'elaboració del projecte educatiu i assegurar la coordinació entre els projectes educatius dels centres que imparteixen etapes successives a un mateix grup d'alumnes.

2. Als centres públics, el claustre ha d'aprovar els aspectes pedagògics i de concreció curricular i intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu i en totes les decisions de tipus pedagògic. El consell escolar del centre n'ha de fer l'aprovació definitiva i encarregar-se de fer-ne difusió, de forma que estigui a disposició de tots els membres de la comunitat educativa.

3. Correspon als titulars dels centres privats sostinguts amb fons públics aprovar el projecte educatiu del centre, havent oït el consell escolar. El claustre del professorat ha de participar en la formulació del projecte educatiu d'acord amb el que estableixi el reglament de règim interior del centre.

4. Els titulars dels centres privats no sostinguts amb fons públics han de garantir que el centre exerceix l'autonomia, en el marc legal vinculat al règim d'autorització de centres privats.

5. La conselleria competent en matèria d'educació ha de proporcionar el suport tècnic necessari als centres que ho requereixin per a l'elaboració dels seus projectes educatius.

Article 122. Aspectes que ha d'incloure el PEC

1. El projecte educatiu s'ha de fonamentar en els principis d'equitat, inclusió i participació democràtica i ha de garantir el respecte als principis assenyalats a

l'article 3 d'aquesta llei amb criteris de professionalitat. S'ha de definir al voltant de les necessitats de l'alumnat i ha d'incloure mesures de seguiment com a part d'una reflexió crítica i sistemàtica, amb la intenció que tot l'alumnat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats diverses.

2. El PEC ha d'incloure els criteris d'organització pedagògica; les prioritats i els plantejaments educatius; els principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre referits a la intervenció educativa, l'orientació, la tutoria, l'avaluació, la concreció i el desenvolupament dels currículums, segons els models de disseny universal o de plantejament alternatiu que garanteixin l'accessibilitat universal; els criteris que defineixen l'estructura organitzativa pròpia; el projecte lingüístic; els procediments d'inclusió educativa; els valors i els objectius que regeixen l'aprenentatge de la convivència, la igualtat, la coeducació i el respecte a les identitats de gènere; els criteris per fomentar la sostenibilitat mediambiental al centre i a l'entorn personal i social de l'alumnat; els criteris per al foment de la participació i la col·laboració de la comunitat educativa; les línies que han de configurar la relació entre el centre i l'entorn social, i la formació permanent del professorat del centre, a més de les normes d'organització i funcionament del centre i altres actuacions i trets que el caracteritzin, així com els procediments i les mesures de difusió, seguiment, avaluació i revisió del projecte educatiu. També ha d'incloure un pla de millora que permeti adoptar les mesures necessàries per fomentar la qualitat i l'equitat educativa i l'èxit escolar.

3. El PEC ha de preveure uns objectius i uns mecanismes d'avaluació i control per garantir la funció de servei públic que té un centre educatiu sostingut totalment o parcialment amb fons públics. Els projectes han de definir objectius de millora mitjançant uns indicadors avaluables. Periòdicament, els centres han de fer públics els resultats d'aquests indicadors avaluables i els han de trametre als membres de la comunitat educativa que en formen part.

4. Les normes d'organització i funcionament del centre, o el reglament de règim interior en el cas dels centres privats concertats, han de recollir el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adoptin per assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual.

CAPÍTOL V EL DESENVOLUPAMENT CURRICULAR

Article 123. Currículum educatiu

1. El currículum de l'educació formal comprèn, per a cadascuna de les etapes i cadascun dels ensenyaments del sistema educatiu, les capacitats i les competències pròpies de cada un dels ensenyaments, així com les àrees, les assignatures, les matèries o els mòduls, que podran incloure objectius, continguts, els mètodes pedagògics generals i alternatius i els criteris d'avaluació, que han de ser diversos en funció de les necessitats específiques de suport educatiu.

2. La gestió dels currículums en les diverses etapes i ensenyaments ha de tenir un enfocament competencial i multidisciplinari, en el qual l'alumnat ha de tenir un paper protagonista, i la seva finalitat principal és l'assoliment de les competències bàsiques i específiques, disciplinàries i transversals.

3. El currículum de les àrees i matèries que conformen els ensenyaments que s'imparteixen, així com qualsevol altra activitat que s'encamini a la consecució dels fins de l'educació en el sistema educatiu de les Illes Balears, s'ha d'orientar vers:

- a) El ple desenvolupament de la personalitat, les aptituds i les capacitats de tot l'alumnat.
- b) L'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, com a pauta ordinària de l'acció educativa del professorat, particularment en l'ensenyament obligatori.
- c) L'adquisició per part de l'alumnat dels aprenentatges essencials per entendre la societat en què viu, poder-hi actuar per millorar-la i comprendre l'evolució de la humanitat al llarg de la història.
- d) L'educació en la responsabilitat individual i col·lectiva, i en el mèrit i l'esforç personal.
- e) El desenvolupament de la capacitat de l'alumnat per regular el seu propi aprenentatge i confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l'esperit emprenedor.
- f) El coneixement, la valoració i el respecte del medi natural, la història, la cultura, la llengua, amb les respectives modalitats insulars, l'antropologia i la identitat de l'illa pròpia i del conjunt de les Illes Balears, com a patrimoni propi i en el marc d'una cultura universal.
- g) La formació en el respecte i el reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural de l'Estat espanyol, així com del caràcter enriquidor d'aquest plurilingüisme com a base per a l'establiment de relacions entre les diferents cultures.
- h) L'aprenentatge i el foment de l'ús de la llengua catalana, com a element imprescindible no tan sols per a la comunicació, sinó també per a la interpretació i la transmissió de la identitat cultural i històrica de les Illes Balears i per a la cohesió social.
- i) L'aprenentatge de la llengua castellana, com a llengua oficial de tot l'Estat per a la comunicació i l'accés a la cultura expressada en aquesta llengua.
- j) L'aprenentatge d'almenys una llengua estrangera com a mitjà per a la formació de ciutadans encara més competents lingüísticament en un món cada vegada més interrelacionat.
- k) L'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball i de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics coherents amb una visió interdisciplinària dels continguts, així com el desenvolupament d'hàbits saludables, de l'exercici físic i de l'esport i coneixements d'una alimentació i nutrició correctes i adequades.
- l) La capacitació per a l'exercici d'activitats professionals.
- m) La preparació per a l'exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable, i amb capacitat d'adaptació a les situacions canviants de la societat del coneixement, prenent en consideració com a elements transversals el respecte als drets humans, les llibertats fonamentals, la coeducació, la igualtat, l'abordatge de les violències masclistes i els valors que preparen l'alumnat per assumir una vida responsable en una societat lliure i democràtica.
- n) La promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones, amb una valoració especial de l'aportació de les dones al desenvolupament de la societat i al coneixement acumulat per la humanitat.

- o) El treball de les competències personals, intrapersonals i interpersonals de relació amb els altres i l'entorn; l'esperit crític, i l'aprenentatge emocional i social.
- p) El respecte al medi ambient i la sensibilització sobre l'emergència climàtica i la sostenibilitat.
- q) L'educació viària i l'educació per al consum i la salut i de respecte a la interculturalitat i a la diversitat, i per a la utilització responsable del temps lliure i de l'oci i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- r) La sensibilització i el compromís cap a una ciutadania global mitjançant l'educació intercultural i l'educació per a la cooperació i el desenvolupament sostenible.
- s) El disseny universal dels mètodes i materials d'aprenentatge i dels sistemes d'avaluació, o les alternatives per atendre la diversitat dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

4. L'administració educativa ha de treballar per l'actualització permanent del currículum en vista a incorporar-hi temes emergents lligats als canvis socials, així com l'adaptació d'aquest a la realitat més immediata. A aquest efecte, es poden crear equips interdisciplinaris de professors amb experiència acreditada que facin propostes en aquest sentit.

Article 124. Avaluació dels aprenentatges

1. El sistema d'avaluació dels aprenentatges, que no podrà consistir en la simple verificació de la memorització dels continguts, s'ha d'adequar a l'enfocament competencial per mitjà de l'autoavaluació, la coavaluació entre alumnes i les avaluacions internes i externes, de forma que l'avaluació acadèmica, el currículum, la metodologia d'ensenyament i aprenentatge i l'evidència d'aprenentatge siguin coherents entre si.

2. L'avaluació s'ha d'adaptar a la diversitat de l'alumnat i ha de prendre com a referència el perfil de sortida de l'alumnat al final de cada etapa, basat en les competències que ha d'haver assolit, i amb la finalitat última d'afavorir el màxim desenvolupament educatiu de tot l'alumnat i garantir la incorporació activa a la societat.

3. En qualsevol cas, l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu ha de ser avaluat a través de sistemes accessibles per a cada cas i en funció de les pròpies adaptacions curriculars.

4. L'avaluació de l'alumnat ha de ser individualitzada, contínua i formativa i ha de tenir en compte el progrés de l'alumne en el conjunt de les àrees del currículum en relació amb les competències establertes, i serà un instrument per a la millora tant dels processos d'ensenyament com dels processos d'aprenentatge. Al final de cada curs escolar, l'informe posterior a l'última avaluació ha d'incloure el grau d'adquisició de les competències establertes i la decisió de promoció al curs, cicle o etapa següents.

Article 125. Excepcionalitat de la repetició de curs

1. En l'educació bàsica, la repetició de curs té caràcter excepcional, només es pot aplicar després de les altres mesures de suport ordinari i ha d'anar associada a un pla personalitzat de suport i de recuperació per a cada alumne. L'equip docent ha de prendre la decisió després de valorar si l'alumne està en condicions de continuar els seus estudis.

2. El sistema educatiu ha d'incorporar mesures de flexibilització creixent que permetin a l'alumnat desenvolupar itineraris diversos i disposar de passarel·les que s'ajustin a les seves necessitats i interessos.

CAPÍTOL VI LA DIRECCIÓ I ELS ÒRGANS DE GOVERN DELS CENTRES PÚBLICS

Article 126. Òrgans de govern unipersonals i col·legiats

Els centres educatius públics han de disposar, almenys, dels òrgans de govern següents:

- a) El director.
- b) L'equip directiu.
- c) El claustre del professorat.
- d) El consell escolar.

Article 127. Direcció dels centres educatius públics

1. Correspon a la direcció de cada centre públic l'exercici de les funcions de representació, de direcció i de lideratge pedagògic i de la comunitat educativa; d'organització, de funcionament i de gestió del centre, i de cap del seu personal.

2. Les direccions han de fomentar als centres el lideratge distribuït, per enfortir la corresponsabilitat i aprofitar el coneixement i el talent de la comunitat educativa, acompanyar els equips docents i donar-los suport, i potenciar el desenvolupament professional del professorat.

3. L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre públic i les persones que en formen part han de treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions.

4. L'equip directiu, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l'exercici de les seves funcions, el director és també autoritat competent per defensar l'interès superior de l'infant.

5. L'administració educativa ha de promoure la simplificació administrativa en la gestió dels centres educatius i ha de fomentar la capacitat de lideratge educatiu i de gestió de les direccions.

Article 128. Projecte de direcció

1. El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període del mandat corresponent, orienta les successives programacions generals anuals del centre i estableix els criteris, els indicadors i els procediments per a l'avaluació de l'assoliment dels objectius prevists.

2. El projecte de direcció s'ha d'adequar al PEC i ha de ser aprovat pel claustre i el consell escolar per esdevenir un projecte estratègic del centre.

3. L'administració educativa ha de procurar que tots els centres educatius disposin d'un projecte de direcció d'un abast de quatre anys.

4. Els projectes de direcció han de ser públics i accessibles, preferiblement en format digital i en línia.

Article 129. Formació per a la funció directiva

1. La formació per a l'exercici de la direcció és un element fonamental per al seu adequat desenvolupament i per disposar de direccions ben formades i competents que donin resposta a les necessitats dels centres. La formació ha d'estar centrada especialment en les funcions de l'equip directiu.

2. El pla de formació per assolir aquests objectius ha de preveure dues fases: la d'acreditació i la d'actualització.

3. L'administració ha de promoure l'accés a la formació d'acreditació a totes les persones que disposin dels requisits d'accés que s'estableixin.

4. L'administració ha de promoure la formació contínua per als altres membres dels equips directius.

Article 130. Accés a la funció directiva

Poden accedir a la funció directiva els funcionaris de carrera amb cinc anys d'experiència que compleixin els requisits d'acreditació o d'actualització, segons correspongui, que presentin un projecte de direcció i que comptin amb un equip directiu i no hagin estat separats de les seves funcions mitjançant expedient disciplinari. En igualtat de competència, s'ha de valorar com a mèrit ser professor del centre. Els membres dels equips directius han de ser preferentment funcionaris de carrera.

Article 131. Selecció de les direccions

La comunitat educativa, que ha de tenir participació majoritària en el procés de selecció, ha de seleccionar el director, juntament amb l'administració educativa, després de valorar el seu projecte de direcció, el qual haurà de comptar amb el vistiplau del claustre i el consell escolar pel que fa a la coherència del projecte de direcció respecte del PEC.

Article 132. Avaluació de la funció directiva

1. L'avaluació de la funció directiva s'ha de basar en l'avaluació tant de la tasca com del projecte dels equips directius i hi han de participar el claustre, el consell escolar i la Inspecció Educativa.

2. L'avaluació s'ha de dur a terme sobre els principals àmbits d'actuació reflectits en el projecte de direcció i s'han de tenir en compte els resultats de les avaluacions internes, les autoavaluacions i les avaluacions externes del centre. Durant el procés d'avaluació, la persona avaluada pot exposar a la comissió avaluadora, si n'és el cas, els diferents factors que han condicionat l'execució del projecte de direcció. L'avaluació negativa suposa la revocació del càrrec.

Article 133. Reconeixement professional de la funció directiva

1. L'exercici de la funció directiva amb avaluació positiva ha de ser reconegut com a mèrit en els processos de provisió de llocs de feina en la funció pública docent i en l'administració educativa, en els concursos de trasllats i en els processos selectius d'accés a la Inspecció Educativa.

2. La conselleria ha d'afavorir la incorporació de càrrecs directius, i especialment del càrrec de director, als diferents òrgans de caràcter consultiu i participatiu que en depenen.

3. L'administració educativa, amb la participació de la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors i les Associacions de Directors ha de promoure mesures per millorar

el prestigi i el reconeixement professional dels equips directius, facilitar la competència professional de l'exercici de la funció directiva i promoure la incorporació dels docents a les tasques directives.

Article 134. Claustre del professorat

1. El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el govern dels centres amb la finalitat de planificar, coordinar, informar i, si n'és el cas, decidir sobre els aspectes educatius del centre. És presidit pel director i està integrat per la totalitat dels docents que presten serveis al centre.

2. Són competències del claustre:

- a) Elevar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del projecte educatiu de centre, el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic i altres projectes de centre que es determinin, com també la programació general anual.
- b) Establir els criteris per a la concreció del currículum, aprovar-los i avaluar-los.
- c) Analitzar, aprovar i avaluar, conforme al projecte educatiu, els aspectes educatius de la programació general anual, com també valorar la memòria de final de curs.
- d) Fixar els criteris per a l'orientació, la tutoria i l'avaluació i la recuperació de l'alumnat.
- e) Promoure iniciatives d'innovació educativa, recerca i formació del professorat del centre, si escau.
- f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció que es presentin.
- g) Analitzar el funcionament general del centre, valorar l'evolució del procés educatiu i els resultats acadèmics, així com els resultats de les avaluacions internes i externes.
- h) Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director d'acord amb la normativa vigent.
- i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de mesures correctores, si n'és el cas, i vetllar perquè s'atenguin a la normativa vigent.
- j) Proposar plans i mesures per a la millora de la convivència, la inclusió, la igualtat, la coeducació i la no-discriminació.
- k) Qualsevol altra que li sigui encomanada per la normativa vigent.

TÍTOL VI ELS ELEMENTS PEDAGÒGICS ESPECÍFICS DEL MODEL EDUCATIU PROPI

CAPÍTOL I EL MODEL LINGÜÍSTIC

Article 135. Principis del model lingüístic

1. El model lingüístic escolar de les Illes Balears es regeix pels principis següents:

- a) L'adquisició de la competència comunicativa en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i en llengua castellana, de manera que al final del període de l'ensenyament obligatori tots els alumnes siguin competents per emprar amb fluïdesa les dues llengües, tant oralment com per escrit.
- b) L'adquisició de la competència lingüística mitjana en, almenys, una llengua estrangera al final de l'ensenyament obligatori.
- c) El dret dels alumnes a rebre el primer ensenyament en la seva llengua si és una de les oficials de la comunitat autònoma.

- d) La consideració de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a instrument de cohesió social en les activitats educatives i complementàries i com a vehicle d'expressió normal en les comunicacions i en l'àmbit administratiu.
- e) La garantia de no-discriminació dels alumnes i de no-separació en centres i grups classe diferents per raons de llengua.
- f) L'acolliment lingüístic per als alumnes d'incorporació tardana en el sistema educatiu de les Illes Balears, amb especial atenció a la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
- g) L'autonomia pedagògica dels centres educatius per elaborar i implementar el seu projecte lingüístic en el marc de la normativa vigent amb la finalitat, entre d'altres, d'assegurar el coneixement de les dues llengües oficials a tots els alumnes en acabar l'ensenyament obligatori.
- h) L'acreditació de la capacitació lingüística necessària dels professors que exerceixen la funció docent a les Illes Balears.
- i) L'ús de les modalitats insulars de la llengua catalana d'acord amb l'establert a l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

2. Correspon al Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, determinar el currículum de l'ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, les competències, els continguts, els criteris d'avaluació i la metodologia didàctica.

3. La llengua catalana ha de ser la llengua d'ensenyament i aprenentatge emprada com a mínim en la meitat de l'horari escolar, per garantir l'assoliment dels objectius de la normalització lingüística. Per a aquesta mateixa finalitat, i amb l'objectiu de garantir la competència comunicativa plena i equivalent en les dues llengües oficials en acabar els ensenyaments obligatoris, aquesta proporció pot ser incrementada per decisió de cada centre educatiu mitjançant l'aprovació del seu projecte lingüístic. La llengua castellana, com a llengua d'ensenyament i aprenentatge, també pot ser utilitzada per decisió de cada centre educatiu mitjançant l'aprovació del seu projecte lingüístic, especialment quan es consideri necessari per garantir la competència comunicativa plena i equivalent en les dues llengües oficials en acabar els ensenyaments obligatoris. Les condicions d'ús de les llengües als centres educatius s'han de desplegar reglamentàriament d'acord amb aquests criteris i els principis prevists en aquesta llei.

Article 136. Projecte lingüístic de centre

1. Els centres educatius han d'elaborar, en el marc de la seva autonomia i com a part del seu projecte educatiu, un projecte lingüístic que reculli el tractament de les llengües al centre. Aquest projecte s'ha de dissenyar en funció de les variables contextuals, amb la finalitat d'aconseguir que els alumnes assoleixin les competències lingüístiques previstes en les dues llengües oficials i, addicionalment, en almenys una llengua estrangera.

2. El projecte lingüístic de centre ha de concretar l'aplicació dels principis del model lingüístic establerts en aquesta llei i ha de contenir, entre altres aspectes, els plantejaments didàctics i els criteris metodològics sobre els quals es fonamenta l'ensenyament de les llengües, els criteris per a l'adequació del procés d'ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre, i els criteris i els instruments per dur a terme el seguiment i l'avaluació del projecte lingüístic.

3. S'ha d'especificar en el projecte lingüístic de centre la llengua d'ensenyament i aprenentatge de les distintes àrees, àmbits, matèries, mòduls o projectes de caràcter no lingüístic d'acord amb els principis i els criteris que s'estableixen en l'article 135 d'aquesta llei.

4. L'administració educativa ha d'establir un sistema d'avaluació dels projectes lingüístics de centre, amb la supervisió de la Inspecció Educativa, que permeti revisar-los i adequar-los amb la finalitat d'assegurar l'assoliment dels objectius establerts en competència comunicativa dels alumnes i en normalització lingüística.

5. La Inspecció Educativa ha de supervisar els processos d'elaboració dels projectes lingüístics dels centres i avaluar-ne la implementació i l'impacte en els resultats acadèmics i en els processos de cohesió i inclusió dels alumnes. Si no garanteixen l'assoliment dels objectius establerts, ha d'instar a modificar-los.

Article 137. Programes d'acolliment lingüístic

1. L'administració educativa ha de regular els programes d'acolliment lingüístic adreçats als alumnes d'incorporació tardana que desconeixen les llengües oficials de les Illes Balears per proporcionar-los les destreses necessàries per accedir als continguts curriculars i garantir-los una inclusió acadèmica i social efectiva.

2. Els centres educatius han de facilitar una atenció lingüística i pedagògica que permeti als alumnes d'incorporació tardana amb dèficit lingüístic incorporar-se amb eficàcia a l'aprenentatge en funció del projecte lingüístic de centre. A aquest efecte, han de disposar de recursos proporcionats per l'administració educativa que complementin els propis.

Article 138. Requisits lingüístics del personal

1. El Govern de les Illes Balears ha d'establir els requisits d'acreditació de la capacitació lingüística en llengua catalana per exercir la funció docent a les Illes Balears tant als centres públics com als privats.

2. La conselleria ha d'establir els requisits per impartir als centres educatius de les Illes Balears l'àrea de llengua catalana.

3. El Govern de les Illes Balears ha d'establir els requisits d'acreditació de la competència lingüística en llengua estrangera dels professors que imparteixen àrees no lingüístiques en llengua estrangera a les Illes Balears tant als centres públics com als privats.

4. L'administració educativa ha d'adoptar les mesures necessàries per actualitzar la competència lingüística dels professors.

5. El personal no docent dels centres educatius ha de tenir una competència lingüística adient per exercir adequadament les funcions corresponents.

CAPÍTOL II L'EDUCACIÓ INCLUSIVA

Article 139. Educació inclusiva com a principi fonamental

1. L'educació inclusiva és un principi fonamental de la política educativa de l'administració autonòmica amb l'objectiu de donar resposta a la diversitat educativa i social existent.

2. L'escola inclusiva és la que garanteix que tots els infants i joves tenen accés a l'educació en igualtat d'oportunitats, de forma justa i equitativa.

3. Tots els centres i serveis educatius de les Illes Balears han de promoure la inclusió de l'alumnat. S'ha de garantir que totes les activitats programades, siguin dins o fora de l'horari escolar, siguin inclusives.

4. El principi d'inclusió educativa és transversal en tots els nivells i serveis educatius.

5. L'educació inclusiva té presents totes les expressions de la diversitat a les aules i de la diversitat existent en la societat, així com la valoració que se'n fa en les seves diferents manifestacions.

Article 140. Característiques de l'educació inclusiva

L'educació inclusiva es caracteritza per:

- a) Valorar la diversitat dels alumnes com una riquesa que dona suport a l'aprenentatge de totes les persones, proposant en l'activitat diària de l'aula activitats que possibiliten i assegurin la cooperació entre la diversitat dels alumnes en el procés d'ensenyament i aprenentatge i la corresponsabilitat tant de l'aprenentatge propi com del dels altres, així com de la construcció de les relacions positives dins els grups.
- b) Aprofitar sinergies entre els components del centre escolar (alumnes, docents i famílies).
- c) Disposar d'un projecte educatiu que abracci cultures, polítiques i pràctiques educatives que atenguin la diversitat de tots els alumnes.
- d) Potenciar l'aprenentatge i la participació de tots els alumnes, especialment d'aquells amb més barreres i dificultats per a l'aprenentatge i la inclusió social.
- e) Flexibilitzar itineraris i currículums personals i possibilitar diferents contextos d'aprenentatge, inclosos els no formals, per a la consecució de les competències establertes, així com desenvolupar les capacitats i competències de tot l'alumnat en funció de les seves possibilitats d'adquirir un nivell òptim d'aprenentatge.
- f) Comprometre's en la superació de les barreres per a l'accés, la participació i l'aprenentatge de tots els alumnes i posar tots els esforços a superar les limitacions del centre a l'hora d'atendre la diversitat a través de models de disseny universal per a l'aprenentatge quan s'escaigui.
- g) Organitzar i rebre els suports en espais compartits per respondre a les necessitats individuals de cadascú atenent específicament les capacitats de cada alumne.
- h) Revisar i replantejar la utilització dels espais, els temps i els recursos i la tasca dels docents, d'acord amb la metodologia d'aprenentatge per competències, tant flexibilitzant el procés d'ensenyament i aprenentatge com fent més funcionals els aprenentatges de la vida per assolir les competències segons les capacitats de cadascú.
- i) Organitzar el treball per projectes que impliquin la col·laboració del grup classe, de l'equip docent i d'altres persones adultes qualificades per tal de garantir una atenció educativa inclusiva i adequada.
- j) Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixi l'autonomia i el treball de col·laboració entre els alumnes.

- k) Proposar activitats complementàries i extraescolars inclusives, variades i accessibles per a tots els alumnes.
- l) Fer un ús eficient de les eines tecnològiques, que comportin una transformació en les metodologies d'aprenentatge, oferint així formats alternatius per a les capacitats diverses.
- m) Coordinar i visualitzar els suports en contextos compartits i dins el grup, que han d'incidir en la coordinació del professorat i la col·laboració entre els professionals perquè es pugui donar resposta a les necessitats de tots els alumnes.

Article 141. Atenció educativa inclusiva

1. Tots els alumnes són subjectes de l'atenció educativa inclusiva i de les mesures d'atenció a la diversitat que precisin per raons pedagògiques amb independència de si estan escolaritzats en centres ordinaris o en centres d'educació especial, tenint en compte la voluntat de les famílies.

2. Tots els alumnes s'han de beneficiar de les mesures i els suports universals.

3. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que ho requereixin han de rebre els suports addicionals adients.

4. L'atenció educativa inclusiva comprèn tot el conjunt de mesures, d'accions, de personal i de suports destinats a tots els alumnes amb la finalitat d'afavorir el seu desenvolupament personal i social perquè avancin en l'assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d'un sistema educatiu i social inclusiu.

5. La conselleria ha de programar l'oferta educativa adreçada a l'alumnat que finalitza l'etapa d'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària, mitjançant una orientació individualitzada.

6. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu han de rebre l'atenció educativa adequada en els ensenyaments postobligatoris i de transició a la vida adulta.

Article 142. Recursos per a l'educació inclusiva

1. La conselleria ha de proporcionar les mesures i els suports que siguin necessaris per afavorir la inclusió educativa.

2. Per fer efectiva la finalitat assenyalada en l'apartat anterior, la conselleria, a més dels recursos propis dels centres educatius, pot crear els equips específics o especialitzats necessaris que garanteixin l'atenció inclusiva a l'alumnat i la que resulti adequada a l'alumnat amb necessitats educatives especials i necessitats específiques de suport educatiu. Progressivament s'ha de dotar els centres de personal especialista en intervenció sociocomunitària atenent les seves necessitats.

3. Així mateix, la conselleria pot finançar, per als centres sostinguts amb fons públics, els serveis que resultin adients per dur a terme processos d'inclusió educativa.

4. L'administració educativa ha de donar el suport necessari als centres d'educació especial per tal que aquests, a més d'escolaritzar l'alumnat que requereix una atenció molt especialitzada, desenvolupin també una funció de centres de referència i suport per als centres ordinaris.

CAPÍTOL III LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Article 143. Formació inicial del professorat

1. La formació inicial del professorat s'ha d'ajustar a les necessitats de titulació i qualificació que requereix l'ordenació general del sistema educatiu.

2. La formació inicial ha d'incloure tant l'adquisició de coneixements com el desenvolupament de capacitats i actituds professionals per preparar el professorat per exercir la facilitació dels processos d'ensenyament i aprenentatge i el desenvolupament de l'alumnat.

3. Els plans d'estudis de formació inicial han de garantir, a més de la formació científica, l'adquisició de les competències necessàries en els aspectes psicopedagògics i didàctics, el domini de les dues llengües oficials, el coneixement d'una llengua estrangera, el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació, el treball docent en equip i les habilitats socials i tutorials adients per exercir la funció docent.

4. La fase de pràctiques de la formació inicial del professorat s'ha de realitzar en centres docents prèviament acreditats per l'administració educativa.

5. La conselleria pot subscriure els convenis corresponents amb les universitats per millorar la formació inicial del professorat i per garantir la qualitat d'aquesta formació, en el marc de l'espai europeu d'educació superior.

Article 144. Formació permanent del professorat

1. La formació permanent del professorat té per finalitat l'actualització i el desenvolupament de les competències professionals del professorat per a la funció docent i el lideratge pedagògic i per a la col·laboració amb la comunitat educativa, i ha d'anar encaminada a millorar la pràctica educativa i impulsar la innovació, especialment en relació amb el projecte educatiu de cada centre.

2. La formació permanent del professorat constitueix un dret i un deure dels docents i és, alhora, una responsabilitat de l'administració i dels altres titulars dels centres educatius. El dret a la formació permanent s'exerceix preferentment dins l'horari laboral.

3. La formació permanent del professorat ha de ser organitzada per l'administració educativa, pels centres educatius, pels centres de formació del professorat, pels titulars dels centres privats concertats i les seves organitzacions representatives o els sindicats de treballadors de l'ensenyament, que han de realitzar una oferta lligada a les necessitats dels centres i vinculada als seus projectes educatius. La formació s'ha de dur a terme prioritàriament per mitjà d'activitats de formació als centres educatius. Aquesta formació podrà ser reconeguda o homologada per l'administració educativa, d'acord amb la normativa vigent.

4. Altres entitats col·laboradores poden organitzar, en les condicions que s'estableixin, activitats de formació permanent del professorat, que, si compleixen els requisits que es determinin reglamentàriament, han de ser reconegudes a l'efecte de promoció professional dels docents.

5. La formació permanent ha de contenir els criteris i els instruments d'avaluació adients per garantir l'aprofitament dels programes formatius en la millora dels processos educatius dels centres.

Article 145. Principis de la formació permanent del professorat

La formació permanent del professorat s'ha de regir pels principis següents:

- a) El reconeixement de la formació com una estratègia en el procés de dignificació de la funció docent, del seu prestigi i de la seva consideració social, de manera que es faciliti l'actualització permanent de les competències professionals i el reconeixement de la complexitat i el mèrit de la tasca educativa.
- b) La formació vinculada al desenvolupament de les funcions docents i basada en un model de competències professionals que ha d'assolir el professorat per implementar un autèntic sistema inclusiu per a tots els alumnes.
- c) L'actualització dels continguts formatius segons les necessitats del sistema educatiu, els projectes educatius dels centres i la qualificació professional i personal del professorat.
- d) La transferència de la formació permanent a la pràctica educativa, a l'educació de l'alumnat i al funcionament dels centres per tal de contribuir a la millora de la qualitat educativa, a l'equitat i a l'èxit escolar.
- e) El foment de la recerca i la innovació educativa, així com l'avaluació de la formació basada en els principis de la millora constant i la gestió de qualitat.
- f) El foment de les metodologies formatives de caràcter actiu i experiencial que facilitin la implicació, l'intercanvi d'experiències i la reflexió pedagògica.
- g) La consideració dels equips educatius dels centres com veritables protagonistes de la formació.
- h) La incidència de la formació en les actituds docents i en el desenvolupament personal i professional per millorar el caràcter educatiu en les relacions que s'estableixen al centre.
- i) La col·laboració amb entitats i institucions de prestigi en matèria d'innovació, recerca i formació del professorat que potenciï la transferència del coneixement i l'especialització en matèria de formació professional.

Article 146. Sistema de formació permanent de les Illes Balears

1. El sistema de formació permanent del professorat de les Illes Balears s'organitza per mitjà dels centres de professorat i dels centres educatius, amb autonomia pedagògica i de gestió, en el marc dels plans pluriennals de formació del professorat. L'organització i el funcionament dels centres de professorat i de les activitats de formació dels centres educatius s'han de determinar reglamentàriament. En tot cas, les activitats que s'ajustin als plans pluriennals tindran els mateixos efectes respecte el desenvolupament professional dels docents, amb independència que siguin organitzades pels centres de professorat o pels centres educatius.

2. Les modalitats formatives del sistema de formació del professorat han de fomentar l'aprenentatge de les bones pràctiques docents, la transferència dels coneixements, l'intercanvi professional, la difusió del coneixement i les experiències formatives, per la qual cosa les estratègies metodològiques han d'estimular el treball cooperatiu, l'autoformació i la recerca educativa.

3. La formació permanent del professorat s'ha de dur a terme mitjançant un procés sistemàtic a partir d'un diagnòstic de necessitats formatives i amb plans

pluriennals de formació, elaborats amb la participació del professorat, que contenguin una planificació flexible i adaptable i defineixin les línies estratègiques de formació, les modalitats formatives i els criteris d'avaluació.

CAPÍTOL IV L'EDUCACIÓ NO FORMAL

Article 147. Reconeixement de l'educació no formal

1. En el marc d'una cultura d'aprenentatge al llarg de la vida, les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure l'articulació i la complementarietat de l'educació no formal i l'educació formal, amb el propòsit de contribuir conjuntament al ple desenvolupament de la personalitat.

2. L'administració educativa ha de reconèixer i incorporar el caràcter educatiu de les activitats educatives no formals del camp del lleure educatiu, de l'esport, dels programes d'aprenentatge-servei i de participació associativa entre d'altres, en la mesura que aquestes activitats contribueixen a l'adquisició de les competències curriculars establertes de caràcter transversal. Els aprenentatges adquirits en l'educació no formal han de ser reconeguts pel sistema educatiu de les Illes Balears de la forma que s'estableixi reglamentàriament.

3. Els aprenentatges adquirits en l'educació no formal relacionats amb el currículum educatiu poden formar part de l'avaluació dels processos d'aprenentatge en el marc d'una avaluació contínua de les competències establertes.

Article 148. Aprenentatge-servei

1. L'aprenentatge-servei és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l'alumnat, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. L'aprenentatge-servei té com objectiu garantir que els alumnes, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

2. Per a la realització de projectes d'aprenentatge-servei, l'administració educativa i els centres educatius, en el marc de la seva autonomia, han d'impulsar marcs de cooperació amb consells insulars, ajuntaments i entitats interessades a promoure activitats complementàries i extraescolars que vinculin els continguts curriculars amb la resposta a les necessitats socials emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i que contribueixin a la capacitat personal en els àmbits artístics, tecnològics, lúdics, culturals i esportius; la promoció de valors comunitaris; l'animació sociocultural; i la participació social.

3. Els projectes d'aprenentatge-servei poden formar part de la programació curricular, d'acord amb el que estableixi el projecte educatiu de centre, i com a part de la concreció curricular que correspon als centres.

4. Els centres poden disposar d'un o més projectes de servei comunitari. Aquests projectes, en tot cas, han de tenir una assignació horària lectiva i pràctica i han d'estar fonamentats en els elements curriculars corresponents. Els aprenentatges adquirits en l'àmbit d'aquests projectes comunitaris, que han de tenir la consideració de transversals, han de formar part de l'avaluació educativa.

TÍTOL VII EL SEGUIMENT I L'AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

CAPÍTOL I LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

Article 149. Inspecció del sistema educatiu

1. L'administració educativa exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, de qualsevol titularitat i règim jurídic; dels programes, i de la resta d'elements que integren el sistema educatiu, amb la finalitat d'assegurar l'aplicació de l'ordenament jurídic i garantir l'exercici dels drets i el compliment dels deures que en deriven, per contribuir així a la millora de la qualitat i de l'equitat en l'educació.

2. Aquesta competència es farà efectiva a través del Departament d'Inspecció Educativa, compost per funcionaris i funcionàries del cos d'inspectors d'educació que s'ha de nodrir de persones seleccionades amb criteris tècnics, el nombre de les quals ha de ser suficient per garantir l'acompliment de les seves funcions en tots els centres educatius de les Illes Balears. En l'exercici de les seves atribucions i funcions, actuaran de conformitat amb els principis d'autonomia professional i independència de criteri tècnic, imparcialitat i transparència en les seves actuacions, instruments i tècniques utilitzades, a més dels principis ètics prevists a la normativa de funció pública. En l'exercici de les seves funcions tendran la condició d'autoritat pública.

3. Correspon al Govern de les Illes Balears regular l'estructura, les atribucions i el funcionament del Departament d'Inspecció Educativa, sota la dependència orgànica i funcional del conseller competent en matèria d'educació.

Article 150. Funcions de la Inspecció Educativa

1. Són funcions de la Inspecció Educativa de les Illes Balears les següents:
 - a) Supervisar, controlar i avaluar el funcionament i l'organització dels centres i dels serveis educatius, així com la pràctica docent i la funció directiva.
 - b) Vetlar pel compliment de les normes que regulen el sistema educatiu, pel respecte a aquestes normes i per l'aplicació dels principis i valors que s'hi recullen, inclosos els referits a la igualtat de gènere i a l'atenció de les persones amb capacitats diverses, amb especial atenció a la normativa d'accessibilitat universal.
 - c) Garantir l'autonomia dels centres en la implementació dels respectius projectes educatius, donant-los el suport necessari per fer-la efectiva.
 - d) Afavorir la millora de l'aprenentatge dels alumnes, promovent la innovació educativa, que ha de permetre la millora dels processos i de l'èxit educatiu.
 - e) Promoure el desenvolupament competencial del currículum als centres educatius i la implementació de metodologies centrades en l'aprenent.
 - f) Assessorar i orientar el professorat i els òrgans de govern i de coordinació docent en el desenvolupament de les funcions que tinguin encomanades.
 - g) Desenvolupar processos avaluadors i participar en l'aplicació d'avaluacions promogudes per l'administració educativa.
 - h) Col·laborar i coordinar-se amb els diversos serveis i unitats tècniques de l'administració educativa en el desenvolupament de les seves actuacions.

- i) Orientar als òrgans directius i de coordinació de centres en l'adopció de mesures de millora de la convivència, la participació de la comunitat educativa i la resolució de conflictes, impulsant processos de mediació i arbitratge.
- j) Participar en l'avaluació del sistema educatiu i els seus resultats generals i en la presentació d'informes davant les administracions i els poders públics.
- k) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per la conselleria en l'àmbit de les seves competències.

2. Els inspectors d'educació, sense perjudici de les facultats per fer complir drets i deures, poden intervenir en la mediació exercint funcions d'arbitratge en els conflictes que es generin entre els membres de la comunitat educativa.

Article 151. Atribucions de la Inspecció Educativa

1. Els inspectors d'educació, en l'exercici de les seves funcions, tenen les atribucions següents:

- a) Accedir a totes les activitats que tenen lloc als centres i als serveis educatius i conèixer-les i observar-les directament. A més, els correspon la denúncia de qualsevol instal·lació no autoritzada com a centre docent on es duguin a terme activitats docents; a aquest efecte, podran accedir i visitar dites instal·lacions.
- b) Examinar i comprovar l'adequació dels projectes institucionals i la resta de documentació acadèmica, pedagògica i administrativa dels centres i dels serveis educatius.
- c) Sol·licitar als diferents sectors de la comunitat educativa i als altres òrgans i serveis de l'administració la informació necessària per a l'exercici de les seves activitats.
- d) Requerir als directors, als titulars dels centres i als altres agents educatius que adequin les seves actuacions a la normativa vigent.
- e) Controlar el compliment de les obligacions professionals i laborals del professorat i del personal no docent dels centres, serveis i programes educatius.
- f) Convocar reunions amb els diferents integrants de la comunitat educativa per a la millora dels processos i resultats educatius.
- g) Qualsevol altra que els atribueixi l'administració educativa en l'àmbit de les seves competències.

2. Com a autoritat pública, les actes, els informes i els requeriments elaborats pels inspectors observant els requisits legals pertinents gaudiran de presumpció de veracitat i valor probatori, sense perjudici de les proves que es puguin presentar en sentit contrari.

Article 152. Organització i funcionament de la Inspecció Educativa

1. El funcionament de la Inspecció Educativa s'organitza a partir de criteris jeràrquics, territorials i funcionals al voltant de tres àmbits:

- a) L'estructura interna del Departament d'Inspecció Educativa s'organitza entorn dels òrgans de govern i de coordinació. La direcció i la coordinació del Departament d'Inspecció Educativa corresponen al cap del departament. Els òrgans de coordinació tenen caràcter consultiu i de participació.
- b) L'organització territorial de la Inspecció s'articula per illes i demarcacions. A les illes de Menorca, Eivissa i Formentera s'ha de tenir en compte l'especial configuració de les demarcacions i la relació funcional amb les direccions territorials insulars.

- c) La planificació de les actuacions del Departament d'Inspecció Educativa es fa a partir dels plans i programes periòdics.
2. El funcionament de la Inspecció Educativa ha d'afavorir, entre d'altres aspectes:
- a) El treball en equip i l'actuació coordinada de tots els inspectors d'educació.
 - b) La coordinació entre els inspectors d'educació i els responsables de la conselleria competent en matèria d'educació.
 - c) La presència habitual dels inspectors als centres educatius.
 - d) Les reunions periòdiques dels inspectors amb el professorat, els diferents òrgans de govern dels centres i les famílies.

Article 153. Formació de la Inspecció

- 1. La formació permanent, el perfeccionament i l'actualització professional són un dret i un deure de tots els inspectors.
- 2. La conselleria ha d'organitzar activitats de formació específiques i ha de facilitar l'assistència dels inspectors a les sessions de formació, experimentació i perfeccionament en les mateixes condicions que la resta de personal al servei de les administracions públiques, inclosos els programes internacionals o d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques amb altres administracions i comunitats autònomes.

Article 154. Accés al cos d'inspectors d'educació

- 1. L'accés al cos d'inspectors d'educació es farà mitjançant concurs oposició, al qual podran accedir els aspirants que comptin amb una antiguitat mínima de vuit anys en un dels cossos que integren la funció pública docent i amb una experiència docent de la mateixa durada.
- 2. La funció inspectora educativa també podrà ser exercida per funcionaris docents en comissió de serveis, per ocupar transitòriament llocs de feina vacants, als quals es podrà accedir mitjançant un concurs que compleixi els requeriments d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

CAPÍTOL II L'AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

Article 155. Finalitats de l'avaluació

- 1. L'avaluació del sistema educatiu és un procés intern de l'administració educativa d'abast general que té com a finalitat recollir informació referida a les polítiques educatives, a les institucions, a les pràctiques educatives i als seus resultats, per després analitzar la informació obtinguda, valorar-la i interpretar-la amb l'objecte de mantenir les pràctiques i les polítiques educatives, millorar-les o modificar-les, per convertir-la en un instrument que contribueixi a la millora dels resultats educatius.
- 2. Les finalitats de l'avaluació del sistema educatiu són les següents:
 - a) Contribuir a la millora de la funcionalitat, l'eficàcia, l'eficiència, l'equitat i el nivell d'inclusivitat del sistema educatiu.
 - b) Retre comptes i dotar el sistema educatiu de transparència davant la societat.

- c) Aportar informació sobre el grau de consecució dels resultats i dels objectius educatius fixats per a les etapes del sistema educatiu no universitari.
- d) Aportar informació que orienti i millori la política i les pràctiques educatives.
- e) Constituir un instrument formatiu per als centres educatius, orientat a la innovació i la millora educatives.
- f) Elaborar un catàleg d'indicadors homologats, així com criteris i mètodes d'avaluació i recerca del sistema educatiu de les Illes Balears, perquè sigui comparable amb els utilitzats per altres organismes similars autonòmics, estatals i internacionals.
- g) Fer anàlisi i prospectiva del sistema educatiu.
- h) Fer públiques aquestes dades a fi d'assolir-ne la màxima transparència.

3. Són d'aplicació a l'avaluació del sistema educatiu les disposicions que s'estableixen a la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, o norma de rang legal que les substitueixi.

Article 156. Àmbits de l'avaluació

L'activitat avaluadora s'ha de projectar sobre els àmbits següents:

- a) Els mètodes, els processos i les estratègies d'aprenentatge.
- b) Els resultats de l'aprenentatge.
- c) La funció directiva.
- d) La funció docent.
- e) Els serveis i la inspecció educativa.
- f) La participació efectiva de la comunitat educativa
- g) La col·laboració amb l'entorn socioeducatiu.
- h) La mateixa administració educativa.
- i) L'atenció a la diversitat, el disseny universal i el nivell d'inclusivitat del centre.
- j) Tots els altres àmbits que pugui fixar l'administració educativa.

Article 157. Modalitats de l'avaluació

L'avaluació, que s'ha d'adequar a les especificitats de cada un dels diferents àmbits objecte d'avaluació, s'ha d'aplicar com a mínim amb les modalitats següents:

- a) Avaluació del rendiment educatiu, que ha d'incloure els resultats de l'avaluació interna dels alumnes realitzada als centres i de l'avaluació externa de diagnòstic de les competències assolides pels alumnes.
- b) Avaluació interna i externa dels centres.
- c) Avaluació de la pràctica docent.
- d) Avaluació de l'exercici de la funció directiva.
- e) Avaluació de programes i serveis.

Article 158. Òrgans responsables de l'avaluació

Els òrgans responsables de l'avaluació són l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears i el Departament d'Inspecció Educativa.

Article 159. Transparència i participació en el procés d'avaluació

1. Constitueix un dret de la ciutadania estar informada de l'estat general del sistema educatiu, així com de cada un dels seus components.

2. L'administració educativa ha de garantir, mitjançant els procediments oportuns, la participació de la comunitat educativa tant en la fase de disseny, preparació i aplicació de les avaluacions internes i externes dels centres com en el procés d'anàlisi dels resultats obtinguts i, sobretot, en la definició i l'adopció dels compromisos de millora oportuns.

Article 160. Avaluació dels centres educatius

1. L'avaluació dels centres ha de ser integral i orientada a la millora contínua, i ha de relacionar els resultats educatius amb els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, amb els recursos i la gestió que se'n fa, amb l'organització i els processos de participació, amb els objectius del centre i amb els indicadors de progrés del projecte educatiu.

2. Les avaluacions internes, l'autoavaluació i les avaluacions externes han d'orientar la presa de decisions, que tenen com a finalitat la millora de la qualitat en l'àmbit de l'organització i la gestió dels centres, de les competències professionals docents i dels processos d'aprenentatge dels alumnes.

3. L'activitat avaluadora ha de ser multinivell i s'ha de concretar en modalitats d'avaluació interna, coavaluació o autoavaluació, i en avaluació externa. A més, ha d'afectar els àmbits pedagògic, de gestió i d'organització d'acord amb les especificitats de cada centre.

4. Els agents avaluadors són el professorat, l'alumnat, les famílies, l'equip directiu i l'administració educativa, mitjançant el Departament d'Inspecció Educativa i l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears.

5. L'avaluació dels centres ha de tenir en compte, necessàriament, els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu del centre per al període considerat, que han de fer referència a resultats, processos, recursos i condicions d'equitat i que s'han d'establir de manera contextualitzada a cada centre.

6. L'avaluació del centre serà un referent a tenir en compte en l'avaluació de l'exercici de la funció directiva i en la de l'exercici de la funció docent al centre.

7. L'avaluació del centre també ha de contemplar el compliment del projecte lingüístic contingut en el projecte educatiu del centre i el grau d'ajust d'aquell a les disposicions d'aquesta llei referides al model lingüístic.

8. La conselleria ha de promoure els processos d'autoavaluació dels centres, que s'han d'establir reglamentàriament i que han d'abastar els àmbits següents: visió estratègica, gestió de persones i de recursos, interacció amb la comunitat educativa i amb els agents externs, processos d'ensenyament i aprenentatge, i seguiment i avaluació del servei educatiu. L'objectiu és millorar la coordinació pedagògica i curricular, identificar bones pràctiques docents i de lideratge i establir mecanismes àgils que permetin compartir experiències mitjançant l'aprenentatge entre iguals per estendre-les a la resta de centres educatius.

9. L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears haurà de realitzar una avaluació, en els termes que estableix aquest article, de tots els centres educatius de les Illes Balears de forma periòdica. Aquesta avaluació periòdica es realitzarà a cada centre almenys un cop cada cinc anys.

10. Els resultats de les avaluacions internes o externes no poden ser utilitzats per establir rànquings de centres.

TÍTOL VIII
L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Article 161. Direccions territorials d'Educació

1. Les direccions territorials d'Educació són òrgans desconcentrats de l'administració educativa constituïts en el marc de la normativa autonòmica sobre l'estructura i la composició del Govern de les Illes Balears.

2. S'han de constituir la Direcció Territorial d'Educació de Menorca i la Direcció Territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera.

3. Les direccions territorials d'Educació de cada illa han de dependre orgànicament del conseller competent en matèria d'educació.

4. L'administració autonòmica ha de dotar les direccions territorials de l'estructura, del personal i del pressupost necessaris per al seu funcionament i per al desenvolupament de les seves competències i funcions.

5. El director territorial d'Educació ha d'exercir la representació institucional de la conselleria en el seu respectiu àmbit territorial.

Article 162. Funcions de les direccions territorials

Entre les funcions de les direccions territorials d'Educació es troben les següents:

- a) La representació institucional de la conselleria a cada una de les illes.
- b) El desenvolupament de les polítiques educatives de la conselleria.
- c) El suport a la gestió dels centres i dels serveis educatius radicats al seu territori.
- d) La coordinació del procés de matriculació a les illes respectives.
- e) La coordinació amb l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius en tot el que es refereix a les infraestructures educatives.
- f) La cooperació amb cada consell insular i els ajuntaments.
- g) La coordinació a cada territori amb la Inspecció Educativa.
- h) La interlocució amb la comunitat educativa.
- i) La coordinació en la realització del mapa escolar de cada illa.
- j) La interlocució i la coordinació amb les seues universitàries.
- k) La supervisió de les rutes del transport escolar en el seu territori per optimitzar-les.
- l) La supervisió i la coordinació de la prestació del servei educatiu de menjador escolar als centres educatius.
- m) Qualsevol que se'ls pugui atribuir mitjançant disposicions reglamentàries.

TÍTOL IX
EL FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU

CAPÍTOL I
ELS RECURSOS ECONÒMICS I EL FINANÇAMENT
DELS ENSENYAMENTS

Article 163. Recursos econòmics

1. Els recursos econòmics posats a disposició del sistema educatiu, de l'administració educativa i dels centres educatius sostinguts amb fons públics es gestionen d'acord amb els principis generals d'equitat, eficàcia, eficiència i economia sostenible.

2. La gestió dels recursos econòmics del sistema educatiu es regeix pel principi de planificació econòmica, pel principi de suficiència i estabilitat pressupostària, pel principi de liquiditat i pel principi de control financer.

3. Per a la gestió dels recursos econòmics d'acord amb els principis esmentats la conselleria ha de desenvolupar totes les accions que siguin necessàries.

Article 164. Finançament dels ensenyaments

El Govern de les Illes Balears ha de finançar els diversos ensenyaments de la seva competència en els termes prevists en aquesta llei, amb la finalitat de donar compliment als objectius que s'hi estableixen.

Article 165. Finançament de les escoles infantils

1. El Govern de les Illes Balears, d'acord amb la normativa vigent i juntament amb altres administracions, ha de finançar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants del primer cicle d'educació infantil de les escoles infantils públiques. El finançament autonòmic ha de ser estable i progressiu, d'acord amb els objectius d'aquesta llei i les disponibilitats pressupostàries.

2. Així mateix, la conselleria pot subvencionar la creació i el sosteniment de places per a infants de primer cicle d'educació infantil de centres privats autoritzats i que formen part de la xarxa complementària, d'acord amb les condicions que es regulin a tal efecte.

Article 166. Finançament dels ensenyaments obligatoris

1. L'administració educativa ha de garantir la gratuïtat de l'escolarització dels ensenyaments obligatoris i ha de transferir als centres educatius els recursos econòmics necessaris.

2. Progressivament, la gratuïtat s'ha d'estendre a les necessitats essencials de l'escolarització, que comprèn el material didàctic i les activitats complementàries, per a les famílies amb les rendes més baixes, per la qual cosa s'han d'adoptar mesures per garantir la igualtat d'oportunitats.

Article 167. Finançament dels ensenyaments postobligatoris i els de règim especial

1. La conselleria ha de definir periòdicament l'oferta de places en els ensenyaments de batxillerat i de formació professional, i garantir un nombre suficient de places gratuïtes.

2. La conselleria ha de subvencionar, en el marc de la seva programació educativa, els ensenyaments de règim especial.

Article 168. Finançament per assolir l'equitat i la qualitat del sistema escolar

1. La conselleria ha de realitzar convocatòries per a ajuts de menjador, de llibres de text, de material tecnològic i d'altres tipus adreçats a famílies amb necessitat de suport socioeconòmic.

2. La conselleria pot establir un finançament addicional als centres públics que desenvolupin accions adreçades a l'equitat o que realitzin programes d'innovació educativa per a la millora de l'èxit educatiu.

3. La conselleria pot signar contractes programa amb centres concertats que realitzin programes i accions que tendeixin cap a la qualitat i l'equitat del sistema escolar.

4. La conselleria pot establir ajuts en relació amb activitats complementàries i extraescolars.

Article 169. Finançament dels centres públics

1. En el marc de l'autonomia de gestió econòmica dels centres públics, la conselleria ha de consignar en el seu pressupost les quantitats necessàries per al funcionament dels centres.

2. En qualsevol cas, els centres educatius públics poden rebre transferències addicionals per al desenvolupament de determinats programes.

3. Els centres educatius públics poden rebre finançament específic de les administracions locals, insulars, autonòmica i estatal, i d'ens públics que hi estiguin vinculats, per al desenvolupament d'activitats i projectes que fomentin l'educació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals, de la igualtat entre homes i dones, del dret a la no-discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere, així com l'educació en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència, i també per participar-hi.

4. Els centres públics poden obtenir recursos complementaris, amb l'aprovació prèvia del consell escolar del centre, en els termes que s'estableixin d'acord amb la normativa vigent. En qualsevol cas, aquests recursos no poden provenir de les activitats dutes a terme per les associacions de famílies en compliment dels seus fins i han de ser aplicats a les despeses del centre d'acord amb el que es determini reglamentàriament.

5. S'ha de disposar reglamentàriament el règim jurídic de l'autonomia de gestió econòmica dels centres públics no universitaris dependents de la conselleria, en el marc d'aquesta llei i la normativa que els sigui aplicable.

CAPÍTOL II EL RÈGIM DELS CONCERTS EDUCATIUS

Article 170. Finançament dels centres concertats

1. El model ordinari de finançament amb recursos públics dels centres privats que presten un servei públic d'educació és el concert educatiu, sens perjudici que el finançament de determinats nivells o estudis no obligatoris pugui instrumentalitzar-se mitjançant convenis, subvencions o altres figures previstes en l'ordenament jurídic.

2. La conselleria, d'acord amb la programació de l'oferta educativa i de la disponibilitat pressupostària, pot establir concerts amb centres de titularitat privada que imparteixen etapes d'educació obligatòria i gratuïta, així com concerts de caràcter singular per a altres ensenyaments no obligatoris, per satisfer necessitats d'escolarització, complint les condicions bàsiques de les lleis orgàniques i d'aquesta llei.

Article 171. Condicions per a la concertació

1. Per a la concertació d'un centre privat s'han de satisfer, en tot cas, les necessitats d'escolarització i s'han de complir les condicions següents:

- a) Tenir una relació mitjana d'alumnes per unitat escolar no inferior a la dels centres públics del municipi o la zona d'escolarització on estigui ubicat.
- b) Aplicar el principi de coeducació en l'admissió de l'alumnat i la no-discriminació per motius de gènere, d'orientació sexual o de capacitats diverses.

2. Els centres privats concertats hauran d'escolaritzar alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i les normes que la desenvolupen, amb l'objectiu de tenir una escolarització equilibrada. D'acord amb aquestes condicions, els centres concertats han de rebre els recursos de suport educatiu necessaris, en les mateixes condicions que els centres públics.

3. En tot cas, per a la concertació tenen preferència els centres que estan constituïts i funcionen en règim de cooperativa i compleixen les condicions establertes per a aquest tipus de societats.

4. En el moment de subscriure el concert educatiu, el centre privat s'incorpora al servei públic d'educació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb les seves preceptives obligacions i drets.

Article 172. Procediment i establiment de quanties de concertació

1. El Govern de les Illes Balears ha d'aprovar la regulació i el procediment de la concertació educativa, que s'ha de regir pels principis de transparència i publicitat.

2. Tant l'aprovació de nous concerts educatius com la pròrroga han de satisfer necessitats d'escolarització i han d'atendre les previsions de programació educativa realitzades d'acord amb aquesta llei i la normativa existent.

3. Les lleis de pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de determinar la quantia dels mòduls econòmics dels concerts, inclosos els dels centres d'educació especial.

4. La conselleria ha d'establir els criteris per autoritzar les quanties que poden percebre els centres per a activitats complementàries.

5. Els concerts educatius, amb la sol·licitud prèvia del titular del centre, es renoven sempre que es mantenguin els requisits i les condicions i no es donin causes de no-renovació.

6. En el cas d'incompliment de les obligacions derivades de la subscripció del concert educatiu, és aplicable el procediment sancionador, que pot donar lloc a la rescissió del concert.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera. Convivència als centres educatius

1. El Govern ha de regular l'exercici de la convivència en els centres educatius en el marc de la Convenció sobre els drets dels infants amb una orientació educativa i de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes que es puguin produir.

2. La conselleria ha d'adoptar les mesures necessàries per a la prevenció de situacions d'assetjament escolar i ha d'establir els protocols adients per assegurar als afectats l'assistència adequada i la protecció del dret a la intimitat. Així mateix ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per atendre les situacions de risc d'assetjament escolar. En cas que resulti imprescindible, es poden adoptar mesures extraordinàries d'escolarització i, en l'àmbit del personal docent, mesures extraordinàries de mobilitat si fos necessari.

3. Les normes d'organització i funcionament dels centres o el reglament de règim interior en el cas dels centres privats concertats, han d'incloure mesures per al foment

de la convivència i han de determinar les mesures correctores aplicables en el cas que siguin necessàries.

Disposició addicional segona. Pla per a la creació i el manteniment d'escoles infantils

1. En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la conselleria ha d'elaborar i aprovar un pla de creació i manteniment d'escoles infantils amb la finalitat d'estendre progressivament el primer cicle d'educació infantil. Aquest pla, que s'ha de redactar en coordinació amb els consells insulars i els ajuntaments, així com amb l'administració educativa de l'Estat, ha de contenir la previsió de noves places escolars i ha de tenir un caràcter pluriennal.

2. L'administració educativa ha d'establir un marc estable de finançament de la xarxa d'escoles infantils públiques que garanteixi, en el termini de tres anys, la cobertura d'almenys una tercera part del cost per al sosteniment de les places efectives.

3. Així mateix, s'han d'establir els criteris per al sosteniment de places efectives de la xarxa complementària a la xarxa pública d'escoles infantils.

Disposició addicional tercera. Reducció progressiva de les ràtios

En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'administració educativa ha d'elaborar un pla que tingui com a objectiu la reducció progressiva de les ràtios màximes establertes a la normativa bàsica per permetre'n una minoració en, almenys, un 10 %.

Disposició addicional quarta. Pagament delegat al professorat dels centres concertats

L'administració educativa ha d'abonar els salaris del personal docent dels centres concertats com a pagament delegat i en nom de l'entitat titular del centre i ha de realitzar el pagament directe a les cooperatives acollides al mòdul íntegre, d'acord amb la normativa bàsica estatal. Aquests salaris han de tendir a l'equiparació gradual amb les retribucions del professorat de l'ensenyament públic, en les condicions que s'estableixin i en funció dels acords que es puguin assolir en la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat.

Disposició addicional cinquena. Import dels mòduls econòmics de l'ensenyament concertat

En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'ha de constituir una comissió tècnica en el si de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat, amb la participació de les organitzacions empresarials, les cooperatives d'ensenyament i els sindicats més representatius del sector, per estudiar la quantia dels mòduls d'altres despeses dels concerts que avalui el cost total de la impartició dels ensenyaments establerts en l'article 4.3 d'aquesta llei en condicions de gratuïtat, i s'ha d'establir un pla temporalitzat per fer efectiva aquesta gratuïtat.

Disposició addicional sisena. Serveis complementaris

1. En les condicions que s'estableixin reglamentàriament, els centres docents han d'afavorir la prestació del servei de menjador escolar i el d'escola matinerana per a l'alumnat de l'educació infantil i l'educació primària.

2. El servei de menjador escolar es pot prestar per a l'alumnat de l'educació secundària en els casos en què així es determini. L'administració educativa ha d'autoritzar la implantació d'aquest servei en els centres públics d'acord amb la planificació educativa.

3. L'administració educativa ha d'establir un sistema d'ajuts per a l'ús del servei de menjador que garanteixi la compensació de les desigualtats socials i econòmiques i faciliti l'accés i la permanència en el sistema educatiu en condicions d'equitat.

4. L'administració educativa ha de regular el servei complementari de transport escolar per a l'alumnat de l'ensenyament bàsic que estigui obligat a desplaçar-se fora de la seva localitat de residència perquè no hi existeix l'etapa educativa corresponent, determinarà les condicions per estendre progressivament aquest servei a l'alumnat del segon cicle d'educació infantil i ha de promoure mesures, juntament amb les altres administracions públiques, per facilitar el transport a l'alumnat de batxillerat i al de formació professional.

Disposició addicional setena. Ajuts per raons de doble i triple insularitat

Tenint en compte la doble insularitat que ha de suportar l'alumnat de Menorca i Eivissa i la triple insularitat que afecta l'alumnat de Formentera, els consells insulars respectius podran convocar ajuts complementaris i suplementaris per a les despeses de transport i desplaçaments. Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts autonòmics amb la finalitat de fer front als costos derivats d'aquestes situacions.

Disposició addicional vuitena. Materials didàctics curriculars

1. Els òrgans de coordinació didàctica dels centres educatius han de seleccionar els llibres de text i altres materials didàctics curriculars que s'han d'utilitzar en els ensenyaments que corresponguin, d'acord amb el seu projecte educatiu. L'edició i l'adopció d'aquests materials no requereixen autorització prèvia de l'administració educativa. En qualsevol cas, s'han d'adaptar al rigor científic i al currículum que correspongui a l'edat de l'alumnat aprovat per l'administració educativa i han de fomentar els principis, els valors, les llibertats, els drets i els deures establerts en la Constitució Espanyola, en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i en aquesta llei. Així mateix, han de fomentar la igualtat entre homes i dones, garantir un ús no sexista del llenguatge i el respecte a l'orientació i a la identitat sexual, no han de contenir estereotips sexistes o discriminatoris i s'han d'adaptar als principis i valors que s'estableixen en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2. Els materials didàctics, quan sigui necessari, s'han d'adaptar a l'alumnat amb capacitats diverses per mitjà d'un format de disseny universal per a l'aprenentatge o bé per mitjà de dissenys alternatius que siguin accessibles.

3. La supervisió dels llibres de text i altres materials didàctics curriculars correspon a la Inspecció Educativa en el marc de l'exercici de les seves funcions de seguiment i supervisió sobre els elements que conformen el procés d'ensenyament i aprenentatge.

4. S'ha de garantir que dins de l'estratègia d'ajudes de la conselleria, l'accés al material escolar sigui gratuït per a les famílies amb rendes més baixes.

Disposició addicional novena. Digitalització educativa

1. L'administració educativa i els equips directius dels centres han de promoure la digitalització educativa, amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines didàctiques per al procés d'ensenyament i aprenentatge, i han d'adoptar mesures per prevenir, en l'àmbit escolar, les situacions de risc derivades de la inadequada utilització d'aquestes tecnologies, atenent especialment les situacions de violència en la xarxa.

2. Els entorns virtuals d'aprenentatge que s'utilitzin en els centres educatius sostinguts amb fons públics han de respectar els estàndards d'interoperabilitat per permetre l'accés de l'alumnat des de qualsevol indret i en qualsevol moment als entorns d'aprenentatge disponibles al seu centre educatiu.

3. Els centres educatius han de disposar d'un pla de digitalització que contengui les mesures per impulsar les competències digitals del professorat i de l'alumnat i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines didàctiques per al procés d'aprenentatge.

4. L'administració educativa ha de dotar els centres educatius de la infraestructura informàtica necessària per garantir la digitalització dels centres i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos educatius.

5. L'administració educativa ha de fomentar les mesures que siguin necessàries per tal que l'alumnat de famílies vulnerables tenguí accés als aparells de suport informàtic i a la connectivitat en l'entorn habitual de residència per garantir l'equitat en la realització de les tasques educatives que es puguin encomanar fora del centre educatiu.

6. L'administració educativa ha de promoure la posada en funcionament i la constant actualització d'un banc de recursos digitals d'aprenentatge a disposició dels centres educatius per potenciar l'ús de materials didàctics en format digital, així com les activitats formatives destinades a millorar la capacitat digital del professorat.

Disposició addicional desena. Voluntariat als centres educatius

1. Els centres educatius sostinguts amb fons públics podran promoure programes de voluntariat educatiu, d'acord amb el projecte educatiu de centre, per a la millora de les possibilitats de realització d'activitats complementàries i extraescolars que puguin compensar les desigualtats i donar suport complementari als aprenentatges. En cap cas les activitats que realitzi aquest personal voluntari no podrà suplir aquells treballs o tasques que tinguin un caràcter ordinari o regular.

2. L'administració educativa ha d'establir les condicions d'aquests programes per garantir la vinculació amb els objectius i les competències dels currículums, l'educació en valors i l'autonomia pedagògica dels centres en funció del projecte educatiu de cada centre.

Disposició addicional onzena. Sostenibilitat de les actuacions per delegació de competències

1. El desenvolupament de les actuacions derivades de la delegació de competències que s'estableixen en els articles 43, 44, 45, 46 i 47 d'aquesta llei s'ha d'ajustar als compromisos que en matèria d'estabilitat i sostenibilitat financera assumeixi el Govern per a cadascun dels exercicis.

2. A partir del segon any d'implantació del règim de cooperació previst en l'article 43 d'aquesta llei, la conselleria competent en matèria d'educació ha d'eleva

la conselleria competent en matèria d'hisenda una memòria en què es detallin tant les delegacions autoritzades, amb indicació del seu cost i estat d'execució, com una previsió, degudament quantificada, de les que té previst autoritzar durant l'exercici següent. Aquesta memòria s'ha de sotmetre a l'informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria d'hisenda, que ha de fer constar la incidència que té la posada en marxa de les actuacions susceptibles de delegació en l'estabilitat i la sostenibilitat del corresponent exercici.

3. El Consell de Govern podrà acordar, a proposta conjunta de les conselleries competents en matèria d'hisenda i d'educació, l'ampliació tant de la dotació econòmica com del període d'execució de les actuacions delegades.

4. Les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'hisenda i d'educació han d'interpretar i adoptar les mesures necessàries i dictar-ne les instruccions de gestió adients encaminades a la consecució de l'eficàcia del procediment de delegació de competències que s'estableix en aquesta llei.

Disposició addicional dotzena. Unitat delegada de Formentera

1. Atenent les característiques específiques de l'illa de Formentera, en les condicions que s'estableixin en el marc de l'estructura de la Direcció Territorial d'Eivissa i Formentera, es pot crear una unitat delegada per a l'àmbit territorial de Formentera.

2. S'ha de garantir que la prestació dels serveis educatius no universitaris a l'illa de Formentera es faci en coordinació i col·laboració amb el Consell Insular de Formentera, amb la finalitat que es prestin a l'illa els serveis públics educatius de manera equitativa al conjunt del territori de la comunitat autònoma, garantint, en qualsevol cas, els suports i ajuts necessaris perquè l'alumnat estigui en igualtat d'oportunitats amb l'alumnat de la resta d'illes.

3. L'administració educativa, a través de la Unitat Delegada de Formentera, i el Consell Insular de Formentera han de constituir una comissió de formació professional per assegurar una oferta suficient de places i l'adaptació al teixit productiu de Formentera.

Disposició addicional tretzena. Conservació del patrimoni històric educatiu

1. L'administració educativa ha d'assegurar, en el marc de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, o norma que la substitueixi, la conservació i la difusió del patrimoni històric educatiu a través de l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears.

2. L'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears ha de tenir autonomia de gestió i ha de comptar amb els recursos suficients per exercir, entre d'altres, les funcions següents:

- a) Recollir, catalogar, restaurar i conservar els documents de qualsevol naturalesa relacionats amb l'educació i els materials educatius.
- b) Fomentar el coneixement de la història de l'educació de les Illes Balears i fer-ne difusió.
- c) Impulsar la recerca i les publicacions sobre la història de l'educació de les Illes Balears.
- d) Posar a l'abast del personal investigador els materials que formen el fons documental de l'arxiu.

- e) Col·laborar amb les institucions i els agents socials de les Illes Balears relacionats amb el món de l'educació, en especial amb la Universitat de les Illes Balears.
- f) Projectar la història de l'educació de les Illes Balears cap a la resta de l'Estat i de la Unió Europea.

3. L'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears podrà comptar de manera puntual o continuada amb personal col·laborador entre aquelles persones de reconegut prestigi del món educatiu que puguin aportar el seu coneixement per a l'assoliment dels objectius de l'entitat.

4. L'organització i el funcionament de l'Arxiu i Museu de l'Educació s'han d'establir reglamentàriament.

Disposició addicional catorzena. Despesa pública educativa

El Govern de les Illes Balears, per assolir els objectius d'aquesta llei i en la mesura que millori el sistema de finançament, ha d'incrementar progressivament els recursos destinats al sistema educatiu prenent com a referència els països més desenvolupats de la Unió Europea en l'àmbit educatiu, d'acord amb el que s'estableix en l'article 155.2 i en la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, contribuint així a l'objectiu d'elevat gradualment la despesa pública educativa total, que s'ha de situar en el termini de vuit anys en, almenys, el 5 % del producte interior brut.

Disposició addicional quinzena. Col·laboració amb altres serveis públics relacionats amb els serveis educatius

Els diferents departaments i conselleries del Govern de les Illes Balears han de col·laborar per al desplegament de serveis públics relacionats amb els serveis educatius, com són la prevenció i la protecció de la salut de la comunitat educativa, l'atenció sanitària escolar, el desplegament del pla autonòmic de conciliació laboral i familiar i la resposta assistencial a les necessitats específiques dels escolars vulnerables, entre d'altres.

Disposició addicional setzena. Reconeixement social dels equips directius

En el termini de dos anys i en el marc de la normativa bàsica, el Govern haurà d'elaborar, amb la participació de la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors i les Associacions de Directors regulada en aquesta llei, un pla per millorar el reconeixement social dels equips directius que inclogui les mesures necessàries per millorar els incentius dels professionals docents per formar part dels equips directius. Entre les mesures del pla s'haurà d'incloure la regulació dels complements retributius associats al desenvolupament de càrrecs directius.

Disposició addicional dissetena. Pla d'impuls dels col·legis integrats de primària i secundària

En el termini d'un any comptador des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha d'impulsar un pla per a la implantació progressiva dels col·legis d'educació infantil i primària integrats amb els d'educació secundària obligatòria (CEIPIESO) prevists a l'article 107 d'aquesta llei arreu del territori.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera. Estructura de les retribucions del personal funcionari docent

1. Mentre no es determinin les retribucions del personal funcionari docent, d'acord amb el que s'estableix en l'article 93 d'aquesta llei, es manté l'estructura retributiva que actualment s'aplica a aquest personal, que és la que s'indica en els apartats següents.

2. Les retribucions del personal funcionari docent no universitari de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears es classifiquen en bàsiques i complementàries.

3. Són retribucions bàsiques, d'acord amb el que estableix la normativa bàsica estatal:

a) El sou base.

b) Els triennis.

4. Són retribucions complementàries:

a) El complement de destinació, que retribueix la pertinença a un grup o subgrup de classificació i nivell o l'ocupació de llocs de feina de nivell superior.

b) El complement específic anual, que està format per tres components:

1r. El component general, que retribueix l'exercici de llocs de feina de la funció pública docent.

2r. El component singular, que retribueix l'exercici en els òrgans de govern unipersonal dels centres i d'altres llocs de caràcter singular.

3r. El component per formació permanent, o sexenni, que es percep per cada sis anys de servei com a funcionari en la funció pública docent, sempre que s'hagin acreditat durant aquest període, com a mínim, cent hores d'activitats de formació, distribuïdes en crèdits d'almenys vuit hores cadascun, homologades o reconegudes per la conselleria competent en matèria d'educació.

c) El complement específic de tutor, que retribueix l'exercici de la funció tutorial.

d) El complement específic d'assessor tècnic docent, que retribueix l'exercici de funcions, als centres directius de la conselleria competent en matèria d'educació, que impliquen desenvolupar tasques administratives i d'assessorament relacionades directament amb aspectes docents.

e) La bestreta a compte del primer cicle d'educació secundària obligatòria, que retribueix el personal docent del cos de mestres que exerceix la docència en el primer cicle de l'ESO.

f) Les gratificacions, que retribueixen els serveis extraordinaris prestats fora de l'horari o la jornada habitual de treball.

g) El complement de comunitat autònoma, que retribueix l'equiparació de les retribucions del personal docent amb la dels funcionaris de l'Administració General de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

5. Les pagues extraordinàries són dues a l'any i es meriten per l'import que s'estableixi reglamentàriament, d'acord amb les previsions establertes en la legislació bàsica estatal.

6. El personal funcionari docent té dret a percebre les indemnitzacions que s'estableixin reglamentàriament, entre les quals hi haurà, en tot cas, la indemnització per residència.

Disposició transitòria segona. Estructura de les retribucions del personal laboral docent

1. Mentre no es determinin les retribucions del personal laboral docent, d'acord amb el que s'estableix en l'article 93 d'aquesta llei, es manté l'estructura retributiva que actualment s'aplica a aquest personal, que és la següent:

- a) Les retribucions bàsiques: sous i triennis.
- b) El complement de professor de religió i complement de professor especialista, en el qual passen a integrar-se el complement anomenat a compte del complement específic, establert en el Decret 72/2000, de 14 d'abril, d'aplicació, per a l'any 2000, de l'Acord assolit a la Mesa General de Negociació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatiu al fons per a la millora dels serveis públics, i el complement anomenat Acord 28-07-2007, previst en l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006, pel qual s'aprova la proposta d'acord per a la millora de l'ensenyament públic, relatiu a les plantilles de personal dels centres docents públics, aprovada per la Mesa Sectorial d'Educació.
- c) El complement per formació permanent o sexenni.
- d) El complement de comunitat autònoma.
- e) Les pagues extraordinàries, que són dues a l'any.
- f) La indemnització per residència.

2. En tot cas, les quanties que en el còmput global han de percebre per aquests conceptes han de ser les mateixes que perceben els funcionaris del mateix nivell educatiu.

Disposició transitòria tercera. Delegacions d'Educació

Mentre no es regulin reglamentàriament les direccions territorials previstes en l'article 161 d'aquesta llei, les actuals delegacions d'Educació de Menorca i d'Eivissa i Formentera mantindran, respectivament, les funcions que actualment tenen assignades.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions legals del mateix rang o inferior que s'oposin al que s'estableix en aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera. Òrgans i entitats instrumentals

En un termini de quatre anys comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha de regular l'estructura, la composició, l'organització i el funcionament dels òrgans i de les entitats que actualment formen part de l'organització institucional del sistema educatiu per adequar-los a aquesta llei. Aquests òrgans i entitats són els que s'enumeren a continuació:

- a) L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears.
- b) L'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears.

- c) L'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.
- d) L'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears.
- e) L'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears.
- f) L'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius.
- g) La Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears.

Disposició final segona. Institut d'Ensenyaments Artístics Superiors de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears, en un termini de tres anys comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha de formular les propostes legislatives necessàries per a la creació de l'Institut d'Ensenyaments Artístics Superiors de les Illes Balears com l'instrument adequat per aconseguir la màxima eficiència en la gestió del conjunt de centres públics d'estudis artístics superiors dels quals és titular la comunitat autònoma i per afavorir la qualitat d'aquests centres.

Disposició final tercera. Desenvolupament de la carrera docent

Amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de la professió docent i millorar-ne el reconeixement, l'administració educativa ha de presentar, en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la proposta que reguli la carrera docent.

Disposició final quarta. Regulació d'altres professionals educatius

El Govern de les Illes Balears ha de determinar el que s'estableix en l'article 61.4 d'aquesta llei en un termini de sis anys comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Disposició final cinquena. Reglament d'organització de centres

En un termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha d'adaptar el Reglament d'organització dels centres a les disposicions d'aquesta llei.

Disposició final sisena. Autonomia de gestió econòmica dels centres

En un termini de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'ha de regular el règim jurídic de l'autonomia de gestió econòmica dels centres públics no universitaris que es preveu en l'article 169.5 d'aquesta llei.

Disposició final setena. Modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

El text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, es modifica en els termes següents:

U. L'article 3 bis queda redactat de la manera següent:

"Article 3 bis

1. Les reunions de tots els òrgans dels consells escolars regulats en aquesta llei es faran en un horari que possibiliti la participació de tots els seus membres.
2. Els representants del Consell Escolar de les Illes Balears tenen dret a participar telemàticament i amb plens efectes en les reunions dels seus òrgans.

3. Els representants dels alumnes als consells escolars regulats en aquesta llei han de rebre dels seus centres i del seu professorat el suport adequat per fer possible la seva participació i, a aquest efecte, han d'adoptar mesures com adaptar-los la càrrega lectiva i els calendaris de lliurament de treballs o de realització d'exàmens o proves. La dedicació a tasques de representació ha de valorar-se a efectes acadèmics d'acord amb la normativa d'aplicació.”

Dos. La lletra c) de l'article 9.1 queda redactada de la manera següent:

“c) Quatre persones en representació de l'alumnat de l'ensenyament no universitari, proposades per les confederacions o federacions d'associacions d'alumnat o, en el seu defecte, associacions d'alumnat, d'acord amb la seva representativitat. Tres d'aquestes ho han de ser en representació de l'alumnat de centres públics i una, en representació de l'alumnat de centres concertats.”

Tres. L'apartat 6 de l'article 9 queda redactat de la manera següent:

“6. El president del Consell Escolar de les Illes Balears ha de rebre les dietes o les retribucions adequades a l'eficaç compliment de les seves funcions, que han de permetre la dedicació plena a les mateixes.”

Quatre. L'article 16.3 queda redactat de la manera següent:

“3. El president i el vicepresident dels consells escolars insulars han de ser nomenats pel Consell de Govern, a proposta del consell insular respectiu. El mateix consell escolar insular ha de triar les persones proposades per majoria de dos terços en primera votació o per majoria simple en segona votació.”

Disposició final vuitena. Actualització de la regulació de les escoles de música i dansa reconegudes

El Govern de les Illes Balears, en el termini de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'actualitzar la regulació dels ensenyaments impartits per les escoles de música i dansa reconegudes, continguda al Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició final novena. Conselleria competent en matèria d'educació

Als efectes d'aquesta llei, s'entén per administració educativa l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en l'exercici de les competències educatives que li són pròpies i actua per mitjà de la conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix, s'entén per conselleria la conselleria competent en matèria d'educació.

Disposició final desena. Desplegament normatiu

S'habilita el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries per desplegar i aplicar aquesta llei.

Disposició final onzena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

Últimos títulos de esta Colección

- *Protecció de dades de caràcter personal* (3a ed.) [núm. 9, 2020]
- *Legislació de transparència i accés a la informació pública* [núm. 12, 2021]
- *Règim jurídic del Govern i de l'Administració* (4a ed.) [núm. 1, 2021]
- *Legislació de subvencions* (3a ed.) [núm. 4, 2021]
- *Legislació d'habitatge* [núm. 13, 2021]
- *Legislació lingüística. Volum I. Usos institucionals i funció pública* [núm. 14, 2021]
- *Llei d'educació de les Illes Balears* [núm. 15, 2022]

